

Diciembre 6 de 1946 (Tarde)

66ª REUNION — Continuación de la 17ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo, señor Silverio Pontieri
y doctor John William Cooke

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González
Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

DIPUTADOS PRESENTES:

Alvarez, Juan Daniel
Alvarez, Néstor
Alvarez Pereyra, Manuel
Alvarez Pérez, Vicente
Alvarez Vocos, Enrique
Allub, Rosendo
Aráoz, Ricardo E.
Arévalo Cabeza, Jabel
Argaña, José M.
Arias, José
Ayala López Torres, Francisco
Bagnasco, Vicente
Baibin, Ricardo
Barreiro, Carmelo
Benítez, Antonio J.
Bertini, Amadeo
Bonazzola, Romeo E.
Boullosa, Emilio M.
Braga, Juan Carlos
Busaniche, Julio J.
Calcagno, Alfredo D.
Cámara, Guillermo F.
Cámpora, Héctor J.
Camus, Eloy P.
Candiotti, Alberto M.
Casal, Raúl M.
Cavas Noblega, Armando
Cleve, Ernesto
Cooke, John William
Córdova, J. Salvador
Corvalán, Luciano E.
Cufre, Orlando H.
Curchod, Amado J.
Decker, Rodolfo A.
Degreif, Juan Ramón
De la Torre, Juan
Del Carril, Emilio Donato
Del Mazo, Gabriel
Delleplano, Luis
Díaz Colodrero, Justo

Díaz de Vivar, Joaquín
Díaz, Manuel M.
Drl, Roberto
Dufau, Juan Adolfo
Errecart, Juan A.
Fajre, José Benito
Fernández, Hernán S.
Ferrando, Manuel P.
Ferrer, Modesto
Fregossi, Luis J.
Galvagni, Saverio M.
Garaguso, Bernardino Hipólito
Garay, Marcellino S.
García, Manuel
García Quiroga, Alejandro
Graña Etcheverry, Manuel
Guardo, Ricardo C.
Guillot, César Joaquín
Larao, Ricardo
Lasciar, Guillermo F.
Lencinas, José B.
Liceaga, Félix J.
López Serro, Oscar
Mac Kay, Luis E.
Mántaras, Manuel J.
Marlategui, Angel S.
Martínez Guerrero, Guillermo
Mendiondo, F. Daniel
Messina, Humberto
Montes de Oca, Carlos
Montiel, Alcides Esteban
Mossot Iturraspe, Mario
Mujica, Rodolfo
Noriega, Juan J.
Orosco, Modesto V.
Osnalde, Rafael
Otonello, Benito J.
Pasquini, José P. D.
Pastor, Reynaldo A.
Peña Gurmán, Solano
Perea, Pedro J.
Pérez de la Torre, Horacio

Petruzzi, Miguel
Pomar, Gregorio
Ponce, Angel L.
Pontieri, Silverio
Pueyrredón, Horacio Honorio
Rana, Eduardo Antonio
Ravignani, Emilio
Reyes, Cipriano
Reynés, Leandro R.
Rodríguez de la Torre, Raúl
Rojas, Absalón
Rojas, Nerio
Rossi, José
Rougier, Valerio S.
Rubino, Sidney Nicolás
Rumbo, Eduardo L.
Santander, Silvano
Saravia, Teodoro S.
Sarmiento, Manuel
Sarrante, José Roberto
Sobral, Antonio
Solana, Emilio
Tesorieri, José V.
Toro, Ricardo
Uranga, Raúl L.
Valdez, Celestino
Vandace, Julio A.
Velloso Colombres, Manuel F.
Vergara, Amado
Villafañe, José María
Visca, José Emilio
Vischi, Albino
Zanoni, Pedro P.
Zara, Edmundo Leopoldo
Zinny, Mario

AUSENTES, CON LICENCIA

Andreotti, Antonio
Antille, Diógenes C.
Ayerbe, Lázaro Balbino
Baulina, Angel V.

Beretta, Eduardo
Brugnerotto, Juan N. D.
Colem, E. uardo
Cumineiti Correa, Alcides D.
Fernández, Baltasar S.
Frendizi, Arturo
Gericke, Carlos Gustavo
González Funes, Tomás
Ianspolsky, Angel
Jofré, Hernán R.
Kees, Gaspar
Letamendi, Balbino (h.)
Maineri, D. Jacinto
Malecek, José Enrique
Marutta, José
Martínez Luque, Enrique
Obeld, Leonardo
Palacio, Ernesto
Pollzi, Juan
Repetto, Agustín
Ricagno, Roberto
Rodríguez, Manuel
San Millán, Ricardo Antonio
Tejada, Ramón Washington
Tommasi, Victorio M.

AUSENTES, CON AVISO:

Albrien, Oscar E.
Bustos Fierro, Raúl
Sammartino, Ernesto E.
Sergentini, Mario Alberto
Sustaita Secher, Héctor

AUSENTES, SIN AVISO:

Giménez Vargas, Francisco
Klix López, Guillermo
Moreno, José Luis
Pirani, Antonio S.
Rodríguez, Nerio M.
Urdapilleta, Oscar C.

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo con el que se acompaña un decreto, de 6 de diciembre, que amplía el de convocatoria a sesiones extraordinarias e incluye entre los

asuntos a tratar el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación y otros proyectos de ley.

II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el año 1947.

III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo referente a modificación de las disposiciones en vigor sobre procedimiento para la percepción y fiscalización de impuestos.

IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación del régimen para la distribución entre la Nación, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de lo recaudado en concepto de impuesto a los réditos, a las ventas y a los beneficios eventuales.

V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre apertura de una cuenta denominada «Administración General de Impuestos Internos, Fondo de Estimulo».

VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: exención de derechos de importación a maquinarias, materiales y materias primas destinadas a la reconstrucción de San Juan.

VII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: derogación de disposiciones del Código de Comercio sobre rubricación de libros e inscripción de comerciantes en el Registro Público de Comercio.

VIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre arancel de lo que en concepto de retribución de servicios percibirá el fisco por gestiones ante el Registro Público de Comercio.

2.—Consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ley sobre ratificación de decretos referentes a materia impositiva y aduanera. Se sanciona.

3.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre exención de impuesto a la transmisión gratuita de bienes inmuebles hechas en favor del Estado, en la Capital Federal y territorios nacionales. Se sanciona.

4.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con destino al pago de sueldos y gastos del ceremonial del Estado.

—En Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre de 1946, siendo las 16:

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pontieri). — Continúa la sesión.

Si hay asentimiento, se dará entrada a un mensaje del Poder Ejecutivo sobre inclusión en el periodo de sesiones extraordinarias del proyecto de ley general de presupuesto y otros proyectos de ley.

—Asentimiento.

I

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1946.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad llevando a su conocimiento, en copia legalizada, el decreto 21.617, dictado el 6 del corriente, por el que se amplía el 14.325, de fecha 10 de octubre próximo pasado, convocando a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación y que incluye otros asuntos a tratar.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Ramón Antonio Cereijo.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1946.

En uso de la facultad conferida por el artículo 86, inciso 12 de la Constitución nacional,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Ampliase el decreto 14.325, dictado con fecha 10 de octubre próximo pasado, convocando a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación, e incluyese entre los asuntos a tratar, los siguientes:

HACIENDA

- 1º Proyecto de ley sobre presupuesto general de la Nación para el año 1946. (Mensaje del 6 de agosto y 16 de septiembre de 1946.)
- 2º Proyecto de ley sobre presupuesto general de la Nación para el año 1947. (Mensaje del 6 de diciembre de 1946.)
- 3º Proyecto de ley sobre ratificación de decretos leyes dictados por el Poder Ejecutivo surgido de la revolución del 4 de junio de 1943. (Mensaje del 7 de septiembre de 1946.)
- 4º Proyecto de ley sobre introducción de algunas modificaciones a los decretos 14.338/46. (Ley 11.682, texto nuevo), impuesto a los réditos; 14.341/46, (ley 11.683 (texto nuevo), procedimiento para la percepción y fiscalización de impuestos; y 14.342/46, impuesto a las

Por último, cabe destacar que el Poder Ejecutivo ha considerado conveniente no imponer sanciones a aquellas personas que omitan la inscripción, rubricación, etcétera, a fin de quitarle al proyecto todo carácter coercitivo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Ramón A. Cereijo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Las gestiones ante el Registro Público de Comercio, cualquiera sea su naturaleza, deberán interponerse y evacuarse por escrito y estarán sujetas a las tasas que prescribe la presente ley.

El registro no dará curso a las presentaciones que no llenen estas formalidades.

Art. 2º — A los efectos indicados en el artículo anterior, el Registro Público de Comercio se ajustará al siguiente arancel:

- a) Por toda solicitud de certificación o información referente a actos inscritos en el registro:

\$ m/n.

1º Por datos de una antigüedad no mayor de cinco años	5.—
2º Por cada año siguiente, un adicional de	1.—

Las certificaciones que expide el registro abonarán además el impuesto que por ley de sellos corresponda.

- b) Por toda inscripción que se solicite ante el registro, excepto los casos a que se refieren los incisos c), d) y e) 25.—
- c) Por la inscripción en la matrícula de comerciantes 50.—
- d) Por toda inscripción de contratos de sociedad, sus prórrogas, modificaciones o disoluciones 50.—
- e) Por la matrícula de martilleros públicos y corredores 100.—
- f) Por la rubricación de libros de comercio, por cada hoja 0,02

Toda fracción de tasa inferior a \$ 0,05 moneda nacional se completará hasta ese importe.

Art. 3º — Las diligencias o inscripciones solicitadas por agentes del fisco o que los jueces decreten de oficio expresándolo así en los respectivos mandamientos, se practicarán libres del pago de estas tasas, sin perjuicio de que las abonen oportunamente quienes resulten obligados.

Las informaciones, certificados e inscripciones solicitadas por las reparticiones oficiales, estarán exentas del pago de las tasas establecidas por la presente ley. Las certificaciones e inscripciones de actos y contratos en que intervenga el Estado conjuntamente con otras personas de existencia visible o ideal o sucesiones indivisas tributarán la mitad de la tasa a cargo de estas últimas.

Art. 4º — Las tasas fijadas por la presente ley se abonarán mediante el empleo de papel sellado o

habilitación de estampillas fiscales, y se exigirán sin perjuicio del impuesto que por la ley de sellos corresponda.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ramón Antonio Cereijo.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2

LEYES IMPOSITIVAS Y DE LEGISLACION ADUANERA

(Orden del día número 194) (1)

Honorable Cámara:

La Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes ha estudiado la documentación enviada por el Honorable Senado relativa a modificaciones a leyes impositivas y de legislación aduanera, realizadas durante el período comprendido entre el 4 de junio de 1943 y el 3 de junio de 1946 (expediente 36-S-1946); y, por las razones que dará el señor miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Continuarán en vigor con fuerza de ley, a partir de la fecha en que fueron publicados, los decretos leyes que a continuación se transcriben:

- a) Decretos leyes sobre legislación impositiva:

DECRETO 6755/43

Normas para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — En toda transmisión a título gratuito cuya exteriorización esté sujeta a impuestos conforme a la ley nacional 8.890 y sus complementarias, se considerará que forma parte del activo transmitido, la parte proporcional al valor del activo neto de las corporaciones, sociedades, asociaciones o cualquier entidad constituida en el país o en el extranjero, representado por acciones, partes, certificados u otros títulos en poder de los sucesores que den a éstos o que representen, el derecho a una parte proporcional del activo, o a una parte proporcional de los beneficios, o a una parte proporcional del remanente de los bienes en caso de liquidación.

Art. 2º — Determinada conforme al artículo anterior, la porción del haber social neto que se considera transmitido por la transferencia de acciones u otros valores representativos del capital, se fijará la parte de esas transmisiones que ha de considerarse hecha en jurisdicción nacional. A este efecto, se establecerá

(1) Véase el índice de los decretos leyes en la página 256.

una proporción entre el total de los bienes de la entidad y el total de esos bienes que se encuentren materialmente situados en jurisdicción nacional o sometidos a la jurisdicción de la Nación, aplicándose el impuesto sobre las sumas así determinadas como sobre cualquier otro bien transmitido a título gratuito de acuerdo con las leyes en vigencia a la fecha de la exteriorización de su transmisión.

Art. 3º — Si las acciones, partes, certificados o títulos transferidos fueran de tal naturaleza que no dieran a sus poseedores derecho a una parte proporcional del activo social, o de los beneficios de la sociedad o al saldo del activo en caso de liquidación, tales valores se estimarán a los efectos fiscales como si fueran créditos contra la sociedad o corporación. El impuesto en tal caso, se liquidará sobre el valor de dichos créditos aplicándose para el avalúo de los mismos las normas vigentes hasta la fecha, pero considerando que se encuentra en jurisdicción nacional una parte proporcional del crédito determinada sobre la base de la proporción del total de los bienes sociales con respecto al total de esos bienes situados en jurisdicción nacional o sometidos a la jurisdicción de la Nación.

Art. 4º — Las disposiciones de este decreto no rigen para la transmisión gratuita de acciones, partes, certificados, u otros títulos que paguen o hayan pagado al fisco nacional el impuesto sobre el valor de cotización de los mismos en bolsas del país a la época de la transmisión o, a falta de ello, según avalúo pericial judicialmente aprobado.

Art. 5º — Las disposiciones de este decreto se considerarán aclaratorias de las normas legales vigentes que establecen el impuesto nacional a la exteriorización de transmisiones gratuitas de bienes y se aplicarán a toda transmisión que se produzca o se exteriorice a partir de la fecha, como así también a las que se hayan exteriorizado en los diez años anteriores a la misma, cualquiera sea la fecha de la transmisión.

Art. 6º — Fijase un término de 120 días a contar de la fecha de este decreto para que oblen el impuesto adeudado los que conforme al artículo 5º estén obligados a ello, quedando facultado el Consejo Nacional de Educación a partir del vencimiento de dicho plazo para aplicar una multa de dos a cinco veces el importe de lo adeudado (artículo 13 de la ley 11.287). El consejo podrá, según las circunstancias y características de cada caso y cuando ellas revelen que no ha habido propósito de evasión del impuesto o de ocultación, eximir de la pena como asimismo del pago parcial o total de intereses.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, etc.

RAMÍREZ.

Jorge A. Santamarina. — Alberto Gilbert.
— Segundo R. Storni. — Elbio C. Anaya.
— Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro.
— Diego I. Mason. — Ismael F. Galindez.

DECRETO 18.229/43

Modificación del impuesto a los réditos

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Agrégase al artículo 3º de la ley 11.682 (texto ordenado), las siguientes disposiciones:

«Cuando en un año, después de computarse las utilidades exentas, se sufre una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias que se obtengan en los años inmediatos siguientes.

«La deducción se hará, en primer término, contra las ganancias exentas, y si hubiese un saldo contra los réditos netos.

«Transcurridos cuatro años después de aquel en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna en lo sucesivo.

«A los efectos de este artículo, no se consideran pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir en concepto de renta mínima no imponible y cargas de familia.»

Art. 2º — Substitúyese el artículo 5º, inciso j) de la ley 11.682 (texto ordenado), por el siguiente:

j) Los derechos amparados por la ley 11.723, en la parte que no excedan de \$ 6.000 m/n. por año fiscal y siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores, y que las respectivas obras estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

Art. 3º — Las personas de existencia visible domiciliadas en la República tendrán derecho a deducir de sus réditos, en concepto de renta mínima no imponible, los siguientes importes:

- 1º) Cuando sólo obtengan réditos de tercera y cuarta categoría, \$ 4.800 m/n. anuales;
- 2º) Cuando sólo obtengan réditos de primera y segunda categoría, \$ 2.400 m/n. anuales;
- 3º) Cuando además de los réditos de tercera y cuarta categoría, obtengan otros de primera y segunda, las deducciones se computarán en la siguiente forma:

- a) Si el importe que resulte de sumar o compensar los réditos o pérdidas de tercera y cuarta categoría fuese quebranto o beneficio menor o igual a \$ 2.400 m/n., se deducirá como renta mínima no imponible \$ 2.400 moneda nacional;
- b) Si de la suma o compensación del inciso a) resultase un rédito neto mayor de \$ 2.400 m/n., pero menor de \$ 4.800 m/n., deberá computarse como renta mínima no imponible un importe igual al monto de dicho rédito;
- c) Si de la suma o compensación del inciso a) resultase un rédito neto igual o mayor a \$ 4.800 m/n., se deducirá como renta mínima no imponible \$ 4.800 moneda nacional.

A los efectos de la deducción por renta mínima no imponible se consideran comprendidos en la tercera categoría los réditos de cualquier naturaleza sujetos al impuesto que figuren en el balance comercial.

Los contribuyentes domiciliados en el país que obtengan réditos comprendidos en los artículos 21 y 29 de la ley 11.682 (texto ordenado), tendrán derecho a una deducción adicional del 20 % sobre los primeros \$ 6.000 m/n. anuales, más el 10 % sobre los siguientes \$ 6.000 m/n. del conjunto de esas rentas.

Art. 4º — Las personas de existencia visible no incluirán en el conjunto de sus réditos los provenientes de la agricultura, ganadería o demás explotaciones agrarias, en los siguientes casos:

- a) Si se trata de propietarios que explotan sus campos, cuando las sumas de las valuaciones

fiscales de los mismos sea igual o inferior a \$ 30.000 moneda nacional;

- b) Si se trata de arrendatarios o medieros, cuando la suma de los arrendamientos sea igual o inferior a \$ 3.000 m/n. por año. Si el arrendamiento es pagadero en especie, se establecerá su valor a los efectos preindicados, a base del precio de plaza vigente en la fecha de entrega de los productos.

El límite fijado en el inciso a), se aumentará en \$ 7.500 m/n. por el cónyuge y en \$ 3.750 m/n. por cada otra persona cuya deducción se admite como carga de familia. El límite fijado en el inciso b) se aumen-

tará en \$ 750 m/n. y en \$ 375 m/n., respectivamente.

Los propietarios y arrendatarios que no incluyen en el conjunto de sus réditos los provenientes de la explotación agraria, no podrán deducir de sus otros réditos la renta mínima no imponible a que se refiere el artículo 3º. Las cargas de familia sólo podrán deducirse de los otros réditos cuando no se computen en la determinación de los límites fijados precedentemente.

Cuando la suma de las valuaciones fiscales o arrendamientos anuales devengados, fuese igual o inferior a \$ 30.000 m/n. o \$ 3.000 m/n., respectivamente, el contribuyente tendrá derecho a deducir de sus otros réditos las cargas de familia y los siguientes importes por renta mínima no imponible:

Propietarios Suma de las valuaciones fiscales	Arrendatarios Suma de los arrend. anuales devengados	Remanente de la renta mínima no imp. a deducir de otros réditos de las categ. 3ª y 4ª exclusivamente	Remanente de la renta mínima no imponible a deducir de los réditos de las categ. 1ª y 2ª cuando no existan otros réditos de 3ª y 4ª
\$ m/n.	\$ m/n.	\$ m/n.	\$ m/n.
Hasta 10.000 inclus.	Hasta 1.000 inclus.	3.200	800
" 15.000 "	" 1.500 "	2.400	—
" 20.000 "	" 2.000 "	1.600	—
" 25.000 "	" 2.500 "	800	—
" 30.000 "	" 3.000 "	—	—

La dirección ampliará la escala precedente, a fin de contemplar los casos en que las valuaciones fiscales o arrendamientos anuales devengados no coincidan con los límites preestablecidos.

Cuando las ganancias normales que se obtengan en los campos sean superiores a 1,6 tantos del importe del arrendamiento, o al 16 % de la valuación fiscal, la dirección podrá reemplazar los índices de este artículo por otros basados en la ubicación, superficie, rendimiento y clase de explotación de los campos.

Los contribuyentes podrán optar entre determinar el impuesto de acuerdo con el sistema de este artículo o con una liquidación sobre su renta real.

Cuando a juicio de la dirección o del contribuyente, la valuación fiscal no coincida con el valor real, la liquidación se practicará de acuerdo con las normas del balance impositivo.

Art. 5º— Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas u otras entidades públicas o privadas que paguen o acrediten al exterior dividendos u otras utilidades de títulos, acciones y demás valores al portador, deberán retener e ingresar a la dirección el 10 % de esa suma. El impuesto así ingresado se considera único y definitivo a los efectos de este decreto.

Cuando el pago de esa clase de réditos se efectúe en el país, se retendrá e ingresará a la dirección el 25 % de las sumas pagadas, salvo que los tenedores hayan declarado esos réditos a la dirección en la forma y tiempo que disponga el reglamento, no pudiendo posteriormente reclamarse compensación o devolución alguna pasados los 15 días del cobro.

Cuando los tenedores a que se refiere el párrafo anterior hayan hecho la declaración ante la dirección individualizando sus valores, ésta podrá eximir de la obligación de retener la tasa básica del 3 por ciento.

Se considera a los efectos del impuesto a los réditos que las cláusulas por las cuales los emisores (entidades públicas o privadas) toman a su cargo el gravamen sobre la renta de títulos, acciones y demás

valores al portador que emitan, se refieren a la tasa básica, quedando los emisores sujetos a las obligaciones que les impone el presente artículo como agentes de retención del remanente de impuesto cuando los tenedores no hayan declarado dichos valores o se realice el pago o acreditación al exterior.

La dirección exigirá directamente a los emisores el impuesto que hayan dejado de retener e ingresar, aun si se tratase de entidades públicas, sin perjuicio de su acción contra los tenedores para el cobro total del impuesto.

Art. 6º— Los artículos 17 y 20 de la ley 11.682 (texto ordenado), se aplicarán con las siguientes modificaciones:

I. Inclúyense en la tercera categoría, los réditos correspondientes a los socios comanditarios simples, de responsabilidad limitada o industriales de sociedades constituidas en el país, a quienes les serán aplicables todas las disposiciones que rigen para los socios colectivos. Los réditos provenientes de la explotación de campos por sus propietarios, también se liquidarán conforme a lo dispuesto para los réditos de tercera categoría.

II. El resultado del balance impositivo de las sociedades comprendidas en el párrafo anterior, se considera íntegramente distribuido entre los socios.

Tratándose de sociedades en comandita por acciones, el resultado del balance impositivo se considera distribuido en la parte que corresponde a los socios solidarios, la que se determinará aplicando la proporción que por el contrato social corresponda a dichos socios en las utilidades o pérdidas.

III. Las sociedades anónimas, en comandita por acciones y las cooperativas y asociaciones civiles no exentas del impuesto, son contribuyentes por las utilidades imponibles que no distribuyan a los accionistas o socios. La tasa

del impuesto será del 10 %, pero el ingreso efectuado sobre las utilidades no distribuidas será computado como pago a cuenta del que corresponda a los beneficiarios si posteriormente se distribuyen esas utilidades a los accionistas o socios.

A estos efectos se considera que los dividendos están integrados, en primer lugar, con las utilidades del balance impositivo del propio ejercicio. Si los dividendos excedieran el total de utilidades impositivas obtenidas en el ejercicio, se considera que dicho excedente está constituido con las utilidades impositivas de años anteriores que no hubieran sido distribuidas anteriormente.

Los dividendos o utilidades que las sociedades comprendidas en este apartado, constituidas en el país, reparten a sus accionistas, quedan integralmente sujetos al impuesto cualesquiera sean los fondos sociales con que se realice su pago, como ser reservas anteriores, ganancias extranjeras, de capital, exentas de impuesto.

El impuesto que estas sociedades tengan pagado sobre las reservas constituidas antes de la vigencia de estas disposiciones —calculadas conforme con lo establecido por el decreto del Poder Ejecutivo N° 2.711 del 14 de julio de 1943— se considerará como ingreso a cuenta del que deben retener al distribuir esas reservas o beneficios.

- IV. Las sociedades de capitales constituidas en el extranjero pagarán un impuesto del 10 % sobre los réditos obtenidos en la República, con carácter único y definitivo a los efectos de este decreto. A tal fin se presume que las sociedades constituidas en el extranjero son de capitales, salvo prueba en contrario.

Acreditado que se trata de sociedades de personas constituidas por socios personal e ilimitadamente responsables, se aplicará el impuesto que corresponda a cada socio. Si no se probare la participación de cada socio, los réditos imponibles de la entidad serán considerados como pertenecientes a una sola persona de existencia visible.

En el caso de sociedades mixtas constituidas en el extranjero, la parte de utilidades que corresponde a los socios sin responsabilidad personal ilimitada estará sujeta al impuesto que establece el primer párrafo de este apartado y sobre el remanente se aplicará lo dispuesto por el párrafo anterior.

Art. 7° — La determinación de los réditos que derivan de la exportación e importación de bienes se regirá por los siguientes principios:

- a) Los réditos provenientes de la exportación de bienes, producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país, son totalmente de fuente argentina.

El rédito neto se establecerá deduciendo del precio de venta mayorista en el lugar de destino, el costo de tales bienes, los gastos de transporte y seguro hasta dicho lugar, la comisión y gastos de venta y los gastos incurridos en la Argentina.

Cuando no se fije precio o el declarado sea inferior al precio de venta mayorista vigente

en el lugar de destino se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el exportador de la Argentina y el importador del exterior, correspondiendo tomar dicho precio mayorista en el lugar de destino a los efectos de determinar el valor de los productos exportados.

Se entiende también por exportación, la remisión al exterior de bienes producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país, realizada por medio de filiales, sucursales, representantes, agentes de compras u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero;

- b) Los réditos que obtienen los exportadores del extranjero por la simple introducción de sus productos en la Argentina, son de fuente extranjera. Sin embargo, cuando el precio de venta al comprador del país sea superior al precio mayorista vigente en el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta la Argentina, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el importador de la Argentina y el exportador del exterior, constituyendo la diferencia rédito de fuente argentina, de cuyo impuesto ambos son solidariamente responsables.

En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones anteriores, corresponda aplicar el precio de venta vigente en el mercado mayorista y éste no fuera de público y notorio conocimiento, se tomará como base para el cálculo de las utilidades de fuente argentina, los resultados obtenidos por empresas independientes que se dedican a idéntica o similar actividad.

Art. 8° — Agrégase al artículo 23, inciso c) de la ley 11.682 (texto ordenado), lo siguiente:

«En los casos de reorganización de sociedades o fondos de comercio, el valor de los bienes de que se haga cargo la nueva entidad no podrá ser superior, a los efectos de las amortizaciones que acepta esta ley, al que resulte deduciendo de los precios de compra de la sociedad antecesora, las amortizaciones impositivas. Se entiende por reorganización de sociedades o fondos de comercio, las ventas, transferencias, fusiones, absorciones o consolidaciones de una entidad con otra, que a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyen un mismo conjunto económico.»

«La misma disposición rige cuando las partes que intervienen en la reorganización no sean sociedades, siempre que constituyan un mismo conjunto económico.»

«En los casos de ventas, transferencias, etcétera, de fondos de comercio realizadas por personas que no constituyen un mismo conjunto económico, la dirección podrá, cuando el precio de transferencia sea superior al corriente en plaza, ajustar impositivamente el valor de los bienes amortizables, a dicho precio de plaza.»

«El ajuste del valor de los bienes amortizables a que se refiere este artículo deberá efectuarse aún en los casos en que las transferencias, ventas, fusiones, absorciones o consolidaciones se hubieran realizado antes de la vigencia de esta ley.»

Art. 9° — A partir de los balances cerrados al 31 de diciembre de 1942 inclusive, las amortizaciones del artículo 23, inciso c) de la ley 11.682 (texto orde-

nado), en la parte relativa a equipos de explotación instalados o adquiridos desde el 1º de enero de 1927, y utilizados en las actividades comerciales, industriales y agropecuarias, se calcularán con un aumento de 20 % sobre la cuota normal de amortización para compensar el aumento del costo de reposición.

El Poder Ejecutivo podrá variar anualmente dicho porcentaje de acuerdo a las circunstancias, dentro del indicado coeficiente.

El exceso de amortización que así se autorice deberá constituir una cuenta especial en el pasivo del negocio, y quedará sujeto al impuesto por el importe total de las cuotas acumuladas en caso de no utilizarse en la reposición de las maquinarias para que fuera constituido, aunque el fondo se hubiere reservado en ejercicios a los cuales alcance la prescripción del artículo 23 de la ley 11.683 (texto ordenado).

Art. 10. — Agrégase al artículo 23 de la 11.682 (texto ordenado), los siguientes incisos:

j) Los beneficios que como mínimo y obligatoriamente se deben separar para constituir el Fondo de Reserva Legal, según el Código de Comercio;

k) Las reservas que técnicamente corresponde computar, para cubrir las indemnizaciones por despido que establece el artículo 157, apartado 3º del Código de Comercio (ley 11.729), en la forma que lo reglamente el Poder Ejecutivo. Las reservas no utilizadas quedarán sujetas al impuesto en el año en que se anulen los riesgos previstos, aunque se hubieran constituido en ejercicios a los cuales les alcance la prescripción establecida por el artículo 23 de la ley 11.683 (texto ordenado);

l) Los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, subsidios a clubes deportivos y, en general, todo gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes u obreros. También se deducirán las gratificaciones, aguinaldos, etcétera, que se abonen o acrediten al personal dentro de los plazos en que, según la reglamentación, se debe presentar la declaración jurada correspondiente al ejercicio.

Art. 11. — Autorízase la deducción de las primas que paguen los asegurados por seguros para caso de muerte. En los seguros mixtos, sólo será deducible la parte de la prima que cubra el riesgo de muerte.

Los beneficiarios de rentas vitalicias, podrán deducir el 50 % de estos réditos, hasta la recuperación del capital invertido. Cuando los capitales se hubieran invertido con anterioridad al año 1943, se considerará como recuperado el 50 % de los réditos ya percibidos.

Art. 12. — Substitúyese el inciso c) del artículo 24 de la ley Nº 11.682 (texto ordenado), por el siguiente:

c) Remuneraciones o sueldos del cónyuge o parientes del contribuyente. Cuando se demuestre una efectiva prestación de servicios, se admitirá deducir la remuneración abonada en la parte que no exceda a la retribución que normalmente se abone a terceros por la prestación de tales servicios.

Agrégase al citado artículo 24 los siguientes incisos:

k) Los impuestos, tasas y derechos que constituyen inversiones, como la contribución de mejoras y de afirmados y los impuestos sobre terrenos baldíos y campos que no hubiesen estado en explotación durante los dos últimos años inclusive el de la declaración;

l) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros de directorios, consejos u otros organismos directivos que actúen en el extranjero ni los honorarios y otras remuneraciones pagadas por asesoramiento técnico y financiero prestado desde el extranjero: salvo que al pagarse o acreditarse se haya retenido e ingresado a la dirección el impuesto que establece el apartado IV del artículo 6º de este decreto.

Art. 13. — Substitúyese el artículo 33 de la ley 11.662 (texto ordenado), por el siguiente:

«La tasa básica del impuesto será del 3 % de los réditos netos imponibles.

«Cuando esos réditos excedan de \$ 5.000 m/n., las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas pagarán además una tasa adicional progresiva de acuerdo con la siguiente escala:

Réditos netos imponibles anuales					
\$ m/n.	\$ m/n.				\$ m/n.
De 5.000 a 10.000	10.000	pagarán el 2 %	sobre el excedente de	5.000	
" 10.000 "	15.000	" 100	más el 4 %	sobre el excedente de	10.000
" 15.000 "	20.000	" 300	" " 6 %	" " "	15.000
" 20.000 "	30.000	" 600	" " 8 %	" " "	20.000
" 30.000 "	40.000	" 1.400	" " 10 %	" " "	30.000
" 40.000 "	50.000	" 2.400	" " 12 %	" " "	40.000
" 50.000 "	75.000	" 3.600	" " 14 %	" " "	50.000
" 75.000 "	100.000	" 7.100	" " 16 %	" " "	75.000
" 100.000 "	250.000	" 11.100	" " 18 %	" " "	100.000
" 250.000 "	500.000	" 38.100	" " 19 %	" " "	250.000
" 500.000 "	750.000	" 85.600	" " 20 %	" " "	500.000
" 750.000 "	1.000.000	" 135.600	" " 21 %	" " "	750.000
" 1.000.000 y más		" 188.100	" " 22 %	" " "	1.000.000

Art. 14. — Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes se aplicarán en la siguiente forma:

Para los particulares, sobre todos los réditos que perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 1º de enero de 1943. Para las rentas de primera categoría, y a partir de la mis-

ma fecha, se estará a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 11.682 (texto ordenado).

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o personas asimiladas a comerciantes por la dirección, sobre todos los réditos netos que arrojen sus ejercicios comerciales anuales cerrados en el año 1943.

Las pérdidas sujetas a compensación que establezca el artículo 1º, serán las que se produzcan a partir del mismo año.

Art. 15. — I. Las personas físicas y las sucesiones indivisas, que cierren ejercicios anuales que abarquen parte de los años 1942 y 1943, podrán deducir al impuesto del año 1943 que resulta de la aplicación de este decreto, los importes que se indican más adelante de acuerdo al siguiente procedimiento.

Se establecerá la parte de la utilidad impositiva que corresponda al año 1942 en proporción a los meses que comprenda del ejercicio 1942/1943. Dicha utilidad impositiva atribuible al año 1942 se relacionará con la renta neta total del año 1943. El

porcentaje que se obtenga se aplicará al importe que surja de la tabla que sigue, según la renta neta total del año 1943 y el resultado será deducción del impuesto de dicho año.

Si la renta neta total de 1943 es inferior a la utilidad impositiva del ejercicio 1942/1943, el porcentaje aplicable a los importes consignados en la tabla, será igual al que resulte de comparar las utilidades impositivas atribuibles al año 1942 respecto de la utilidad impositiva total del ejercicio 1942/1943.

A los efectos de este artículo se entiende por renta neta total del año 1943 los réditos computados en la forma establecida en el artículo anterior.

Tabla para calcular la rebaja de impuesto correspondiente a la renta del año 1942 incluida en balances que abarquen parte de dicho año y parte de 1943

Renta neta total del año 1943		Importe que corresponde considerar para aplicar el porcentaje de rebaja, según la renta neta total de 1943	
\$ m/n.	\$ m/n.	\$ m/n.	\$ m/n.
Hasta 28 000	28 000		
De 28 000 a 30 000	30 000	30 más el 4.50 % sobre el exced. de	28 000
" 30 000 .. 50 000	50 000	120 " " 4.80 % " " " "	30 000
" 50 000 .. 75 000	75 000	1 080 " " 6.40 % " " " "	50 000
" 75 000 .. 100 000	100 000	2 680 " " 6.68 % " " " "	75 000
" 100 000 .. 200 000	200 000	4 350 " " 6.93 % " " " "	100 000
" 200 000 .. 500 000	500 000	11 280 " " 9.44 % " " " "	200 000
" 500 000 .. 1.000.000	1.000.000	39 600 " " 11.47 % " " " "	500 000
" 1.000.000 y más	96.950	" " 13.00 % " " " "	1.000 000

II. — Por su parte, los contribuyentes indicados en el artículo 6º, apartados III y IV, que cierren balance que abarque parte de los años 1942 y 1943, deberán aplicar la tasa del 10 % establecida en dicho artículo, solamente sobre la parte de las utilidades del ejercicio atribuibles al año 1943, determinadas en función del tiempo. Las utilidades relativas al año 1942, abonarán las tasas prescritas por la ley 11 682 (texto ordenado).

Art. 16. — Prorrogase hasta el 31 de diciembre de 1953 la vigencia del impuesto a los réditos.

La distribución del producido del impuesto a los réditos entre la Nación, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se continuará practicando de acuerdo con las disposiciones de los artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley 11 682 (texto ordenado).

El mayor rendimiento del impuesto en virtud de las modificaciones introducidas por el presente decreto al régimen actual, ingresará totalmente y con carácter transitorio a rentas generales.

En consecuencia y hasta nueva disposición, la participación de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires deberá efectuarse tomando como cifra máxima la suma distribuida en el año 1943.

Art. 17. — Deróganse las disposiciones que se opongan a las establecidas en el presente decreto.

Art. 18. — Dese cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación

Art. 19. — Publíquese, comuníquese, etc.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Alberto Gilbert. — Gustavo Martínez Zuviria. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.230/43

Impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio, durante el término de tres años, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios originados en el ejercicio del comercio, de la industria, de la minería, de la explotación agropecuaria y de cualquier otra actividad que importe la transformación o disposición habitual de bienes.

El presente impuesto afecta todos los beneficios incluidos en el balance comercial, con excepción de los no computables para el impuesto a los réditos y los exentos de acuerdo con las presentes disposiciones. El gravamen recae sobre las empresas o explotaciones pertenecientes a personas de existencia jurídica o visible siendo responsables del pago los titulares, socios, directores o representantes, según el caso.

Quedan exentos los réditos extraordinarios que provengan total y exclusivamente del trabajo personal de sus titulares, como ser los de los comisionistas, corredores, rematadores, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio, siempre que su obtención no dependa también de una inversión de capital en la forma que lo establezca la reglamentación.

Están además exentos los primeros \$ 20.000 m/n. del beneficio extraordinario determinado conforme a los artículos siguientes.

Art. 2º — Se consideran beneficios extraordinarios, en cada ejercicio, los excedentes de ganancia que re-

sulten de comparar la utilidad del año en que se liquida el impuesto, con la utilidad del año «base», que se estima como normal.

Art. 3º — Se entiende por utilidad del año el beneficio impositivo establecido de acuerdo con la ley del impuesto a los réditos (texto modificado), con las siguientes modificaciones:

- a) En el caso de sociedades anónimas, se podrá deducir en concepto de retribuciones al directorio y síndico, las sumas realmente pagadas hasta el límite del 10 % de la ganancia impositiva del ejercicio;
- b) Las utilidades o pérdidas provenientes de participaciones en otras empresas comprendidas por este decreto, no serán computadas a efectos de determinar el beneficio impositivo, en cuyo caso se deducirá también del capital y reservas libres el importe de la inversión correspondiente, en la forma establecida para las inversiones exentas (artículo 5º).

Art. 4º — Se entiende por utilidad del año «base», el beneficio impositivo que, de acuerdo con la ley del impuesto a los réditos, y aplicados los ajustes del artículo anterior, se hubiera obtenido en cualquiera de los ejercicios anuales correspondientes a los años 1938 ó 1939, a opción del contribuyente.

Si el beneficio impositivo no alcanzare al 10 % del capital y reservas libres invertidos en la explotación para las sociedades anónimas, y al 12 % para las explotaciones individuales, sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria y de responsabilidad limitada, se tomarán como utilidad del año «base» los indicados porcentajes sobre el capital y reservas libres.

En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, se permitirá agregar a la utilidad del año «base» los importes que figuren descontados en concepto de sueldos de los socios.

No se podrá incluir entre la utilidad del año «base» las rentas que no hubiesen abonado el impuesto a los réditos por ampararse en la prescripción a que se refiere el artículo 23 de la ley 11.683 (texto ordenado) en tanto excedan los límites indicados en el párrafo segundo de este artículo.

Art. 5º — Se considerará como capital y reservas libres la diferencia que resulte entre el activo y pasivo ajustados de cada empresa o explotación, conforme a las disposiciones de la ley del impuesto a los réditos, y en la forma que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, no admitiéndose las revaluaciones o asignación de valores a los bienes del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable para dicha ley.

Cuando existan inversiones susceptibles de producir renta exenta de impuesto a los réditos, la reglamentación fijará el procedimiento para el correspondiente ajuste de los capitales.

En las explotaciones individuales, sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria y de responsabilidad limitada, serán computados como capital los saldos acreedores de los dueños o socios en función al tiempo de su inversión. En las sociedades en comandita simple, no se hará discriminación entre el capital solidario y en comandita, a los efectos de establecer la ganancia, cualquiera sea la forma en que dichos capitales están retribuidos.

Las empresas iniciadas con posterioridad al año 1939 considerarán como utilidad del año «base» el 10 % del capital y reservas libres invertidos en la explotación, en el caso de sociedades anónimas y el 12 % en el caso de explotaciones individuales, sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria y de responsabilidad limitada.

Cuando en el año «base» se hubiere obtenido renta exenta del impuesto a los réditos que en el año de aplicación de este decreto fuera imponible, se permitirá agregar dicha renta exenta a las utilidades del año «base». El capital y reservas libres, a su vez, involucrarán el importe de la inversión que ha producido tales rentas.

Art. 6º — Las ganancias o pérdidas de los aumentos o disminuciones efectivos de capital, operados después del año «base», se agregarán o disminuirán, en su caso, de la ganancia del mencionado año.

Dichas ganancias o pérdidas se establecerán aplicando el 10 % para las sociedades anónimas y el 12 % para las demás explotaciones o empresas, sobre los aumentos o disminuciones de capital, en proporción al tiempo que se hubieran invertido en el ejercicio comercial.

La reglamentación establecerá la forma de determinar la variación operada en los capitales a partir del año «base» considerado.

Art. 7º — El impuesto establecido por las presentes disposiciones se paga anualmente con carácter definitivo. Pero si en alguno de los ejercicios comprendidos dentro de la vigencia de este gravamen, el beneficio impositivo fuera inferior al del año «base», se admitirá compensar la diferencia con las utilidades de los siguientes ejercicios.

En el caso de pérdidas, se procederá de análoga manera, no siendo por lo tanto de aplicación la compensación de quebrantos de un año con beneficios de otro, en la forma establecida en el artículo 3º de la ley del impuesto a los réditos (texto modificado).

Art. 8º — Las tasas del impuesto serán las siguientes:

- 10 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible hasta el 5 % del capital y reservas libres, más
- 15 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible comprendido entre el 5 % y 10 % del capital y reservas libres, más
- 20 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible comprendido entre el 10 % y 15 % del capital y reservas libres, más
- 25 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible comprendido entre el 15 % y 20 % del capital y reservas libres, más
- 30 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible que supere el 20 % del capital y reservas libres.

Art. 9º — Este impuesto gravará los beneficios extraordinarios de los tres ejercicios anuales que cierran a partir del 1º de diciembre de 1943.

Si no se practicasen ejercicios anuales, se tomará el año calendario a partir del 1º de enero de 1943.

Art. 10. — La Dirección General del Impuesto a los Réditos podrá reunir en un único balance impositivo los resultados de distintas empresas, cualquiera sea su naturaleza, siempre que constituyan un mismo conjunto económico y se hayan organizado o reorganizado después del 21 de abril de 1941, o se organi-

cen o reorganicen en el futuro, eludiendo el pago del presente impuesto mediante el desdoblamiento de sus capitales.

Art. 11. — La fiscalización y percepción de este gravamen la realizará la Dirección General del Impuesto a los Réditos. Las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado) y sus complementarias, rigen a los efectos del presente decreto.

Art. 12. — Este impuesto, dado su carácter de emergencia, se aplicará en todo el territorio de la Nación y su producido ingresará a rentas generales.

Art. 13. — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 14. — Comuníquese, publíquese, etc.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Alberto Gilbert. — Gustavo Martínez Zuviria. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.231 43

Impuesto de emergencia a las apuestas en los hipódromos

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — A partir de los sesenta días de la fecha, y durante el término de diez años, las agencias de apuestas mutuas de los hipódromos de carreras habilitados en todo el territorio de la Nación, pagarán un impuesto de 5 % sobre el producto de la venta de los boletos de apuestas que se deducirá por las instituciones autorizadas conjuntamente con la comisión y demás gravámenes que actualmente se encuentran en vigor.

Art. 2º — Durante el término de vigencia de este decreto, las agencias de apuestas mutuas comprendidas en la ley 11.242, podrán deducir hasta el 15 % sobre el producto de la venta de boletos de sport en concepto de gastos e impuestos nacionales, sin abonar el recargo previsto en el artículo 4º de dicha ley.

Art. 3º — Este impuesto será recaudado por la Dirección General del Impuesto a los Réditos de acuerdo a las normas reglamentarias que se dicten al efecto, y para su fiscalización y contralor serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado).

Art. 4º — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, etc.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Alberto Gilbert. — Gustavo Martínez Zuviria. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.232 43

Reducción de premios de la lotería nacional

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — A partir de los sesenta días de la fecha, la asignación para premios de la Lotería de Beneficencia Nacional será del sesenta y cinco por ciento (65 %), como máximo, del monto de cada emisión.

La diferencia de beneficios de cinco por ciento (5 %) que se produzca con esta medida ingresará totalmente a rentas generales.

Art. 2º — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º — Publíquese, comuníquese, etc.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Alberto Gilbert. — Gustavo Martínez Zuviria. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.233 43

Aumento del impuesto a las ventas de mercaderías consignadas al exterior

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — El impuesto establecido por el artículo 10 de la ley 12.143 (texto ordenado) para las operaciones de exportación, será del 1.25 % a partir del 1º de enero de 1944 y por el término de tres años.

Los responsables enumerados en el artículo 5º, inciso c) de dicha ley, abonarán el impuesto del 3 o/o únicamente sobre las ventas que hayan efectuado antes de aquella fecha, cuando provengan de contrato extendido en documento público o privado, en el que conste el precio convenido, y siempre que el embarque de la mercadería se realice en el primer semestre de 1944.

Art. 2º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso.

Art. 3º — Publíquese, comuníquese, etc.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Edelmiro J. Farrell. — Luis C. Perlinger. — Benito Sueyro. — Alberto Gilbert. — Diego I. Mason. — Gustavo Martínez Zuviria. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.234/43

Impuesto interno a la malta cervecera

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase el artículo 99 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 16, ley 12.148), en la forma siguiente:

Artículo 99. —

1º Sólo se considerará cerveza genuina y se libraré al consumo como tal en el territorio de la República, el producto obtenido exclusivamente por la fermentación de la malta proveniente de la cebada mediante la adición de agua y el agregado de lúpulo;

2º Cuando se emplee en la elaboración cualquier otra materia amilácea, la cerveza se considerará no genuina, y se libraré al consumo con la atestación de tal;

3º La cerveza clasificada como no genuina, según el inciso 2º de este artículo, abonará por concepto de impuesto, veinte centavos moneda nacional (\$ 0,20 m/n.) por litro o fracción;

4º Cualquier producto concentrado que se expenda al público con destino a la preparación de cervezas o bebidas similares, pagará treinta centavos moneda nacional (\$ 0,30 m/n.), por cada cien gramos o fracción, por concepto de impuesto interno;

5º La malta proveniente de la cebada, ya sea de origen nacional o importada, pagará a la salida de fábrica o aduana y conforme al artículo 3º de este texto ordenado, un impuesto interno de veinte centavos moneda nacional (\$ 0,20 m/n.) por kilogramo, desechándose, dentro del total de cada partida, las fracciones inferiores a quinientos gramos.

Cuando la malta de origen nacional se emplee en destinos distintos al de la elaboración de cervezas estará exento de impuestos, a cuyo fin los fabricantes deberán comprobar ese destino, en la forma que determine el Poder Ejecutivo, abonándose en caso contrario el gravamen. La malta de cebada importada tributaré el impuesto fijado por este inciso, cualquiera sea su destino.

El Poder Ejecutivo fijará, también, las formas de circulación comercial e identificación del producto gravado;

6º Las cervezas importadas tributarán por concepto de sobretasa, por el origen extranjero de la cebada empleada, siete centavos moneda nacional (\$ 0,07 m/n.), por litro. Esta sobretasa será percibida juntamente con el gravamen fijado por el artículo 98;

7º El Poder Ejecutivo acordará reglamentariamente las mermas que correspondan.

Art. 2º — Las disposiciones del presente decreto entrarán a regir el 1º de enero de 1944. En esa oportunidad la Administración General de Impuestos Internos fijará, mediante inventario, las existencias de

malta en poder de los importadores y de las fábricas de cerveza, a los efectos del pago inmediato del gravamen, que se efectuará, en lo que a tales existencias respecta, en letras a 90 días de plazo.

Art. 3º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 4º — Publíquese, comuníquese, etc.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Alberto Gilbert. — Gustavo Martínez Zuviria. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.235/43

Modificación del impuesto interno a los naipes

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase el artículo 156 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 16, ley 11.252), en la siguiente forma:

Artículo 156. — Los naipes, tanto de producción nacional como extranjera, pagarán los impuestos determinados en este artículo, por cada juego y sin limitación de precios de venta:

1º Los de producción nacional:

\$ m/n.

- a) Los impresos sobre cartulina y denominados tipo "español", 0,50
- b) Los mismos, cuando sean del tipo llamado "francés", 1.—
- c) Los del mismo origen, cualquiera sea su tipo, impresos o grabados sobre aluminio, celuloide, caseína o sus derivados o cualquier otra substancia o material que substituya a la cartulina, 2.—

2º Los de producción extranjera pagarán, según los tipos y materiales empleados, el doble de los impuestos determinados en el inciso anterior;

3º Los naipes usados que mediante el lavado o la reconstitución, cualquiera sea el sistema empleado, se pongan nuevamente en condiciones de venta, pagarán (sin distinción de tipo, origen o material empleado) por cada juego \$ 0,50 moneda nacional;

4º Los impuestos determinados en los incisos precedentes serán percibidos sobre toda clase de naipes susceptibles de ser utilizados en juegos de azar, aun cuando total o parcialmente difieran de las figuras o atributos comunes a los tipos denominados "español, o "francés". En este caso, el impuesto se percibirá en base a la similitud con esos tipos y de acuerdo con el origen de la mercadería;

5º Quedan exceptuados de los impuestos fijados por este artículo, solamente:

- a) Los naipes llamados «pequeños», o «de juguete», cuyas dimensiones en ningún caso podrán exceder de cinco centímetros de largo por tres de ancho;
- b) Los naipes comúnmente conocidos como «juegos del ermitaño», siempre que por sus características no se encuentren entre los comprendidos en el inciso 4º.

6º Los impuestos determinados por este artículo serán pagados por medio de fajas de valor, que serán adheridas a cada juego, identificándose el origen y condición de las mercaderías («nacional», «importado», «naipe lavado») mediante un sello de control estampado por la Casa de Moneda, sobre el «cuatro de copas», en las barajas de tipo «español», y sobre el «as de corazón», en las de tipo «francés», en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Todo juego que se encuentre en circulación sin el referido sello oficial de control o que carezca de su correspondiente faja fiscal o ésta se halle adherida en forma que haga posible la extracción del juego sin inutilizarla, hará pasible a sus poseedores de las penalidades establecidas por el artículo 27 de este texto ordenado (artículo 36, ley 3.764);

7º El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones que deberán llenar los locales en los que se proceda a la reconstitución o «lavado» de naipes, quedando facultado para prohibir que dichos locales tengan comunicación directa con otros en los cuales se elaboren o depositen naipes, ya sean éstos de producción nacional o importados.

Art. 2º — Las disposiciones del presente decreto entrarán a regir el 1º de febrero de 1944, en lo que respecta a los fabricantes, importadores y lavadores de naipes.

Art. 3º — Los naipes que estén en circulación comercial al 1º de junio de 1944, con impuesto menor al establecido en este decreto, deberán ser habilitados con valores fiscales correspondientes a la diferencia, en la forma que determiné la Administración General de Impuestos Internos, bajo pena de las sanciones que correspondan.

Art. 4º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, etcétera.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Alberto Gilbert. — Gustavo Martínez Zuñiga. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.410/43

Impuesto adicional a los combustibles

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Créase por un término de diez años un impuesto adicional de un centavo moneda nacional (\$ 0,01 m/n.) por litro, que será aplicado a todos los combustibles provenientes de la destilación del petróleo, cualquiera sea el uso a que se los destine.

Art. 2º — El gravamen establecido en el artículo anterior deberá ser abonado por los productores, importadores y expendedores y será recaudado en la forma establecida por el artículo 146 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 12 de la ley 11.658, reformada por la 12.625). De la misma manera y conforme a la norma dispuesta en el artículo 16 de la ley 11.658, serán depositados todos los recursos en cuenta especial en el Banco Central de la República Argentina a la orden de la Administración General de Vialidad Nacional, la que contabilizará por separado esos recursos y sus inversiones respectivas.

Art. 3º — El producido del impuesto creado por el presente decreto, será administrado por dicha administración general, de acuerdo con el régimen establecido por la ley 11.658 y en especial por los diferentes incisos de su artículo 6º.

Art. 4º — Los fondos creados por el artículo 1º se aplicarán exclusivamente al estudio, construcción, mejoramiento y conservación de las carreteras del sistema troncal de caminos nacionales que sirvan especialmente a la vinculación internacional, así como sus ensanches y obras anexas a las mismas; pudiendo destinarse hasta un diez por ciento (10 %) de esos recursos para caminos de acceso a los aeródromos, aeropuertos y otros establecimientos de la infraestructura aeronáutica nacional e internacional así como para construcción de plataformas de aterrizaje en aquéllos.

Art. 5º — Las inversiones que autoriza el presente decreto no excluyen las ya previstas y autorizadas o a autorizarse en otros planes de la Administración General de Vialidad Nacional.

Art. 6º — La Administración General de Vialidad Nacional preparará el plan de obras a construirse, y lo someterá a la previa consideración y aprobación del Poder Ejecutivo, quien fijará el orden de prioridad para su estudio y construcción, y determinará el trazado definitivo.

Art. 7º — Substitúyese el inciso 3º del artículo 146 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 12, inciso 3º de la ley 11.658 modificado por la ley 12.625), por el siguiente:

3º Impuesto interno de un décimo y medio de centavo (\$ 0,0015 m/n.) por litro a todo combustible proveniente de la destilación de petróleo, que no sea nafta, cualquiera sea su destino.

Art. 8º — Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los combustibles en poder de productores, importadores y expendedores, a partir de la fecha.

Art. 9º — Publíquese, comuníquese, etc.

RAMÍREZ.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. —
Alberto Gilbert. — Gustavo Martínez
Zuviria. — Edelmiro J. Farrell. — Be-
nito Sueyro. — Juan Pistarini. — Diego
I. Mason.

DECRETO 308/44

Fijando la fecha en que entrará a regir el impuesto adicional a los combustibles

Buenos Aires, 8 de enero de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Autorízase a aumentar los precios máximos de los combustibles derivados del petróleo, fijados por el Poder Ejecutivo en virtud de la ley 12.591, en el importe equivalente al impuesto establecido por el artículo 1º del decreto 18.410.

El importe del impuesto de un décimo y medio de centavo establecido por el artículo 7º del mismo decreto no podrá ser cargado en los precios de venta, con excepción de los que correspondan al fuel oil, diesel oil y gas oil.

Art. 2º — A los fines del pago de los impuestos sobre los combustibles que se venden al peso, fíjense las siguientes equivalencias:

1 litro de fuel oil equivale	a 0,980 kg.
1 " " diesel oil equivale	" 0,880 "
1 " " gas oil equivale	" 0,845 "

Art. 3º — Los impuestos establecidos por el decreto 18.410 entrarán a regir a la 0 hora del día 11 del corriente, quedando en esta forma modificada la fecha indicada en el artículo 8º del mismo. Los plazos establecidos por los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del decreto 18.548 se contarán a partir del mismo día 11.

Art. 4º — Los aceites minerales de viscosidad inferior a doscientos segundos medida en el aparato Saybolt Universal a temperatura de 37,8°C, serán considerados como combustibles a los efectos impositivos.

Art. 5º — Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc.

RAMÍREZ.

Diego I. Mason. — Luis C. Perlinger. —
Alberto Gilbert. — César Ameghino. —
Gustavo Martínez Zuviria. — Edelmiro
J. Farrell. — Benito Sueyro. — Juan
Pistarini.

DECRETO 5.890/44

Representación directa de la Administración General de Impuestos Internos ante la justicia

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944.

El vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase el artículo 12 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, en la siguiente forma:

Artículo 12. — En los juicios por cobro de impuestos, multas, intereses y otros cargos; en los promovidos por la repetición de los mismos, así como en los recursos por la vía contenciosa autorizados por el artículo 17 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, la representación del fisco, ante todas las jurisdicciones e instancias, será ejercida por los procuradores fiscales o por los funcionarios de la Administración General de Impuestos Internos que ésta designe.

Mientras la representación no sea ejercida por los funcionarios designados por la administración, el fisco será representado por los procuradores fiscales, quienes recibirán instrucciones directas de esa dependencia, debiéndole rendir cuenta de su gestión.

La personería de los funcionarios de la administración será acreditada con el testimonio de su designación expedido por la misma.

El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de empleados de la administración cuando ésta lo requiera.

La acción podrá dirigirse ante el juez de la circunscripción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o ante la del domicilio del deudor o ante la del lugar en que se haya cometido la infracción o se hayan aprehendido los efectos en contravención.

Art. 2º — Substitúyese el artículo 14 del mismo texto ordenado, por el siguiente:

Artículo 14. — Los procuradores fiscales o los funcionarios de la administración que representen al fisco percibirán honorarios únicamente cuando éstos no estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal.

Los funcionarios que representen a la administración no podrán en ningún caso patrocinar o ser mandatarios de litigantes contra la Nación, intervenir en cuestiones judiciales o extrajudiciales en que la Nación o contribuyentes sean parte, tramitar los expedientes administrativos que por tal motivo se originen, salvo cuando se trate de intereses personales del empleado o sus consanguíneos, cónyuge o afines en primer grado.

Art. 3º — La Administración General de Impuestos Internos anticipará a sus representantes los fondos necesarios para los gastos que demande la tramitación de los juicios (publicación de edictos, diligenciamiento de notificaciones, mandamientos y otros análogos), con cargo de rendir cuenta documentada de su intervención y de reintegrar las cantidades invertidas cuando perciban su importe de la parte vencida, a la terminación de las causas. A este efecto se dispondrá la apertura de la cuenta correspondiente.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — J. Honorio Silgueira. — Alberto Teissaire. — Juan Pistarini. — Juan Perón. — Diego I. Mason.

DECRETO 5.891/44

Facilidades para el pago de las diferencias del aumento del impuesto a los réditos

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944.

El vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Dentro del plazo que establezca la Dirección General del Impuesto a los Réditos para la presentación de declaraciones juradas correspondientes al año 1943, los contribuyentes deberán ingresar, por lo menos, el impuesto que resulte de aplicar a la renta neta imponible que surja de dichas declaraciones, las tasas vigentes en el año 1942.

Art. 2º — La diferencia de impuesto, hasta cubrir el importe resultante de la liquidación practicada por el año 1943, podrá ser abonada en cuotas, sin intereses, con vencimiento máximo al 15 de octubre del año en curso, a cuyo fin los contribuyentes pondrán a la dirección la forma de pago.

Art. 3º — A los contribuyentes que no opten por el ingreso de la diferencia de impuesto en mensualidades y lo abonen dentro del plazo a que se refiere el artículo 1º, se les acordará un descuento del 5 % sobre el importe de dicha diferencia.

Art. 4º — Sin perjuicio de esas facilidades, el ingreso de los anticipos semestrales del año 1944, correspondientes a contribuyentes individuales, se efectuará dentro del plazo que fije la dirección. Los anticipos trimestrales de sociedades, deberán ser cumplidos dentro de los plazos que correspondan, conforme a las normas vigentes.

Art. 5º — Las disposiciones de los artículos anteriores no rigen con respecto a las retenciones de impuesto que, de acuerdo a las normas en vigor, corresponda efectuar.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — J. Honorio Silgueira. — Alberto Teissaire. — Juan Pistarini. — Juan Perón. — Diego I. Mason.

DECRETO 5.892/44

Prórroga de la forma y proporción en que se distribuye el producido del impuesto a las ventas

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944.

El vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — La distribución del producido del impuesto sobre las ventas entre la Nación, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se continuará efectuando de acuerdo con las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 de la ley 12.143 (texto ordenado).

Art. 2º — Publíquese, comuníquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — J. Honorio Silgueira. — Juan Perón. — Alberto Teissaire. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 6.176/44

Impuesto interno a los artículos suntuarios y de adorno

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944.

El vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase el artículo 145 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (ley 11.232, artículo 14) en la forma siguiente:

Artículo 145. — Las perlas, las piedras preciosas o semipreciosas, las alhajas finas o semifinas y de fantasía, los objetos de lujo y los decorativos o de adorno, pagarán un impuesto interno del 2 % cuando el precio de venta al público incluido el gravamen sea de \$ 10 ó más y no exceda de \$ 100; del 5 % si excede de \$ 100 y no pasa de \$ 1.000, y del 10 % si excede de \$ 1.000.

1º A los fines de este impuesto considerase:

- Perlas: las producidas por secreción natural o provocada de la ostra perlífera;
- Piedras preciosas o semipreciosas: las naturales o reconstituídas, raras, transparentes o por lo menos translúcidas, siempre que estén talladas, lapidadas o trabajadas en forma que haga posible su aplicación en alhajas;
- Alhajas o joyas finas o semifinas: las destinadas al adorno de las personas y en cuya factura intervienen perlas, piedras preciosas o semipreciosas, oro, plata o platino, en

cualquier forma o proporción y las alhajas o joyas de fantasía de cualquier composición o material que imiten a las anteriores;

d) Objetos de lujo de uso personal:

1. Las cigarreras, tabaqueras, fosforeras, encendedores, billeteras, carteras de mano y de bolsillo, petacas, *vanitys*, llaveros, cor-taplumas, paraguas, bastones, sombrillas, boquillas, pipas, gemelos y prismáticos, portalápices y estuches para termómetros, esmaltados a fuego o en cuya composición intervengan oro, plata, platino, perlas, piedras preciosas o semipreciosas, carey, nácar, marfil, ámbar, espuma de mar o cristal de roca, en cualquier proporción o forma;
2. Las lapiceras fuente y lápices automáticos de cualquier tipo y material;
3. Los artículos de peletería, confeccionados.

e) Objetos de lujo y decorativos o de adorno:

1. Las estatuas, estatuillas, figuras, bibelots, jarrones, potiches, floreros, alhajeros, candelabros, centros de mesa, platos y bandejas y gongs de cualquier composición o material;
2. Los frascos de tocador y para neceseres, polveras, poncheras, licoreras, baldes para hielo o para champaña, portafones, bomboneras, campanillas, cockteleras, juegos o piezas sueltas de tocador, manicura, escritorio o fumador, vajilla, cubiertos y cuchillos; bombillas y mátes, juegos de ajedrez, dama y dominó esmaltados a fuego o en cuya composición intervengan en cualquier proporción o forma, oro, plata, platino, perlas, piedras preciosas o semipreciosas, carey, nácar, marfil, ámbar, coral, espuma de mar, cristal, porcelana o cristal de roca;
3. Los relojes, las copas y plaquetas conmemorativas o para premios y las medallas cualquiera sea su material o destino;
4. Las monedas de oro o plata que contengan aditamentos extraños a su cuño y los monogramas, plaquetas y aplicaciones de oro, plata o platino;
5. Los billares cuya superficie entre bandas exceda de un metro cuadrado y los artículos para juego de azar, excepto los naipes;
6. Los objetos de talabartería y valijería con aplicaciones, incrustaciones o accesorios de oro, plata, platino, perlas, piedras preciosas o semipreciosas, esmalte a fuego, carey, nácar, marfil, ámbar, coral, espuma de mar, o cristal de roca;
7. Las alfombras, tapices, *panneaux* y gobelinos, de lana, seda o pelo, con excepción de los de manufactura doméstica o producidos en establecimientos de enseñanza.

2º En los casos de artículos gravados constituidos por distintas unidades formando juego, de acuerdo con las normas reglamentarias que

se dicten al efecto, el impuesto se pagará sobre el precio total de venta del conjunto;

3º Los fabricantes, importadores y comerciantes de mercaderías comprendidas en el inciso anterior se inscribirán en la Administración General de Impuestos Internos y pagarán el impuesto sobre las ventas directas al público, por declaración jurada mensual y de acuerdo con las constancias de sus libros comerciales u oficiales;

4º Quedan exentos del pago del impuesto establecido por este artículo los objetos ritualmente indispensables para el ejercicio de cultos religiosos;

5º Los objetos gravados que se confeccionen por encargo y con materiales total o parcialmente suministrados por el cliente, pagarán el impuesto sobre la cantidad total percibida por el comerciante o fabricante por todo concepto;

6º Cuando se omitiera la presentación de declaraciones juradas o la contabilización de las operaciones en la forma que establezca la reglamentación respectiva, o la exhibición de los libros o papeles que fueran necesarios para la fiscalización o se comprobara el tráfico clandestino de objetos gravados, la Administración General de Impuestos Internos estimará de oficio las ventas imponible, teniendo en cuenta el capital invertido, las transacciones de períodos anteriores, las compras efectuadas, las existencias de mercaderías, el volumen y clase del negocio, el giro comercial y bancario, los salarios y alquileres pagados y las demás circunstancias que concurren al caso, a cuyo efecto podrá requerir de los bancos e instituciones oficiales y particulares los informes que sean necesarios.

Las estimaciones de oficio podrán ser recurridas dentro del término de diez días hábiles de notificadas para ante el Ministerio de Hacienda, debiendo fundarse el recurso al tiempo de interponerlo.

Las sanciones por fraude se impondrán conforme a la estimación de oficio, consentida o ejecutoriada;

7º Para la aplicación de este impuesto regirán todas las disposiciones referentes a los impuestos internos nacionales, pero sólo se mandará practicar inventario en los casos previstos por el inciso anterior.

Los contribuyentes de los impuestos comprendidos en este artículo están obligados a exhibir a los agentes de la Administración General de Impuestos Internos todos los libros comerciales y especiales que deben llevar y la documentación y correspondencia relacionada con el movimiento del negocio.

Art. 2º — Las disposiciones del presente decreto entrarán a regir el día 1º de abril de 1944.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Juan Perón. — J. Honorio Siqueira. — Alberto Teisairé. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini.

DECRETO 8.110/44

Reducción del interés punitivo para el pago de impuesto interno y multas

Buenos Aires, 31 de marzo de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Substituyese el artículo 10 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 20 de la ley 3.764), por el siguiente:

«Artículo 10 — Los pagos de impuestos o multas que no se efectúen en debido tiempo devengarán un interés de uno por ciento (1 %) mensual sin necesidad de interpelación y aunque la deuda no haya sido reconocida por escrito.»

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger.
— J. Honorio Silguera. — Alberto Teissire — Diego I. Mason. — Juan Pistarini. — Juan Perón.

DECRETO 8.255/44

Modificaciones al impuesto interno a los tabacos

Buenos Aires, 5 de abril de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 48, 49, 56, 57 y 58 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículos 1º, 2º, 8º, 10 y 11 de la ley 12.148 respectivamente), en la forma siguiente:

Artículo 48. — Los productos comprendidos en este capítulo tributarán los impuestos fijados por el mismo por medio de estampillas o fajas fiscales valorizadas, las que deberán ser adheridas a las respectivas unidades de venta en forma tal que no sea posible su desprendimiento sin que, al producirse éste, dichos valores fiscales queden inutilizados.

Si en el término de un año se comprobásen tres infracciones consistentes en el incumplimiento de lo establecido por el párrafo anterior o por el tercero del artículo 56 ó en el expendio fraudulento de productos gravados, indistintamente, aparte de la aplicación de las penalidades que correspondan, la Administración General de Impuestos Internos cancelará de inmediato el respectivo certificado de inscripción, sin perjuicio de requerir del juez competente las medidas determinadas por el artículo 16 de este texto ordenado.

Artículo 49. — Los cigarrillos de producción nacional tributarán los impuestos que a continuación se determinan, por cada unidad básica, de diez cigarrillos, cuyo peso neto no podrá exceder de doce y medio gramos:

Los paquetes o envases que se vendan hasta:

\$ m/n.		\$ m/n.
0.10	incluso el impuesto	0.04
0.15	" " "	0.075
0.20	" " "	0.10
0.25	" " "	0.13
0.30	" " "	0.155
0.35	" " "	0.1775
0.45	" " "	0.2275
0.50	" " "	0.2525
0.55	" " "	0.28
0.60	" " "	0.305

Los paquetes que tributen por concepto de impuesto \$ 0.3325 moneda nacional por unidad básica, podrán expendirse sin limitación alguna en cuanto a su precio de venta al consumidor.

Los cigarrillos de producción nacional deberán expendirse, exclusivamente, en paquetes o envases de una o de cinco unidades básicas, que, en cuanto a su peso neto y cantidad, no podrán exceder los límites fijados en el párrafo 1º.

Para los cigarrillos de producción extranjera no habrá limitación en cuanto al precio de venta al consumidor ni a las unidades contenidas en cada envase de expendio; pero el peso neto total de los cigarrillos no podrá exceder de sesenta y dos y medio gramos.

El impuesto interno, en el caso de los productos mencionados en el párrafo anterior, será pagado por cada envase, sobre el peso neto, considerándose que cada doce y medio gramos o fracción constituyen una unidad básica, por cada una de las cuales se abonará \$ 0.3325 m/n. por concepto de gravamen.

Artículo 56. — El Poder Ejecutivo fijará los límites mínimos de elaboración periódica que se requieren para ser inscrito como manufacturero de tabacos.

Para el expendio directo al consumidor, de productos de su exclusiva elaboración, las manufacturas de tabacos podrán poseer locales, habilitados oficialmente, dentro del recinto de las respectivas fábricas y en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Los manufactureros que se acojan a la franquicia acordada en el párrafo anterior, en los casos de ventas al detalle de cigarrillos contenidos en envases de cinco unidades básicas, o de tabacos picados, en hebra o en manojos, deberán inutilizar los respectivos instrumentos fiscales en el momento de la venta, mediante un sello tornador de caracteres claramente legibles, que llevará el nombre del inscrito y abarcará parte del envase.

Artículo 57. — En un mismo local, o en locales que tengan comunicaciones internas entre sí, está prohibido:

- a) El funcionamiento de dos o más manufacturas de tabacos o de dos o más depósitos comerciales de tabacos en bruto;

- b) La coexistencia de una manufactura de tabacos con un depósito comercial de tabacos en bruto.

Artículo 58. — Con excepción de las inscrites exclusivamente para la fabricación de rapé, las manufacturas no podrán dar ingreso como materia prima a los residuos de la manipulación de tabacos (palo, polvo y destronque), provenientes de otras fábricas, de las zonas de producción o del extranjero.

Las manufacturas de cigarros, cigarrillos, etcétera, podrán emplear en la fabricación de productos que tengan previamente registrados y que se expendan tributando el impuesto interno a los tabacos, los residuos de sus propias elaboraciones, quedando obligados a incinerar el remanente, o trasladarlo a depósito fiscal, o transferirlo a las fábricas exclusivas de rapé, o de productos no comprendidos en este capítulo.

La Administración General de Impuestos Internos fijará los plazos dentro de los cuales deberán realizarse las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, sobre la base de las formas de fiscalización que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 2º — Agrégase al artículo 50 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 1º, ley 12.773) como nuevo apartado, el siguiente:

- 4º Los cigarrillos de chala, cuyo peso neto por millar esté comprendido entre 1.260 y 2.000 gramos, abonarán el impuesto interno a razón de \$ 0,02 m/n. por cada diez cigarrillos o fracción, cualquiera sea su precio de venta.

La elaboración casera de esta clase de cigarrillos solamente será permitida en las zonas productoras de tabacos, en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Art. 3º — Modifícase el inciso 2º del artículo 52 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 1º, ley 12.773), en la forma siguiente:

- 2º Los tabacos a que se refiere el inciso anterior, que se importen acondicionados en envases de expendio al consumidor y cualquiera que sea su procedencia, pagarán por cada 50 gramos o fracción de peso neto, a razón de \$ 16 m/n. el kilogramo.

Art. 4º — Las disposiciones del presente decreto entrarán a regir el 1º de abril de 1944, con excepción de las contenidas en la última parte del cuarto párrafo del artículo 49 modificado, que tendrán aplicación a partir del 1º de julio de 1944.

Art. 5º — En ningún caso la aplicación de las nuevas tasas dará lugar a devolución de impuesto.

Art. 6º — Publíquese, comuníquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — J. Honorio Siqueira. — Alberto Teissaire. — Juan Pistarini. — Diego I. Mason. — Juan Perón.

DECRETO 9.432/44

Nuevas disposiciones sobre impuesto de sellos

Buenos Aires, 21 de junio de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — Estarán sujetos al pago del impuesto de sellos en la forma y condiciones que determina el presente decreto cuando ellos versen sobre asuntos o negocios sometidos, por razón del lugar o la naturaleza del acto, a la jurisdicción nacional:

- Los instrumentos públicos o privados por medio de los cuales se formalicen actos, contratos u obligaciones civiles o comerciales;
- Los escritos presentados ante las autoridades públicas y las actuaciones que ellos originen;
- Las operaciones especialmente gravadas en este decreto.

Art. 2º — Estarán también sujetos al mismo impuesto:

- Los instrumentos extendidos en jurisdicción nacional para producir efectos fuera de ella;
- Los extendidos en las provincias o en el extranjero, de cuyo texto resulte que deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción nacional.

Art. 3º — El impuesto de sellos se abonará:

- Extendiendo los instrumentos en el papel sellado que corresponda;
- Habilitando con estampillas fiscales los instrumentos extendidos en papel simple o en sellado de menor valor;
- Por medio de timbrado especial efectuado por la impresión oficial, en formularios u otros papeles;
- Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras;
- Por declaración jurada.

El Poder Ejecutivo reglamentará los casos, condiciones, formalidades y términos en que deberá hacerse efectivo el impuesto para cada una de las formas de pago a que se refiere este artículo.

Art. 4º — Los instrumentos quedarán sometidos a impuestos por su sola creación o existencia material, con abstracción de su validez o eficacia jurídica.

Salvo los casos especialmente previstos en este decreto, el hecho de que queden sin efecto los actos o no se utilicen total o parcialmente los instrumentos, no dará lugar a devolución, imputación, compensación o canje del impuesto pagado.

Las obligaciones sujetas a condición se entenderán, a los efectos del impuesto, como si fueran puras y simples.

Art. 5º — Los contratos o promesas de contratos en los cuales se establezca que es necesario el otorgamiento de escritura pública para su validez, abonarán el impuesto que establece el artículo 63, inciso f), sin

perjuicio del sello que se pagare al otorgarse la escritura.

Art. 6º — Será considerado contrato por correspondencia sujeto al pago del impuesto de sellos en el acto de su perfeccionamiento, la carta que por su solo texto, sin necesidad de otro documento, revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones en ella consignadas, considerándose como tal aquella en la cual al aceptarse una propuesta se transcriba ésta o sus enunciaciones y elementos esenciales; así como las propuestas, duplicados de propuestas o presupuestos firmados por el aceptante.

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las condiciones arriba expresadas se refieran a obligaciones o actos preexistentes o a crearse, abonarán el impuesto en el momento de ser presentadas en juicio. En estos casos no se pagará más que un solo impuesto por todas las cartas que se refieran a la misma obligación.

Art. 7º — Para la determinación del valor imponible se calcularán como enteros las fracciones de pesos cien moneda nacional (\$ 100 m/n.). Toda fracción de impuesto inferior a cinco centavos moneda nacional (\$ 0,05 m/n.) se completará hasta ese importe.

Art. 8º — Salvo las excepciones especialmente previstas en este decreto, los valores expresados en moneda extranjera serán convertidos en moneda nacional a los efectos de calcular el sellado aplicable, con arreglo al cambio vigente el día anterior al de la operación o habilitación del instrumento, en su caso. Cuando haya varios tipos de cambio, el Poder Ejecutivo establecerá cuál de ellos será aplicable a los efectos de este artículo.

Art. 9º — Cuando en un mismo instrumento se formalicen entre las mismas partes varios contratos, o diversas obligaciones, que versen sobre un mismo objeto y que guarden relación de interdependencia entre sí, se pagará solamente el impuesto correspondiente al contrato u obligación de mayor rendimiento fiscal. No reunidas esas condiciones, cada contrato u obligación abonará el impuesto que aisladamente considerado le corresponda.

Art. 10. — En los términos que fija este decreto o los que fije su reglamentación, sólo se computarán los días hábiles.

Art. 11. — Salvo consulta evacuada por escrito por la dirección, el pago del sellado se hará bajo la exclusiva responsabilidad del contribuyente. Las oficinas habilitadoras se limitarán a agregar el sello que se les solicite.

Art. 12. — La foja de papel sellado de actuación, contendrá veinticinco (25) líneas de quince centímetros de dimensión en cada plana.

Sólo podrá escribirse en el papel sellado dentro de los márgenes y sobre las líneas marcadas en él, salvo las firmas y las anotaciones de inscripciones y otras análogas posteriores al acto, que podrán extenderse en el margen.

Podrán extenderse en su formato habitual, sin aumento del impuesto, los contratos de transporte, los documentos aduaneros, las pólizas de seguro y los demás instrumentos que el Poder Ejecutivo expresamente autorice.

Art. 13. — Cuando los instrumentos sean extendidos en varios ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el sellado. Los demás estarán sujetos a los impuestos que establece el artículo 63, incisos a) y d),

debiendo dejarse constancia en cada uno de ellos del sello pagado en el original. A solicitud de parte, estos últimos podrán ser visados por la repartición del ramo, la cual certificará al margen de los mismos el número, año y valor de los sellos y estampillas empleados en el original.

TITULO II

Impuesto proporcional

CAPÍTULO I

Instrumentos públicos y privados en general

Art. 14. — Pagarán impuesto proporcional de tres por mil (3‰):

- a) Los contratos de compraventa de cosas muebles, semovientes, títulos, acciones, debentures y valores fiduciarios en general; con excepción de las operaciones previstas en el artículo 32;
- b) Las cesiones de derechos;
- c) Las transacciones de acciones litigiosas;
- d) Los contratos de permuta que no versen sobre inmuebles;
- e) Los contratos de transmisión de la propiedad de embarcaciones;
- f) Los contratos de hipoteca naval, sus prórrogas y ampliaciones;
- g) Los contratos de transferencia de negocios;
- h) Los vales, billetes y pagarés;
- i) Las cuentas o facturas con el conforme del deudor;
- j) Los reconocimientos de deudas;
- k) Los contratos de emisión de debentures sin garantía o con garantía flotante;
- l) Las letras de cambio, los giros y las órdenes de pago a más de cinco días vista que no tengan fijado otro impuesto en este decreto;
- m) Los contratos de locación o sublocación de cosas, de derechos, de servicios y de obra;
- n) Los contratos de renta;
- o) Las pólizas de fletamento;
- p) Los contratos de sociedad y sus prórrogas;
- q) Los contratos de suministro de energía y en general todos los que se caractericen por ser de ejecución sucesiva;
- r) Las operaciones que se refieran a la adquisición, modificación o transferencia de derechos sobre sepulcros y terrenos en los cementerios;
- s) En general los instrumentos en que se consigne la obligación del otorgante de dar sumas de dinero, cuando ellos no estén gravados por este decreto con un impuesto especial.

Art. 15. — En las permutas se calculará el impuesto sobre la mitad de la suma de los valores que se permuten.

Art. 16. — En las pólizas de fletamento, el impuesto se aplicará sobre el importe del flete más el de la capa o gratificación al capitán.

Art. 17. — En los contratos de locación, de suministro de energía, gas y servicios telefónicos, y en general, los de ejecución sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, se aplicará el impuesto sobre el

valor correspondiente a su duración total. Cuando la duración no esté prevista, el sellado se calculará como si fuera de dos años.

Art. 18. — Para estimar el valor de los contratos en que se prevea su prórroga, se procederá en la siguiente forma:

- a) Cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes y aun cuando exista el derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato inicial más el de un periodo de prórroga. Cuando la prórroga sea por tiempo indeterminado, se la considerará como de dos años, que se sumarán al periodo inicial;
- b) Cuando la prórroga esté supeditada a una expresa declaración de voluntades de ambas partes o de una de ellas, se calculará el sellado sólo por el periodo inicial, pero en el momento de usarse la opción o de convenirse la prórroga, se sellará el instrumento en que ella sea documentada;
- c) Cuando no se haya manifestado en forma documentada la aceptación o uso de la opción, deberá abonarse el impuesto correspondiente a la prórroga en el acto de demandarse en juicio el cumplimiento de la opción.

Art. 19. — En los contratos de renta vitalicia se aplicará el impuesto sobre la suma de dinero o el valor de los bienes entregados para obtenerla. Cuando éstos fueran inmuebles se aplicarán las disposiciones del capítulo II de este título.

Art. 20. — Cuando el valor de los actos sujetos a impuesto proporcional sea indeterminado, se fijará el sellado en base a una declaración estimativa formulada por las partes al pie de los mismos, la cual podrá ser aceptada o impugnada por la dirección del impuesto. Cuando ella sea aceptada, el fisco no podrá reclamar el pago de diferencia alguna de sellado aunque con posterioridad el valor del acto resulte superior a la estimación. Se presumirá que la estimación ha sido aceptada cuando los instrumentos presentados a la dirección, dentro del término reglamentario de habilitación, fueren visados sin observación.

En caso de que las partes no hayan formulado dicha estimación o que la dirección la impugne, ella se practicará de oficio con arreglo a los elementos de información existentes a la fecha del acto. Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura, se pagará el impuesto con arreglo al precio de plaza a la fecha del otorgamiento. A estos efectos las dependencias técnicas del Estado y entidades autónomas asesorarán a la dirección cuando lo solicite.

A falta de elementos suficientes para practicar una estimación aproximada, se aplicará el impuesto del artículo 63, incisos p), r) o s), según corresponda.

Quando la estimación de las partes sea inferior a la que practique la dirección, se integrará sin multa la diferencia de impuesto, siempre que los instrumentos se presenten para su visación dentro del término reglamentario de habilitación.

Art. 21. — El impuesto a los contratos de sociedad se calculará sobre el capital social, sea cual sea la naturaleza de los bienes que concurran a formarlo y el lugar donde se encuentren.

Las modificaciones del contrato que no importen cambio de la razón social, no pagarán nuevo impuesto aunque se incorporen nuevos socios.

Las ampliaciones de capital lo pagarán solamente sobre el importe del aumento.

Las sociedades existentes en las provincias o en países extranjeros, sólo pagarán el impuesto cuando, con el fin de establecer en jurisdicción nacional sucursal o agencia de sus negocios, inscriban sus contratos en el Registro Público de Comercio.

En estos casos el impuesto será liquidado sobre el capital asignado a dichas sucursales o agencias en el contrato o en otros acuerdos o resoluciones posteriores.

Art. 22. — Cuando en los casos a que se refiere el artículo precedente no se asigne capital, se determinará el impuesto correspondiente en la forma indicada en los artículos 20 ó 63, incisos r) o s), según el caso.

Art. 23. — Las sociedades anónimas abonarán el impuesto a medida que vayan emitiendo las respectivas series de acciones de su capital, cuando con arreglo a sus estatutos la emisión de cada serie deba hacerse constar en escritura pública. En caso contrario, el impuesto se pagará sobre el importe total del capital o del aumento de capital autorizados.

Art. 24. — Cuando para la formación de las sociedades anónimas se adopte la forma de constitución provisional, el impuesto se pagará en el acto de la constitución definitiva, debiendo abonarse por el acto de la constitución provisional el gravamen del artículo 63, inciso o).

Art. 25. — La transformación de una sociedad en otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la ley, contrato o estatutos de la sociedad primitiva, pagará únicamente el sello de actuación.

Quando la transformación no haya sido prevista o, habiéndolo sido, al realizarla se aumente el capital, se prorrogue la duración de la sociedad o se substituyan los socios, se pagará el impuesto que corresponda a la nueva sociedad.

CAPÍTULO II

Operaciones sobre inmuebles

Art. 26. — Pagarán el ocho por mil (8‰) sobre el monto de la operación, las escrituras públicas de compraventa, de permuta, de emisión de debentures, con garantía especial o de cualquier otro contrato por el cual se transfiera el dominio de bienes inmuebles o se constituya o prorrogue un derecho real sobre inmuebles, cualesquiera sean la forma y plazos establecidos.

Satisfarán el mismo impuesto las transferencias de inmuebles realizadas por imperio de la ley, sin otorgamiento de escritura pública.

En los casos de compraventa voluntaria o forzosa o de permuta, el impuesto estará a cargo de cada una de las partes, por mitades.

El impuesto establecido en este artículo se abonará aun cuando en el contrato se reconozcan hipotecas preexistentes descontadas del precio.

En las permutas de inmuebles se aplicará la norma del artículo 15.

Art. 27. — Cuando en la escritura no se fije precio o por la naturaleza del contrato no corresponda fijarlo, o cuando el precio fijado sea menor, se tomará la valuación fiscal como base para el pago del im-

puesto, exceptuándose de esta regla la constitución de los derechos reales de usufructo, servidumbre, uso, habitación y anticresis, que pagarán el impuesto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63, inciso n).

Se pagará sobre el precio real de venta, aun cuando fuere menor que el de valuación, cuando el mismo haya sido obtenido en remate judicial o en remate realizado por el Banco Hipotecario Nacional.

Art. 28. — Cuando la operación verse sobre partes indivisas, se aplicará el impuesto en proporción a la parte que sea materia del contrato.

En los casos mencionados en el artículo 2.696 del Código Civil, se pagará el mismo gravamen establecido por el artículo 26.

Art. 29. — Cuando los inmuebles estén situados parte en jurisdicción nacional y parte en jurisdicción provincial y no se establezca cantidad, o se fijé un monto global a la operación sin especificar por separado los respectivos valores, se abonará el impuesto solamente sobre la valuación fiscal de los inmuebles ubicados en jurisdicción nacional.

Art. 30. — Cuando los inmuebles estén todos ubicados en jurisdicción provincial, se pagará solamente el sellado de cinco pesos moneda nacional (\$ 5 m/n).

Art. 31. — Los títulos informativos de propiedad pagarán al dictarse el auto de aprobación judicial el dos por ciento (2 %) de la valuación fiscal.

CAPÍTULO III

Operaciones en bolsas y mercados

Art. 32. — Pagarán impuesto de uno por diez mil (1 ‰) por cada parte, las operaciones de compra-venta, al contado o a plazos, de mercaderías: cereales, oleaginosos, frutos y productos del país, semovientes, títulos, acciones, debentures y valores fiduciarios en general, siempre que sean registradas en las bolsas o mercados que las mismas agrupan, de acuerdo con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de aquéllas, y concertadas bajo las siguientes condiciones, que reglamentará el Poder Ejecutivo:

- a) Que sean formalizadas por las partes, o por comisionistas intermediarios en los formularios oficiales que las bolsas emitan;
- b) Que se inscriban en los libros que al efecto llevarán las bolsas para el registro de las operaciones.

Las transacciones que, con observancia de estos mismos requisitos, sean registradas en los mercados a término, satisfarán un gravamen de seis por diez mil (6 ‰) por cada parte.

CAPÍTULO IV

Operaciones de crédito en descubierto y descuentos bancarios

Art. 33. — Los créditos de dinero que devenguen interés concedidos expresa o tácitamente por las instituciones bancarias, financieras y empresas industriales o comerciales, en cuenta corriente o en otras cuentas especiales, las operaciones de call

money y las disposiciones que sobrepasen las cantidades autorizadas, estarán gravados en la siguiente forma:

- a) Con el uno y medio por mil (1 ½ ‰) trimestral sobre el crédito acordado en relación al tiempo, computándose como enteros las fracciones de mes;
- b) Con el dos por mil (2 ‰) trimestral sobre las sumas giradas en descubierto, que se liquidará en proporción al tiempo de utilización de los fondos sobre la base de los numerales establecidos para el cálculo de los intereses, y en el momento de la liquidación de éstos. Este impuesto estará a cargo de los prestatarios.

Los descubiertos y créditos en mora, pagarán impuesto mientras permanezcan en sus cuentas originarias.

Art. 34. — Los adelantos y créditos en cuenta corriente especial, garantizados con hipoteca, sólo pagarán el impuesto cuando la operación tenga el carácter de cuenta corriente bancaria, es decir, cuando el importe de la misma pueda ser cubierto total o parcialmente por el deudor y él esté autorizado para hacer nuevamente uso del mismo crédito después de haberlo cubierto.

Exímese de sellado a las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de los créditos y adelantos bancarios sujetos al impuesto determinado en este capítulo, concedidas a los particulares o a las mismas instituciones bancarias por otras del mismo género, aun cuando estas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones de esos créditos.

Art. 35. — El impuesto satisfecho anticipadamente por los créditos en vigencia, con arreglo a las modalidades de la ley anterior, por espacios de tiempo posteriores a la vigencia de estas disposiciones, podrá ser imputado a las sumas que deban satisfacerse con el nuevo procedimiento establecido, sin dar lugar a devolución alguna.

Art. 36. — Quedan exentos del impuesto a los descubiertos:

- a) Los créditos bancarios en descubierto por un plazo no mayor de dos días, producidos por cheques firmados por comisionistas de bolsa que oficialmente lo acrediten;
- b) Los créditos bancarios en descubierto con caución de títulos públicos concedidos a comisionistas de bolsa;
- c) Los adelantos entre bancos, con o sin caución;
- d) Los créditos en moneda legal concedidos por los bancos a corresponsales del exterior.

Art. 37. — No pagarán el impuesto establecido por el artículo 14, inciso j), los conformes de cuentas en descubierto comprendidas en las disposiciones de este capítulo.

Art. 38. — Los descuentos que concedan los bancos de la ley 12.156, de pagarés suscritos directamente a su orden, a plazo no mayor de noventa días, abonarán el impuesto del dos por mil (2 ‰) sobre su importe.

Las mismas operaciones efectuadas a plazos mayores abonarán el impuesto del tres por mil (3 ‰).

CAPÍTULO V

Operaciones de depósito de dinero

Art. 39. — Pagarán un impuesto de tres por mil (3 ‰) al año, los depósitos monetarios que devenguen un interés superior al uno por ciento (1 %) anual. Este impuesto será a cargo de los depositantes y se liquidará sobre la base de los numerales utilizados para la acreditación de los intereses y en la misma época.

No pagarán este impuesto los depósitos bancarios en caja de ahorro que no excedan de pesos cinco mil (\$ 5.000 m/n.) y los depósitos que tampoco excedan esa misma suma que reciban las casas comerciales o industriales de sus empleados o habilitados.

Los depósitos a plazo fijo no están comprendidos en la exención, cualquiera fuere su monto.

CAPÍTULO VI

Movimiento de fondos con el exterior

Art. 40. — El impuesto de sellos sobre las operaciones que a continuación se enumeran exista o no conversión a/o de moneda nacional se aplicará conforme a las siguientes categorías:

Categoría I

Abonarán el tres por mil (3 ‰):

- Las letras de cambio, giros, cheques, cartas de crédito, órdenes de pago y créditos simples o documentarios, librados sobre el exterior;
- Los depósitos y acreditamientos en moneda nacional en cuenta de titulares domiciliados en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39;
- Las remesas al exterior que se efectúen con cargo a fondos depositados en cuenta en moneda extranjera, siempre que sobre sus importes no se haya pagado la tasa correspondiente a esta categoría al constituirse el depósito.

Estas operaciones estarán sujetas a impuesto, sean ellas efectuadas por bancos, comerciantes o particulares.

El impuesto se abonará cuando se trate de moneda extranjera, sobre el equivalente en moneda nacional, determinado al tipo de cambio a que se haya efectuado la operación, y a falta de tipo de cambio determinado, se aplicará el que fije el Poder Ejecutivo. Este impuesto será pagado por el comprador o por el beneficiario si es acreditamiento en cuenta.

El impuesto a las cartas de crédito emitidas a crédito, y créditos simples o documentarios, se cobrará únicamente sobre los importes utilizados. Las cartas de crédito vendidas pagarán al ser otorgadas, sobre su valor total. Quedan comprendidos en esta categoría las órdenes y documentos al cobro sobre el exterior, cuyo importe en moneda nacional o moneda extranjera no ingrese al país.

Categoría II

Las órdenes de pago, letras, giros, cheques, órdenes de acreditamiento en cuenta o de transferencia de fondos, de una cuenta a otra de distinto titular, libradas desde el exterior o contra cuenta de personas

domiciliadas en el exterior, en moneda nacional, efectuadas por bancos, comerciantes o particulares, abonarán el tres por mil (3 ‰), aun cuando los beneficiarios de esas operaciones sean la casa matriz, sucursales o agencias de los libradores o dadores de la orden.

Este impuesto será pagado por los beneficiarios.

Categoría III

Las letras de cambio, giros, cheques y transferencias que los exportadores o cualquier otra persona o firma del país o del exterior y/o banco del exterior vendan a los bancos domiciliados en el país, abonarán el uno y medio por mil (1 ½ ‰).

Quedan comprendidos en esta categoría las órdenes y documentos al cobro sobre el exterior, cuyo importe en moneda nacional o moneda extranjera ingrese al país.

Este impuesto será pagado por los vendedores o por los remitentes.

Los giros, las órdenes de pago y los débitos en cuenta, motivados por la entrega del importe percibido por cobranzas sobre el exterior, es decir, el reembolso de las órdenes y documentos al cobro, no pagan impuesto.

Categoría IV

Los documentos provenientes del exterior que reciban los bancos, comerciantes o particulares para su cobro en el país, sean letras de cambio, pagarés, cheques, giros, facturas, recibos, documentos de embarque y toda operación que implique una orden de cobro, cualquiera sea su plazo, exista o no posteriormente renovación, prórroga o reaceptación, abonarán a su ingreso al país el impuesto único de tres por mil (3 ‰) sobre su importe, si fueren en moneda nacional o sobre su equivalente si fueren en moneda extranjera.

Este impuesto será pagado por los remitentes de los documentos o los dadores de la orden.

Los giros, órdenes de pago, autorizaciones para debitar en cuenta y acreditamiento en cuenta, motivados por la entrega del importe percibido por cobranzas del exterior, es decir, o los reembolsos, no pagarán impuesto. El equivalente de las cobranzas del exterior debe calcularse al tipo oficial vendedor apertura fijado por el Banco Central de la República Argentina.

Los impuestos determinados en esta categoría, en el caso de no existir letra, giro, cheque o pagaré, deben aplicarse sobre el documento que implique la orden de cobro o valor a cobrar. Una vez sellado el mismo, todo otro documento que se cree por dicha orden no pagará sellado, pero se dejará en él constancia del pago del impuesto en el documento original.

Categoría V

Las operaciones de cambio denominadas pases, que implican operaciones de compraventa simultáneas, de una misma cantidad, igual divisa y distintos plazos, y sus prórrogas, siempre que las partes que intervengan en ambas operaciones sean las mismas, quedan sujetas al impuesto de un medio por mil (½ ‰), por mes o fracción, por cada parte.

Art. 41. — Las demás operaciones no previstas, en las cinco categorías del artículo precedente quedan gravadas con el uno y medio por mil ($1\frac{1}{2}\%$) a cargo de los beneficiarios, si constituyen un ingreso de fondos desde el exterior y con el tres por mil (3%) a cargo de los cedentes tomadores o compradores, si constituyen un egreso de fondos.

Art. 42. — Las operaciones de compraventa de cambio extranjero que se liquiden por compensación exacta o con diferencia o por diferencia de cambio, serán consideradas como una compra y una venta de moneda extranjera y abonarán los dos impuestos correspondientes a las categorías respectivas.

En las anulaciones de compra o de venta de moneda extranjera se pagará el impuesto que corresponde a la nueva operación que se origine con motivo de dicha anulación.

Art. 43. — Los documentos que deban ejecutarse, cumplirse o producir efectos legales o comerciales en las provincias, se considerarán de tránsito en la jurisdicción nacional y no pagarán impuesto; tampoco lo abonarán los documentos provenientes del exterior simplemente de tránsito en el país.

Art. 44. — Los impuestos previstos en las categorías primera a cuarta, inclusive, del artículo 40, se aplicarán sin tener en cuenta los plazos y las prórrogas.

Art. 45. — Los cheques emitidos sobre cuentas de titulares domiciliados en el exterior, que no contengan indicación de haber sido extendidos en el exterior, pagarán el impuesto correspondiente a la categoría segunda, a cargo del beneficiario, actuando el banco pagador como agente de retención.

Art. 46. — No abonarán impuesto:

- a) Las operaciones de compraventa de letras de cambio, cheques, giros, órdenes de pago y transferencias sobre el exterior que los bancos domiciliados en el país realicen entre sí;
- b) Los arbitrajes que los bancos y firmas domiciliados en el país realicen entre sí, con sus correspondientes, o con firmas y particulares del país o del exterior, siempre que se trate de una moneda extranjera contra otra moneda extranjera;
- c) La compraventa de billetes de banco y moneda metálica;
- d) La orden de pago o de transferencia de fondos librada contra la cuenta de un titular domiciliado en el exterior para abonar el equivalente de una compra de cambio extranjero, efectuada por el mismo titular a un banco domiciliado en el país, que haya abonado el impuesto establecido en la categoría primera;
- e) El acreditamiento a la cuenta de titulares domiciliados en el exterior, del equivalente de compras de cambio extranjero efectuadas a los mismos por bancos domiciliados en el país, que hayan abonado el impuesto establecido en la tercera categoría;
- f) La documentación que cubra o ampare una importación de mercaderías del exterior y que no venga acompañada de una orden de cobro, es decir, que se reciba o deba entregarse libre de pago;
- g) Los depósitos y acreditamientos a las cuentas en moneda nacional de titulares domiciliados en el exterior cuando sus importes provengan

de la renta o liquidación de capitales invertidos en el país por el mismo titular;

h) Los débitos a las cuentas en moneda nacional de titulares domiciliados en el exterior, cuando sus importes se destinen a inversiones en el país por cuenta del mismo titular, o al pago de impuestos y gastos de conservación o administración de bienes del titular situados en el país;

i) Las operaciones de pase que los bancos domiciliados en el país, realicen entre sí.

Art. 47. — Las operaciones a que se refiere este capítulo serán gravadas cualquiera que sea la forma (postal, telegráfica, telefónica o verbal), de la orden en cuya virtud ellas se realicen.

Las firmas autorizadas a negociar en cambios serán equiparadas a los bancos que lo estén a los efectos de la aplicación de las disposiciones de este capítulo.

CAPÍTULO VII

Operaciones de seguros y capitalización, ahorro y crédito recíproco

Art. 48. — Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o las pólizas que los establezcan, sus prórrogas y renovaciones, convenidos en jurisdicción nacional sobre bienes situados en jurisdicción nacional o provincial, pagarán un impuesto de uno por ciento (1%), calculado sobre el monto de la prima convenida durante la vigencia total del contrato.

Art. 49. — Cuando el tiempo de duración sea incierto, o en parte cierto y en parte incierto, el impuesto será abonado en ocasión del pago de cada una de las primas parciales.

Art. 50. — Los contratos de seguros de exportación sobre bienes asegurados por riesgos que se corren, parte en el país y parte fuera de la jurisdicción nacional, abonarán el cuatro por mil (4%) sobre la prima.

Art. 51. — Los seguros sobre la vida contratados en jurisdicción nacional, pagarán un impuesto de uno por mil (1%) sobre el monto asegurado.

Art. 52. — Las pólizas flotantes pagarán un impuesto de un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1,50 m/n.) y cada una de sus aplicaciones o certificados de embarque abonará el impuesto que corresponda conforme a los artículos anteriores.

Art. 53. — Las pólizas de reaseguros referentes a riesgos que hayan abonado el impuesto, no abonarán nuevo impuesto.

Los contratos preliminares de reaseguros de carácter general, celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad, pagarán un impuesto de quince pesos moneda nacional (\$ 15 m/n.) por foja.

Art. 54. — La restitución o acreditación de primas al asegurado, en ningún caso dará lugar a la devolución del impuesto.

Art. 55. — Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que éstas firmen con los asegurados, pagarán el tres por mil (3%) al ser aceptados o confirmados por el asegurador.

Art. 56. — Los certificados provisionales de seguros sólo abonarán el sellado de un peso con cincuenta

centavos moneda nacional (\$ 1,50 m/n.), si dentro del término de noventa días se emite la póliza definitiva con efecto retroactivo; en caso contrario, dichos certificados pagarán el impuesto dentro del plazo reglamentario, a contar desde el vencimiento de aquel término.

Art. 57. — Los seguros contratados o las pólizas suscritas en el extranjero que cubran riesgos corridos por personas domiciliadas o por bienes sitos en el país o que entren o salgan de él, sólo estarán sujetos a los impuestos establecidos por las leyes especiales.

Art. 58. — Están exentos de sellado los seguros contra riesgos que afecten a la agricultura o a la ganadería, mientras los productos asegurados no salgan de poder del productor, y los que cubran riesgos sobre bienes situados en el extranjero o destinados al país (seguros de importación).

Art. 59. — Los títulos de capitalización o de ahorro con derecho a beneficios obtenidos por medio de sorteos, independientemente del interés del capital, satisfarán un sellado equivalente al tres por mil (3 %) sobre el capital suscrito.

Cuando al resultar favorecido el subscritor en algún sorteo, su derecho a participar en los sorteos siguientes no caduque, se pagará nuevamente el impuesto cada vez que posteriormente resulte premiado el título.

Los bonos emitidos por las sociedades que realizan operaciones de ahorro o depósitos con participación en sus beneficios y derecho a préstamo —con o sin garantía hipotecaria— y que deban ser integrados en su totalidad, aun cuando no medien sorteos o beneficios adicionales, pagarán el mismo gravamen sobre su valor nominal.

Los certificados que emitan las sociedades de ahorro o crédito recíproco para la vivienda familiar, sea cual fuere la índole de sus planes financieros, tributarán igual tasa sobre el monto del préstamo convenido.

TÍTULO III

Impuesto fijo

CAPÍTULO I

Documentos bancarios

Art. 60. — Corresponde impuesto fijo de:

Cinco centavos moneda nacional (\$ 0,05 m/n.):

- A los cheques que no circulen fuera de la plaza de su emisión, y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos;
- A los duplicados de notas de crédito;
- A los recibos u otros instrumentos que se utilicen para extraer fondos de las cuentas de caja de ahorro o a plazo fijo.

Cincuenta centavos moneda nacional (\$ 0,50 m/n.):

- A las autorizaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo, para endosar cheques con el objeto de depositarlos en cuenta corriente, o para librar cheques contra estas cuentas;
- A los documentos denominados *trust receipt*, por los cuales los destinatarios de las mer-

caderías retiran de los bancos los documentos de embarque al solo efecto de solicitar el análisis o revisión de la mercadería, siempre que por los mismos no se transfiera su dominio, ni se contraiga obligación de pagar algún importe.

CAPÍTULO II

Recibos

Art. 61. — Los recibos de dinero, de cheques y giros, sus duplicados y demás ejemplares, abonarán cada uno el impuesto de:

Diez centavos moneda nacional (\$ 0,10 m/n.):

- Los que excedan de veinte y no pasen de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.);
- Los otorgados por empresas concesionarias de servicios públicos, por el cobro del servicio que motiva la concesión, que excedan de diez pesos moneda nacional (\$ 10 m/n.) y no pasen de mil (\$ 1.000 m/n.).

Cincuenta centavos moneda nacional (\$ 0,50 m/n.):

- Los mayores de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.).

El impuesto aplicable a los recibos originales será satisfecho por sus otorgantes, siendo a cargo de los que recaben los duplicados y demás ejemplares, el gravamen correspondiente a esos instrumentos.

CAPÍTULO III

Giros internos

Art. 62. — Los giros internos pagaderos a su presentación o hasta cinco días vista, estarán sujetos a un impuesto, a cargo del tomador, con arreglo a la siguiente escala:

	\$ m/n.	\$ m/n.	\$ m/n.
De más de	20 hasta	100	0,15
" " "	100 "	500	0,30
" " "	500 "	1.000	0,50
" " "	1.000 "	5.000	1.—
" " "	5.000 "	10.000	2.—
" " "	10.000 "		3.—

Estarán sujetos a la misma imposición los cheques de plaza a plaza y todos los demás instrumentos o procedimientos de contabilidad que impliquen transferencias de fondos, con excepción de los débitos o créditos que efectúen entre sí las casas matrices y sucursales de un mismo banco a casa de comercio con motivo de sus propias operaciones.

Si los documentos pagaderos a su presentación o hasta cinco días vista no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento, pagarán el sello prescrito por el artículo 14, inciso 1º.

CAPÍTULO IV

Instrumentos públicos y privados en general

Art. 63. — Corresponde impuesto fijo de:

Diez centavos moneda nacional (\$ 0,10 m/n.):

- a) A las fojas posteriores a la primera y a cada una de las fojas de los demás ejemplares de los instrumentos gravados con impuesto menor de un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1,50 m/n.);
- b) A los recibos de cosas muebles facilitadas en comodato o en depósito gratuito, cualquiera sea su valor y el plazo para restituirlas.

Cincuenta centavos moneda nacional (\$ 0,50 m/n.):

- c) A los documentos que se otorguen para acreditar la identidad de los cobradores o a las autorizaciones conferidas a los mismos para cobrar.

Un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1,50 m/n.):

- d) A las fojas siguientes a la primera y a cada una de las fojas de las copias y demás ejemplares de los instrumentos gravados con impuesto no menor de un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1,50 m/n.);
- e) A los instrumentos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores que hayan pagado impuesto y a los de simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en actos o contratos preexistentes, cuando:

- 1º) No se aumente su valor, no se cambie su naturaleza o las partes intervinientes;
- 2º) No se modifique la situación de terceros;
- 3º) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido si la prórroga o ampliación estuviese sujeta a impuesto o pudiere hacer variar el impuesto aplicable.

Tres pesos moneda nacional (\$ 3 m/n.):

- f) A los contratos o promesas de contratos de compraventa de cosas muebles o casas de negocio, cuando se subordine su validez al otorgamiento posterior de escritura pública;
- g) A los contratos que estipulen la constitución de derechos reales —con excepción de los de compraventa de inmuebles— que debiendo por ley ser hechos en escritura pública, sean hechos por instrumento privado;
- h) A los poderes y sus substituciones.

Cinco pesos moneda nacional (\$ 5 m/n.):

- i) A las opciones que se concedan para la adquisición o venta de bienes o derechos de cualquier naturaleza, o para la realización ulterior de cualquier contrato, sin perjuicio del impuesto que corresponda al instrumento en que se formalice el acto a que se refiere la opción;
- j) A las declaraciones de dominio cuando se haya expresado en la escritura de compra, que

la adquisición se efectuó para la persona o entidad a favor de la cual ellas se formulen;

- k) A las divisiones de condominio;
- l) A los nombramientos de médicos y agentes por las compañías de seguros;
- m) A los boletos y promesas de compraventa de bienes inmuebles y a las cesiones y transferencias de tales boletos y promesas.

Quince pesos moneda nacional (\$ 15 m/n.):

- n) A cada foja de las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de usufructo, servidumbre, uso, habitación y anticresis, cuando en las escrituras no se fije precio;
- o) A cada foja de los contratos de constitución provisional de sociedades anónimas;
- p) A cada foja de los instrumentos que se gravan con impuesto proporcional, cuando su valor sea indeterminado y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere el artículo 20;
- q) A cada foja de los contradocumentos referentes a bienes muebles o inmuebles.

Cien pesos moneda nacional (\$ 100 m/n.):

- r) A los contratos de sociedad, cuando en ellos no se fije el monto del capital social y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere el artículo 20.

Mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.):

- s) A la inscripción de sociedades extranjeras que establezcan sucursal o agencia en jurisdicción nacional, cuando éstas no tengan capital asignado y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere el artículo 20.

CAPÍTULO V

Actuaciones notariales

Art. 64. — Corresponde impuesto fijo de:

Un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1,50 m/n.):

- a) A cada foja de los cuadernos de los protocolos de los escribanos de registro, sin perjuicio de abonar además el impuesto fijo o proporcional que corresponda al acto otorgado;
- b) A cada foja de los testimonios de escrituras públicas, actuaciones o certificados expedidos por los escribanos de registro.

CAPÍTULO VI

Actuaciones administrativas

Art. 65. — Corresponde impuesto fijo de:

Dos pesos moneda nacional (\$ 2 m/n.):

- a) A cada foja de demanda, petición, diligencia escrita o comunicación que se interponga, dirija o presente al Congreso, a las curias eclesiásticas, al Poder Ejecutivo y a las reparti-

ciones administrativas del Estado y a cada foja de las actuaciones que con tal motivo se originen;

- b) A los certificados de los colegios de segunda enseñanza y de universidades de la Nación;
- c) A los certificados que expidan las reparticiones nacionales y a las legalizaciones de actos o documentos de las autoridades públicas;
- d) A los certificados y testimonios de documentos archivados en las oficinas nacionales;
- e) A cada foja siguiente de la primera con impuesto no menor de dos pesos moneda nacional (\$ 2 m/n.).

Cinco pesos moneda nacional (\$ 5 m/n.):

- f) A los pedidos de reconsideración o apelación de resoluciones administrativas;
- g) A las peticiones de mensuras de tierras sujetas a la jurisdicción nacional que se presenten al Poder Ejecutivo por cada cincuenta kilómetros cuadrados de extensión, considerándose enteros las fracciones de esa superficie.

Diez pesos moneda nacional (\$ 10 m/n.):

- h) A los pedidos de reconsideración de resoluciones ministeriales o del Poder Ejecutivo.

Cincuenta pesos moneda nacional (\$ 50 m/n.):

- i) A las solicitudes que se presenten al Congreso directamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, pidiendo exoneraciones o privilegios;
- j) A los títulos de concesiones de tierras nacionales u otros que importen merced o privilegio, con excepción de las tierras acordadas a colonos, que pagarán el uno por mil (1 %) sobre el valor fijado por la autoridad concedente;
- k) A las concesiones para la explotación de bosques nacionales;
- l) A los actos en que se otorguen o revaliden grados, títulos científicos u otros periciales de carácter nacional;
- m) A las solicitudes de permiso para aceptar condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.

Trescientos pesos moneda nacional (\$ 300 m/n.):

- n) A las solicitudes que se presenten al Congreso, directamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, para la compra de tierras fiscales o donación de las mismas para colonizar o pidiendo privilegio.

Mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.):

- o) A las solicitudes de concesión para explotar líneas ferroviarias, puertos, canales u otras vías de comunicación, que se presenten a los poderes públicos.

CAPÍTULO VII

Documentación aduanera y portuaria

Art. 66. — Salvo disposiciones expresas en contrario, los sellos establecidos en los artículos siguientes se abonarán sobre la primera foja de un solo ejem-

plar de cada documento y las fojas que siguen se repondrán con el sellado que corresponda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63, incisos a) y d), debiendo extenderse las copias en papel simple.

Art. 67. — Las tasas de sellado indicadas a continuación para la navegación y comercio de cabotaje, no afectan las franquicias establecidas al respecto por la ley 10.606, las que quedan en vigor.

Art. 68. — Los manifiestos de entrada de buques procedentes de puertos que no sean de cabotaje pagarán:

a) En el puerto de su primera entrada:

	Sin privilegio \$ m/n.	Con privilegio \$ m/n.
Hasta 50 toneladas de registro	20	30
De más de 50 hasta 100 toneladas de registro	40	60
De más de 100 hasta 500 toneladas de registro	90	120
De más de 500 hasta 1.000 toneladas de registro	150	200
De más de 1.000 toneladas de registro	230	300

b) Por los buques en lastre se pagará la mitad de lo establecido precedentemente. Los que conduzcan carga en tránsito para el exterior y sin carga para puertos de la República, serán considerados en lastre a los efectos de este impuesto;

c) En el segundo y sucesivos puertos los buques con o sin privilegio, cargados o en lastre, pagarán siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 7,50 m/n.).

Art. 69. — Los manifiestos de entrada de buques que hagan navegación o comercio de cabotaje, cargados o en lastre, pagarán en su primera y sucesivas entradas:

	Sin privilegio \$ m/n.	Con privilegio \$ m/n.
Hasta 10 toneladas de registro	0,75	1,50
De más de 10 toneladas	1,50	3.—

Art. 70. — Las solicitudes de apertura y cierre de registro de buques pagarán:

a) Para puertos que no sean de cabotaje:

	\$ m/n.
Hasta 50 toneladas de registro	7,50
De más de 50 hasta 100 toneladas	15.—
De más de 100 hasta 500 toneladas	30.—
De más de 500 hasta 1.000 toneladas	50.—
De más de 1.000 toneladas	75.—

Este impuesto será de aplicación en el primer puerto donde el buque tome carga. En los demás regirá la tarifa que se fije para el cabotaje;

b) Los buques de cabotaje pagarán por el mismo concepto en cada puerto en que tomen carga:

	\$ m/n
Hasta 10 toneladas de registro	0.75
De más de 10 toneladas	1.50

Art. 71. — Las guías de referencia para buques que se despachen a puertos que no sean de cabotaje, pagarán los impuestos establecidos en la escala del inciso a) del artículo anterior.

Art. 72. — Los documentos requeridos para las operaciones de carácter aduanero que se expresan a continuación pagarán:

1º Certificados de depósito de los papeles de navegación:

	\$ m/n
a) Buques de cabotaje	0.75
b) Buques de ultramar	7.50

2º Manifiesto de rancho, cualquiera sea el número de fojas:

a) Buques de cabotaje	0.75
b) Buques de ultramar	3.—

3º Solicitudes de alije, relaciones juradas, de carga y de tránsito de los buques que se despachan para puertos que no sean de cabotaje

3.—

4º Transbordos, reembarques y permanencias:

a) Para el exterior sobre dos ejemplares, cada uno	7.50
b) Para el interior sobre dos ejemplares, cada uno	1.50

5º Guías de tránsito sobre dos ejemplares, cada uno

1.50

6º a) Permisos y guías de embarques sobre dos ejemplares cada uno

1.50

b) Boletos de embarque

1.50

c) Los permisos de registro que los patrones de embarcaciones de cabotaje, no mayores de cinco toneladas de registro, soliciten a las aduanas o resguardos para el transporte de mercaderías nacionales o nacionalizadas a un puerto vecino de naciones limítrofes

0.75

7º Permisos de desembarque de frutos para depósito

3.—

8º Conocimiento del exterior y boletas de muestras y encomiendas en general y conocimientos de efectos exportados

3.—

9º Los endosos de conocimientos a que se refiere el artículo 340 de las ordenanzas, salvo que se hagan al solo efecto del despacho aduanero

7.50

10. a) Transferencias de mercaderías en depósito sobre dos ejemplares, cada uno

7.50

b) Transferencias de exportación

1.50

11. a) Copias de depósitos sobre dos ejemplares, cada uno

3.—

b) Renovaciones de copias de depósito

3.—

12. a) Manifiesto de despacho directo

9.—

b) Manifiesto de depósito

9.—

13. Notas de toma de contenido

1.50

14. Solicitudes de análisis (extracción de muestras, cualquiera sea el número de fojas)

3.—

15. Permisos de trasiego y rehincio

3.—

16. Las pólizas de muestras y encomiendas y pólizas para el despacho de importación de piezas postales:

a) Con valor no mayor de o\$\$. 100

1.50

b) De más de o\$\$. 100

7.50

17. Las garantías que se otorguen a favor de aduanas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.046 de las ordenanzas

1.50

Art. 73. — Las solicitudes de inscripción o de reinscripción en el respectivo registro de firmas, de los importadores, exportadores, despachantes de aduana, agentes marítimos o industriales, y las de los dependientes que los representen, se formularán en un sellado de cinco pesos moneda nacional (\$ 5 m/n.).

Art. 74. — Los certificados de arqueos pagarán setenta y cinco centavos moneda nacional (\$ 0.75 m/n.) por cada diez toneladas que el buque mida de capacidad bruta, computándose como enteros las fracciones de decenas.

Art. 75. — Las cartas de sanidad para embarcaciones, pagarán:

\$ m/n.

a) Hasta de 5 toneladas de registro

0.75

b) Cuando excedan de 5 toneladas

3.—

Art. 76. — Los pasavantes que expidan las prefecturas o subprefecturas marítimas, pagarán setenta y cinco centavos moneda nacional (\$ 0.75 m/n.).

Los permisos de sobordo para buques de ultramar, tres pesos moneda nacional (\$ 3 m/n.).

Art. 77. — Los certificados anuales de seguridad de máquina pagarán:

\$ m/n.

a) Para embarcaciones que tengan desde 20 hasta 50 caballos de fuerza

10.—

b) Para embarcaciones que posean mayor fuerza

20.—

Art. 78. — Los roles de tripulantes que despachen las prefecturas o subprefecturas marítimas pagarán:

\$ m/n.

a) Para buques de cabotaje

0.75

b) Para buques de ultramar

3.—

Art. 79. — Los contratos entre patrones y marineros de los buques mercantes, pagarán setenta y cinco centavos (\$ 0.75 m/n.).

Art. 80. — Todos los otros documentos de presentación obligatoria ante las autoridades aduaneras y portuarias no previstos expresamente en los artículos anteriores se extenderán en papel simple, salvo los que estén gravados como actuación administrativa común.

TITULO IV

Impuesto a las actuaciones judiciales

CAPÍTULO I

Sellado de actuación

Art. 81. — 1º) Ante los jueces de paz letrados de la Capital, el sellado de actuación será de:

- a) Veinte centavos moneda nacional (\$ 0.20 m/n.) por foja, cuando el valor del juicio no exceda de doscientos pesos moneda nacional (\$ 200 m/n.);
- b) Cincuenta centavos moneda nacional (\$ 0.50 moneda nacional) por foja, cuando el valor del juicio exceda de doscientos pesos moneda nacional (\$ 200 m/n.) y no sea mayor de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.);
- c) Un peso moneda nacional (\$ 1 m/n.) por foja, cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.) o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado.

2º) Ante los jueces de paz de los territorios nacionales, el sellado de actuación será de:

- a) Cincuenta centavos moneda nacional (\$ 0.50 moneda nacional) por foja, cuando el valor del juicio exceda de trescientos pesos moneda nacional (\$ 300 m/n.) y no sea mayor de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.);
- b) Un peso moneda nacional (\$ 1 m/n.) por foja, cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000 m/n.) o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado.

3º) Cuando por acumulación de acciones, ampliación posterior o reconvencción, aumente el valor del juicio hasta exceder los límites de la categoría en la que estaba comprendido, las actuaciones posteriores estarán sujetas al sellado que corresponda al valor así aumentado.

Art. 82. — En los juicios de desalojo se tendrá como valor del juicio, a los efectos del artículo anterior, el importe de dos meses de alquiler.

Art. 83. — Ante la Cámara de Paz Letrada de la Capital, el sellado de actuación será en todos los casos de un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1.50 m/n.) por foja.

Art. 84. — Ante los jueces de primera instancia del fuero ordinario, de instrucción, de lo correccional y del crimen y jueces federales, el sellado de actuación será de un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1.50 m/n.) por foja.

Quando debido al fuero de atracción que ejercen los juicios universales, o por tratarse de sucesiones, o de asuntos que interesen al derecho de familia, deba conocer la justicia de primera instancia en juicios que por su monto hubieran debido corresponder al conocimiento de la justicia de paz, se actuará en el sellado que corresponda a la importancia del juicio, con arreglo al artículo 81.

Art. 85. — Ante los jueces letrados de territorios nacionales, el sellado de actuación será el establecido en el artículo 81, cuando el valor del juicio no exceda de dos mil pesos moneda nacional (\$ 2.000 m/n.) o sea indeterminado, y el establecido en el artículo 84 cuando exceda de esa cantidad.

Art. 86. — Ante las cámaras de apelaciones de la justicia ordinaria de la Capital, las cámaras federales y los tribunales arbitrales, el sellado de actuación será de tres pesos moneda nacional (\$ 3 m/n.) por foja.

Art. 87. — Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el sellado de actuación será:

a) En los asuntos de jurisdicción originaria:

- 1º El que corresponda al valor del juicio, con arreglo al artículo 81, cuando dicho valor no exceda de dos mil pesos moneda nacional (\$ 2.000 m/n.);
- 2º De un peso con cincuenta centavos moneda nacional (\$ 1.50 m/n.) por foja cuando exceda de dos mil pesos moneda nacional (\$ 2.000 m/n.) o sea indeterminado.

b) En los asuntos en que intervenga por apelación ordinaria o extraordinaria, de cinco pesos moneda nacional (\$ 5 m/n.).

Art. 88. — En todas las actuaciones judiciales, con excepción de las que tramiten ante la justicia de paz, los abogados y procuradores pagarán cincuenta y veinte centavos, respectivamente, por cada escrito. Los demás profesionales o peritos que intervengan pagarán cincuenta centavos por cada escrito, informe, pericia, testimonio o instrumento que presenten. En la justicia de paz se abonará la mitad de estos gravámenes. Cuando los profesionales o peritos actúen por derecho propio no pagarán el impuesto.

Art. 89. — Se considerarán actuaciones sueltas a impuestos: las peticiones, escritos, actas o diligencias producidas en los expedientes judiciales o arbitrales y las notas, oficios, exhortos o comunicaciones dirigidos a terceros por los tribunales judiciales o arbitrales con motivo de los expedientes que ante ellos tramiten y las actuaciones que originen su diligenciamiento.

Todo cargo puesto por funcionario autorizado en escritos judiciales que se presenten fuera de horas de oficina, se repondrá con un sello de diez pesos moneda nacional (\$ 10 m/n.).

Art. 90. — Serán repuestas con el sellado de actuación que corresponda, según el valor del juicio, todas las piezas que con cualquier motivo sean agregadas a un expediente judicial o arbitral, salvo los instrumentos públicos o privados que hayan pagado el impuesto de sello nacional o provincial correspondiente, los que estén expresamente exceptuados del mismo y los que debiendo haberlo pagado hayan infringido las presentes disposiciones, en cuyo último caso se procederá en la forma establecida en los artículos 137 y siguientes.

Art. 91. — Los magistrados y funcionarios judiciales, los árbitros y arbitradores, los tutores, los curadores, los inventariadores, los síndicos y liquidadores de concurso, convocaciones de acreedores y quiebras y los partidores, podrán actuar en papel simple, con cargo de reposición por quien corresponda.

Art. 92. — Los autos que ordenen reposición de sellado de actuación deberán ser cumplidos dentro de los cinco días siguientes a la notificación personal de la parte obligada a efectuar la reposición o de su representante. Transcurrido ese término, se aplicará de oficio la multa que establece el artículo 116, de la cual será también responsable el procurador que represente a la parte infractora.

En estos casos se seguirá el procedimiento establecido por los artículos 141 a 143.

Art. 93. — No se dará curso a ningún escrito de la parte deudora del sellado en expediente que durante seis meses haya estado paralizado, sin previa reposición del impuesto a su cargo. Esta disposición no rige para los escritos que en su propio interés presenten los abogados, procuradores, escribanos y peritos.

Los secretarios de juzgados federales u ordinarios, y demás tribunales de la Nación expedirán una certificación de la deuda de sellos que corresponda a cada expediente paralizado por falta de reposición.

Este documento será título habilitante para que la dirección del impuesto realice las gestiones de cobro.

Una vez expedida dicha certificación, podrá disponerse el archivo de las actuaciones judiciales, dejándose la constancia respectiva.

CAPÍTULO II

Impuesto de justicia

Art. 94. — Además del sellado de actuación que corresponda con arreglo a las disposiciones precedentes, las actuaciones judiciales que se inicien ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces de primera instancia en lo civil y comercial del fuero ordinario, los jueces de paz letrados y de territorios y los jueces federales, o ante la jurisdicción arbitral, estarán sujetas, cuando el valor cuestionado exceda de doscientos pesos moneda nacional (\$ 200 m/n.) en la Capital Federal y de trescientos pesos moneda nacional (\$ 300 m/n.) en territorios nacionales, o sea indeterminado, a un sello de justicia que se aplicará en la siguiente forma:

- En los juicios por sumas de dinero, el dos por mil (2 ‰) en los ordinarios y el uno por mil (1 ‰) en los ejecutivos y de apremio sobre el importe reclamado;
- En los juicios de desalojo de inmuebles, el cinco por mil (5 ‰) sobre un importe igual a dos meses de alquileres;
- En los juicios reivindicatorios, posesorios e informativos de posesión el dos por mil (2 ‰) sobre la valuación fiscal. En los de mensura y deslinde el uno por mil (1 ‰) sobre la misma valuación;
- En los juicios sucesorios, el medio por mil (½ ‰) sobre el valor de los bienes ubicados en jurisdicción nacional que se tome en cuenta para la liquidación del impuesto a la transmisión gratuita. Cuando tramiten varias sucesiones en un solo expediente, el impuesto de justicia se abonará sobre el haber de cada una de ellas;
- En los juicios de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil, el uno por mil (1 ‰) sobre el importe que arroje la liquidación de los bienes del concurso;

f) En los juicios de convocación de acreedores, cuando se apruebe un concordato, el medio por mil (½ ‰) sobre el monto total de los créditos no privilegiados verificados;

g) En las solicitudes de rehabilitación de fallidos o concursados, el cuarto por mil (¼ ‰) sobre el pasivo verificado en el concurso o quiebra;

h) En la tramitación de exhortos, cinco pesos moneda nacional (\$ 5 m/n.) por cada exhorto;

i) En los procedimientos judiciales sobre reinscripciones de hipotecas, el medio por mil (½ ‰) sobre el importe de la deuda. Cuando la reinscripción sea ordenada por exhorto librado por juez de otra jurisdicción, se abonará este impuesto en lugar del establecido en el inciso anterior;

j) En los juicios voluntarios sobre protocolización o inscripción de testamentos, declaratoria de herederos o hijuelos, extendidos fuera de la jurisdicción nacional, y en los exhortos de jueces de otras jurisdicciones para la liquidación del impuesto sucesorio correspondiente a bienes ubicados en jurisdicción nacional, el impuesto será del medio por mil (½ ‰) calculado en la forma prevista en el inciso d), en lugar del establecido en el inciso h);

k) En todos aquellos juicios cuyo valor sea indeterminable, veinte pesos moneda nacional (\$ 20 m/n.), salvo que el impuesto aplicable, calculado sobre algún valor parcial del juicio, sea superior a esta cantidad.

Art. 95. — Las tercerías serán consideradas, a los efectos de este impuesto, como juicios independientes del principal.

Art. 96. — Cuando por ampliación posterior, acumulación de acciones o reconvencción, aumente el valor cuestionado, se pagará o se completará el impuesto de justicia hasta el importe que corresponda.

Art. 97. — Para determinar el valor del juicio, a los efectos de establecer el impuesto aplicable, no se tomarán en cuenta ni los intereses ni las costas reclamadas.

Art. 98. — El impuesto de justicia será abonado por quien haya iniciado las actuaciones respectivas, en las oportunidades siguientes:

- En los casos previstos en los incisos a), b), c), g), h), i) y k) del artículo 94, en el acto de iniciación de las actuaciones respectivas. Cuando la determinación del monto del asunto dependa de diligencias previas, éstas deberán ser decretadas de oficio por el juez o tribunal respectivo, quien fijará para su diligenciamiento un plazo prudencial, vencido el cual se paralizará el procedimiento y el impuesto será pagado dentro del quinto día del cumplimiento de las mismas;
- En los casos previstos en los incisos d) y j) del artículo 94, simultáneamente con el pago del impuesto a la transmisión gratuita o al solicitar en su caso, la exención de este último impuesto;
- En los casos previstos en el inciso e) del artículo 94, al hacerse cualquier pago o distribución de fondos provenientes de la venta de bienes del concurso o liquidación;

d) En el caso previsto en el inciso f) del artículo 94, al notificarse el auto de homologación del concordato.

Art. 99. — El impuesto de justicia se abonará por medio de papel sellado del valor correspondiente, que se agregará al respectivo expediente.

Art. 100. — En caso de falta de pago del impuesto de justicia, dentro de los cinco días de la notificación personal de la parte obligada a pagarlo se procederá en la misma forma prevista en el artículo 92.

Art. 101. — El impuesto de justicia será considerado como parte de las costas del juicio y soportado en definitiva por las partes en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas.

Art. 102. — Estarán exentos del sello de justicia los juicios de alimentos, las venias para contraer matrimonio y los promovidos por los asesores de menores en ejercicio de su ministerio.

TITULO V

Exenciones

Art. 103. — Estarán exentos del impuesto de sellos:

- 1º La Nación, las provincias, las dependencias administrativas nacionales y provinciales, los bancos Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires e Hipotecario Nacional, y las reparticiones autárquicas;
- 2º Las municipalidades de la Capital Federal, provincias y territorios nacionales, sus dependencias administrativas, sus reparticiones autárquicas y las comisiones de fomento oficialmente reconocidas;
- 3º Las asociaciones de beneficencia y protectoras de animales, con personería jurídica, salvo en lo que se refiere al sellado de actuación judicial y administrativa;
- 4º Las personas que actúen con carta de pobreza expedida por autoridad competente nacional o provincial;
- 5º Las gestiones y actuaciones de los empleados públicos y de los militares, relativas al cobro de sus sueldos y pedidos de licencia;
- 6º Los recibos que otorguen las personas asistidas por las asociaciones de beneficencia;
- 7º Las peticiones a los poderes públicos en el ejercicio de un derecho político;
- 8º Las comunicaciones obligatorias dirigidas al gobierno a efecto de contribuir a la percepción de los impuestos en general;
- 9º Las comunicaciones obligatorias que a las empresas concesionarias de servicios públicos le sean exigidas por las autoridades administrativas, cuando se refiere al servicio concedido;
10. Las comunicaciones administrativas que en cumplimiento de la ley respectiva deban hacer los patrones y aseguradores sobre indemnizaciones por accidentes de trabajo;
11. Los certificados de fumigación de barcos o exención de ese requisito;
12. Los certificados de domicilio, de buena conducta y de salud;
13. Las presentaciones de interés general que se dirijan a las oficinas públicas;
14. Los instrumentos públicos o privados, extendidos por razón del lugar, en el sello provincial correspondiente, cuando sean presentados

- ocasional o incidentalmente ante alguna autoridad nacional;
15. Las gestiones judiciales del Banco Nacional en liquidación;
16. La protocolización o agregación de documentos que hayan pagado el impuesto;
17. Las escrituras que extinguen contrato u obligaciones que al constituirse hayan pagado el impuesto correspondiente;
18. Las cartas de pago, cancelaciones o liberaciones de gravámenes y las reinscripciones de hipoteca;
19. Las letras que se otorguen a favor del Banco Nacional en liquidación, por deudas garantizadas con hipoteca;
20. Las negociaciones de letras de tesorería emitidas por el gobierno nacional;
21. Las guías de campaña y sus endosos;
22. Los endosos que se efectúen en documentos comerciales y en los *warrants* y certificados de depósitos de mercaderías;
23. Los actos de constitución de asociaciones religiosas, culturales y de beneficencia y las gestiones para el cobro de subvenciones acordadas por el Estado;
24. Los contratos de subscripción de acciones y los actos que formalicen la disolución y liquidación de sociedad;
25. Las fianzas que se otorguen a favor de los empleados públicos o particulares de los escribanos públicos y de los despachantes de aduana, en garantía del buen desempeño de sus funciones;
26. Los escritos y peticiones presentados a las municipalidades de la Capital Federal y territorios nacionales y las actuaciones que ellos originen;
27. Las gestiones ante el gobierno y reparticiones públicas por cobro o devolución de sumas menores de trescientos pesos moneda nacional (\$ 300 m/n.), no pudiendo separarse o desdoblarse las que obedezcan a la misma causa;
28. Los escritos y actuaciones producidos en cualquier jurisdicción para la defensa en juicio criminal, sin perjuicio del cargo de reposición en caso de condena;
29. Los contratos por correspondencia de comerciantes minoristas relativos exclusivamente a la venta al contado o a plazo no mayor de treinta días, de las mercaderías con las cuales ellos negocian; pero en caso de ser presentados en juicio se aplicará lo dispuesto en el segundo apartado del artículo 6º;
30. Las boletas que entreguen los martilleros a los compradores de cosas muebles y semovientes en remate público y las cuentas de venta o liquidaciones formuladas por martilleros, consignatarios y comisionistas;
31. Las autorizaciones a terceros para comprar mercaderías con carnets de crédito otorgados por las casas de comercio y las autorizaciones para cobrar sueldos de obreros y empleados;
32. Los recibos que expidan los escribanos de registro por las sumas que se les entreguen para pagar los impuestos a que estén sujetos los actos que deban pasar ante ellos y los recibos expedidos por las despachantes

de aduana por las sumas que perciban para pagar los impuestos fiscales;

33. Los recibos otorgados por los beneficiarios de las indemnizaciones parciales o totales de seguros sobre accidentes de trabajo;
34. Los recibos que no sean instrumento de pago, las órdenes de entrega de dinero o de mercaderías y los comprobantes internos de contabilidad, que otorguen empleados, obreros, oficinas o dependencias de una misma empresa o casa comercial;
35. Las autorizaciones para retirar fondos de cajas de ahorro;
36. Los recibos de fondos que se perciban en virtud de operaciones de cambio, giros o transferencias que hayan pagado el impuesto correspondiente;
37. Las copias de las cédulas de notificaciones administrativas o judiciales que se dejen al notificado;
38. La documentación aduanera originada por la importación de libros, cuando entren al país por vía postal;
39. Las actuaciones judiciales seguidas ante tribunales provinciales, que por cualquier causa deban ser traídas a la jurisdicción nacional;
40. Los instrumentos y operaciones cuyo valor no exceda de veinte pesos moneda nacional (\$ 20);
41. Los actos gravados por la ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes;
42. Las operaciones sobre semovientes gravadas por la ley 11.747;
43. Los recibos de títulos, acciones y valores mobiliarios en general, entregados a los bancos para su custodia y administración;
44. Los demás casos contemplados por leyes especiales que no estén expresamente derogados por este decreto.

Art. 104. — Estarán también exentos de impuesto, pero con cargo de reposición cuando la resolución definitiva sea denegatoria:

- a) Los recursos de hábeas corpus;
- b) Las actuaciones tendientes a obtener declaración de pobreza.

Art. 105. — Las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de prendas, contraídas para garantizar un contrato u obligación no vencido, estarán exentas de sello si en el contrato o en la obligación principal se ha pagado el impuesto. De lo contrario se extenderán en el sello que a éstos hubiere correspondido.

Art. 106. — Estarán exentos de impuestos cuando en el contrato principal se haya pagado el sello que corresponda, los pagarés entregados como parte del precio de un contrato otorgado por escritura pública, siempre que lleven un certificado del escribano ante el cual haya sido otorgada la escritura, del que resulte la fecha y número de ésta y el importe del impuesto pagado. Las eventuales renovaciones de esos pagarés estarán sujetas al impuesto.

Art. 107. — Los contratos concertados entre una parte exenta de impuesto y otra no exenta, pagarán la mitad del sellado, a cargo de esta última. En las operaciones de préstamos, descuentos, adelantos y gi-

ros internos realizados en jurisdicción nacional con los bancos oficiales nacionales u otras personas o entidades exentas de sellado, el impuesto será pagado en su totalidad por quien contrate con dichas entidades.

Art. 108. — Ninguna de las exenciones establecidas por este decreto alcanza al sello que deben llevar las fojas de los cuadernos de los protocolos de los escribanos, ni a las de los testimonios de escrituras públicas.

TITULO VI

Interpretación del decreto

Art. 109. — Toda duda que se suscite fuera de juicio sobre la aplicación o interpretación del presente decreto, será resuelta por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, ante quien podrán presentarse, en consulta directa, tanto los particulares como las distintas ramas de la administración pública.

Art. 110. — Las resoluciones que dicte la dirección al evacuar las consultas que se formulen, serán apelables ante el Ministerio de Hacienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se notifique al interesado la resolución dictada.

Art. 111. — Las resoluciones que dicte el Ministerio de Hacienda cuando se apele o las de la dirección no apeladas dentro del plazo legal, no serán susceptibles de recurso alguno; pero quedará a salvo el derecho de los interesados para cumplirlas bajo protesta y entablar acción judicial contra el fisco, por repetición del impuesto pagado.

TITULO VII

Reposición del sellado

CAPÍTULO I

En las actuaciones administrativas

Art. 112. — Las oficinas y reparticiones de la administración pública gestionarán la reposición de los sellos en todos los asuntos que ante ellas tramiten, a cuyo efecto deberán intimar a los responsables, con indicación de la cantidad adeudada, la reposición dentro del quinto día, bajo apercibimiento de aplicarse la multa correspondiente. Vencido el término indicado sin haberse repuesto el sellado, se dará intervención a la dirección del impuesto a los efectos de su cobro y de la aplicación de multa, si correspondiese.

CAPÍTULO II

En los registros de contratos públicos

Art. 113. — El impuesto correspondiente a las escrituras públicas se pagará bajo la responsabilidad directa del escribano titular del registro, sin perjuicio de la que además corresponda al adscrito por las escrituras que él autorice, con estampillas especiales, dobles, que las oficinas expendedoras adherirán y obliterarán con un sello fechor, en dos formularios especiales, uno de los cuales quedará archivado en la dirección del ramo, anexándose el otro al protocolo.

Los formularios contendrán el número, folio, fecha, naturaleza del instrumento, los datos necesarios para la determinación del impuesto aplicable y el monto pagado. No se individualizará a las personas compa-

recientes sino en los casos previstos en el artículo siguiente.

La dirección impugnará dentro de los noventa (90) días de la fecha de presentación de los formularios, las liquidaciones que a su juicio hubiesen sido erróneamente practicadas, significando a los escribanos titulares que deberán satisfacer, dentro del quinto día de notificados, bajo apercibimiento de multa, las diferencias de sellado que pudieren resultar en contra del fisco o bien presentar escrito fundado en caso de estar disconformes con esa interpretación del decreto procediéndose en este último caso conforme a lo dispuesto en los artículos 109 a 111.

Transcurrido el término establecido en el párrafo anterior y salvo en el caso de manifestación falsa de los elementos destinados a regular el impuesto, resta toda responsabilidad del escribano por el importe del sellado omitido, el que será exigible solidariamente contra cualquiera de las partes que debieron satisfacer el impuesto.

Art. 114. — Los formularios correspondientes a las escrituras de compraventa, permuta o cualquier otro contrato, que importe la transmisión de dominio de bienes raíces situados en la Capital o en los territorios nacionales, o los grave con un derecho real, serán intervenidos por la Administración General de Contribución Territorial, quien certificará en los mismos que la propiedad no adeuda impuesto territorial por el año corriente y ejercicios anteriores, dejando también constancia de su valuación fiscal.

TITULO VIII

Infracciones

CAPÍTULO I

Casos de infracción y sanciones

Art. 115. — Se considerará infracción:

- a) Omitir el sellado total o parcialmente;
- b) No cumplir las disposiciones referentes al tiempo y forma de pagar el impuesto;
- c) Presentar copias o instrumentos privados, sin comprobar el pago del sellado correcto en los originales;
- d) Invocar la existencia de un contrato escrito, sin comprobar que fué extendido en el sellado correspondiente o sin ofrecer los medios para su comprobación, cuando por conformidad de partes, dicho contrato produzca efectos jurídicos en el juicio;
- e) No presentar la prueba del pago del impuesto, cuando la dirección hubiere comprobado la existencia de un contrato escrito;
- f) Excederse en el número de líneas o el margen del papel sellado, cuando de ello resulte perjuicio a la renta fiscal, salvo las anotaciones marginales legales de fecha posterior al acto;
- g) Extender instrumentos sin fecha o lugar de otorgamiento o adulterar la fecha de los mismos, cuando de tales actos pueda resultar perjuicio a la renta fiscal;
- h) Presentar las declaraciones juradas que este decreto establece, con datos inexactos;
- i) Dejar de cumplir o violar cualquiera de estas disposiciones o del reglamento que se dicte, cuando de ello pueda resultar perjuicio a la renta fiscal.

Art. 116. — Los que otorguen, endosen, admitan, presenten, tramiten o autoricen escritos o documentos sin el impuesto correspondiente o con un impuesto menor y los que en general incurran en infracción, se harán solidariamente pasibles de una multa de (5) cinco veces el valor del impuesto total o parcialmente omitido o abonado en infracción a las presentes disposiciones o su reglamentación.

Es obligatorio conservar por cinco años contados desde la fecha en que el impuesto debió abonarse, los libros y documentos sujetos a fiscalización. Su destrucción o la negativa a presentarlos se considerará como omisión del sellado.

Si se comprueba la existencia de omisiones de impuesto sin determinar su monto, en razón de no haberse presentado los elementos probatorios necesarios, se impondrá una multa de \$50 m/n. a \$5.000 m/n. (cincuenta a cinco mil pesos moneda nacional), según sea la importancia del caso.

Art. 117. — Los recibos sin la estampilla o el sello correspondiente, estarán sujetos a una multa de cinco o diez pesos moneda nacional por cada recibo, según se trate respectivamente, de los incisos a) y b) o del inciso c) del artículo 61, penalidad de la cual se harán solidariamente responsables todos los infractores en la misma extensión que establece el artículo anterior.

Art. 118. — Para la fijación de la multa, sólo se tendrá en cuenta el sello omitido en el instrumento u operación con independencia del número de partes intervinientes o firmas asentadas.

Art. 119. — Las multas se aplicarán sin perjuicio del impuesto que corresponda, del cual los infractores serán también solidariamente responsables.

Art. 120. — Los escribanos de registro no podrán protocolizar, aceptar para darle fecha cierta, transcribir, ni dar fe de haber tenido a la vista, instrumentos privados que no estén extendidos en el sellado correspondiente. En cada caso, deberán mencionar en la escritura respectiva las cantidades, numeraciones y años de los valores en que hayan sido extendidos o con los cuales hayan sido habilitados. La falta de cumplimiento de estos requisitos los constituirá en infractores. No podrán tampoco extender protestas de documentos que se hallen en infracción, sin exigir su reposición o garantizarla para el primer día hábil siguiente.

Art. 121. — Cuando los escribanos públicos que hayan incurrido en infracción no abonen al ser judicialmente apremiados, el importe del impuesto y multa, o no den a embargo bienes suficientes para cubrirlo, serán suspendidos por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en el ejercicio de sus funciones por el término de sesenta (60) días, transcurrido el cual sin haber regularizado su situación, les será retirado el registro.

CAPÍTULO II

Inspección y aplicación administrativa de penas

Art. 122. — La dirección general vigilará el cumplimiento de estas disposiciones, para lo cual podrá inspeccionar oficinas públicas, administrativas y judiciales, escribanías de registro, el Registro Público de Comercio, el Registro de la Propiedad, bancos, sociedades anónimas, mercados, bolsas, casas de descuentos, casas que giran con el extranjero, casas de remates y comisiones, prestamistas sujetos a patente

o licencia, establecimientos industriales, administraciones de propiedades y en general toda casa de comercio, quienes estarán obligados a admitir y facilitar la inspección fiscal en lo referente a las operaciones y documentos sujetos al impuesto.

Los domicilios particulares sólo podrán ser inspeccionados mediante orden de allanamiento impartida por juez competente, cuando existan presunciones de que en dichos domicilios se realizan habitualmente operaciones cuya documentación está gravada o de que allí se encuentren los documentos pertenecientes a algunas de las instituciones, oficinas o casas precedentemente enumeradas.

Art. 123. — La resistencia u oposición de hecho a la inspección por funcionarios debidamente autorizados, será penada con multa de veinte (20) a dos mil (2.000) pesos moneda nacional.

Art. 124. — Los inspectores fiscales harán constar las presuntas infracciones que descubran con las referencias pertinentes, y formularán el cargo en un acta cuya copia entregarán al interesado. Dicha acta, firmada por el presunto infractor o en su defecto por dos testigos, hará fe mientras no se compruebe su falsedad. Si lo consignado en el acta resultare falso por malicia o por negligencia grave de los funcionarios que la hayan levantado, éstos estarán sujetos a las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio de las penas que puedan ser aplicables conforme al Código Penal a los firmantes.

Art. 125. — En caso de obstrucción o resistencia, la dirección o los funcionarios especialmente autorizados, podrán requerir del juez en lo civil en turno o del juez letrado en su caso, la correspondiente orden de allanamiento, a fin de que los inspectores puedan cumplir su misión.

Art. 126. — Los instrumentos en presunta infracción podrán quedar en poder del interesado, siempre que éste acepte constituirse en depositario, en paquetes sellados, lacrados y firmados por los funcionarios, o en seguridad en lugar apropiado con idénticas garantías, salvo que la dirección general prefiera retirarlos bajo recibo.

Cuando se trate de documentaciones pertenecientes a empresas o casas comerciales de reconocida responsabilidad, la operación podrá limitarse a enumerar los instrumentos en el acta respectiva, sellar cada uno de ellos con el sello de la dirección general y dejarlos en poder de la inspeccionada, que los conservará en condición de depositario a disposición de la dirección general y con las responsabilidades legales correspondientes.

Cuando el presunto infractor necesite hacer uso de los instrumentos así intervenidos, podrá hacerlo bajo las garantías que establecerá en cada caso la dirección general.

Art. 127. — Extendida el acta y sea o no firmada por el interesado, se notificará al presunto infractor de los cargos que se hayan formulado y se le concederá un plazo de diez (10) días, a contar desde el día de la notificación, prorrogables, a pedido de parte, por resolución de la dirección, para que alegue su defensa por escrito, proponiendo o entregando las pruebas que hagan a su derecho.

Art. 128. — Practicadas las diligencias de prueba solicitadas por el interesado, quedará cerrado el sumario y se dictará la resolución que corresponda.

Art. 129. — En las tramitaciones administrativas a que dé lugar la aplicación de este decreto, será suficiente notificación la efectuada al contribuyente en las ac-

tuaciones o la hecha por cédula, cedulón postal, telegrama o carta certificada con aviso de retorno, en el domicilio constituido por el contribuyente en el respectivo expediente. En los sumarios administrativos, a falta de domicilio constituido, se entenderá como tal el establecido por los inspectores actuantes de la oficina o repartición correspondiente.

Cuando la citación o notificación no pueda practicarse en la forma antedicha, por no tener el contribuyente domicilio constituido o conocido, se efectuará por medio de edictos publicados durante el término de cinco días en el Boletín Oficial.

CAPÍTULO III

Recursos

Art. 130. — De las resoluciones de la dirección, dentro de los cinco (5) días de la notificación, podrá interponerse el recurso administrativo de apelación o el recurso contencioso. La opción de los interesados por el recurso administrativo importa la renuncia del recurso contencioso y viceversa.

El recurso contencioso sólo podrá interponerse previo pago del impuesto, dentro de dicho término.

El escrito deberá limitarse a la mera interposición del recurso, sin fundarlo. Cuando no se diga claramente que se opta por el recurso contencioso, se entenderá que se ha optado por el recurso administrativo.

No interpuesto en término, alguno de estos recursos, la resolución de la dirección quedará consentida y pasará en autoridad de cosa juzgada.

Art. 131. — Conocerá del recurso administrativo el Ministerio de Hacienda. Al recibir el expediente, se fijará un término de diez (10) días para que el recurrente exprese agravios y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. Después de recibir dichas pruebas y cualesquiera otras cuya producción podrá ordenar el ministerio para mejor proveer, se dictará resolución previo dictamen del procurador del Tesoro, si se creyera conveniente.

Art. 132. — Del recurso contencioso conocerán los jueces que correspondan de acuerdo con las leyes que reglamentan su jurisdicción y competencia.

Art. 133. — Al recibir el expediente, el juez fijará al apelante un término de diez días para que exprese agravios. Vencido el término sin haberlo hecho, se le tendrá por desistido del recurso interpuesto y la resolución apelada quedará consentida.

Art. 134. — De la expresión de agravios se correrá traslado por diez días en calidad de autos al representante del fisco, quien deberá oponer al evacuarlo, todas sus defensas y excepciones las cuales serán resueltas conjuntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia definitiva.

Art. 135. — Las sentencias que condenen al pago de una suma que no exceda de doscientos pesos, causarán ejecutoria.

Art. 136. — Las resoluciones consentidas en los recursos contenciosos y las decisiones definitivas que recaigan en los mismos, pasarán en autoridad de cosa juzgada y no se admitirá acción de repetición por el impuesto y multa que se ingrese.

CAPÍTULO IV

Infracciones comprobadas en expedientes judiciales

Art. 137. — En todo documento que se presente ante cualquier autoridad judicial y que prima facie, aparezca en infracción a estas disposiciones, los secretarios o los funcionarios de la dirección general deberán poner la nota «no corresponde».

Art. 138. — El tribunal respectivo dará vista del documento así observado al representante del fisco, quien deberá expedirse al respecto en el término de ocho días.

Art. 139. — De la vista fiscal se dará traslado a las partes por seis días comunes para que expresen las razones que tengan que alegar en su descargo.

Art. 140. — Cuando el caso no requiera prueba, el juez resolverá la incidencia en el término de diez días. Cuando la requiera, se abrirá a prueba la causa formando incidentes por separado. La tramitación ulterior se regirá por las reglas establecidas más arriba para los recursos contenciosos.

Art. 141. — Cuando el presunto infractor sea la parte actora o todas las partes intervinientes, el juicio quedará paralizado hasta el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que corresponda.

Art. 142. — Cuando el presunto infractor sea la parte demandada y la parte actora aparezca prima facie exenta de responsabilidad, el juicio seguirá su curso formándose incidente por separado con la sola intervención del representante fiscal y del presunto infractor.

Art. 143. — Cuando corresponda paralizar las actuaciones, ambas partes o cualesquiera de ellas podrán obtener que el juicio siga su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco de la Nación Argentina, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre la presunta infracción, el importe del impuesto y multa reclamados por el representante fiscal.

CAPÍTULO V

Infracciones comprobadas en el orden administrativo

Art. 144. — Los funcionarios administrativos estarán sujetos a igual obligación que la que impone a los secretarios judiciales el artículo 137.

Los instrumentos así observados pasarán a la dirección general a los efectos pertinentes.

CAPÍTULO VI

Gestión y cobro en la justicia

Art. 145. — El cobro de las multas aplicadas en virtud de la resolución administrativa o judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, se hará efectivo por la vía de apremio, junto con el cobro del impuesto, por intermedio del representante correspondiente del fisco. Cuando la resolución sea administrativa, será título hábil la boleta de deuda certificada por la dirección.

Art. 146. — En los juicios de apremio por cobro de impuestos y multas aplicados en virtud de las presentes disposiciones, si el deudor no abonara en el acto de intimársele el pago, quedará desde ese

momento citado de remate. No serán admitidas en estos juicios otras excepciones que las de:

- a) Falsedad material o extrínseca del título o boleta con que se ejecuta;
- b) Pago;
- c) Prescripción.

El procedimiento de apremio se seguirá conforme a lo establecido en el título XXV de la ley 50, de 14 de septiembre de 1853.

Art. 147. — Cualquiera que sea el monto de la multa impuesta, el procedimiento para el cobro de la misma y del impuesto correspondiente se seguirá hasta su terminación ante el mismo juez que la haya aplicado.

CAPÍTULO VII

Representación

Art. 148. — En los recursos contenciosos y en todos los demás casos en que corresponda tomar intervención en o ante la justicia a los efectos de este decreto, la representación estará a cargo de los procuradores o agentes fiscales o de los representantes especiales que la dirección general designe para ese cometido, a quienes se notificará de las actuaciones y demás providencias que se dicten.

La representación ejercida por los funcionarios especiales excluirá la intervención de los procuradores o agentes fiscales.

En caso de corresponder honorarios en juicio, los representantes del fisco los percibirán únicamente cuando no se hallen a cargo de la Nación o no afecten directa o indirectamente el interés fiscal.

Cuando la representación se encuentre a cargo de los funcionarios designados por la dirección, ésta podrá fijar la forma de distribución de los honorarios.

Art. 149. — Cuando la representación del fisco se encuentre a cargo de representantes especiales designados por la dirección, éstos podrán actuar en todos los tribunales federales y ordinarios, cualquiera que sean el monto y naturaleza del asunto.

Art. 150. — La personería de los representantes especiales será acreditada ante los jueces con un certificado de su nombramiento, expedido por la dirección del ramo.

Art. 151. — El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo referente a las demás funciones y formas de actuar de los representantes del fisco en la gestión y cobro de las deudas de sellado y multas.

TÍTULO IX

Canje y restitución

Art. 152. — El papel sellado en blanco o el que se inutilice sin haber sido firmado, siempre que no contenga raspaduras o el «corresponde», de alguna oficina pública y que su formato u hoja esté entero, podrá ser cambiado hasta treinta días de vencido el término de su validez por otro u otros de igual valor, mediante el pago de diez centavos moneda nacional por cada sello inutilizado por un valor no mayor de quinientos pesos y de un peso moneda nacional por cada sello de un valor superior.

Las estampillas de los valores que se expendan libremente al público y que no estuviesen inutili-

zadas, podrán ser canjeadas sin cargo en los mismos términos.

Art. 153. — Unicamente se admitirá la devolución del impuesto en efectivo, el canje, la imputación o compensación en los instrumentos firmados, cuando se hayan efectuado pagos en exceso o por error, a condición de que el interesado formule su reclamación dentro de los cinco días de la fecha de habilitación del sellado.

Si el impuesto se abonare por declaración jurada deberá formularse el reclamo dentro de los quince días de efectuado el ingreso.

La devolución en efectivo podrá ser realizada por la dirección general en forma simple y rápida con cargo a la recaudación del día. En igual forma, devolverá la autoridad policial las multas dejadas sin efecto.

Art. 154. — Cuando los sellos de reposición de actos notariales de cualquier naturaleza queden inutilizados por no haberse otorgado la escritura proyectada podrán ser canjeados hasta los treinta días de la fecha de su expedición, siempre que tal hecho se haga constar en ellos por nota especial sellada y firmada por el escribano que efectuó el pago a su reemplazante legal en el registro.

Art. 155. — Los sellos que contengan contratos extendidos en dos o más fojas, sólo podrán ser cambiados cuando se presenten todas sus fojas y siempre que en cada una de ellas se consigne en línea útil sin raspaduras ni correcciones, la numeración y valor de la siguiente.

TITULO X

Prescripción

Art. 156. — Los impuestos establecidos por las presentes disposiciones y toda multa por violación a las mismas, se prescriben a los diez y cinco años, respectivamente, de la fecha en que debió hacerse efectivo el impuesto o se cometió la infracción.

La dirección queda facultada para no gestionar el cobro de la deuda prescrita o que resulte inco-brable por desaparición o insolvencia del deudor.

Art. 157. — En las causas por infracciones, los actos del procedimiento judicial interrumpirán el término de la prescripción de la acción por aplicación y cobro del impuesto y multa.

TITULO XI

Disposiciones especiales

Art. 158. — La Dirección General del Impuesto a los Réditos tendrá a su cargo la aplicación del impuesto de sellos, para el cual registrarán también y en cuanto no se opongan al presente, las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado).

El Poder Ejecutivo a propuesta del consejo de la dirección, designará al funcionario que atenderá especialmente la aplicación del impuesto y al que lo substituirá en caso de ausencia o impedimento.

Art. 159. — Las multas que se abonen por infracción al presente decreto, como también las penas pecuniarias que impongan los jueces, autoridades administrativas o judiciales, serán pagadas en papel sellado, extendiéndose en él la constancia correspondiente, y su producido se considerará parte integrante

de este ramo de renta. Los derechos que se perciban en el Registro de la Propiedad, Escribanía General de Gobierno y demás oficinas públicas extrañas al Departamento de Hacienda, como igualmente todo ingreso de dinero al fisco que no tenga otra forma de recaudación establecida, se abonarán también en papel sellado. El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer excepciones a esta regla.

Art. 160. — A partir de la vigencia de estas disposiciones, quedan derogadas la ley 11.290 (texto ordenado), el artículo 5º de la ley 11.288 (texto ordenado) y todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Art. 161. — Los gastos que demande la creación de los nuevos servicios necesarios para el cumplimiento de este decreto se harán con imputación al mismo hasta tanto se incluyan en la ley general de presupuesto.

Art. 162. — Estas disposiciones entrarán en vigor el 1º de julio de 1944.

Art. 163. — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Orlando L. Peluffo.

— Juan Perón. — Diego I. Mason. —

Luis C. Perlinger. — Alberto Baldrich.

— Alberto Teissaire. — Juan Pistarini.

DECRETO 17.922

44

Buenos Aires, 6 de julio de 1944.

Plazo para el pago de impuesto correspondiente a materia prima de artículos que llevan otro impuesto interno.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Agrégase como segundo párrafo del artículo 3º del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, el siguiente:

Los fabricantes de artículos gravados que empleen como materia prima productos también gravados por este texto ordenado, podrán substituir al fabricante de éstos en la obligación de abonar los impuestos y retirarlos de fábrica o depósito fiscal mediante recibos provisorios cuyo conjunto se canjeará el 28 de cada mes por letras a 90 días de plazo.

Art. 2º — Derógase el segundo párrafo del artículo 62 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger.

— Orlando L. Peluffo. — Alberto Bal-

drich. — Juan Perón. — Alberto Tei-

saire. — Diego I. Mason. — Juan Pis-

tarini.

DECRETO 21.702/44

Modificaciones al impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios

Buenos Aires, 18 de agosto de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros.

DECRETA:

Artículo 1º — Suprimense los artículos 4º y 6º y modifícanse los artículos 2º, 3º, 5º y 7º del decreto 18.230 del 31 de diciembre de 1943 quedando ordenado y redactado el texto del mismo en la forma siguiente:

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio durante el término de tres años, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios originados en el ejercicio del comercio, de la industria, de la minería, de la explotación agropecuaria y de cualquier otra actividad que importe la transformación o disposición habitual de bienes.

El presente impuesto afecta todos los beneficios incluidos en el balance comercial, con excepción de los no computables para el impuesto a los réditos y los exentos de acuerdo con las presentes disposiciones. El gravamen recae sobre las empresas o explotaciones pertenecientes a personas de existencia jurídica o visible, siendo responsables del pago los titulares, socios, directores o representantes, según el caso.

Quedan exentos los réditos extraordinarios que provengan total y exclusivamente del trabajo personal de sus titulares, como ser los de los comisionistas, corredores, rematadores, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio, siempre que su obtención no dependa también de una inversión de capital en la forma que lo establezca la reglamentación.

Están además exentos los primeros \$ 20.000 moneda nacional del beneficio extraordinario determinado conforme a los artículos siguientes.

Art. 2º — Se considera beneficio extraordinario sujeto a este impuesto toda utilidad que exceda el 12 % del capital y reservas libres del año de aplicación del gravamen. La utilidad y el capital y reservas libres serán determinados en la forma que establecen los artículos siguientes y la reglamentación respectiva.

Art. 3º — Se entiende por utilidad del año el beneficio establecido de acuerdo con la ley del impuesto a los réditos (texto modificado) con las siguientes modificaciones:

- En el caso de sociedades anónimas, se podrá deducir en concepto de retribuciones al directorio y síndico las sumas realmente pagadas hasta el límite del ocho por ciento de la ganancia impositiva del ejercicio sin perjuicio de las sumas adicionales que la Dirección General del Impuesto a los Réditos autorice en los casos de los directores que simultáneamente desempeñen funciones de gerente, contador u otros cargos;
- Los honorarios u otras remuneraciones, a que se refiere la segunda parte del inciso 1) del artículo 12 del decreto 18.229, sólo

serán deducibles cuando se trate de erogaciones necesarias para la obtención de los beneficios computables para este decreto, a cuyo efecto la Dirección General podrá valorar su monto, el que, en ningún caso superará el uno por ciento de los beneficios impositivos;

- Las empresas individuales y las sociedades en general —excepto las anónimas— podrán deducir la suma de \$ 300 m/n mensuales por cada socio que trabaje efectivamente en el país al servicio de la empresa. Esta deducción alcanza a los socios colectivos de las sociedades en comandita por acciones, pero no a los accionistas;
- Las utilidades o pérdidas provenientes de participaciones en otras empresas comprendidas por este decreto, no serán computadas a efectos de determinar el beneficio impositivo, en cuyo caso se deducirá también del capital y reservas libres el importe de la inversión correspondiente, en la forma establecida para las inversiones exentas (artículo 4º);
- Cuando existieren inversiones de activo fijo efectuadas con posterioridad al 1º de enero de 1940 —excepto inmuebles— se permitirá la reducción de un importe adicional equivalente al monto de las amortizaciones técnicas anuales que corresponda practicar a los efectos del impuesto a los réditos;
- El impuesto a los beneficios extraordinarios será deducible para el cálculo del impuesto a los réditos, pero no para la liquidación del presente gravamen.

El impuesto a los réditos no será deducible para la liquidación del presente impuesto, pero en cambio se admitirá sin distinción alguna una deducción adicional del diez por ciento de la utilidad del año ajustada de acuerdo con las normas de este decreto y su reglamentación.

Art. 4º — Se considerará como capital y reservas libres la diferencia que resulte entre el activo y el pasivo ajustados de cada empresa o explotación, conforme a las disposiciones de la ley del impuesto a los réditos y en la forma que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, no admitiéndose las revaluaciones o asignación de valores a los bienes del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable para dicha ley.

Cuando existan inversiones susceptibles de producir renta exenta de impuesto a los réditos, la reglamentación fijará el procedimiento para el correspondiente ajuste de los capitales.

En las explotaciones individuales, sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria, y de responsabilidad limitada serán computados como capital los saldos acreedores de los dueños o socios en función al tiempo de su inversión. En las sociedades en comandita simple no se hará discriminación entre el capital solidario y en comandita, a los efectos de establecer la ganancia, cualquiera sea la forma en que dichos capitales estén retribuidos.

A los efectos de este impuesto se considerará capital efectivo de la empresa el cincuenta por ciento de las utilidades computables para este decreto, obtenidas en el ejercicio. Recíprocamente, en caso de pérdidas el capital será rebajado en el cincuenta por ciento de aquéllas.

Art. 5º — El impuesto establecido por las presentes disposiciones se paga anualmente con carácter definitivo.

Pero si en alguno de los ejercicios comprendidos dentro de la vigencia de este gravamen la utilidad del ejercicio impositivo fuera inferior al doce por ciento del capital y reservas libres, la diferencia aumentará la ganancia normal a considerar para el ejercicio siguiente. Cuando el ejercicio impositivo arrojaré pérdida, la ganancia normal a considerar para el ejercicio siguiente, se aumentará con aquella que hubiere correspondido para el ejercicio anterior más el importe de la pérdida.

Si la ganancia normal a considerar para el año siguiente, determinada en cualquiera de las formas previstas precedentemente, resultara superior al beneficio imputable a ese segundo período, la diferencia indicada deberá trasladarse al tercer ejercicio, incrementando la ganancia normal a considerar en ese año.

A los efectos de este impuesto no se deducirán ni compensarán en el ejercicio en que se liquida el impuesto los \$ 20.000 m/n., exentos de los períodos anteriores.

Art. 6º — Las tasas del impuesto serán las siguientes:

- 10 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible hasta el cinco por ciento del capital y reservas libres, más
- 15 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible comprendido entre el cinco por ciento y diez por ciento del capital y reservas libres, más
- 20 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible comprendido entre el diez por ciento y quince por ciento del capital y reservas libres, más
- 25 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible comprendido entre el quince por ciento y veinte por ciento del capital y reservas libres, más
- 30 % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible que supere el veinte por ciento del capital y reservas libres.

Art. 7º — Este impuesto gravará los beneficios extraordinarios de los tres ejercicios anuales que cierran a partir del 1º de diciembre de 1943. Si no se practicasen ejercicios anuales, se tomará el año calendario a partir del 1º de enero de 1943.

Art. 8º — La Dirección General del Impuesto a los Réditos podrá reunir en un único balance impositivo los resultados de distintas empresas, cualquiera sea su naturaleza, siempre que constituya un mismo conjunto económico y se hayan organizado o reorganizado después del 21 de abril de 1941, o se organicen o reorganicen en el futuro, eludiendo el pago del presente impuesto mediante el desdoblamiento de sus capitales.

Art. 9º — La fiscalización y percepción de este gravamen la realizará la Dirección General del Impuesto a los Réditos. Las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado) y sus complementarios, rigen a los efectos del presente decreto.

Art. 10. — Este impuesto, dado su carácter de emergencia, se aplicará en todo el territorio de la Nación y su producido ingresará a rentas generales.

Art. 2º — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Alberto Teisairé. — Juan Perón. — Alberto Baldrich. — Diego I. Mason. — Juan Pistarini. — Orlando L. Peluffo.

DECRETO 26.280/44

Arancel de la Escribanía General de Gobierno

Buenos Aires, septiembre 24 de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Substitúyese el artículo 3º de la ley 9.078, modificado por la 11.582 y cuyo ordenamiento fué dispuesto por decreto 109.400, del 10 de julio de 1937, por el siguiente:

«Artículo 3º — La Escribanía General del Gobierno de la Nación se ajustará al siguiente arancel, que regirá a partir del 1º de octubre de 1944.

- a) Por el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio de bienes inmuebles a favor de particulares: de constitución y transferencia de derechos reales, cuyo valor sea hasta:

\$ m/n.	\$ m/n.
10.000	100
50.000	200
100.000	300
250.000	600
500.000	1.200
más de 500.000 el 2 ½ o/oo del valor.	

- b) Por las escrituras de extinción de derechos reales, se repondrá la cuarta parte de la escala del inciso a);

- c) Por las escrituras de concesiones de líneas férreas, ramales, etcétera, hasta:

	\$ m/n.
50 kilómetros	500
100 "	900
250 "	2.000
500 "	4.000
750 "	6.000
1.000 "	8.000
excediendo de 1.000 kilómetros	8.000, más \$ 900 m/n. por cada 100 kilómetros, considerándose enteras las fracciones menores de 100 kilómetros;

- d) Por las escrituras de contratos de provisión de artículos, el contratista repondrá el dos por mil (2 o/oo) del valor del contrato;
- e) Por las escrituras de contratos de construcción, locación de obra, de servicios, etcétera, el contratista repondrá el dos por mil (2 o/oo) del valor del contrato;
- f) Por los contratos para las concesiones de elevadores de granos, se repondrá de acuerdo con el monto del presupuesto aprobado para la construcción del mismo, en la siguiente forma:

Hasta \$ 100.000 m/n.	2 ½ o/oo
de " 100.001 " hasta \$ 500.000 m/n.	2 o/oo
" " 500.001 " en adelante	1 ½ o/oo

- g) Por los contratos de concesión para la explotación de bosques, el contratista repondrá el tres por mil (3 o/oo) sobre su valor;
- h) Por los contratos de concesión para la explotación de pesca en lagos, lagunas o embalses, el contratista repondrá el dos por mil (2 o/oo) sobre el valor del mismo;
- i) Por las escrituras de concesiones de puertos, muelles, diques, fusiones de ferrocarriles, eléctricas, telefónicas, radiales u otras que no estén comprendidas en este arancel, se repondrá de acuerdo al monto de los presupuestos o su importancia y valor equivalente, en la siguiente forma:

	\$ m/n.
Hasta 1.000.000	5 o/oo
de 1.000.001 hasta \$ 3.000.000 m/n.	4 o/oo
" 3.000.001 " " 5.000.000 "	3 o/oo
" 5.000.001 en adelante	2 ½ o/oo

- j) Por las escrituras de transferencias de concesiones de líneas férreas, telefónicas, eléctricas u otras, se repondrá el dos por mil (2 o/oo) sobre el valor del contrato;
- k) Por las escrituras de cancelación de tierras o saldos de precios, se repondrá por:
- | | |
|---|-------------|
| 20.000 hectáreas o \$ 50.000 m/n. | \$ 100 m/n. |
| 50.000 " " 200.000 " | 200 " " |
- sobre el excedente de esta cantidad el medio por mil;
- l) Por las escrituras de confirmación, revalidación, rectificación, deslinde, cambios de ubicación, se repondrá \$ 100 moneda nacional;

- m) Por las escrituras de protocolización de mensura, de documentos u otras análogas, se repondrá \$ 200 moneda nacional;
- n) Por las escrituras de constitución de sociedades mixtas, formadas entre el Estado y los particulares, éstos repondrán proporcionalmente a la suma aportada por la sociedad de acuerdo a la siguiente escala:

	\$ m/n.
Hasta \$ 10.000 m/n.	70
de " 10.001 " hasta \$ 50.000 m/n. la cuota fija de	70
más el cinco por mil (5 o/oo) sobre el excedente.	
" " 50.001 m/n. hasta \$ 500.000 m/n. la cuota fija de	350
más el cuatro por mil (4 o/oo) sobre el excedente.	
" " 500.001 m/n. en adelante la cuota fija de	2.200
más el tres por mil (3 o/oo) sobre el excedente.	

- o) En las escrituras traslativas de dominio de bienes inmuebles o embarcaciones, con excepción de las expropiaciones y donaciones a favor del Estado, el escribano cobrará a los transmitentes, por su trabajo de estudio de títulos y diligenciamientos de certificados \$ 30 m/n. cuando el valor de la escritura no exceda de \$ 10.000; de esta cantidad hasta \$ 100.000 m/n. cobrará el dos y medio por mil (2 ½ o/oo) y de \$ 100.001 m/n. en adelante, el dos por mil (2 o/oo);
- p) Por la transcripción de documentos habilitantes se repondrá por foja empleada o fracción \$ 5 moneda nacional;
- q) Por protestos o diligencias de notificación se repondrán \$ 50 moneda nacional;
- r) Por protestos de letras, por compra y arrendamientos de tierras o pastaje, etcétera, se repondrán \$ 10 moneda nacional;
- s) Por cada cargo de solicitudes mineras, \$ 5 moneda nacional;
- t) Por cada foja de testimonio solicitado por particulares \$ 2 moneda nacional;
- u) Los sellos, derechos de certificados, testimonios, inscripciones, etcétera, serán de cuenta del particular, a excepción de las escrituras de expropiación y donaciones a favor del Estado;
- v) Por las escrituras que no están determinadas en este arancel, se repondrá de acuerdo al monto de los presupuestos, su importancia o valor equivalente aproximado, el dos por mil (2 o/oo);
- x) En las escrituras de contrato anuladas por culpa del contratista, éste repondrá en la nueva escritura, un sello adicional, equivalente al décuplo de los sellos de registro empleados en la anterior anulada.

Art. 2º — Publíquese, comuníquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Orlando L. Peluffo. — Juan Perón. — Diego I. Mason. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Alberto Teissaire. — Juan Pistarini.

DECRETO 33.405/44

Creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Creación. — Objeto. — Denominación

Artículo 1º — El régimen fiscal, la identificación y registro, y la valorización de la propiedad inmobiliaria de la Capital Federal y territorios de jurisdicción nacional, quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto.

Art. 2º — Créase a tal fin, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional Inmobiliaria, de la que formará parte el Tribunal de Tasaciones.

La Dirección Nacional Inmobiliaria tendrá a su cargo el catastro, el Registro de la Propiedad, el Registro de Arrendamientos, así como la aplicación recaudación y fiscalización de la contribución inmobiliaria y el régimen de valoración de la propiedad raíz.

CAPÍTULO II

Del catastro

Art. 3º — La individualización, ubicación, nomenclatura y demás referencias correspondientes a cada inmueble, se ajustarán a las constancias de un catastro único. Estas referencias serán obligatoriamente consignadas y observadas por los oficiales públicos, autoridades administrativas o judiciales y en las gestiones ante ellas.

Art. 4º — Para el catastro de la Capital Federal se adoptará el sistema topográfico-descriptivo-parcelario, quedando limitado al sistema descriptivo-parcelario en los territorios nacionales. El catastro contendrá la descripción completa de cada parcela con el detalle de los hechos existentes, conforme a lo que disponga la Dirección Nacional Inmobiliaria.

Art. 5º — En las plantas suburbanas y rurales la medición de las propiedades se realizará en forma paulatina; transitoriamente las medidas y linderos se ajustarán a los títulos de dominio en su caso, a las mensuras judiciales y a los demás elementos de juicio en poder de las dependencias del Estado o municipales. Cuando exista una red geodésica de apoyo se vincularán los linderos a la misma. Cuando no existiera una red geodésica será obligatoria la determinación de la latitud, longitud y azimut en alguno de los vértices de la mensura.

Art. 6º — Las mediciones y determinaciones a que se refiere el artículo anterior, se realizarán con el asesoramiento técnico del Ministerio de Guerra (Instituto Geográfico Militar).

Art. 7º — Facúltase a la Dirección Nacional Inmobiliaria a dictar las disposiciones que considere necesarias para la actualización del catastro. Estas mismas serán obligatorias para las reparticiones, del Estado y municipalidades y para los particulares (propietarios, locatarios, sublocatarios, administradores, rematadores, etcétera).

CAPÍTULO III

Del Registro de la Propiedad

Art. 8º — El Registro de la Propiedad, de Hipotecas, de Embargos e Inhibiciones de la Capital Federal, pasará a depender de la Dirección Nacional Inmobiliaria, la que tendrá a su cargo el cumplimiento del título XIV de la ley 1.893 y demás leyes relativas a este registro.

Art. 9º — Las inscripciones y antecedentes del Registro de la Propiedad deberán relacionarse y coordinarse con las constancias del catastro inmobiliario.

A fin de asegurar la mayor precisión de los actos registrados en el Registro de la Propiedad y la publicidad de sus anotaciones, la Dirección Nacional Inmobiliaria fijará las normas reglamentarias tendientes a ese fin, quedando autorizada a reorganizar los servicios administrativos del mismo y para modificar el reglamento en vigor, previa aprobación del Poder Ejecutivo. Deróganse los artículos 283 de la ley 1.893 y 7º de la ley 12.330.

Art. 10. — La Dirección Nacional Inmobiliaria llevará un registro especial donde se inscribirán hasta tanto se produzca la transferencia de dominio, los contratos de venta de inmuebles a plazos o por pagos periódicos.

Tales contratos deberán ser obligatoriamente declarados con especificación de las partes contratantes, de las fracciones o lotes objeto de la operación, las condiciones de pago estipuladas y demás requisitos que se establecerán reglamentariamente.

Art. 11. — Los vendedores serán responsables del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo anterior, quedando igualmente obligados a comunicar toda modificación, anulación o rescisión del contrato, así como de la transferencia de los derechos de cada parte, remitiendo testimonio judicial si así correspondiere. La falta de cumplimiento de estas disposiciones será penada con las multas establecidas en el artículo 56.

CAPÍTULO IV

De la contribución inmobiliaria

Art. 12. — En la Capital Federal, la recaudación de la contribución territorial, del impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza y de los derechos de agua, cloacas y desagües, se realizará en forma conjunta bajo la denominación de contribución inmobiliaria y de acuerdo a las disposiciones de este decreto. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación recibirán, de las sumas recaudadas, los porcentajes establecidos en el artículo 30, por la atención de los servicios mencionados que las mismas seguirán prestando conforme a sus propias disposiciones.

Art. 13. — Con relación a los derechos de agua, cloacas y desagües, la contribución inmobiliaria en

la Capital Federal alcanzará exclusivamente a los derechos básicos subsistiendo en consecuencia la obligación de pago por derechos o servicios complementario, o especiales aplicados de conformidad a las disposiciones vigentes en la materia.

Con respecto a estos servicios complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 8.889 con las modificaciones establecidas por la ley 9.468, se fijarán las nuevas bases para su percepción; la Dirección Nacional Inmobiliaria concertará con Obras Sanitarias de la Nación el régimen de recaudación más conveniente.

Art. 14. — En los territorios nacionales la contribución inmobiliaria reemplazará únicamente al impuesto establecido por la ley 11.285 (texto ordenado), continuando a cargo de Obras Sanitarias de la Nación el cobro directo de los derechos de agua, cloacas y desagües.

La contribución inmobiliaria correspondiente a los inmuebles situados fuera de la jurisdicción municipal o comunal, será aplicada y recaudada por la Dirección Nacional Inmobiliaria; en las zonas urbanas comprendidas en los ejidos de las municipalidades y de las comisiones de fomento, la aplicación y recaudación conforme a las disposiciones de este decreto, estará a cargo de éstas y su producido formará parte de sus propios recursos.

Valores impositivos. — Su determinación

Art. 15. — Para la determinación del avalúo, que se atribuya a los inmuebles ubicados en las zonas urbanas, de acuerdo a las constancias del catastro, se tendrán en cuenta dos valores:

- a) Directo: del suelo y de las construcciones;
- b) Indirecto: capitalización de la renta real o presunta.

Art. 16. — El valor del suelo se obtendrá mediante la aplicación de valores básicos unitarios en función de las medidas perimetrales y de la ubicación de cada lote dentro de la manzana. Los precios de venta registrados en los últimos cinco años y agrupados por zonas de influencia previamente establecidas, servirán para la determinación de los valores básicos unitarios. El justiprecio de las construcciones se obtendrá mediante la aplicación de valores unitarios, tipo, para cuya determinación se tendrá en cuenta el costo de la edificación, el uso o destino, la clase y características de la construcción y el estado de conservación. Sobre estos valores se aplicarán los coeficientes de desvalorización por desgaste natural.

Art. 17. — Se entenderá por renta presunta, la renta susceptible de obtenerse de un inmueble dentro de los valores corrientes de locación. Para su determinación se tendrá en cuenta la renta real registrada dentro de la zona por inmuebles cuyo valor, destino, tipo de construcción, conservación, antigüedad, etcétera, guarden relación con el inmueble cuya renta debe calcularse. Cuando la renta real de un inmueble no guarde concordancia o relación con los promedios de alquileres registrados por inmuebles en situación similar, la Dirección Nacional Inmobiliaria podrá estimar de oficio la renta sin tener en

cuenta la documentación aportada por el contribuyente.

Cuando la exigüidad de las construcciones o el valor de las mismas no guarde relación con el valor de la tierra, el Tribunal de Tasaciones establecerá la forma en que la capitalización de la renta deba ser considerada a los fines del avalúo.

Art. 18. — A los efectos de la determinación de la renta real o presunta, los propietarios de inmuebles, así como los arrendatarios están obligados a suministrar o a exhibir los elementos de juicio y demás documentos probatorios que les sean requeridos por la Dirección Nacional Inmobiliaria.

Art. 19. — En los territorios nacionales, en las zonas suburbanas y rurales, para la determinación del valor de la tierra se tendrán en cuenta: los precios de venta registrados en la zona en los últimos cinco años; las condiciones agrológicas del suelo; destino efectivo y aptitud para su explotación; el valor corriente de los arrendamientos.

Al valor del terreno se agregará el de las mejoras permanentes incorporadas al suelo, como ser: edificación para viviendas, galpones, molinos, alambrados, etcétera.

Tasas

Art. 20. — De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, la contribución inmobiliaria en la Capital Federal se cobrará anualmente, aplicando sobre el avalúo oficial atribuido a cada inmueble las siguientes tasas:

1º Inmuebles edificados:

- a) El dieciséis por mil (16 o/oo) cuando su valuación no exceda de treinta mil pesos moneda nacional (\$ 30.000 m/n.);
- b) El dieciocho por mil (18 o/oo) cuando su valuación sea superior a treinta mil pesos moneda nacional (\$ 30.000 m/n.) y no exceda de cien mil pesos moneda nacional (\$ 100.000 moneda nacional);
- c) El veinte por mil (20 o/oo) cuando su valuación sea superior a cien mil pesos moneda nacional (\$ 100.000 m/n.).

2º Los terrenos baldíos pagarán el 20 o/oo (veinte por mil).

Art. 21. — Cuando no exista la prestación de uno o más servicios a que se refiere el artículo 12, la cuota total anual que resulte de la aplicación de las tasas establecidas en el artículo 20, será rebajada de acuerdo con la siguiente tabla:

Rebaja sobre la cuota anual	Concepto
16,66 por ciento	Servicios de agua
11,11 " "	" " cloacas
5,56 " "	" " desagües
11,11 " "	" " alumbrado
11,11 " "	" " barrido
11,11 " "	" " limpieza

En los casos en que la prestación de uno o más de los servicios enumerados precedentemente sea parcial, la Dirección Nacional Inmobiliaria fijará el coeficiente de rebaja que corresponda aplicar sobre la cuota anual.

Art. 22. — En los territorios nacionales en concepto de contribución territorial se aplicará la tasa uniforme del seis por mil (6 o/oo) tanto en jurisdicción comunal como fuera de ella. Derógase el punto primero del artículo 3º de la ley 2.735 en lo que se refiere a la tasa establecida en el mismo.

Excepciones en jurisdicción de la Capital Federal

Art. 23. — Las exoneraciones generales o parciales, acordadas por disposiciones legales, actualmente en vigor, serán mantenidas, considerando que cada gravamen exonerado, ya sea la contribución territorial o los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza, o los derechos de agua, cloacas y desagües, representará cada uno de ellos la tercera parte de la cuota de contribución inmobiliaria.

Art. 24. — Pagarán la tercera parte de la cuota anual de contribución inmobiliaria:

- a) Las propiedades del gobierno nacional y las de la municipalidad, así como las que pertenezcan a las provincias si están ocupadas por establecimientos públicos de las mismas;
- b) Los inmuebles ocupados por templos, y sus dependencias, por convenios y casas de corrección;
- c) Los inmuebles destinados exclusivamente a bibliotecas públicas gratuitas;
- d) Los inmuebles destinados a asistencia social practicada por sociedades de beneficencia, reconocidas como tales por el Estado;
- e) Los inmuebles destinados al cumplimiento de los fines de las asociaciones mutualistas con personería jurídica y de las sociedades cooperativas que funcionen de acuerdo a las leyes 12.209 y 11.388, respectivamente;
- f) Los inmuebles en que funcionen escuelas particulares que enseñen gratuitamente en idioma nacional a un número de alumnos cuyo costo de enseñanza, calculado sobre la base del gasto en escuelas oficiales, sea superior a las dos terceras partes del impuesto total que corresponda a la finca donde se proporcione; quedan excluidos de los beneficios de esta disposición los locadores que no mantengan vinculación con el instituto de enseñanza.

Art. 25. — No estarán comprendidos en las precedentes excepciones ni en las concedidas por leyes especiales los inmuebles que produzcan renta, salvo que esta última se obtenga directamente de los propios beneficiados por las respectivas entidades. Cuando parte del inmueble produzca renta, la reducción que corresponda se aplicará en forma proporcional.

Art. 26. — Los inmuebles habitados total y permanentemente por sus propios dueños y siempre que éstos no posean otras propiedades en jurisdicción nacional, pagarán la contribución inmobiliaria con las siguientes reducciones:

Treinta por ciento (30 %) para los inmuebles valuados hasta \$ 5.000 moneda nacional.

Veinte por ciento (20 %) para los inmuebles valuados hasta \$ 10.000 moneda nacional.

Diez por ciento (10 %) para los inmuebles valuados hasta \$ 15.000 moneda nacional.

Cinco por ciento (5 %) para los inmuebles valuados hasta \$ 20.000 moneda nacional.

Excepciones en jurisdicción de los territorios nacionales

Art. 27. — En los territorios nacionales, quedarán exceptuados de la contribución inmobiliaria los inmuebles exonerados por leyes especiales y los que se encuentren en las condiciones establecidas en el artículo 24 con las restricciones del artículo 25.

Art. 28. — En las zonas urbanas de los territorios nacionales y tratándose de un gravamen que constituye un recurso de las municipalidades y comisiones de fomento, éstas podrán establecer, de acuerdo a las características y valores de cada zona, excepciones del impuesto en favor de los pequeños propietarios, sujetándose a las normas que fije el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio del Interior, previo asesoramiento de la Dirección Nacional Inmobiliaria.

Art. 29. — La reglamentación establecerá las condiciones que deban cumplirse para acogerse a los beneficios de los artículos 24 y 26 y las oficinas públicas deberán prestar obligatoriamente la colaboración que les requiera la Dirección Nacional Inmobiliaria a los fines de la aplicación de dichas excepciones.

Distribución

Art. 30. — El producido de la contribución inmobiliaria en la Capital Federal y de los recargos, fijados en el artículo 53, se distribuirá en las siguientes proporciones: para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el cuarenta y cinco por ciento (45 %); para las Obras Sanitarias de la Nación, el treinta y cinco por ciento (35 %) y para la Nación el veinte por ciento (20 %). La proporción correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires comprende, además, su participación en la contribución territorial reconocida por las disposiciones hasta ahora vigentes.

Art. 31. — Las sumas que se recauden de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, serán depositadas diariamente en cuenta especial en el Banco Central de la República, el que acreditará dentro de las cuarenta y ocho horas, en la proporción indicada, las cantidades que correspondan a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a Obras Sanitarias de la Nación y a la Tesorería General de la Nación.

Revaluación

Art. 32. — En la Capital Federal los inmuebles serán revaluados cada cinco años.

A tal fin la Dirección Nacional Inmobiliaria dividirá la Capital Federal en cinco secciones, cada una de las cuales será revaluada anualmente en orden sucesivo; los nuevos valores regirán para cada sección al año siguiente de haber sido impuestos.

Art. 33. — En los territorios nacionales la revaluación será practicada cada cinco años. La revaluación de los inmuebles situados en jurisdicción comunal, será practicada con intervención y asesoramiento de la Dirección Nacional Inmobiliaria. Las propiedades situadas fuera de la jurisdicción comunal serán revaluadas directamente por esta última.

La reglamentación establecerá la oportunidad en que debe efectuarse la fijación de los nuevos valores dentro y fuera de los ejidos urbanos.

Art. 34. — El valor establecido en cada revaluación sólo podrá ser modificado o rectificado en los casos que taxativamente se enumeran a continuación:

- a) Por reunión, división o accesión;
- b) Por ampliación, reedificación, reedición, demolición o cualquier clase de transformación de las construcciones;
- c) Por errores de hecho en la determinación de las medidas o en la aplicación de los valores básicos y tablas de valoración fijadas en virtud de la disposición del artículo 16, directamente de oficio o a solicitud de los contribuyentes.

Art. 35. — Las nuevas valuaciones impuestas de conformidad con el artículo anterior regirán desde el momento en que se hayan producido las modificaciones que den origen a la rectificación. Los contribuyentes no podrán excusarse del pago retroactivo de las diferencias de impuesto que así se establezcan, aun cuando hubieran abonado el impuesto con anterioridad a la operación de reajuste; en los casos de disminución del avalúo tendrán derecho a la devolución o acreditación de las sumas abonadas de más.

El derecho del fisco y de los contribuyentes para el cobro o la acreditación de las diferencias a que se refiere este artículo caducará a los dos años de producida la modificación, salvo que medie ocultación o simulación de parte de los propietarios, en cuyo caso se aplicará el término de diez años fijado por el artículo 57.

Art. 36. — Las modificaciones o transformaciones a que se refiere el inciso b) del artículo 34 deberán ser denunciadas por el contribuyente dentro de los dos meses de terminadas.

Reclamos

Art. 37. — Los contribuyentes podrán reclamar respecto a los valores fijados de conformidad con los artículos 32, 33 y 34 ante el Tribunal de Tasaciones, dentro de los treinta días de la notificación. Las presentaciones se harán por escrito en papel simple ante la Dirección Nacional Inmobiliaria, la que previa verificación, elevará los antecedentes al tribunal para su resolución. Las resoluciones del Tribunal de Tasaciones serán inapelables.

Art. 38. — Los reclamos por errores de hecho presentados fuera del plazo de treinta días a que se refiere el artículo anterior, serán resueltos por la Dirección Nacional, sin apelación. Estas presentaciones en ningún caso interrumpen el plazo para el pago de la contribución inmobiliaria.

Forma de pago. — Plazo

Art. 39. — La contribución inmobiliaria deberá pagarse en la forma y plazos que establezca la Dirección Nacional Inmobiliaria.

El contribuyente no podrá eximirse de pagar la contribución dentro del plazo establecido invocando el hecho de no haber recibido en tiempo las boletas de liquidación respectivas.

En los casos del artículo 34, la Dirección Nacional Inmobiliaria fijará el término dentro del que deberá pagarse la contribución o las diferencias.

Art. 40. — La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá otorgar plazos hasta un máximo de dos años para el pago en cuotas de la contribución y recargo adeudados, una vez dictada la sentencia en el juicio de apremio, previa cancelación de los gastos causídicos y siempre que la situación económica del contribuyente así lo justifique.

Disposiciones complementarias

Art. 41. — No podrá extenderse escritura de venta, división de condominio, permuta u otra que importe transmisión de dominio o que establezca gravamen sobre la propiedad, sin el certificado de la Dirección Nacional Inmobiliaria de estar paga la contribución hasta el 31 de diciembre del año de la operación inclusive, salvo que la propiedad esté sometida a nueva valuación, caso en el cual el certificado consignando esta circunstancia, sólo tendrá en cuenta la deuda de plazo vencido, quedando a cargo del comprador o adquirente el pago de la cuota perteneciente al año de la fecha del contrato.

Art. 42. — Las declaraciones de herederos o disposiciones testamentarias no se inscribirán en el Registro de la Propiedad con referencia a bienes inmuebles, sin que se haya abonado la contribución hasta el 31 de diciembre del año corriente en la fecha de inscripción. Se procederá en igual forma toda vez que se adquiera una propiedad raíz por subasta pública, juicio informativo, expropiación, etcétera. Los jueces no aprobarán cuentas particionarias ni ordenarán se expidan testimonios de hijuelas sin que previamente se justifique el pago de la contribución.

Art. 43. — La Dirección Nacional Inmobiliaria no expedirá el certificado de que hablan los artículos anteriores sin que previamente el escribano manifieste por escrito la ubicación, extensión, linderos y valor por el cual se transfiere la propiedad, o el de la obligación, cualquiera sea su naturaleza, que sobre ella quiera establecerse y el nombre y la nacionalidad de los contratantes; si es venta condicional, cuál es la condición.

La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá solicitar de los escribanos la ampliación de las informaciones toda vez que así lo requieran las exigencias del servicio.

Art. 44. — Los compradores de tierras fiscales están obligados a registrar sus títulos o certificados de compra en la Dirección Nacional Inmobiliaria dentro de los dos meses de la fecha de la adquisición.

Los que no lo hicieran, quedan sujetos al pago de la contribución y multa respectiva por los años que resulten vencidos en el momento de la inscripción.

CAPÍTULO V

Del registro de arrendamientos

Art. 45. — La Dirección Nacional Inmobiliaria llevará para la Capital Federal un registro de arrendamientos, en el que inscribirá todo contrato de locación de inmuebles, ya sea escrito o verbal, así como sus prórrogas, cesiones, transferencias, modificaciones y extinción.

Art. 46. — La Dirección Nacional Inmobiliaria queda facultada para ampliar la inscripción a que se refiere el artículo anterior en los casos de sublocación.

Art. 47. — La inscripción será obligatoria para todos los locadores, los que deberán manifestar por escrito, ante la Dirección Nacional Inmobiliaria y en la forma en que ésta lo disponga, la condiciones del contrato de locación suscritas por las partes o aceptadas por las mismas.

Los locadores quedan igualmente obligados a comunicar toda prórroga, cesión, transferencia y modificación de los contratos posteriores a su inscripción, así como su extinción voluntaria o por el vencimiento

del término. La extinción por decisión judicial será comunicada por los jueces que la hayan decretado.

Art. 48. — La inscripción a que se refiere el artículo anterior deberá cumplirse para los contratos escritos dentro de los diez días de su firma por las partes: en los casos de contratos verbales, la inscripción se practicará dentro de los quince días de haberse extendido el primer recibo de locación.

Art. 49. — La Dirección Nacional Inmobiliaria queda autorizada para exigir las formalidades complementarias para el mejor cumplimiento de las disposiciones del artículo anterior, las que podrán hacerse extensivas a los arrendatarios.

Art. 50. — Si se invocara en juicio la existencia de contratos de arrendamientos, escritos o verbales, sin comprobar previamente su inscripción en el Registro de Arrendamientos, la secretaría del juzgado deberá hacer saber la existencia de tales contratos a la Dirección Nacional Inmobiliaria.

CAPÍTULO VI

Penalidades. — Recargos

Art. 51. — Los contribuyentes que omitan el cumplimiento o que incurran en transgresión a las disposiciones que se establezcan para acogerse a los beneficios de los artículos 24 y 26, se harán pasibles de una multa de hasta cinco tantos de la contribución anual que hubieran dejado de ingresar, sin perjuicio de los recargos por mora en el pago. En estos casos la contribución y la multa no podrán ser fraccionadas y su exigibilidad se hará por el año entero.

Art. 52. — Los contribuyentes que no dieran cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 incurrirán en una multa equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la diferencia de la contribución que corresponda, sin perjuicio de los cargos por mora.

En los casos de rebaja de avalúo por demolición, perderán los derechos a las diferencias hasta el año inclusive en que se comunique la denuncia del hecho.

Art. 53. — La contribución inmobiliaria que no se abone en término incurrirá en un recargo de cinco por ciento (5 %) mensual durante los cuatro primeros meses posteriores al vencimiento, a partir de los cuales se acumulará sobre el total del débito por contribución y recargo, un interés del medio por ciento (½ %) mensual, hasta la extinción de las deudas, sin computarse fracciones menores de un mes.

Art. 54. — El escribano que infrinja lo prescrito en el artículo 41 será responsable de las contribuciones adeudadas con más la multa de dos (2) a diez (10) tantos según la gravedad de la falta. En ningún caso la multa será inferior a cien pesos moneda nacional (\$ 100 m/n.). Sin perjuicio de esta multa, cuando los antecedentes del escribano o la reincidencia en las infracciones así lo justifique, la Dirección Nacional Inmobiliaria dará cuenta a la autoridad competente, a los efectos de la suspensión o cesantía en el cargo. Si no existiera deuda, la omisión del certificado será penada con multa de cien pesos moneda nacional (\$ 100 m/n.).

Si la escritura no se formaliza después de haberse extendido el certificado o no se ajusta a las condiciones manifestadas, el escribano deberá dar aviso

dentro de los treinta (30) días a la Dirección Nacional Inmobiliaria so pena de incurrir en una multa de cien pesos moneda nacional (\$ 100 m/n.).

Art. 55. — La falta de inscripción en los registros de arrendamientos de los contratos de locación escritos o verbales, así como de sus prórrogas, cesiones, transferencias, modificaciones y extinción, será penada con una multa, a cargo del locador, igual al importe de un mes de arrendamiento. Cuando este último no pudiera determinarse, la Dirección Nacional Inmobiliaria procederá a su estimación de oficio.

Art. 56. — Los que incurran en infracciones no previstas expresamente en los artículos anteriores y los que dejen de cumplir las disposiciones reglamentarias y resoluciones que dicte la Dirección Nacional Inmobiliaria serán reprimidos con multa de veinticinco pesos moneda nacional (\$ 25 m/n.) a cinco mil pesos moneda nacional (\$ 5.000 m/n.).

CAPÍTULO VII

Prescripción. — Gestión judicial

Art. 57. — La contribución inmobiliaria, los recargos e intereses por mora, prescriben a los diez (10) años a contar del día del vencimiento para su pago anual. Las demás multas prescribirán a los cinco (5) años contando desde la fecha en que se haya incurrido en la transgresión.

Art. 58. — En la Capital Federal y zonas situadas fuera de la jurisdicción comunal de los territorios nacionales el cobro por apremio de la contribución, recargos y multas, se hará con arreglo a los procedimientos establecidos en el título XXV de la ley 50 de 14 de septiembre de 1863, por cobradores fiscales designados por la Dirección Nacional Inmobiliaria, los que no estarán obligados a acompañarse de letrados en sus gestiones judiciales.

En este juicio no serán admitidas otras excepciones que las de: falta de personería; falsedad o inhabilidad extrínseca de título, pago, prescripción.

Art. 59. — La personería de los cobradores fiscales será acreditada con el testimonio del poder otorgado por la Dirección Nacional Inmobiliaria.

Art. 60. — Bastará como título para el apremio la constancia de la falta de pago, expedida por la Dirección Nacional Inmobiliaria.

Art. 61. — En el juicio de apremio servirá como base para la venta, la tasación oficial, la que en caso de no haber postura deberá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50 %). A tal efecto el juez determinará la nueva base, previo informe de la Dirección Nacional Inmobiliaria.

Art. 62. — Para el cobro por apremio de la contribución, recargos y multas por inmuebles cuyos propietarios sean desconocidos, esto es, cuando su nombre no figure en los registros de la Dirección Nacional Inmobiliaria, o siendo conocido se ignore su domicilio, se citarán por edictos publicados en los boletines Judicial u Oficial por dos veces durante cinco (5) días y con intervalo de un mes, para que los interesados concurran a estar en juicio, bajo apercibimiento de substanciarse el mismo con el defensor de ausentes. Con la certificación del secretario del juzgado de no haber comparecido el propietario, se hará efectivo el apercibimiento siguiéndose el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

Art. 63. — El juicio de apremio por cobro de la contribución inmobiliaria recargos y multas adeudados en los territorios nacionales se radicará ante el juzgado competente de acuerdo a la ubicación del inmueble, salvo que el propietario se domicilie en la Capital Federal, en cuyo caso el juicio podrá ser radicado en esta jurisdicción.

Art. 64. — En los casos de apremio a que esta ley se refiere no será de aplicación la fianza prescrita en el artículo 321 de la ley 50, ni tampoco se detendrán los procedimientos por falta de reposición de sellos.

Art. 65. — El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo, y las notificaciones podrán estar a cargo de empleados de la dirección, cuando ésta lo requiera.

Art. 66. — En los juicios promovidos por repetición de la contribución, recargos y multas, la representación del fisco ante todas las jurisdicciones o instancias será ejercida por los funcionarios que la Dirección Nacional Inmobiliaria designe.

Los funcionarios que la dirección haya designado, percibirán honorarios únicamente cuando éstos no estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal.

Art. 67. — Sin perjuicio del sueldo básico que se fije en el presupuesto, las gestiones de los cobradores fiscales serán remuneradas con el importe del recargo del veinte por ciento (20 %) a que se refiere el artículo 53, el que será prorrateado de acuerdo a la reglamentación que dicte la Dirección Nacional Inmobiliaria. En los demás casos percibirán el cincuenta por ciento (50 %) de las multas que ingresen.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones generales

Art. 68. — La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá hacerse cargo del cobro de cualquier otro impuesto, contribución o tasa nacional o municipal sobre la propiedad inmobiliaria de la Capital Federal y sobre la de los territorios nacionales ubicados fuera de los ejidos comunales, previo acuerdo con la repartición interesada, con derecho a cobrar en concepto de gastos de percepción hasta el dos por ciento (2 %) de las sumas recaudadas.

Art. 69. — Las distintas reparticiones del Estado deberán suministrar directamente a la Dirección Nacional Inmobiliaria todos los datos que la misma solicite en cuanto se relacionen con las funciones que le competen. A su vez la Dirección Nacional Inmobiliaria suministrará los antecedentes que le sean requeridos por las reparticiones, con preferencia a los inmuebles registrados.

Art. 70. — Autorízase a la Dirección Nacional Inmobiliaria para que directamente acredite o proceda a la devolución de pagos hechos por error, en exceso o duplicados. A tal efecto el Banco Central de la República retendrá de la recaudación las cantidades necesarias para mantener un fondo fijo de diez mil pesos moneda nacional (\$ 10.000 m/n.), a disposición de la Dirección Nacional Inmobiliaria para atender los pedidos de devolución.

Art. 71. — La Dirección Nacional Inmobiliaria podrá crear un servicio de informaciones, tasaciones y peritajes para ser utilizado por los particulares, así como percibir derechos de catastro.

Esa repartición, con aprobación del Poder Ejecutivo, fijará el arancel que corresponda cobrar por estos servicios y los que se relacionen con el artículo 77 y su producido ingresará a rentas generales.

Art. 72. — Los gastos que demande la organización y funcionamiento de la Dirección Nacional Inmobiliaria, con exclusión de los que correspondan al Registro de la Propiedad, no podrán exceder del dos y medio por ciento (2 ½ %) de la recaudación anual. Contribuirán a estos gastos en la misma proporción fijada en el artículo 30, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Obras Sanitarias de la Nación, debiendo deducirse de su participación los importes respectivos.

Art. 73. — Los empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que se incorporen definitivamente a la Dirección Nacional Inmobiliaria seguirán afiliados a la Caja Municipal de Previsión Social, a cuyo efecto se continuará ingresando a la misma los aportes correspondientes.

CAPÍTULO IX

Del Tribunal de Tasaciones

Art. 74. — El Tribunal de Tasaciones estará compuesto de once (11) miembros, a saber:

- Tres miembros en representación de las entidades vinculadas a los problemas técnicos de la propiedad inmobiliaria;
- Dos en representación de los intereses de los contribuyentes;
- Un funcionario superior de la Dirección General de Ingenieros del Ministerio de Guerra;
- Un funcionario superior del Banco Hipotecario Nacional;
- Un funcionario superior de las Obras Sanitarias de la Nación;
- Un funcionario superior de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- Un funcionario superior de la Dirección Nacional Inmobiliaria;
- El subdirector de la Dirección Nacional Inmobiliaria.

Los miembros del Tribunal de Tasaciones serán designados por el Poder Ejecutivo directamente en los casos a) y b) y a propuesta de las respectivas reparticiones en los casos c) a g).

Art. 75. — Serán funciones del Tribunal de Tasaciones:

- Asesorar al gobierno nacional y a sus dependencias, sean o no autónomas, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y municipalidades de los territorios nacionales en todas las cuestiones vinculadas a los valores inmobiliarios o a su fijación. Esta consulta será obligatoria cuando la tasación interese al patrimonio del Estado;
- Establecer los métodos y las normas de tasación que deban ser puestos en práctica por la Dirección Nacional Inmobiliaria;
- Fijar los valores generales e índices básicos de tasación a los efectos de la aplicación del impuesto;

- d) Establecer las reglas y los métodos de organización en materia de estadística inmobiliaria;
- e) Resolver en definitiva los reclamos presentados por los contribuyentes en los casos de su competencia;
- f) Asesorar a los gobiernos provinciales a su requerimiento sobre los sistemas fiscales de tasación;
- g) Practicar las tasaciones especiales que le sean requeridas por los organismos oficiales, tanto nacionales o provinciales o municipales, así como por los particulares;
- h) Elegir sus autoridades, dictar su reglamento interno y disponer la distribución de funciones.

Art. 80. — El director general y el subdirector general, tendrán a su cargo directo la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, de acuerdo con las normas y resoluciones dictadas por el consejo.

El subdirector general reemplazará al director general en caso de ausencia o impedimento, sin perjuicio de sus funciones propias.

Art. 81. — La dirección general, en los casos de disconformidad con las resoluciones del Consejo de Administración, podrá requerir el pronunciamiento del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO XI

Disposiciones transitorias

Art. 82. — La Dirección Nacional Inmobiliaria pondrá al Poder Ejecutivo las fechas a partir de las cuales se iniciará la aplicación total o parcial de las disposiciones establecidas en el presente decreto.

Art. 83. — El Poder Ejecutivo, previo informe de la Dirección Nacional Inmobiliaria fijará la fecha en que deba practicarse la primera revaluación general de acuerdo con las disposiciones del presente decreto y sobre cuya base se aplicarán las tasas fijadas en el artículo 20.

Art. 84. — Transitoriamente, hasta que se hayan practicado las operaciones de revalúo y por lo tanto se apliquen de una manera integral las disposiciones del presente decreto, los inmuebles seguirán abonando en concepto de contribución inmobiliaria la suma de las cuotas por impuestos y tasas actualmente vigentes, las que serán percibidas por la Dirección Nacional Inmobiliaria. En los casos de nuevas tasaciones a que se refiere el artículo 34, la determinación de la cuota por contribución inmobiliaria se ajustará a las normas de valuación, a las tasas y excepciones vigentes, equiparándolas así al principio establecido en el párrafo anterior.

Art. 85. — A fin de facilitar las apropiaciones respectivas, la recaudación obtenida de acuerdo con el artículo 84, se distribuirá provisionalmente conforme a lo establecido por los artículos 30 y 31, debiendo practicarse al final del ejercicio los reajustes definitivos.

Art. 86. — La Dirección Nacional Inmobiliaria se formará sobre la base de la actual Administración General de Contribución Territorial.

Hasta la organización completa de la Dirección Nacional Inmobiliaria, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las Obras Sanitarias de la Nación pondrán a disposición de aquélla el personal, antecedentes y elementos de trabajo vinculados a la aplicación, recaudación y fiscalización de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y derechos de agua, clacas y desagües.

Los sueldos del personal incorporado transitoriamente a la Dirección Nacional Inmobiliaria continuarán abonándose por las respectivas reparticiones hasta que ese personal les sea reintegrado o sea incorporado definitivamente a la Dirección Nacional Inmobiliaria.

CAPÍTULO X

Autoridades

Art. 78. — La Dirección Nacional Inmobiliaria estará dirigida por un Consejo de Administración constituido por: el director general de la repartición como presidente, el administrador de Obras Sanitarias de la Nación, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente del Tribunal de Tasaciones y por el subdirector general. En caso de ausencia o impedimento, la presidencia será ejercida por el subdirector general; los miembros del consejo podrán ser reemplazados por sus respectivos substitutes legales de acuerdo al régimen de cada entidad representada. Los miembros del consejo no percibirán retribución alguna por el desempeño de sus funciones en ese carácter.

Art. 79. — Serán facultades del Consejo de Administración:

- a) Dictar su reglamento interno;
- b) Fijar las funciones o tareas de los empleados;
- c) Dictar las normas para la organización y funcionamiento de la dirección, previa aprobación del Poder Ejecutivo;
- d) Proponer las disposiciones reglamentarias y de orden general que correspondan ser dictadas por el Poder Ejecutivo;
- e) Establecer los plazos y procedimientos de percepción de la contribución;
- f) Impartir instrucciones o interpretar las disposiciones legales en la materia, con excepción de aquellas que competen exclusivamente al Tribunal de Tasaciones;
- g) Contratar directamente trabajos y suministros hasta el monto de cinco mil pesos moneda nacional (\$ 5.000 m/n.), de acuerdo a las normas de la ley de contabilidad.

en cuyo caso las vacantes producidas se suprimirán de los presupuestos de las respectivas reparticiones.

Art. 87.—A los efectos de la creación del nuevo sistema catastral centralizado, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las Obras Sanitarias de la Nación enregarán los catastros en su poder, así como todos los antecedentes que sean necesarios para su mejor organización.

Art. 88.—La Dirección Nacional Inmobiliaria convendrá con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las Obras Sanitarias de la Nación la forma en que se gestionará el cobro y la acción judicial de la deuda atrasada al 31 de diciembre de 1944.

Art. 89.—Incorpóranse a la Dirección Nacional Inmobiliaria los presupuestos actuales de la Administración General de Contribución Territorial y del Registro de la Propiedad.

A los fines de lo dispuesto precedentemente, el Ministerio de Hacienda propondrá las modificaciones que sean pertinentes, en el presupuesto general.

Art. 90.—Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Art. 91.—Publíquese, comuníquese y oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso Nacional.

FARRELL.

César Ameghino. — Orlando Peluffo. — Juan Perón. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Alberto Teisaire. — Juan Pistarini.

DECRETO 3.377/45

Alcance de la exención de impuestos a las cubiertas y llantas de goma macizas

Buenos Aires, 16 de febrero de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º.—Aclárase que la exención impositiva establecida por decreto 10.274, dictado en acuerdo general de ministros en fecha 22 de abril de 1944 para las cubiertas y llantas de goma macizas de fabricación nacional, comprende únicamente a las que retornen al país, luego de haber salido del mismo mediante autorización oficial o antes de regir la prohibición de exportarlas.

Art. 2º.—Publíquese, comuníquese y pase a la Administración General de Impuestos Internos, a sus efectos.

FARRELL.

César Ameghino. — Amaro Avalos. — Juan Perón. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Alberto Teisaire. — Juan Pistarini.

DECRETO 30.141/44

Término de prescripción para la acción de repetición de los impuestos a los réditos y a las ventas

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º.—Substitúyese el texto del artículo 24 de la ley 11.683 (texto ordenado), por el siguiente:

Artículo 24.—Las demandas por repetición de impuestos, cuando el pago haya sido efectuado por error de cálculo o de concepto, en las propias declaraciones del contribuyente o agente de retención o cuando sin deducir oposición antes del vencimiento del impuesto, éste fuera abonado voluntaria o compulsivamente, se ajustarán al procedimiento previsto en el artículo 41. La acción de repetición, en todos los casos se prescribe a los dos años del pago.

Art. 2º.—Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º.—Publíquese, comuníquese, etc.

FARRELL.

Rómulo Etcheverry Boneo. — Alberto Teisaire. — César Ameghino. — Orlando Peluffo. — Juan Perón. — Juan Pistarini.

DECRETO 4.752/45

Representación directa de la Dirección General del Impuesto a los Réditos ante la justicia

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º.—En los juicios por cobro de los impuestos, derechos, multas, intereses u otras cargas, cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, así como en las demandas o recursos judiciales que contra el fisco autoricen las leyes respectivas, la representación de éste, ante todas las jurisdicciones e instancias, será ejercida por los procuradores o agentes fiscales o por los funcionarios de la Dirección General del Impuesto a los Réditos que ella designe, pudiendo estos últimos ser patrocinados por los letrados de la repartición.

Mientras la representación no sea ejercida por los funcionarios designados por la dirección, el fisco será representado por los procuradores o agentes fiscales, quienes recibirán instrucciones directas de esa dependencia, debiéndole rendir cuenta de su gestión.

La intervención de los funcionarios especiales excluirá la representación de los procuradores o agentes

fiscales en cualquier estado del juicio y su personería será acreditada con el testimonio de su designación expedido por la dirección.

El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de empleados de la dirección cuando ésta lo requiera.

Art. 2º — Los procuradores o agentes fiscales o los funcionarios de la dirección que representen o patrocinen al fisco tendrán derecho a percibir honorarios salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal.

Cuando la representación se encuentre a cargo de los funcionarios designados por la dirección, ésta podrá fijar la forma de distribución de los honorarios.

Art. 3º — La Dirección General del Impuesto a los Réditos anticipará a sus representantes los fondos necesarios para los gastos que demande la tramitación de los juicios (publicación de edictos, diligenciamiento de notificaciones, mandamientos y otros análogos), con cargo de rendir cuenta documentada de su intervención y de reintegrar las cantidades invertidas cuando perciban su importe de la parte vencida a la terminación de las causas. A este efecto se dispondrá la apertura de la cuenta correspondiente.

Art. 4º — Modifícase el artículo 43 de la ley 11.683 (texto ordenado) (artículo 1º, ley 12.151), del siguiente modo:

Artículo 43. — Admitido el curso de la demanda, se correrá el traslado de la misma al procurador fiscal federal o por cédula al representante designado por la dirección, en su caso, para que la conteste dentro del término de treinta días y oponga todas las defensas y excepciones que tuviera, las que serán resueltas juntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia definitiva.

Art. 5º — Derógase el artículo 55 de la ley 11.683, (texto ordenado) y toda otra disposición que se oponga al presente decreto.

Art. 6º — Publíquese, comuníquese, dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Juan Perón. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Alberto Teissaire. — Juan Pistarini. — Amaro Avalos.

DECRETO 5.105/45

Modificaciones al impuesto a los réditos

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Agrégase al artículo 4º del decreto 18.229 del año 1943, lo siguiente:

Las disposiciones de este artículo se aplicarán exclusivamente a las explotaciones agrícolas y/o ganaderas de carácter extensivo que la dirección determine.

Art. 2º — Substitúyese el artículo 5º del decreto 5.666, del año 1944, por el siguiente:

Artículo 5º — Las personas de existencia visible domiciliadas en el país, que exploten en forma directa los campos que tienen en propiedad y/o arrendamiento, salvo lo dispuesto en el artículo 4º del decreto 18.229, último párrafo, podrán liquidar el impuesto conforme al sistema establecido en ese artículo o mediante la declaración de la renta real de acuerdo a las normas del balance fiscal. Una vez hecha la opción, ésta no podrá variarse por el año ya declarado.

Cuando varias personas sean propietarias o arrendatarias de campos, a los fines de este artículo se tomará la parte que proporcionalmente corresponda a cada condómino o participe en la valuación fiscal o arrendamiento.

Para establecer los límites a que se refiere el artículo 4º del decreto 18.229, deberá computarse la suma de todas las valuaciones fiscales de los campos explotados de propiedad del contribuyente o el importe de todos los arrendamientos pagados. Cuando una persona de existencia visible sea simultáneamente propietaria y arrendataria de campos, el cómputo se hará uniformando el índice a aplicar, ya sea dividiendo por diez el importe de la valuación fiscal o multiplicando por diez el valor del arrendamiento.

Las disposiciones anteriores serán aplicables a las sucesiones indivisas —sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 46 de la reglamentación general de fecha 2 de enero de 1939— pero no en lo que respecta al aumento de los límites por la deducción de cargas de familia.

Art. 3º — Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes, son aplicables a partir del 1º de enero de 1944.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos.

FARRELL.

César Ameghino. — Alberto Teissaire. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Juan Pistarini. — Amaro Avalos. — Juan Perón.

DECRETO 9.907/45

Modificación del impuesto interno a los artículos suntuarios, decorativos o de adorno

Buenos Aires, 4 de mayo de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Los objetos suntuarios pagarán un impuesto interno del 5 % sobre el precio total de venta al público, cualquiera sea su destino.

Se entiende por precio total de venta al público el que por todo concepto relacionado directamente con la operación se perciba del comprador.

Art. 2º — A los efectos del presente decreto ley se considerarán objetos suntuarios las perlas naturales y cultivadas; las piedras preciosas y semipreciosas naturales, reconstituidas o artificiales; lapidadas y los comprendidos en los grupos que se establecen a continuación, siempre que en su composición intervengan en cualquier forma y proporción los materiales citados en este párrafo o los que se indican expresamente para cada grupo:

- I. Cuando contengan plata, oro, platino o sus aleaciones:
 - a) Las alhajas;
 - b) Las medallas;
 - c) Las monedas con aditamentos extraños a su cuño;
 - d) Los monogramas o aplicaciones.
- II. Cuando contengan plata, oro, platino o sus aleaciones o carey, marfil, ámbar, coral, espuma de mar o cristal de roca:
 - a) Los útiles y utensilios para uso personal, entendiéndose por tales todas las cosas susceptibles de ser llevadas sobre la persona, en su vestimenta o como complemento de ésta para servirse de ellas.
- III. Cuando contengan plata, oro, platino, sus aleaciones o en baños, o piedras preciosas o semipreciosas naturales o reconstituidas no lapidadas, o carey, marfil, ámbar, coral, espuma de mar, cristal de roca, ónix, alabastro, porcelana o cristal:
 - a) Los objetos típicos para premios o conmemorativos;
 - b) Los útiles para el servicio del hogar, la oficina o el comercio;
 - c) Los instrumentos, pequeñas herramientas y útiles para la higiene o belleza personal o para la guarda de productos destinados a esos fines;
 - d) Los útiles y accesorios para viaje;
 - e) Las piezas y conjuntos para juegos denominados científicos o de pasatiempos y sus estuches.
- IV. Cuando contengan plata, oro, platino, sus aleaciones o en baños, o piedras preciosas o semipreciosas naturales o reconstituidas no lapidadas, o carey, marfil, ámbar, coral, espuma de mar, cristal de roca, ónix, alabastros, porcelanas, cristal, níquel, cobre, bronce, latón o hierro forjado:
 - a) Los artefactos para cualquier clase de iluminación interior.

Para la calificación no se tendrán en cuenta los materiales que intervengan en la composición de los portalámparas, grifos, llaves, fichas y conductores:
- V. Cuando contengan plata, oro, platino, sus aleaciones o en baños, o piedras preciosas o semipreciosas naturales o reconstituidas no lapidadas, o carey, marfil, ámbar, coral, espuma de mar, cristal de roca, ónix, alabastro, porcelana, cristal,

níquel, cobre, bronce, latón, hierro forjado, vidrio tallado, grabado o decorado, cerámica decorada o en relieve o talla a mano sobre mármol, piedras o maderas duras:

- a) Los objetos de adorno para el hogar, la oficina o el local del negocio, entendiéndose por tales aquellos cuyo fin es el de servir o contribuir al embellecimiento sin otra utilidad específica.

VI. Los artículos varios que se indican a continuación:

- a) La platería de campaña y los artículos de talabartería y lomillería que contengan plata, oro o platino en cualquier forma o proporción;
- b) Las alfombras, tripes y tapices de cualquier tipo y material y los cueros preparados como alfombras, excepto los lanares y caprinos;
- c) Los relojes para uso personal, de velador, de pie, sobremesa o pared, o para vehículos, de cualquier composición o material y los artefactos que los complementen;
- d) Los artículos típicos para juego de azar, los billares cuya superficie entre bandas exceda de un metro cuadrado y los tacos, bolas y palitos para los mismos;
- e) Los artículos de valjería, baulería y marroquinería en cuya composición intervenga cuero, fibra, paño o tela, excepto las carteras típicas para colegiales, mayores, carteros y mensajeros, los baúles de madera con revestimiento de loneta y hojalata y las bolsas de tela sin cerradura a llave;
- f) Las pieles curtidas aptas para el uso de peletería y las prendas para uso personal, del hogar o de viaje confeccionadas con las mismas.

Art. 3º — El impuesto a los objetos suntuarios se adeuda desde el momento de su venta al público, donación, afectación al uso personal del contribuyente, o tercero, o desaparición al control.....

Art. 4º — Los objetos suntuarios adquiridos o importados por los fabricantes o comerciantes inscritos en virtud de este decreto ley, quedan comprendidos en las disposiciones del artículo anterior.

Art. 5º — Los que fabriquen, importen o comercien con las mercaderías comprendidas en este decreto o curtan pieles aptas para uso de peletería, están obligados a inscribirse en la Administración General de Impuestos Internos.

Art. 6º — Las instituciones públicas y los martilleros que habitualmente rematan mercaderías comprendidas en el presente decreto ley, deberán inscribirse en la Administración General de Impuestos Internos y pagarán el impuesto establecido en el artículo 1º.

A los efectos de su liquidación no se computará la comisión que el comprador pague al rematador.

Art. 7º — Los inscritos en las condiciones de los artículos 5º y 6º están obligados a llevar al día los libros oficiales que establezca la Administración General de Impuestos Internos y a conservar por un período no menor de diez años toda la documenta-

ción probatoria de sus compras y de sus ventas, haciendo figurar en ella el origen de todas sus adquisiciones.

También están obligados a exhibir a los agentes de la administración, cada vez que les sean requeridos, los libros comerciales y oficiales que deban llevar y la documentación y correspondencia relacionada con el movimiento del negocio.

Art. 8º.—Los inscritos en virtud de este decreto ley pagarán el impuesto dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente al de las ventas, por declaración jurada mensual, de acuerdo con las constancias de sus libros.

Art. 9º.—Los martilleros que accidentalmente realicen operaciones con objetos suntuarios, están obligados a comunicar a la Administración General de Impuestos Internos las ventas a efectuar, con no menos de tres días hábiles de anticipación, acompañando nómina de dichos objetos, con indicación de nombre y domicilio de los propietarios o remitentes.

El impuesto interno se calculará en la forma que indica el último párrafo del artículo 6º, debiendo ser pagado dentro de los diez días hábiles de efectuarse la venta.

Art. 10.—Las personas no inscritas en virtud de las disposiciones de este decreto ley, podrán importar objetos suntuarios para uso personal o el de sus establecimientos. En este caso el impuesto del artículo 1º se aplicará sobre el valor en plaza de la mercadería, y será satisfecho antes de su retiro de aduana.

Se entiende por valor en plaza la suma del precio de costo todo incluido, acreditado por factura comercial y consular debidamente legalizadas; fletes y seguros, derechos aduaneros y portuarios y gastos y comisiones facturados por el despachante, más un coeficiente sobre el total resultante de los conceptos anteriores, que fijará periódicamente el Ministerio de Hacienda.

Cuando no exista o no pueda presentarse la factura consular, el valor en plaza se determinará por estimación practicada por los vistos de aduana y aceptada por la Administración General de Impuestos Internos o por peritos en caso de disconformidad de éste.

Dentro de los seis meses de realizada la importación, el importador podrá solicitar la rectificación de la liquidación y la devolución o acreditación de la diferencia que resulte, presentando las facturas consular y comercial legalizadas.

Art. 11.—Los objetos suntuarios que se confeccionen por encargo con materiales total o parcialmente suministrados por clientes y las composuras que importen transformación del objeto, pagarán el impuesto sobre la cantidad total percibida por el comerciante o fabricante por todo concepto.

Quedan exceptuadas las composuras, arreglos y transformaciones de artículos de peletería que se efectúen exclusivamente con prendas o pieles, usadas suministradas por el cliente.

Art. 12.—Está gravada la transferencia a cualquier título de instrumentos representativos de objetos suntuarios (pólizas prendarias, certificados de depósitos, etcétera).

Cuando se trate de pólizas prendarias se pagará sobre la suma del préstamo y el precio de la póliza.

Art. 13.—No está sujeta al gravamen establecido por este decreto ley, la transferencia privada no habitual y sin publicidad de objetos suntuarios afectados al uso personal o de sus instrumentos represen-

tativos, hecha por personas particulares, ni la transferencia a título hereditario.

Art. 14.—Están exentos del impuesto establecido por el presente decreto ley:

- a) Los objetos de uso personal de los viajeros que las reglamentaciones aduaneras eximan del pago de derechos de importación;
- b) Los objetos suntuarios que no hayan pagado el impuesto y se exporten cumpliendo las disposiciones reglamentarias pertinentes;
- c) Las esculturas originales vendidas por sus autores;
- d) Los objetos suntuarios destinados a museos y lugares públicos, en las condiciones que determine la reglamentación;
- e) Las cajas y estuches típicos para instrumentos científicos y medicinales;
- f) Los objetos ritualmente indispensables destinados al culto católico apostólico y romano;
- g) Los naipes gravados por el artículo 176 del texto ordenado y los encendedores de metal, quedan sujetos únicamente al impuesto del artículo 97 del texto ordenado.

Art. 15.—Queda facultada la Administración General de Impuestos Internos para exigir la matriculación en el Registro Público de Comercio, a los inscritos en cumplimiento del presente decreto ley, cuando ello resulte conveniente para mejor control.

Art. 16.—Cuando se omitiera la presentación de declaraciones juradas o la contabilización de las operaciones en la forma que establezca la reglamentación respectiva, o la exhibición de libros o papeles que fueran necesarios para la fiscalización, o se comprobare el tráfico clandestino de objetos gravados, la Administración General de Impuestos Internos, estimará de oficio las ventas imponible, quedando facultada para requerir a los bancos, instituciones oficiales y particulares los informes que sean necesarios.

Art. 17.—Las estimaciones de oficio podrán ser recurridas dentro del término de diez días (10) hábiles de notificadas para ante el Ministerio de Hacienda; no pudiendo en ningún caso fundarse el recurso ante la administración.

Art. 18.—Para la aplicación de este impuesto regirán todas las disposiciones generales referentes a los impuestos internos nacionales.

Sólo se mandará practicar inventario en los locales inscriptos cuando exista semiplena prueba de haberse cometido infracciones, quedando reservada al administrador general la apreciación de las circunstancias que hagan procedente esta medida.

Art. 19.—Las disposiciones del presente decreto ley entrarán en vigor a partir del 1º de junio de 1945. En la misma fecha quedarán derogadas las del decreto 6.176 de 10 de marzo de 1944.

Art. 20.—Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración General de Impuestos Internos, a sus efectos.

FARRELL.

César Ameghino. — Juan Perón. — Amaro Avalos. — Antonio J. Benítez. — Alberto Teisairé. — Juan Pistarini.

DECRETO 10.179/45

Exención de sellado a las actuaciones ante el Consejo Agrario Nacional

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase exentas del pago de sellado a las actuaciones que se promueven ante el Consejo Agrario Nacional con motivo de la compra o arrendamiento de tierras ofrecidas bajo el régimen de la ley 12.636 y demás actos emergentes de la adjudicación de dichas tierras.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y dese oportunamente cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

FARRELL.

César Ameghino. — Alberto Teisairé. — Amaro Avalos. — Juan Perón. — Juan Pistarini. — Antonio J. Benítez.

DECRETO 15.151/45

Condonación de multas por infracción al impuesto de sellos

Buenos Aires, 12 de julio de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Fijase un plazo de sesenta días para que los responsables del impuesto establecido por el artículo 20 de la ley 11.290 (texto ordenado), puedan abonar el gravamen en infracción, con un recargo de sólo el diez por ciento del monto del impuesto omitido en concepto de multa.

A tal efecto los infractores deberán presentar a la Dirección General del Impuesto a los Réditos una liquidación del impuesto correspondiente a todas las operaciones en infracción hasta el 15 de julio de 1944, y acreditar el pago del tributo omitido más el diez por ciento en concepto de multa.

Esta liquidación quedará sujeta al ajuste definitivo que practicará la dirección y sobre la diferencia que surja del ajuste se cobrará también sólo el diez por ciento de recargo en concepto de multa, salvo cuando ella excediere del veinte por ciento del total del impuesto denunciado, en cuyo caso se aplicará la multa que prescribe el artículo 116 del decreto 9.432/944, sobre el monto de dicha diferencia.

Art. 2º — Las infracciones a la ley 11.290 en que hubieran incurrido los escribanos de registro, por actos pasados en sus protocolos, serán reprimidas con una multa de un tanto del impuesto omitido o ingresado fuera de término, siempre que ellas tengan por origen indudable una errónea y excusable interpretación de la ley o consistan en la demora del pago del impuesto por un plazo no mayor de cinco días hábiles contados desde el vencimiento de los respectivos tér-

minos legales o reglamentarios y que los infractores se presenten dentro del plazo establecido en el artículo 1º.

Art. 3º — Todos los demás casos de infracciones a la ley 11.290, serán reprimidas de acuerdo con la normas del decreto 9.432/944, siempre que las penalidades establecidas por este último sean más benignas que las de aquella ley en el caso particular de que se trate.

Art. 4º — Las precedentes disposiciones regirán a partir de la fecha de publicación del presente decreto y serán aplicables a las infracciones anteriormente indicadas, cuyas multas no hubieren sido ingresadas, hayan o no sido resueltas administrativamente o se encuentren en curso de apelación o ejecución. En este último supuesto, el contribuyente deberá hacerse cargo de los gastos causídicos para acogerse a los beneficios de este decreto.

Art. 5º — Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos.

FARRELL.

Alberto Teisairé. — Celerino Alonso Irigoyen. — César Ameghino. — Juan Perón. — Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — Antonio J. Benítez.

DECRETO 24.671/45

Modificaciones y aclaraciones a la ley 12.143

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Acláranse los artículos 1º, 5º y 8º de la ley 12.143 texto ordenado, en el sentido de que a los efectos de dicha ley debe entenderse por venta todo acto que importe la transferencia a título oneroso de una mercadería, fruto o producto del dominio de una persona de existencia visible o ideal (vendedor, expropiador, locador de obra que suministra la materia prima principal, permutante, etcétera) al dominio de otra (comprador, expropiante, locatario de obra, etcétera) o que tenga por fin último la transmisión de dicho dominio, independientemente de la designación que las partes den al contrato de origen o a la negociación en que se incluya o involucre y de la forma del pago del precio, sea éste en dinero o en especie.

Cuando en las operaciones de exportación sólo medie la remisión de mercaderías de casa matriz a sucursal o agente consignatario o viceversa, por venta se entenderá la mera salida de la mercadería del país.

Art. 2º — Substitúyese el artículo 3º de la ley 12.143, por el siguiente:

Artículo 3º — Se entiende por precio neto de venta el que resulte una vez deducidas las bonificaciones y descuentos hechos al comprador por épocas de pago y otro concepto similar, de acuerdo con las costumbres de plaza y siempre que dichas bonificaciones y descuentos se efectúen sobre ventas sujetas al impuesto, se contabilicen

y facturen. Puede deducirse también del total de la venta el importe correspondiente a mercaderías y envases devueltos por el comprador; pero para la determinación del precio neto de venta, en ningún caso se podrá descontar valor alguno por flete o acarreo cuando la venta haya sido convenida sobre la base de la entrega de la mercadería en el lugar de destino. Cuando el transporte haya sido efectuado con medios o personal del vendedor, se entenderá que la venta ha sido realizada en las condiciones precitadas.

Art. 3º — Agrégase al artículo 4º de la ley 12.143, la siguiente disposición:

Quando el responsable del impuesto efectúe sus ventas a o por intermedio de personas o sociedades que económicamente puedan considerarse vinculadas con aquél, en razón del origen de sus capitales o de la dirección efectiva del negocio o del reparto de utilidades, etcétera, el impuesto será liquidado sobre el mayor precio de venta obtenido, pudiendo la dirección exigir también su pago de esas otras personas o sociedades y sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente ley.

Tal vinculación económica se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando la totalidad de las operaciones del responsable o de determinada categoría de ellas sea absorbida por las otras empresas o cuando la casi totalidad de las compras de estas últimas, o de determinada categoría de ellas es efectuada a un mismo responsable.

En los casos de exportación, cuando no se fije precio o el declarado sea inferior al precio de venta mayorista en el lugar de destino, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el exportador del país y el importador del exterior, y el impuesto se aplicará sobre dicho precio mayorista con deducción de los gastos incurridos, con posterioridad al embarque, hasta el lugar de destino.

Art. 4º — Substitúyese el inciso a) del artículo 5º de la ley 12.143, por el siguiente:

a) Los productores e industriales nacionales por el impuesto correspondiente a las ventas de frutos, productos o mercaderías de su propia producción, elaboración, fabricación o manufactura, en todos los casos en que, aportando la materia prima principal, ejecuten trabajos por cuenta propia o de terceros, así como también en los casos en que éstos los ejecuten por cuenta de aquéllos.

Se entiende por mercaderías de su propia producción, elaboración, fabricación o manufactura, todas aquellas que son vendidas en un estado distinto al de su adquisición.

En el caso de construcción de edificios o inmuebles en general y de ejecución de trabajos sobre inmuebles o muebles de terceros, el que efectúe la construcción o trabajo es responsable sobre el valor de venta real o presunto, de las mercaderías que incorpore a la obra, siempre que sean de su importación u obtenidas mediante un proceso de elaboración, fabricación o manufactura propia, anterior a la construcción o reparación misma.

Art. 5º — Aclárase el artículo 7º, inciso c), de la ley 12.143 (texto ordenado), en el sentido de que las deducciones a que él se refiere son aquéllas de mercaderías que se adquieren para someterlas a procesos de industrialización, siempre que sean destinadas a formar una parte constitutiva o integrante del producto a venderse.

Art. 6º — Modifícase el artículo 9º, inciso a), de la ley 12.143, en la siguiente forma:

Artículo 9º — Quedan eximidas del impuesto:

a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes mercaderías de producción nacional: ganados, aves y huevos; carne fresca; frutos del país; leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón vegetal; tabacos, cigarros y cigarrillos; cereales y oleaginosos; hortalizas, legumbres y frutas frescas; semillas y bulbos; harina de trigo y de maíz; fideos, afrecho y afrechillo; pan, galleta común y productos similares de panadería; azúcar de caña y de remolacha; vinos genuinos; cerveza genuina elaborada con malta nacional y lúpulo, alcohol desnaturalizado para combustibles; productos frescos de la pesca; jabones, dentífricos, sueros y vacunas; ladrillos, cal, arena, sal fina, y sal gruesa; hielo común; leche fresca o pasterizada, crema, manteca y queso; productos de granja elaborados dentro de un régimen de trabajo familiar y en general, los productos de la ganadería y de la agricultura en tanto no hayan sufrido elaboración o tratamiento no indispensable para su conservación en estado natural o acondicionamiento y la manutención preparada para animales.

Art. 7º — En los casos en que la Dirección General del Impuesto a los Réditos haya dictado resoluciones de carácter general interpretando en forma distinta los artículos de la ley 12.143 aclarados por el presente decreto, éste se aplicará a partir de la fecha de su sanción.

Art. 8º — Dese cuenta oportunamente al Honorable Congreso.

Art. 9º — Publíquese, comuníquese, etc.

FARRELL.

Armando G. Antille. — J. Hortensio Quijano. — Juan I. Cooke. — Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — Juan Perón. — Alberto Teisaire. — Antonio J. Benítez.

DECRETO 25.046/45

Régimen de condonación de multas a escribanos infractores a los artículos 22 y 25 de la ley 11.285 (texto ordenado)

Buenos Aires, 10 de octubre de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Decláranse en vigencia las disposiciones de los artículos 41 y 54 del decreto 33.405,

de 11 de diciembre de 1944, creando la Dirección Nacional Inmobiliaria que dice así:

Artículo 41. — No podrá extenderse escritura de venta, división de condominio, permuta u otra que importe transmisión de dominio o que establezca gravamen sobre la propiedad, sin el certificado de la Dirección Nacional Inmobiliaria de estar paga la contribución hasta el 31 de diciembre del año de la operación inclusive, salvo que la propiedad esté sometida a nueva valuación, caso en el cual el certificado consignando esta circunstancia, sólo tendrá en cuenta la deuda de plazo vencido, quedando a cargo del comprador o adquirente el pago de la cuota perteneciente al año de la fecha del contrato.

Artículo 54. — El escribano que infrinja lo prescrito en el artículo 41 será responsable de las contribuciones adeudadas con más la multa de dos (2) a diez (10) tantos según la gravedad de la falta. En ningún caso la multa será inferior a cien pesos moneda nacional (\$ 100 m/n). Sin perjuicio de esta multa, cuando los antecedentes del escribano o la reincidencia en las infracciones así lo justifique, la Dirección Nacional Inmobiliaria dará cuenta a la autoridad competente, a los efectos de la suspensión o cesantías en el cargo. Si no existiera deuda, la omisión del certificado será penada con multa de cien pesos moneda nacional (\$ 100).

Si la escritura no se formaliza después de haberse extendido el certificado o no se ajusta a las condiciones manifestadas, el escribano deberá dar aviso dentro de los treinta (30) días a la Dirección Nacional Inmobiliaria so pena de incurrir en una multa de cien pesos moneda nacional (\$ 100).

Art. 2º — Condónanse las multas aplicadas o que corresponda aplicar a los escribanos de registro, por transgresiones a los artículos 22 y 25 de la ley 11.285, texto ordenado, incurridas hasta la fecha, siempre que se hayan cancelado los impuestos correspondientes o se cancelen dentro de los quince (15) días de la publicación del presente decreto y con prescindencia de que existan o no respecto de aquéllas, resolución administrativa o se encuentren en curso de apelación o ejecución. En este último supuesto, el escribano deberá hacerse cargo de los gastos causídicos para acogerse a lo dispuesto por el presente.

Esta condonación no comprende a las sumas ya ingresadas en concepto de multas.

Art. 3º — Hasta tanto se organice la Dirección Nacional Inmobiliaria, las disposiciones de este decreto serán aplicadas por la Administración General de Contribución Territorial.

Art. 4º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso.

Art. 5º — Publíquese, comuníquese y pase a la Administración General de Contribución Territorial, a sus efectos.

FARRELL

Armando G. Antille. — Juan I. Cooke. — Juan Perón. — Amaro Avalos. — J. Hortensio Quijano. — Antonio J. Benítez. — Alberto Teisacire. — Juan Pistarini.

DECRETO 31.447/45

Normas para la publicación de edictos en los juicios por cobro de impuesto territorial contra propietarios desconocidos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1945.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase en vigencia el artículo 62 del decreto 33.405 de 11 de diciembre de 1944 creando la Dirección Nacional Inmobiliaria, que dice así:

Artículo 62. — Para el cobro por apremio de la contribución, recargos y multas por inmuebles cuyos propietarios sean desconocidos esto es, cuando su nombre no figure en los registros de la Dirección Nacional Inmobiliaria, o siendo conocido se ignorase su domicilio, se citarán por edictos publicados en los boletines Judicial u Oficial por dos veces durante cinco (5) días y con intervalo de un mes, para que los interesados concurren a estar en juicio, bajo apercibimiento de substanciarse el mismo con el defensor de ausentes. Con la certificación del secretario del juzgado de no haber comparecido el propietario, se hará efectivo el apercibimiento siguiéndose el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

Art. 2º — Hasta tanto se organice la Dirección Nacional Inmobiliaria las disposiciones de este decreto serán aplicadas por la Administración General de Contribución Territorial.

Art. 3º — Publíquese, comuníquese y vuelva a la administración del ramo, a sus efectos.

FARRELL
Amaro Avalos.

DECRETO 34.603/45

Ampliación del régimen de condonación de multas para los infractores involuntarios del impuesto de sellos.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Fijase un plazo de noventa (90) días para que los responsables del impuesto establecido en el artículo 20 de la ley 11.290 (texto ordenado), puedan abonar los respectivos gravámenes en infracción con un recargo de sólo el 10 % del impuesto omitido en concepto de multa.

A tal efecto, los infractores deberán presentar a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, dentro del plazo fijado, una liquidación del impuesto correspondiente a todas las operaciones en infracción hasta

el 15 de julio de 1944 y acreditar el pago del tributo omitido más el 10 % en concepto de multa.

Esta liquidación quedará sujeta al ajuste definitivo que practicará la dirección y sobre la diferencia que surja del ajuste se cobrará también, en todos los casos, sólo el 10 % de recargo por la misma causa.

Art. 2º — Las infracciones a la ley 11.290 (texto ordenado), en que hubieren incurrido los escribanos de registro, por actos protocolizados o pasados en sus protocolos, o a cuyos instrumentos dieron fecha cierta, serán reprimidos con una multa del 10 % del impuesto omitido, siempre que ellas tengan por origen indudable una errónea y excusable interpretación de la ley.

Las reposiciones efectuadas por esos profesionales fuera de los términos legales o reglamentarios, se sancionarán con una multa equivalente a un tanto del impuesto ingresado en tales condiciones. Las restantes infracciones serán reprimidas con una multa del doble del impuesto omitido.

Los escribanos que al acogerse a los beneficios del artículo 2º del decreto 15.151/45, hayan abonado, en concepto de multa una suma superior a la que les corresponde ingresar de acuerdo con este decreto, tendrán derecho a la devolución en efectivo del excedente que resulte.

Art. 3º — Todas las demás infracciones a la ley 11.290 (texto ordenado) serán reprimidas de acuerdo con las normas del decreto 9.432/44, con excepción de las transgresiones al artículo 7º del citado ordenamiento legal, que se sancionarán con la multa establecida en esa disposición.

Art. 4º — La Dirección General del Impuesto a los Réditos podrá dejar de aplicar, total o parcialmente, las multas a que se refiere el artículo precedente, siempre que las infracciones tengan por origen indudable una errónea y excusable interpretación de la ley.

Art. 5º — Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos.

FARRELL.

Felipe Urdapilleta. — Abelardo Pantin. — Juan Pistarini. — Amaro Avalos. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — F. Pedro Marotta. — José Manuel Astigueta.

DECRETO 1.820/46

Prórroga del impuesto a los beneficios extraordinarios

Buenos Aires, 19 de enero de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase por un año más la vigencia del impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios, establecido por el decreto 18.230, texto modificado por el decreto 21.702 de fecha 18 de agosto de 1944.

Art. 2º — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

Juan I. Cooke. — Amaro Avalos. — Abelardo Pantin. — Felipe Urdapilleta. — José Humberto Sosa Molina. — José M. Astigueta. — Juan Pistarini. — F. Pedro Marotta.

DECRETO 5.640/46

Suspendiendo la aplicación del decreto 33.405/44, de creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria, excepto tres artículos.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Manténgase en suspenso la aplicación de las disposiciones del decreto 33.405, de fecha 11 de diciembre de 1944, hasta tanto se pronuncie el Honorable Congreso de la Nación, con excepción de sus artículos 41, 54 y 62, que ya han entrado en vigencia en virtud de lo establecido por el artículo 82 del mismo decreto, según lo han dispuesto los de fecha 10 de octubre y 10 de diciembre de 1945.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y pase a la Administración General de Contribución Territorial, a sus efectos.

FARRELL.

Amaro Avalos. — José Humberto Sosa Molina. — F. Pedro Marotta. — Juan Pistarini. — Abelardo Pantin. — Felipe Urdapilleta. — José M. Astigueta. — Juan I. Cooke.

DECRETO 8.349/46

Condonación de multas y reducción de intereses punitivos por falta de pago de impuesto interno sobre aceites lubricantes.

Buenos Aires, 23 de marzo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Condónase las multas pendientes de cobro, aplicadas por la Administración General de Impuestos Internos a los comerciantes sumariados por infracción al artículo 24 del decreto 59.830/40, por falta de declaración jurada relativa a las existencias de aceites lubricantes al 15 de abril de 1940, siempre que los responsables abonen los impuestos adeudados, más los gastos causídicos devengados en las actuaciones administrativas y judiciales.

Art. 2º — Redúcese, asimismo, al 5 % anual, el importe de los intereses punitivos devengados bajo las condiciones expresadas en el artículo anterior.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese y pase a la Administración General de Impuestos Internos, a sus efectos.

FARRELL.

Amaro Avalos. — José M. Astigueta.
— Juan I. Cooke. — José Humberto
Sosa Molina. — F. Pedro Marotta. —
Juan Pistarini. — Abelardo Pantín. —
Felipe Urdapilleta.

DECRETO 13.673/46

Fijando el término de vigencia del impuesto adicional a los combustibles

Buenos Aires, 14 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — El impuesto adicional de un centavo (\$ 0.01 m/n) moneda nacional por litro, que será aplicado a todos los combustibles provenientes de la destilación del petróleo, cualquiera sea el uso a que se los destine, establecido por el superior decreto 18.410, del 31 de diciembre de 1943, regirá durante el término de vigencia de los gravámenes creados por el artículo 12, incisos 1º al 3º de la ley 11.658 reformada por la número 12.625, quedando en esta forma modificado el término indicado en el artículo 1º del mismo.

Art. 2º — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º — Publíquese, comuníquese, etc.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — Juan
I. Cooke. — José M. Astigueta. —
Felipe Urdapilleta. — F. Pedro Marotta.
— José Humberto Sosa Molina. — Abe-
lardo Pantín.

DECRETO 14.338/46

Modificando la ley 11.682 (texto ordenado) y el decreto ley 18.229/43, sobre impuesto a los réditos

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase la ley 11.682, texto ordenado, y el decreto ley 18.229/43 conforme a las disposiciones que se expresan a continuación:

TITULO I

Disposiciones generales

Sujeto y objeto del impuesto

Artículo 1º — Los réditos de fuente argentina de personas de existencia visible o ideal, cualquiera sea su nacionalidad, domicilio o residencia, quedan sujetos al gravamen de emergencia nacional que establece esta ley.

Además de las personas indicadas en el párrafo anterior, son contribuyentes las sucesiones indivisas, mientras no exista declaratoria de herederos o no se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad.

Art. 2º — A los efectos de esta ley, son réditos, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se encuentren indicados en ellas, las rentas de cualquier denominación o especie, tales como: las ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y compensaciones percibidos en cualquier forma, provenientes del ejercicio de profesiones, oficios, ocupaciones o de la prestación de otros servicios personales de cualquier clase, las ganancias y utilidades derivadas de la locación, ventas y transacciones de bienes muebles o derechos; los beneficios de la explotación, arrendamiento o negociación de inmuebles y de la negociación de bienes cuyos réditos estén exentos de este impuesto; y los intereses, dividendos y participaciones, comprendidas las ganancias, beneficios y rentas derivadas de bienes que, al ingresar al patrimonio del contribuyente, hayan o no constituido una entrada gravada con el impuesto de esta ley.

Ningún rédito pagará el impuesto más de una vez al año.

Art. 3º — La ganancia obtenida o la pérdida sufrida por una persona o entidad que venda, permute o de otra manera disponga de bienes muebles o inmuebles, por valor mayor o menor del de costo, o valor a la fecha del ingreso a su patrimonio a título gratuito o a precio no determinado, será considerada para los efectos de esta ley, como aumento o pérdida de capital, según el caso, y no como aumento o pérdida de rédito, salvo disposición especial en contrario. Pero la ganancia obtenida o la pérdida sufrida en las operaciones mencionadas, será considerada como rédito o como pérdida computable a los fines del impuesto, cuando tales operaciones se efectúen por personas o entidades que hagan profesión habitual o comercio de compraventa, cambio, venta o disposición de tales bienes.

Art. 4º — El resultado de la enajenación de bienes se considerará comprendido dentro del balance impositivo, además de los casos previstos en los artículos anteriores, si quienes los enajenan los han adquirido para liquidar créditos provenientes de operaciones habituales y siempre que la venta se efectúe dentro del término de dos años contados desde la fecha de adquisición del bien.

La ganancia o pérdida que derive de la enajenación de los demás bienes amortizables —excepto inmuebles— se computará en todos los casos a los efectos del impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 de esta ley.

Serán también computables, sin perjuicio de lo que establecen los artículos anteriores:

- a) Para las compañías de seguros y de capitalización, el resultado de las enajenaciones de inmuebles, títulos, acciones, cédulas, debentures, bonos y similares;
- b) Para los bancos, el resultado de las enajenaciones de títulos, acciones, cédulas, debentures o bonos.

La ganancia o pérdida resultante de la venta de inmuebles que contempla este artículo, se determinará deduciendo del precio de venta, el valor de adquisición disminuido en el importe de las amortizaciones practicadas en los balances impositivos.

Rédito neto y rédito neto sujeto a impuesto

Art. 5º — Para establecer el rédito neto se restará del rédito bruto, los gastos necesarios efectuados para obtenerlos, mantenerlos y conservarlos, cuya deducción admite esta ley.

No se restará los gastos originados por entradas inversiones o réditos no sujetos a este impuesto, ni los gastos o salidas que constituyen o se originan en inversiones de capital.

Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo personal y similares, establecido conforme con las disposiciones de esta ley, acuse habitualmente pérdida, no se computará a los efectos del impuesto.

Para establecer el rédito neto sujeto a impuesto se restará del rédito neto las deducciones que se acuerdan por concepto de renta mínima no imponible y cargas de familia.

Fuente

Art. 5º — En general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes son réditos de fuente argentina aquellos que provienen de capitales, cosas o derechos, situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio del país de actividades civiles o comerciales, o trabajo personal, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las otras partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.

También están sujetos al gravamen, los réditos provenientes de actividades realizadas ocasionalmente en el extranjero, por personas residentes en el país.

Art. 7º — Los réditos provenientes de créditos garantizados con derechos reales, serán considerados de fuente argentina o extranjera, según sea el lugar de ubicación de los bienes afectados, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 8º — Los intereses de debentures se consideran íntegramente de fuente argentina, cuando la entidad emisora está constituida o radicada en la República, con prescindencia del lugar en que están ubicados los bienes que garantizan el préstamo, o el país en que se ha efectuado la emisión.

Art. 9º — La determinación de los réditos que derivan de la exportación e importación de bienes, se regirá por los siguientes principios:

- a) Los réditos provenientes de la exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país, son totalmente de fuente argentina.

El rédito neto se establecerá deduciendo del precio de venta mayorista en el lugar de destino, el costo de tales bienes, los gastos de transporte y seguros hasta dicho lugar, la co-

misión y gastos de venta y los gastos incurridos en la República, en cuanto sean necesarios para obtener el rédito gravado.

Cuando no se fije precio o el declarado sea inferior al precio de venta mayorista vigente en el lugar de destino, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el exportador del país y el importador del exterior, correspondiendo tomar dicho precio mayorista en el lugar de destino, a los efectos de determinar el valor de los productos exportados.

Se entiende también por exportación, la remisión al exterior de bienes producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país, realizada por medio de filiales, sucursales, representantes, agentes de compras u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero;

- b) Los réditos que obtienen los exportadores del extranjero por la simple introducción de sus productos en la República, son de fuente extranjera. Sin embargo, cuando el precio de venta al comprador del país, sea superior al precio mayorista vigente en el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta la República, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el importador del país y el exportador del exterior, constituyendo la diferencia rédito de fuente argentina, de cuyo impuesto ambos son solidariamente responsables.

En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones anteriores, corresponda aplicar el precio mayorista vigente en el lugar de origen y éste no fuera de público y notorio conocimiento o que existan dudas sobre si corresponden a igual o análoga mercadería que la importada u otra razón que dificulte la comparación, se tomará como base para el cálculo de las utilidades de fuente argentina, los coeficientes de resultados obtenidos por empresas independientes que se dedican a idéntica o similar actividad. A falta de idéntica o similar actividad, se faculta a la dirección a aplicar el por ciento neto que establezca la misma, a base de ramos que presenten ciertas analogías con el que se considera.

Art. 10. — Se presume, salvo prueba en contrario, que las compañías no constituidas en el país, que se ocupan en el negocio de transportes entre la República y países extranjeros, obtienen réditos netos de fuente argentina iguales al 10 % del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos transportes.

Los agentes o representantes, en la República, de tales compañías, serán solidariamente responsables con ellas del pago del impuesto y estarán obligados a presentar declaraciones juradas u otras informaciones, en la forma y plazos que establezca la dirección.

Cuando el transporte entre la República y países extranjeros, o viceversa, lo realicen compañías constituidas en el país, el rédito es íntegramente de fuente argentina y se determinará en la forma que establece esta ley.

Art. 11. — Se presume de derecho que las agencias de noticias internacionales, que mediante una

retribución las proporcionan a personas o entidades residentes en el país, obtienen réditos netos de fuente argentina, iguales al 10 % de la retribución bruta, tengan o no agencia o sucursal en la República.

Art. 12.—Las compañías de seguros, constituidas en el país o en el extranjero, quedan sujetas al pago del impuesto sobre los réditos netos provenientes de operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en la República, o que se refieran a personas que al tiempo de la celebración del contrato hubiesen residido en el país.

Art. 13.—Se presume de derecho que el 50 % del precio abonado a los productores de películas cinematográficas extranjeras, por la explotación de las mismas en el país, constituye rédito neto de fuente argentina. Esta disposición también rige cuando el precio se abone en forma de regalía.

Igual tratamiento se dispensará cuando se trate de otras regalías, etcétera, que revistan características similares al caso contemplado precedentemente.

Art. 14.—La dirección procederá a determinar el rédito neto de las sucursales y filiales de empresas o entidades del extranjero, a base de la contabilidad separada de las mismas, efectuando las rectificaciones necesarias para fijar los beneficios reales de estos establecimientos.

A falta de contabilidad suficiente o cuando no refleje exactamente el beneficio neto de fuente argentina, la dirección podrá, a los efectos del gravamen, considerar qué filial o sucursal y casa matriz, forman una unidad económica y apreciar el rédito neto sujeto al gravamen.

Art. 15.—En los casos no previstos en los artículos anteriores, cuando por la clase de operaciones o por las modalidades de organización de las empresas, no pueda establecerse con exactitud sus réditos de fuente argentina, la dirección procederá en la misma forma dispuesta en el último apartado del artículo anterior.

Art. 16.—Además de lo dispuesto por el artículo 6º, los réditos provenientes del trabajo personal se consideran también de fuente argentina, cuando consisten en sueldos u otras remuneraciones que el Estado abona a sus representantes oficiales en el extranjero o a otras personas a quienes encomienda la realización de funciones fuera del país.

Año fiscal e imputación de los réditos y gastos

Art. 17.—El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre.

Los contribuyentes imputarán sus réditos al año fiscal, de acuerdo con las siguientes normas:

- Los réditos obtenidos como dueño de empresas civiles, comerciales, industriales, agropecuarias o mineras o como socio de las mismas con responsabilidad personal ilimitada o socio comanditario o industrial o socio de sociedad de responsabilidad limitada; se imputarán al año fiscal en que termina el ejercicio anual correspondiente.

Los réditos indicados en el artículo 56, se consideran del año fiscal en que termina el ejercicio anual en el cual se han percibido o devengado.

Se consideran réditos producidos en el ejercicio, los cobrados o devengados en el mismo, según fuese el método habitualmente seguido por el contribuyente.

Quando no se contabilicen las operaciones, el ejercicio coincidirá con el año fiscal, salvo otras disposiciones de la dirección, la que queda facultada para fijar fechas de cierre del ejercicio, en atención a la naturaleza de la explotación u otras situaciones especiales;

- Los demás réditos se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidos, excepto los correspondientes a la primera categoría, que se considerarán devengados.

Aunque los réditos no hubiesen sido cobrados en efectivo o en especie, se considera que el contribuyente los ha percibido, siempre que hayan estado disponibles, cuando han sido reinvertidos, acumulados, capitalizados, acreditados en cuenta, puestos en reserva, en un fondo de amortización o de seguro cualquiera sea su denominación o cuando se ha dispuesto de ellos en otra forma en beneficio del contribuyente o de acuerdo con sus directivas.

Las disposiciones precedentes se aplicarán por analogía para la imputación de los gastos.

Compensación de quebrantos con beneficios

Art. 18.—Para establecer el conjunto de los réditos netos, se compensarán los resultados netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada una y entre las distintas categorías.

Quando en un año, después de computarse las utilidades exentas, se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias que se obtengan en los años inmediatos siguientes.

La deducción se hará, en primer término, contra las ganancias exentas, y si hubiese un saldo, contra los réditos netos.

Transcurridos cuatro años después de aquel en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del quebranto que aun resta, en los ejercicios sucesivos.

A los efectos de este artículo, no se consideran pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir en concepto de renta mínima no imponible y cargas de familia.

Exenciones

Art. 19.—No están sujetos al gravamen:

- Los réditos de los fiscos nacional, provinciales y municipales, y los de las instituciones pertenecientes a los mismos.

Las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y municipales, estarán exentas en la parte de réditos que corresponda a estos últimos;

- Los réditos de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, en cuanto la exención que éstas acuerdan comprenda el gravamen de esta ley y siempre que los réditos deriven directamente de la explotación o actividad principal que motivó la exención a dichas entidades;
- Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros en la República; las rentas de los edificios de propiedad

de países extranjeros destinados para oficina o casa habitación de sus representantes y los intereses provenientes de depósitos fiscales de los mismos, todo a condición de reciprocidad;

- d) Las utilidades de las sociedades cooperativas y las que éstas distribuyen a sus socios, excepto el interés correspondiente a las acciones, que abonen a sus asociados;
- e) Los réditos de las instituciones religiosas;
- f) Los réditos que obtengan las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, educación e instrucción gratuita, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales réditos y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios.

Se excluye de la exención establecida en el párrafo anterior, a aquellas entidades organizadas jurídicamente como sociedades anónimas u otra forma comercial, y las que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;

- g) Los réditos de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de la ley 12.209, y los beneficios que éstas proporcionen a sus asociados;
- h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro que no excedan en conjunto de 50 pesos moneda nacional por año fiscal y por persona;
- i) Las indemnizaciones que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o por incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por preaviso y despido;
- j) Los derechos amparados por la ley 11.723, en la parte que no exceda de 6.000 pesos moneda nacional por año fiscal y siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores, y que las respectivas obras estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

Renta no imponible y cargas de familia

Art. 20. — Las personas de existencia visible residentes en la República, tendrán derecho a deducir de sus réditos, en concepto de renta no imponible, los siguientes importes:

- 1º Cuando sólo obtengan réditos de 3ª y 4ª categoría, 6.000 pesos moneda nacional anuales;
- 2º Cuando sólo obtengan réditos de 1ª y 2ª categoría, 2.400 pesos moneda nacional anuales;
- 3º Cuando además de los réditos de 3ª y 4ª categoría, obtengan otros de 1ª o 2ª, las deducciones se computarán en la siguiente forma:

- a) Si el importe que resulte de sumar o compensar los réditos o pérdidas de 3ª y 4ª

categoría fuese quebranto, o beneficio menor o igual a 2.400 pesos, se deducirá como renta no imponible 2.400 pesos moneda nacional;

- b) Si de la suma o compensación del inciso a) resultase un rédito neto mayor de 2.400 pesos, pero menor de 4.800 pesos, deberá computarse como renta no imponible un importe igual al monto de dicho rédito;
- c) Si de la suma o compensación del inciso a) resultase un rédito neto igual o mayor a 4.800 pesos, se deducirá como renta no imponible 4.800 pesos moneda nacional.

Los contribuyentes residentes en el país, que obtengan réditos comprendidos en el artículo 63, tendrán derecho a una deducción adicional en concepto de mínimo no imponible del 20 % sobre los primeros \$ 6.000 m/n. anuales, más el 10 % sobre los siguientes \$ 6.000 m/n. del conjunto de esas rentas netas. En ningún caso esta deducción adicional podrá compensarse con rentas de otra naturaleza.

Los contribuyentes que presenten balance en forma comercial, deducirán como renta no imponible, la que corresponda a la naturaleza de sus réditos.

Art. 21. — Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus réditos, las siguientes sumas en concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican residan en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a \$ 1.200 m/n., cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

- a) Pesos 1.200 m/n. anuales por el cónyuge;
- b) Pesos 600 m/n. anuales por cada descendiente en línea recta varón (hijo, nieto, etcétera), menor de edad o incapacitado para el trabajo;
- c) Pesos 600 m/n. anuales por cada descendiente en línea recta mujer (hija, nieta, etcétera) soltera o viuda, cualquiera sea su edad;
- d) Pesos 600 m/n. anuales por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo, etcétera);
- e) Pesos 600 m/n. anuales por cada hermano varón menor de edad o incapacitado para el trabajo, y hermana soltera o viuda, cualquiera sea su edad;
- f) Pesos 600 m/n. anuales por el suegro o suegra;
- g) Pesos 600 m/n. anuales por cada yerno menor de edad o incapacitado para el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad.

La deducción por gastos de familia, sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga réditos imponibles. Cuando existan varios parientes de igual grado a cuyo cargo se halle una misma persona, deberá distribuirse proporcionalmente la deducción de los importes indicados.

Art. 22. — Las deducciones de los artículos 20 y 21 se harán efectivas proporcionalmente por períodos mensuales, computándose todo el mes en que ocurran las causas que las determinan (nacimiento, defunción, etcétera).

Concepto de residencia

Art. 23. — A los efectos de la deducción del mínimo no imponible y cargas de familia, se consideran residentes en la República, las personas de existencia

visible que vivan más de seis meses en el país, en el transcurso del año fiscal. Las personas de existencia visible que se encuentran en el extranjero al servicio de la Nación, provincias o municipalidades, también se considerarán residentes en el país.

Conversión

Art. 24. — Todos los bienes introducidos en el país o dados o recibidos en pago, sin que exista un precio cierto en moneda argentina, deben ser valuados en pesos moneda nacional a la fecha de su recepción en pago, salvo disposición especial de esta ley. A tal efecto se aplicarán, cuando sean del caso, las disposiciones del artículo 55.

Ausentismo

Art. 25. — Pagarán el impuesto básico y adicional, con un recargo del 30 % en concepto de ausentismo, las rentas correspondientes a la primera categoría, las derivadas de la explotación agropecuaria ejercida por el propietario de la tierra o por arrendatarios, y las jubilaciones, pensiones y retiros, cuando la persona de existencia visible, titular de la renta respectiva resida habitualmente en el extranjero.

También estarán sujetas al recargo que dispone este artículo, las referidas rentas obtenidas por personas de existencia visible, cuando residiendo habitualmente en el país, estén más de un año continuado en el exterior, aunque en el transcurso de un período fiscal, estén ausentes menos de un año.

Se presume de derecho que el contribuyente reside habitualmente en el exterior, cuando su ausencia de la República —dentro de los períodos y en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo— es mayor que su residencia en la misma.

Para las personas que residen habitualmente en la República, la parte de impuesto gravada con el recargo por ausentismo, es la que corresponde a la renta del período —en proporción al tiempo— en el cual estuvieron efectivamente fuera del país.

Respecto a las personas que residen habitualmente en el extranjero, sólo se aplicará la regla del apartado anterior, cuando las mismas residan más de seis meses en la República. En caso contrario, el ausentismo se aplicará por todo el período sin descontar el recargo correspondiente al tiempo que estuvieron en el país.

No son aplicables las disposiciones sobre ausentismo, cuando las personas se hallen ausentes de la República, como consecuencia de misiones oficiales encomendadas por la Nación, provincias y municipalidades, u otras entidades oficiales.

Art. 26. — Las sociedades anónimas y demás entidades de capital, que obtienen réditos de la primera categoría y/o derivados de la explotación agropecuaria —sean propietarios o arrendatarios de los campos— pagarán el recargo del 30 % en concepto de ausentismo, sobre el impuesto que les corresponda, cuando la sociedad o su casa matriz esté constituida o domiciliada en el extranjero.

Sin perjuicio de otros índices que conduzcan a la misma conclusión, se considera que la sociedad está constituida en el exterior, cuando su directorio, consejo de administración u otros organismos técnico-directivos, se encuentran fuera del país, o la asamblea de accionistas se realiza en el exterior.

Las sociedades en comandita por acciones serán tratadas, a los efectos del pago del recargo por ausentismo, como personas jurídicas por la parte de renta e impuesto correspondiente al capital accionario y como personas de existencia visible por la parte de los socios solidarios.

En el caso de sociedades constituidas en el país, pero con directorio, consejo de administración u otros organismos técnico-directivos en el exterior, la entidad deberá abonar el recargo por ausentismo sobre el total del impuesto que le corresponda. Igual tratamiento procederá dispensar a las sociedades que paguen o acrediten al exterior, el 50 % o más de los dividendos o utilidades.

Réditos de los componentes de la sociedad conyugal

Art. 27. — Las disposiciones del Código Civil sobre el carácter ganancial de los réditos de los cónyuges, no rigen a los fines del impuesto a los réditos siendo en cambio de aplicación las normas contenidas en los artículos siguientes.

Art. 28. — Corresponde atribuir a cada cónyuge los réditos provenientes de:

- Actividades personales (profesión, oficio, empleo, comercio o industria);
- Bienes propios;
- Bienes adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria, siempre y cuando tratándose de la mujer, ésta haya hecho constar en la escritura de adquisición que el dinero proviene de alguno de esos conceptos y no se impugne de simulado el acto.

Art. 29. — Corresponde atribuir totalmente al marido los réditos de bienes gananciales, excepto:

- Que se trate de un bien ganancial adquirido por la mujer en las condiciones señaladas en el precedente apartado c);
- Que exista separación judicial de bienes;
- Que la administración de los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial.

Réditos de hijos menores de edad

Art. 30. — Los réditos de los hijos menores de edad, deberán ser declarados por la persona que tenga el usufructo de los mismos.

Sociedades entre cónyuges

Art. 31. — A los efectos del presente gravamen no son admisibles las sociedades entre cónyuges.

Cuando en una explotación, comercio, industria, etcétera, que realiza uno de los cónyuges, el otro aportara bienes propios u otros que le pertenecen, entendiéndose por tales los enumerados en los incisos b) y c) del artículo 28 a los fines de la liquidación del impuesto, se presume de derecho que el rédito que corresponde al cónyuge que aportó tales bienes, equivale al interés que fija para descuentos comerciales la institución oficial encargada de ello, salvo en el caso de inmuebles en que se considerará rédito el valor locativo determinado en la forma dispuesta

en los artículos pertinentes. Dicho interés o valor locativo, se aplicará exclusivamente sobre valores efectivamente aportados y necesarios para la explotación, comercio, etcétera.

Cuando por la modalidad de explotación o atento a las características del bien aportado, etcétera, se justificara un tratamiento distinto al dispuesto precedentemente, la dirección determinará la retribución que corresponde, adoptando un procedimiento racional y equitativo.

Sucesiones indivisas*

Art. 32. — Las sucesiones indivisas, son contribuyentes por los réditos que obtengan hasta la fecha que se dicte declaratoria de herederos, o se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad, estando sujetas al pago del impuesto (tasa básica y adicional), previa deducción del mínimo no imponible y cargas de familia a que hubiera tenido derecho el causante. El pago efectuado en esta forma es definitivo.

Art. 33. — Dictada la declaración de herederos o declarado válido el testamento y por el período que corresponda hasta la fecha en que se apruebe la cuenta particionaria, judicial o extrajudicial, el cónyuge supérstite y los herederos sumarán a sus propios réditos la parte proporcional que, conforme con su derecho social o hereditario, les corresponde en los réditos de la sucesión. Los legatarios sumarán a sus propios réditos los producidos por los bienes legados.

A partir de la fecha de aprobación de la cuenta particionaria, cada uno de los derechohabientes incluirá en sus respectivas declaraciones juradas, los réditos de los bienes que se le han adjudicado.

Art. 34. — El quebranto definitivo sufrido por el causante, podrá ser compensado con las ganancias obtenidas por la sucesión hasta la fecha de la declaratoria de herederos o hasta que se haya declarado válido el testamento, en la forma establecida por el artículo 18.

Si aun quedare un saldo, el cónyuge supérstite y los herederos procederán del mismo modo, a partir del primer ejercicio en que incluyan en la declaración individual, réditos producidos por bienes de la sucesión o heredades.

La compensación de los quebrantos a que se alude precedentemente, podrá efectuarse con beneficios obtenidos por la sucesión y por los herederos hasta el cuarto año inclusive después de aquel en que tuvo su origen el quebranto.

Análogo temperamento adoptarán el cónyuge supérstite y los herederos respecto a los quebrantos definitivos sufridos por la sucesión.

La parte del quebranto definitivo del causante y de la sucesión, que cada uno de los herederos y el cónyuge supérstite podrán compensar en sus declaraciones juradas, será la que surja de prorratear los quebrantos en proporción al porcentaje que cada uno de los derechohabientes tenga en el haber hereditario.

Art. 35. — Cuando un contribuyente hubiese seguido el sistema de percibido a los efectos de la liquidación del impuesto, los réditos producidos o devengados, pero no cobrados a la fecha de su fallecimiento, serán considerados, a opción de los interesados, en alguna de las siguientes formas:

- a) Incluyéndolos en la última declaración jurada del causante;

- b) Incluyéndolos en la declaración jurada de la sucesión, cónyuge supérstite, herederos y/o legatarios, en el año que los perciban.

Salidas no documentadas

Art. 36. — Cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que, por su naturaleza, ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar réditos gravados, no se admitirá su deducción en el balance impositivo, y además estará sujeta al pago de la tasa del 27 % que se considerará definitivo.

No será de aplicación lo indicado en el apartado anterior, en los siguientes casos:

- a) Cuando, la dirección presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes;
- b) Cuando la dirección presuma que los pagos —por su monto, etcétera— no llegan a ser rentas gravables en manos del beneficiario.

Asimilación a comerciante

Art. 37. — Cuando al solo efecto de la forma de liquidación del impuesto, lo contribuyentes deseen ser asimilados a comerciantes, deberán solicitarlo a la dirección, la que, si lo juzga procedente, acordará la autorización respectiva, en cuyo caso establecerá la fecha a partir de la cual el contribuyente será asimilado a comerciante.

Para que proceda tal solicitud, el contribuyente deberá llevar libros y documentación con las formalidades exigidas por la dirección, permitiendo así una fácil fiscalización de sus operaciones.

Retenciones

Art. 38. — La percepción del impuesto —tasa básica, adicional, ausentismo, etcétera— se realizará mediante la retención en la fuente, en los casos y en la forma que disponga la dirección.

Art. 39. — Cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la dirección podrá, a los efectos del balance impositivo del contribuyente, impugnar el gasto efectuado por éste.

TITULO II

Categoría de réditos

Réditos de la 1ª categoría. — Renta del suelo

Art. 40. — Constituyen réditos de la primera categoría y deben ser declarados por el propietario de los bienes raíces respectivos:

- a) El producido, en dinero o en especie, de la locación de inmuebles urbanos y rurales;
- b) Cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis;
- c) El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, que constituyen un beneficio para el propietario y en la parte que éste no está obligado a indemnizar;
- d) La contribución directa o territorial y otros

gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo;

- e) El importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministre el propietario;
- f) El valor locativo computable por la ocupación de inmuebles por sus propietarios, se trate de casa habitación, recreo, veraneo, etcétera;
- g) El valor locativo o arrendamientos presuntos de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado.

Se consideran también de primera categoría, los réditos que los locatarios obtienen por el producido, en dinero o en especie, de los inmuebles urbanos o rurales dados en sublocación.

Art. 41. — Se presume de derecho que el valor locativo de todo inmueble urbano, no es inferior al fijado por la Administración Nacional del Agua, o en su defecto, al establecido por las municipalidades para el cobro de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. A falta de estos índices, el valor locativo podrá ser apreciado por la dirección.

En los casos de inmuebles cedidos en locación, usufructo, uso, habitación o anticresis, por un precio inferior al arrendamiento que rige en la zona en que los mismos están ubicados, la dirección podrá estimar de oficio el rédito correspondiente.

Art. 42. — Los que perciban arrendamientos en especie, declararán como rédito el valor de los productos recibidos, entendiéndose por tal el de su realización en el año fiscal o en su defecto, el precio de plaza al final del mismo. En este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado, se computará como beneficio o quebranto del año en que se realizó la venta.

Art. 43. — A los efectos de esta ley, se consideran propietarios los compradores de inmuebles a plazos, aun cuando no hubiesen obtenido el título definitivo.

Art. 44. — Los contribuyentes que transmitan gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, conservando para sí el derecho a los frutos —de cualquier clase que sean—, uso o habitación, deben declarar el rédito que les produzca la explotación o el valor locativo, según corresponda, sin deducir importe alguno en concepto de alquileres o arrendamientos, aun cuando se hubiere estipulado su pago.

Réditos de la 2ª categoría. — Renta de capitales mobiliarios

Art. 45. — Constituyen réditos de la segunda categoría:

- a) Los derivados de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o valores privilegiados o quirografarios, consten o no en escritura pública y toda suma que sea el producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago;
- b) Los dividendos de acciones de sociedades constituidas en el país, sin tener en cuenta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago (reservas anteriores, ganancias de capital, rentas exentas de impuestos, etcétera);
- c) Los réditos de la locación de cosas, muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos;

d) Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones;

e) Las rentas vitalicias, los beneficios o participaciones en seguros sobre la vida y la diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los seguros para casos de vida y títulos o bonos de capitalización, y la misma diferencia en los seguros mixtos, cuando el capital no se haya pagado por muerte del asegurado;

f) Las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin embargo, estos réditos serán considerados como de la 3ª o 4ª categoría, según el caso, cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o empleo.

Art. 46. — Se considera regalía, a los efectos de esta ley, toda contraprestación que se reciba, en dinero o en especie, por la transferencia del dominio, uso o goce de cosas o por la cesión de derechos, cuyo monto se determine en relación a una unidad de producción, de venta, de explotación, etcétera, cualquiera sea la denominación asignada.

Art. 47. — Cuando no se determine en forma expresa el tipo de interés, se presume, a los efectos del impuesto, que toda deuda, sea ésta la consecuencia de un préstamo, de venta de inmuebles, etcétera, devenga un tipo de interés no menor al fijado oficialmente para descuentos comerciales.

Si la deuda proviene de ventas a plazo, la presunción rige aun cuando se estipule expresamente que la venta se realiza sin computar intereses.

Art. 48. — Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas u otras entidades públicas o privadas, que paguen o acrediten al exterior rentas de títulos públicos, cédulas, bonos, debentures y demás valores al portador —excluido los dividendos y utilidades a que se refiere el artículo 59—, deberán retener e ingresar a la dirección el 20 % de esa suma. El impuesto así ingresado se considera único y definitivo.

Cuando el pago de esa clase de réditos se efectúe en el país, se retendrá e ingresará a la dirección el 27 % de las sumas pagadas a la dirección, salvo que los tenedores hayan declarado los valores respectivos a la dirección, en la forma y tiempo que disponga el reglamento, no pudiendo posteriormente reclamarse compensación o devolución alguna, pasados los 15 días del cobro.

Cuando los tenedores a que se refiere el párrafo anterior hayan hecho la declaración ante la dirección, individualizando sus valores al portador, los emisores, agentes pagadores, etcétera, deberán retener e ingresar la tasa básica del 5 %, salvo los casos en que, atento al carácter del titular, se resuelva eximirlo de la retención.

Se considera a los efectos del impuesto a los réditos, que las cláusulas por las cuales los emisores (entidades públicas o privadas) toman a su cargo el gravamen sobre la renta de títulos y demás valores al portador que emitan, se refieren a la tasa básica, quedando los emisores sujetos a las obligaciones que les impone el presente artículo como agentes de re-

tención del remanente de impuesto, cuando los tenedores no hayan declarado dichos valores o se realice el pago o acreditación al exterior.

La dirección exigirá directamente a los emisores el impuesto que hayan dejado de retener o ingresar, aun si se tratase de entidades públicas, sin perjuicio de su acción contra los tenedores para el cobro total del impuesto.

Réditos de la 3ª categoría. — Rentas del comercio, industria, etcétera

Art. 49. — Constituyen réditos de la tercera categoría:

- Los derivados del ejercicio del comercio, de la industria, de la minería, de la explotación agropecuaria ejercida por el propietario de la tierra o por arrendatarios y de cualquier otra actividad que constituya negocio de compra-venta, cambio, venta o disposición de bienes;
- Los derivados de la actividad de comisionista, rematador, consignatario, corredor y despachante de aduana y demás auxiliares de comercio, como así también otras actividades similares;
- Las participaciones en los beneficios de cualquier clase de sociedades, aun accidentales, que tengan por objeto la realización de algún lucro;
- Los demás réditos no incluidos en las otras categorías.

Cuando la actividad profesional, oficio, prestación de servicios u ocupación lucrativa que menciona el artículo 63 se complementa con una explotación comercial o viceversa (sanatorios, etcétera), el resultado total que se obtenga del conjunto de esas actividades se considerará como réditos de la tercera categoría.

Art. 50. — El resultado del balance impositivo del único dueño y de las sociedades y asociaciones, se considera integralmente distribuido a aquél o entre los socios de estas últimas, aun en caso de no acreditarse en sus cuentas particulares.

Tratándose de sociedades en comandita por acciones, el resultado del balance impositivo se considera distribuido en la parte que corresponda a los socios solidarios, la que se determinará aplicando la proporción que, por el contrato social, corresponda a dichos socios en las utilidades o pérdidas.

Para la parte que corresponde a los socios comanditarios de las entidades a que se refiere el apartado anterior y para las restantes sociedades y asociaciones no incluida en el presente artículo, se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 56 al 62.

Art. 51. — Cuando los beneficios provengan de la enajenación de bienes, se entiende por rédito bruto el total de las ventas netas, menos el costo de adquisición, producción o, en su caso, valor a la fecha de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario de los bienes vendidos. Se considera venta neta el valor que resulta de deducir a las ventas brutas las devoluciones, bonificaciones y descuentos u otros conceptos similares, de acuerdo con las costumbres de plaza.

Art. 52. — Para practicar el balance impositivo, la existencia de mercaderías deberá computarse de acuerdo con algunos de los siguientes métodos:

- Costo de producción o adquisición;
- Costo en plaza;
- Precio en plaza menos gastos de venta;
- Precio de venta menos gastos de venta;
- Costo de producción o adquisición o costo en plaza, el que sea menor.

En el caso de títulos, acciones, cédulas, debentures o bonos, cuyas operaciones de compra y venta originen resultados alcanzados por el impuesto, se admitirá que tales valores se consignen en el inventario a la cotización que tengan en bolsa.

En el caso de inmuebles, éstos se inventariarán al precio de compra o valor de construcción efectivamente pagado por el contribuyente, pero en todos los casos, la ganancia o pérdida derivada de su venta se determinará mediante el procedimiento indicado en el último párrafo del artículo 49.

La dirección podrá aceptar y/o aplicar otros sistemas de valuación de inventarios que no sean los previstos en este artículo, cuando se adapten a las modalidades del negocio, sean uniformes y no ofrezcan dificultades a la fiscalización.

Elegido uno cualquiera de estos métodos de valuación, no podrá ser variado sin autorización de la dirección y previo los ajustes que deberán efectuarse de acuerdo a lo que disponga la reglamentación Autorizada el cambio de método, se aplicará a partir del ejercicio futuro que fije la dirección.

Los inventarios deberán consignar en forma detallada, la existencia de cada artículo con su respectivo precio unitario.

Con el balance impositivo debe presentarse copia de la memoria, balance anual, estado demostrativo de ganancias y pérdidas y estados analíticos que la dirección exija.

En la valuación de los inventarios, no se permitirán deducciones en forma global por reservas generales constituidas para hacer frente a fluctuaciones de precio o contingencias de otro orden.

Art. 53. — A los fines de este impuesto, se considera mercadería toda la hacienda —cualquiera sea su categoría— de un establecimiento agropecuario, siendo en consecuencia computable, en el balance impositivo, el resultado de su enajenación total o parcial.

Art. 54. — Cuando el contribuyente retire para su uso particular o de su familia o destine mercaderías de su negocio a actividades cuyos resultados no están alcanzados por el impuesto (recreo, stud, donaciones a personas o entidades no exentas, etcétera), a los efectos del presente gravamen se considerará que tales actos se realizan al precio que se obtiene en operaciones onerosas con terceros.

Igual tratamiento corresponderá dispensar a las operaciones realizadas por una sociedad por cuenta de y a sus socios.

Art. 55. — Para establecer las diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda extranjera, se aplicarán las normas siguientes:

- Para contabilizar las operaciones en monedas extranjera deberá seguirse un sistema uniforme y los tipos de cambio a emplear serán los que fije la reglamentación para cada clase de operaciones;

- b) En el balance impositivo anual se computarán como diferencia de cambio las efectividades realizadas, salvo lo dispuesto en el inciso c);
- c) Las diferencias de cambio que se produzcan por operaciones que constituyen inversiones de capital, se imputarán al costo de los bienes respectivos.

Para establecer la ganancia o pérdida de cambio efectivamente realizada, a que se refiere el inciso b), se aplicarán —a los efectos impositivos— los siguientes sistemas a opción del contribuyente:

I) Revaluación anual de los saldos impagos, en cuyo caso se computarán las diferencias que se produzcan con ese motivo, como así también las que se originen entre la última valuación y el importe del pago o cobro total o parcial de los saldos.

II) Diferencias directas o sea las que resulten entre los valores asentados originariamente en los libros y el importe del pago o cobro total o parcial de los saldos.

Adoptado uno de estos dos sistemas no podrá ser variado sin previa conformidad expresa de la dirección.

Cuando por razones de contabilidad y previa autorización de la dirección, las operaciones en moneda extranjera se asienten en forma distinta a la dispuesta en el inciso a), será obligatoria la revaluación de las existencias y saldos impagos en la forma indicada en el apartado I).

Las sucursales de casas matrices extranjeras solicitarán en cada caso, que el procedimiento a seguir en materia de cambios sea previamente aprobado por la dirección.

Sociedad de capital

Art. 56. — Quedan sujetos al pago de la tasa del 15 %, que se abonará con carácter definitivo, y sin perjuicio de lo que les corresponda ingresar en concepto de ausentismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, los réditos impositivos, de:

- a) Las sociedades anónimas constituidas en el país distribúyanse o no dichos réditos a los accionistas;
- b) Las sociedades en comandita por acciones constituidas en el país, en la parte que no corresponde a los socios solidarios de conformidad con el artículo 50, distribúyanse o no a los accionistas;
- c) Las sociedades de capital, cualquiera sea su denominación, constituidas en el extranjero, tengan o no sucursales, agentes o representantes en el país, sin consideración al ulterior destino de tales réditos;
- d) Las asociaciones civiles y demás entidades a que se refiere el segundo apartado del inciso f) del artículo 19, en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo.

Art. 57. — A los efectos del artículo anterior, las sociedades constituidas en el extranjero se presumen de capitales, salvo prueba en contrario.

Cuando dichas sociedades fueren de personas, entendiéndose por tales las compuestas exclusivamente por socios con responsabilidad personal ilimitada, se presume, para todos los efectos de esta ley, que los réditos impositivos pertenecen a una sola persona de

existencia visible, salvo que se compruebe debidamente la cantidad de socios personal e ilimitadamente responsables y la participación que a cada uno de ellos corresponde en las utilidades, en cuyo caso se dividirán los réditos según su pertenencia.

Si son sociedades mixtas, la parte de utilidades que corresponde a los socios sin responsabilidad personal ilimitada, estará sujeta al impuesto que establece el artículo 58 y sobre el remanente se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital constituidas en el exterior, que no tengan sucursal, agente o representante en el país, réditos de cualquier categoría, corresponderá que el que los pague o acredite, retenga e ingrese a la dirección el 20 % de esas sumas. Este pago reviste el carácter de definitivo.

Art. 58. — Cuando las sociedades anónimas, etcétera, distribuyan dividendos en un monto superior a la utilidad impositiva del ejercicio fiscal, deberán abonar sobre esta diferencia la tasa única y definitiva del 15 por ciento.

El impuesto que estas sociedades tengan pagado sobre las reservas constituidas antes de la vigencia de estas disposiciones —calculadas conforme con lo establecido por el decreto del Poder Ejecutivo número 2.711 del 14 de julio de 1943 y la tasa que corresponda sobre las reservas no distribuidas por los ejercicios cerrados dentro del régimen del decreto 18.229 de 1943— se considerará como ingreso a cuenta del impuesto que deben abonar sobre el excedente de dividendos a que se refiere el apartado anterior.

Art. 59. — Las sociedades anónimas, en comandita por acciones, etcétera, que paguen o acrediten dividendos o utilidades a beneficiarios en el exterior, deberá retener e ingresar a la dirección, con carácter definitivo, el 5 % de esa suma, sin perjuicio del 15 % abonado por la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 56.

Cuando el pago de esta clase de réditos se efectúe en el país, se retendrá e ingresará a la dirección el 12 % de las sumas pagadas, salvo que los tenedores hayan declarado a la dirección los valores respectivos de dichos réditos, en la forma y tiempo que disponga el reglamento, no pudiendo posteriormente reclamarse compensación o devolución alguna pasados los 15 días del cobro.

La dirección exigirá directamente a los emisores el impuesto que hayan dejado de retener e ingresar.

Art. 60. — Los dividendos o utilidades que las sociedades de capital repartan a sus accionistas, en dinero o en especie, quedan íntegramente sujetos al impuesto, cualquiera sean los fondos sociales con que se realice su pago, como ser: reservas anteriores cualquiera sea la fecha de su constitución; ganancias de fuentes extranjeras, de capital, exentas de impuesto, provenientes de primas de emisiones, etcétera, ya se reparten en dinero, mediante acciones liberadas o en cualquier otra forma.

Art. 61. — Los accionistas o socios computarán como pago a cuenta de los dividendos o utilidades percibidas, las sumas que resulten de aplicar las siguientes normas:

- a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es igual o superior al 15 % que corresponda abonar a la sociedad, deducirán el importe que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre los dividendos percibidos;

- b) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es inferior al 15 % que corresponde abonar a la sociedad, sólo deducirán el importe que resulte de aplicar la tasa general citada sobre los dividendos percibidos.

Entiéndese por *tasa general*, el por ciento que resulte de relacionar el total de impuesto que debe pagar el contribuyente —aplicando las tasas básicas y adicional, del artículo 34—, con el monto de renta imponible.

Art. 62. — Las sociedades anónimas, en comandita por acciones, etcétera, no computarán como réditos imponibles, los dividendos de acciones percibidos de otras entidades de capital.

Réditos de 4ª categoría. Renta del trabajo personal

Art. 63. — Constituyen réditos de la cuarta categoría los provenientes:

- a) Del desempeño de cargos públicos;
- b) Del ejercicio de profesiones liberales y oficios o de la prestación de servicios y ocupaciones lucrativas de cualquier naturaleza, en cuanto no se hallen incluidos expresamente en la tercera categoría;
- c) Del desempeño de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y de otras actividades similares;
- d) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia.

Son también réditos de la cuarta categoría las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal.

También se computarán las compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, etcétera, en cuanto excedan de las sumas que la dirección juzgue razonables en concepto de reembolso de gastos efectuados.

TITULO III

De las deducciones

Art. 64. — Los gastos cuya deducción admita esta ley, son los efectuados para obtener, mantener y conservar los réditos gravados por este impuesto y se restarán de los réditos producidos por el bien que los origina. Cuando dichos gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener o conservar réditos —gravados y exentos— generados por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de los beneficios brutos que produce cada una de ellas, en la parte o proporción respectiva.

Quando medien razones prácticas y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos, se deduzca de la renta de un bien determinado.

Art. 65. — Con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrán deducir del rédito del año fiscal:

- a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas;

- b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen rédito, excepto los ex-
cuidados por el artículo 69, inciso d). Cuando los impuestos y tasas computables como gastos necesarios para obtener, mantener y conservar los réditos gravados (contribución territorial, patentes, etcétera) se hayan abonado con multa, ésta será deducible de las entradas brutas, salvo cuando haya sido im-
puesta por defraudación al fisco;

- c) Las primas por seguros que cubran riesgos sobre bienes que producen réditos;

- d) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte; en los seguros mixtos sólo será deducible la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte. Fijase como importe máximo a deducir por los conceptos indicados en este inciso la suma de \$ 5.000 anuales, se trate o no de prima única;

- e) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor, en los bienes que producen rédito, como: incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones;

- f) Las pérdidas debidamente comprobadas, a juicio de la dirección, originadas por delitos cometidos contra los bienes de explotación de los contribuyentes por empleados de la misma, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones;

- g) Los gastos que originen la percepción de los réditos;

- h) Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales;

- i) Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, en la suma reconocida por la dirección;

- j) Las donaciones a los fiscos nacionales provinciales, municipales y a las instituciones comprendidas en el artículo 19, incisos e), f) y g);

- k) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso, de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes.

Art. 66. — En concepto de amortización de edificios y construcciones se admitirá deducir:

- a) Por los ubicados en zonas urbanas, el 2 por ciento de la valuación fiscal del inmueble para el pago de la contribución territorial o gravámenes provinciales análogos. Cuando el valor de la tierra sea notoriamente superior al 33 % del avalúo fiscal del inmueble, la dirección podrá exigir que la tierra sea valuada por separado y, en ese caso, se aplicará un coeficiente de amortización del 3 % sobre el remanente entre el avalúo total del inmueble y el valor de la tierra;

- b) Por los ubicados en zonas rurales, el 3 % sobre el avalúo fiscal, si existe, de tales edificios y construcciones, o, en su defecto, sobre el valor de construcción.

Estos coeficientes serán aplicables durante todo el tiempo en que las construcciones sean

utilizables. Las instalaciones, mejoras, pavimentos, refecciones, etcétera, se presumen de derecho incluidas en la valuación fiscal.

Art. 67. — A los fines del balance impositivo, las donaciones a que se refiere el inciso j) del artículo 65, se imputarán contra las rentas de la primera categoría. Si el monto de éstas fuera insuficiente, se aplicarán sucesivamente contra los réditos de la segunda, tercera y cuarta categoría.

Art. 68. — Los beneficiarios de regalías podrán deducir el 25 % de estos réditos, hasta la recuperación del capital invertido.

La dirección podrá autorizar la aplicación de coeficientes distintos al indicado, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen.

Art. 69. — No serán deducibles, sin distinción de categorías:

- a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia, salvo lo dispuesto en los artículos 20 al 22;
- b) Los intereses de los capitales pertenecientes al contribuyente invertidos en la empresa, las sumas retiradas a cuenta de las ganancias o en calidad de sueldo y todo otro concepto que importe un retiro a cuenta de utilidades.

Cuando se hubiesen deducido los importes a que se refieren tales conceptos, los mismos se adicionarán, a los efectos del balance impositivo, a la participación del dueño o socios a quienes correspondan;

- c) La remuneración o sueldo del cónyuge o parientes del contribuyente.

Cuando se demuestre una efectiva prestación de servicios, se admitirá deducir la remuneración abonada en la parte que no exceda a la retribución que usualmente se pague a terceros por la prestación de tales servicios, no pudiendo exceder a la abonada al empleado —no pariente— de mayor categoría, salvo disposición en contrario de la dirección;

- d) El impuesto de esta ley y los impuestos, tasas y derechos para adquirir, mantener o conservar capitales, como el impuesto, a la transmisión gratuita de bienes, la contribución de mejoras y de afirmados y los impuestos sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten y los impuestos al mayor valor y a los beneficios de capital;

- e) Las sumas invertidas en adquisición de bienes y en mejoras de carácter permanente y demás gastos vinculados con dichas operaciones (gastos causídicos en juicios sucesorios y otros, escrituración de propiedades, etcétera);

- f) Las utilidades del ejercicio que se destinen al aumento de capitales o a reservas de la empresa cuya deducción no se admite expresamente en esta ley;

- g) La amortización de llave, marcas y activos similares. La diferencia entre el valor de costo y el de venta será computable por el vendedor a los efectos del impuesto;

- h) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros de directorios, consejos u otros organismos directivos que actúen en el extranjero, ni los honorarios u otras remuneraciones pagadas por asesoramiento técnico-

financiero, etcétera, prestado desde el extranjero, salvo que al pagarse o acreditarse esas sumas se haya retenido e ingresado a la dirección el 20 % de las mismas en concepto de impuesto. Dicho pago será definitivo;

- i) Las donaciones no indicadas en el artículo 65 inciso j), las prestaciones de alimentos, ni los actos de liberalidad en dinero o en especie, salvo autorización de la dirección;
- j) Los quebrantos netos provenientes de operaciones ilícitas.

Deducciones especiales en la 1ª categoría

Art. 70. — Del rédito de la primera categoría, se deducirán también los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin, los contribuyentes deberán optar —para los inmuebles urbanos— por alguno de los siguientes procedimientos:

- a) Deducción de gastos reales a base de comprobantes;
- b) Deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5 % sobre la renta bruta del inmueble, por ciento que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto (reparaciones, gastos de administración, primas de seguros, etcétera).

Adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de cinco años, contados desde el período, inclusive, en que se hubiere hecho la opción.

La opción a que se refiere este artículo no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuenta de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales a base de comprobantes.

Para los inmuebles rurales, la deducción se hará, en todos los casos, por el procedimiento de gastos reales comprobados.

Deducciones especiales de la 3ª categoría

Art. 71. — Del rédito de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley podrán deducirse:

- a) Los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio;
- b) Los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables, de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. La dirección podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos;
- c) Los gastos de organización. La dirección admitirá su afectación al primer ejercicio o su amortización en un plazo no mayor de cinco años, a opción del contribuyente;
- d) Las sumas que las compañías de seguros, de capitalización y similares, destinen a integrar las previsiones por reservas matemáticas y reservas para riesgos en curso y similares, conforme con las normas impuestas sobre el particular por la Superintendencia de Seguros u otra dependencia oficial.

En todos los casos, las previsiones por reservas técnicas correspondientes al ejercicio anterior, que no hubiesen sido utilizadas para abonar siniestros, serán consideradas como beneficios y deberán incluirse en el rédito neto imponible del año;

- e) Las comisiones y gastos incurridos en el extranjero indicados en el artículo 9º, en cuanto sean justos y razonables;
- f) Las reservas que corresponde computar para cubrir las indemnizaciones por despido, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y en la forma que lo reglamente el Poder Ejecutivo;
- g) Los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, subsidios a clubes deportivos y, en general, todo gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes u obreros. También se deducirán las gratificaciones, aguinaldos, etcétera, que se paguen al personal dentro de los plazos en que, según la reglamentación, se debe presentar la declaración jurada correspondiente al ejercicio.

La dirección podrá impugnar la parte de las habilitaciones, gratificaciones, aguinaldos, etcétera, que exceda a lo que usualmente se abona por tales servicios, teniendo en cuenta la labor desarrollada por el beneficiario, importancia de la empresa y demás factores que pueden influir en el monto de la retribución.

Art. 72. — Las sociedades anónimas podrán deducir, a los efectos de la confección del balance impositivo, los beneficios que como mínimo y obligatoriamente deben separar para constituir el fondo de reserva legal.

El importe a deducir será, excepto para los bancos, el que surja de aplicar sobre la utilidad comercial del ejercicio, el 2 % —hasta integrar el 10 % del capital social— y en cuanto efectivamente se contabilice como reserva legal.

Si la reserva legal no se hubiere contabilizado en todo o en parte, por haber sido constituida en exceso en los ejercicios anteriores al de la imposición, será admisible en éste la deducción de la parte que corresponda por aplicación del procedimiento indicado en el párrafo anterior, en cuanto dicha parte se halle realmente cubierta por la reserva ya constituida.

En caso de sociedades con ejercicios anteriores al 1º de enero de 1943, se establecerá el monto de la reserva legal que a los mismos corresponde, aun cuando no hubiera sido contabilizada. En los ejercicios posteriores, sólo podrá deducirse la reserva que faltare constituir.

Los bancos podrán deducir, en concepto de reserva legal, el 10 % de la utilidad líquida anual, hasta que dicha reserva represente el 50 % de su capital realzado, y el capital y las reservas representen conjuntamente el 33 % de los depósitos de ahorro.

Se entiende por utilidad comercial, y utilidad líquida, la que surja de los balances y cuentas de ganancias y pérdidas aprobadas por la Inspección General de Justicia o por el Banco Central de la República Argentina, respectivamente.

La reserva legal que por aplicación de las normas expuestas hubiere sido deducida en el balance im-

positivo, soportará el gravamen en oportunidad de distribuirse a los accionistas o socios, o utilizarse para otros fines.

Art. 73. — Las reservas y previsiones que esta ley admite deducir en el balance impositivo, quedan sujetas al impuesto en el ejercicio en que se anulen los riesgos que cubrían (reserva para despido, etcétera).

Art. 74. — El monto de las amortizaciones para compensar el desgaste de los bienes empleados por el contribuyente para producir réditos gravados, se determinará anualmente, aplicando sobre el costo de los bienes, un porcentaje fijo establecido a base del número de años de vida útil probable de los mismos.

La dirección podrá establecer en casos especiales otros sistemas de amortización, siempre que sean técnicamente justificados y de uso comercial.

Cuando los bienes importados para destinarlos al activo fijo, lo sean por un importe superior al precio mayorista vigente en el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta la República Argentina, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el importador de la República y el exportador del exterior. En tales casos la diferencia que resulte no será amortizable ni deducible en forma alguna a los efectos impositivos.

A los efectos de la determinación del valor original de los bienes amortizables, no se computarán las comisiones pagadas y/o acreditadas a entidades del mismo conjunto económico, intermediarios en la operación de compra, salvo que se pruebe una efectiva prestación de servicios a tales fines. Sin embargo, el valor total del bien adquirido, incluso la comisión de compra, no podrá ser superior, en ningún caso, al que corresponda admitir por aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior.

Art. 75. — Las amortizaciones del artículo precedente —excepto las de inmuebles— en la parte relativa a equipos de explotación instalados o adquiridos desde el 1º de enero de 1927 y utilizados en las actividades comerciales, industriales y agropecuarias, podrán ser calculadas, a opción del contribuyente, con un aumento del 20 % sobre la cuota normal de amortización, para compensar el aumento del costo de reposición.

El Poder Ejecutivo podrá variar anualmente dicho porcentaje, de acuerdo con las circunstancias, dentro del indicado coeficiente.

La deducción a que se refiere este artículo, sólo podrá hacerse efectiva cuando se cumplan los requisitos que fije el reglamento y la dirección respecto a la individualización de los bienes.

El exceso de amortización que así se autorice deberá constituir una cuenta especial en el pasivo del negocio, y quedará sujeto al impuesto por el importe total de las cuotas acumuladas en caso de no utilizarse en la reposición de los bienes para que fuera constituido.

Estas disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º del decreto 18.229/43.

Art. 76. — En los casos de reorganización de sociedades o fondos de comercio, la dirección podrá disponer que el valor de los bienes de que se haga cargo la nueva entidad no sea superior, a los efectos de las amortizaciones, al que resulte deduciendo de los precios de costo de la sociedad antecesora, las

amortizaciones impositivas. Se entiende por reorganización de sociedades o fondos de comercio, las ventas, transferencias, fusiones, absorciones, consolidación, etcétera, de una entidad con otra que, a pesar de ser jurídicamente independiente, constituyan un mismo conjunto económico.

La misma disposición rige cuando las partes que intervienen en la reorganización no sean sociedades, y aun cuando la operación haya sido realizada con anterioridad a la promulgación de esta ley.

En los casos de ventas, transferencias, etcétera, de fondos de comercio, realizadas por personas que no constituyen un mismo conjunto económico, la dirección podrá, cuando el precio de transferencia sea superior al corriente en plaza, ajustar impositivamente el valor de los bienes amortizables a dicho precio de plaza y dispensar al excedente el tratamiento que dispone esta ley al rubro llave.

La dirección podrá dispensar análogo tratamiento, cuando lo juzgue conveniente, para los demás bienes transferidos.

Art. 77. — Cuando alguno de los bienes amortizables, salvo los inmuebles, quede fuera de uso (desuso), el contribuyente podrá optar entre seguir amortizándolo anualmente hasta la total extinción del valor original o imputar la diferencia que resulte entre el importe aún no amortizado y el precio de venta, en el balance impositivo del año en que éste se realice.

Deducciones especiales de la 4ª categoría

Art. 78. — En los casos de sueldos, jornales, dietas, honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas y otras retribuciones similares, sólo podrá deducirse como gasto necesario para obtener, mantener y conservar dichas rentas, el importe correspondiente al descuento que en concepto de aporte jubilatorio deben efectuar —de conformidad con las disposiciones legales en vigor— los titulares de tales rentas.

TITULO IV

Disposiciones especiales

Art. 79. — En el caso de empresas de construcción, etcétera, en que las operaciones generadoras del rédito afectan a más de un período fiscal, el resultado bruto de las mismas deberá ser declarado de acuerdo con alguno de los siguientes métodos, a opción del contribuyente:

- a) Asignando a cada período fiscal, el beneficio bruto que resulte de aplicar, sobre los importes cobrados, el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra.

Dicho coeficiente podrá ser modificado —para la parte correspondiente a ejercicios aun no declarados— en casos de evidente alteración de lo previsto al contratar.

Los porcentajes a que se ha hecho referencia precedentemente, se hallan sujetos a la aprobación de la dirección;

- b) Asignando a cada período fiscal, el beneficio bruto que resulte de deducir del importe a cobrar por todos los trabajos realizados en el mismo, los gastos y demás elementos determinantes del costo de tales trabajos.

Cuando la determinación del beneficio en la forma indicada no fuere posible o resultare dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta contenida en lo construido siguiendo un procedimiento análogo al indicado en el inciso a).

En el caso de obras que afecten a dos períodos fiscales, pero su duración total no exceda de un año, el resultado podrá declararse en el ejercicio en que se termina la obra. La dirección, si lo considera justificado, podrá autorizar igual tratamiento para aquellas obras que demoren más de un año, cuando tal demora sea motivada por circunstancias especiales (huelga, falta de material, etcétera).

En los casos de los incisos a) y b), la diferencia en más o menos que se obtenga en definitiva, resultante de comparar la utilidad bruta final de toda la obra con la establecida mediante alguno de los procedimientos indicados en dichos incisos, deberá incidir en el año en que la obra se concluya.

Elegido un método, el mismo deberá ser aplicado a todas las obras, trabajos, etcétera, que efectúe el contribuyente y no podrá ser cambiado sin previa autorización expresa de la dirección, la que determinará a partir de qué período fiscal futuro podrá cambiarse de método.

Art. 80. — En los casos de enajenación de bienes con sus frutos, no extraídos a la época de la venta, permuta, etcétera (tales como: viñedos, plantaciones de frutales, plantaciones de álamos y similares) el vendedor deberá abonar el impuesto sobre la ganancia obtenida en la enajenación de tales frutos.

Cuando con los elementos en poder del contribuyente no sea posible determinar la ganancia obtenida, la dirección procederá a apreciarla a base de índices, coeficientes y demás elementos conducentes a tal fin.

Art. 81. — En las explotaciones de minas, canteras u otras que impliquen un consumo de la substancia productora del rédito, se admitirá, proporcionalmente al agotamiento una amortización del precio de costo y gastos incurridos para obtener la concesión en su caso.

La dirección podrá autorizar otros sistemas siempre que sean técnicamente justificados y de uso comercial.

En los casos de bosques naturales y similares, corresponderá la deducción del agotamiento de la substancia productora del rédito, cuando en virtud de la tala que a tal fin se efectúe, se origine una depreciación del valor del inmueble o se reduzca su rendimiento económico.

Art. 82. — En el caso de bosques cedidos en explotación, el beneficio que obtiene el cedente está sujeto al gravamen, aun cuando se trate de una sola operación.

La dirección fijará los coeficientes de beneficio bruto que se obtienen en explotaciones de bosques naturales, cuando con los elementos del contribuyente, ello no fuera factible.

Art. 83. — Cuando en esta ley se dice: «La dirección», deberá entenderse «La Dirección General del Impuesto a los Réditos».

TITULO V

Tasas del impuesto para personas de existencia visible y sucesiones

Art. 84. — Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas —mientras no exista declaratoria

de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad— abonarán la tasa básica del 5 % sobre los réditos netos sujetos a impuesto.

Cuando esos réditos excedan de \$ 5.000, los contribuyentes citados en el apartado anterior pagarán, además, una tasa adicional progresiva de acuerdo con la siguiente escala:

Réditos netos impositibles anuales

\$ m/n.	\$ m/n.	\$ m/n.
De 5.000 a 10.000	pagarán el 2 % sobre el excedente de 5.000	
" 10.000 " 15.000	" 100 más el 4 % sobre el excedente de 10.000	
" 15.000 " 20.000	" 300 " 6 % " " " " 15.000	
" 20.000 " 30.000	" 600 " 8 % " " " " 20.000	
" 30.000 " 40.000	" 1.400 " 10 % " " " " 30.000	
" 40.000 " 50.000	" 2.400 " 12 % " " " " 40.000	
" 50.000 " 75.000	" 3.600 " 14 % " " " " 50.000	
" 75.000 " 100.000	" 7.100 " 16 % " " " " 75.000	
" 100.000 " 250.000	" 11.100 " 18 % " " " " 100.000	
" 250.000 " 500.000	" 38.100 " 19 % " " " " 250.000	
" 500.000 " 750.000	" 85.600 " 20 % " " " " 500.000	
" 750.000 " 1.000.000	" 135.600 " 21 % " " " " 750.000	
" 1.000.000 y más	" 188.100 " 22 % " " " " 1.000.000	

Cuando corresponda el recargo por ausentismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley.

TITULO VI

Disposiciones transitorias

Art. 85. — Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes se aplicarán en la siguiente forma:

Para los particulares, y las sucesiones indivisas cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los réditos que perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 1º de enero de 1946. Para las rentas de primera categoría, se estará a lo dispuesto por el artículo 17.

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o personas asimiladas a comerciantes por la dirección, sobre todo los réditos netos que arrojen sus ejercicios comerciales anuales cerrados en el año 1946.

Art. 86. — Los contribuyentes mencionados en los apartados primero y segundo del artículo 50, que cierran ejercicios anuales que abarquen parte de los años 1945 y 1946, deducirán del impuesto del año 1946 que resulta de la aplicación de esta ley, un 2 % sobre la parte proporcional —en función al tiempo— de la renta correspondiente al año 1945, en la forma que disponga la reglamentación.

En cuanto a las sociedades mencionadas en el artículo 56, que cierran balances que abarquen parte de los años 1945 y 1946, deberán abonar el 15 % establecido en el artículo citado, solamente sobre la parte de las utilidades atribuibles al año 1946, determinadas en función al tiempo, salvo que, a la fecha

de la sanción del presente decreto ley, se hubieren distribuido los dividendos. En este caso, la sociedad deberá ingresar como pago definitivo, el 5 % sobre el monto de las utilidades no distribuidas correspondientes a dicho año y los agentes pagadores, a su vez, deberán retener e ingresar un 10 % complementario sobre los dividendos acreditados o girados al exterior, cuando tal retención fuera factible; de lo contrario deberán suministrar a esta dirección la nómina de los beneficiarios, bienes que poseen en el país, nombre de sus representantes y sus domicilios y demás informaciones que se les requiera, tendientes a hacer efectiva la suma adeudada.

Art. 87. — Cuando los accionistas perciban dividendos distribuidos con posterioridad a la sanción de este decreto ley, correspondientes a ejercicios que abarquen parte de los años 1945 y 1946, computarán como pago a cuenta de dichos dividendos, las sumas que resulten de aplicar las siguientes normas:

- Si la tasa general del conjunto de sus réditos es igual o superior a la tasa promedio que corresponde abonar a la sociedad (10 % y 15 % para las utilidades correspondientes a los años 1945 y 1946, respectivamente), deducirán el importe que resulte de aplicar dicho porcentaje promedio, sobre los dividendos percibidos;
- Si la tasa general del conjunto de sus réditos es inferior a la tasa promedio a que se refiere el párrafo anterior, sólo deducirán el importe que resulte de aplicar la tasa general citada, sobre los dividendos percibidos.

Si los dividendos han sido distribuidos con anterioridad a la sanción de este decreto ley, los accionistas computarán como pago a cuenta, las sumas que se les ha retenido conforme con las disposiciones del decreto 18.229/43.

TITULO VII

Distribución del producido del impuesto.

Art. 88. — La recaudación del impuesto a los réditos se distribuirá anualmente entre la Nación, la municipalidad de la Capital Federal y el conjunto de las provincias, en la siguiente forma: 82,5 % para la Nación y 17,5 % para la municipalidad de la Capital Federal y las provincias.

Art. 89. — La parte que corresponde a la municipalidad de la Capital Federal y las provincias se distribuirá entre ellas en la siguiente forma:

- a) El 30 % de acuerdo con la población que a cada provincia asigne el último censo nacional aprobado por ley.
- b) El 30 % de acuerdo con el monto de los gastos presupuestados en 1934;
- c) El 30 % de acuerdo con los recursos percibidos por la provincia cada año inmediato anterior, con exclusión de los provenientes del crédito de 1934;
- d) El 10 % de acuerdo con la recaudación del impuesto a los réditos, dentro de la jurisdicción de cada provincia, cada año inmediato anterior.

A la Capital Federal se le asignará la participación, aplicando los índices establecidos en los incisos a), b) y c).

El mayor rendimiento del impuesto en virtud de las modificaciones que se introducen al régimen actual, ingresará totalmente y con carácter transitorio a rentas generales.

En consecuencia y hasta nueva disposición, la participación de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, deberá efectuarse tomando como cifra máxima la suma distribuida en 1945.

Art. 90. — Para participar en la recaudación del impuesto a los réditos, las provincias deberán cumplir con las obligaciones que como agentes de referencia les fija esta ley y la 11.683 (texto ordenado) y las de las leyes que modifiquen o substituyan esta última.

Los gobiernos de provincias podrán conservar en su poder el importe del impuesto a los réditos que corresponde sobre los intereses de los títulos que emitan, sueldos, jubilaciones y pensiones provinciales en su jurisdicción, en cuyo caso se les computará a cuenta de la cuota global que les asigne esta ley.

Art. 91. — El Poder Ejecutivo liquidará trimestralmente a las provincias y a la Municipalidad de la Capital Federal, las sumas que les corresponda por aplicación de los artículos 88 y 89. Dentro del plazo de cinco días a partir de la terminación de cada trimestre, el gobierno nacional depositará esa suma a la orden de los gobiernos respectivos, en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 92. — Las sumas adeudadas a la fecha por las provincias comprendidas en la ley 11.721, serán abonadas con el 20 % anual que corresponda a las mismas en concepto de participación en el producido del impuesto a los réditos, estando autorizado el Poder

Ejecutivo nacional para retener ese 20 % cada vez que haga efectiva las entregas correspondientes.

Art. 2º — El presente decreto ley, que regirá hasta el 31 de diciembre de 1955, se aplicará a los réditos que, de conformidad con las disposiciones precedentes, deben ser incluidos en el año fiscal 1946 ó siguientes. Para los períodos anteriores al año fiscal 1946, serán de aplicación las normas contenidas en la ley 11.682 (texto ordenado) y en el decreto 18.229/43 y sus disposiciones complementarias.

Art. 3º — Deróganse las disposiciones que se opongan a las establecidas en el presente decreto ley.

Art. 4º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 5º — Publíquese, etc.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta. — Abelardo Pantin. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — José M. Astigueta. — Juan I. Cooke. — F. Pedro Marotta.

DECRETO 14.341/46

Modificando la ley 11.683 (texto ordenado) de procedimiento en materia de impuesto a los réditos

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase la ley 11.683 (texto ordenado) conforme a las disposiciones que se expresan a continuación:

CAPÍTULO I

Impuestos y derechos. — Autoridades administrativas

Artículo 1º — La Dirección General del Impuesto a los Réditos intervendrá, con sujeción a las leyes y disposiciones respectivas, en las cuestiones referentes al impuesto a los réditos, impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios, impuesto a las ventas, impuesto de sellos, impuesto de patentes, impuesto a los pasajes al exterior, impuesto a los espectáculos deportivos y profesionales, impuestos de emergencia a las apuestas de los hipódromos de carreras, canon minero y contribución sobre petróleo crudo y gas, derecho de inspección de sociedades anónimas y asociaciones civiles, sobre precio de combustibles, impuesto para aprendizaje e inspección y sumarios de cambios y control de movimiento de fondos al exterior. (Respecto de los últimos, hasta tanto el Banco Central de la República se haga cargo de ellos, de conformidad con lo que dispone el decreto 12.596/46). En idéntica condición intervendrá con respecto a otros gravámenes cuya percepción se le encomienda.

Dirección general

Art. 2º — En lo que se refiere a la aplicación y percepción de los impuestos y derechos, con arreglo

a las leyes respectivas, y a la organización y funcionamiento de la dirección general, como entidad autónoma, en cuanto a asuntos administrativos, las facultades y deberes de las autoridades de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, que las constituyen un consejo y los gerentes, serán los que se señalan en los artículos siguientes.

Consejo

Art. 3º — El consejo, compuesto por cinco contribuyentes que designará el Poder Ejecutivo por un período de tres años, representará oficialmente a la dirección general, excepto en los casos previstos en el artículo 9º, en que la representación es ejercida por el gerente general. El consejo dictará su reglamento interno, elegirá sus autoridades y propondrá al Poder Ejecutivo el nombramiento del gerente general y del gerente, quienes serán también miembros del consejo con voz pero sin voto, y sin poder presidirlo. En las actas de las reuniones del consejo se dejará expresa constancia de las opiniones del gerente general y del gerente, cuando sean contrarios al voto de la mayoría.

Art. 4º — El consejo tendrá amplias facultades para proponer al Poder Ejecutivo las disposiciones que complementen o reglamenten esta ley y las de los impuestos, derechos, etcétera, a cargo de la dirección general. Cuando la opinión del gerente general sea total o parcialmente distinta al voto de la mayoría de los miembros del consejo, se agregará al proyecto un informe que contenga los fundamentos de la disidencia.

A propuesta del gerente general, el consejo podrá también impartir normas generales obligatorias para los contribuyentes y demás responsables, en aquellas materias en que las leyes autorizan a la dirección general para reglamentar la situación de los contribuyentes, otros responsables y terceros, frente a la administración. Dichas normas estarán en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y mientras no sean modificadas por el mismo consejo o por el Poder Ejecutivo. En particular, dichas normas se dictarán con relación a los siguientes puntos: promedio, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, como así para fijar el valor de las transacciones de importación o exportación a los fines de simplificar la aplicación del impuesto a las ventas; inscripción de responsables, forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, plazos y formas extrínsecas de la percepción de los impuestos y derechos, pagos a cuenta de los mismos, accesorios y multas, intervención y supresión de agentes de retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los contribuyentes, demás responsables y terceros, y término durante el cual deberán conservarse aquéllos y los documentos y demás comprobantes; deberes de unos y otros ante los requerimientos tendientes a realizar una verificación, y cualquier otra medida que sea conveniente para facilitar la recaudación; tipo de interés que devengarán las prórrogas, y exención total o parcial, con carácter general, de recargos e intereses punitivos.

Art. 5º — El consejo tendrá la función de interpretar con carácter general las disposiciones de esta ley y de las que rigen los impuestos y demás gravámenes, cuando así lo soliciten el gerente general, el gerente, los contribuyentes, agentes de retención

y demás responsables, entidades gremiales y cualquier otra organización que represente un interés colectivo, siempre que el pronunciamiento promovido ofrezca interés general. El pedido de tal pronunciamiento no tendrá por virtud suspender cualquier decisión que los demás funcionarios de la dirección hayan de adoptar en casos particulares.

Las interpretaciones del consejo se publicarán en el Boletín Oficial, y entrarán en vigor al expirar el plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de su publicación, si dentro de ese término no fueran apeladas, ante el Ministerio de Hacienda, por el gerente general o cualesquiera de las personas o entidades mencionadas en el párrafo anterior; en cuyo caso comenzarán a regir desde el día siguiente a aquel en que se publique la aprobación o modificación de dicho ministerio.

El consejo podrá modificar sus propias interpretaciones en las condiciones y con los requisitos ya previstos, pero deberá solicitar la intervención del Ministerio de Hacienda cuando éste ya se hubiera pronunciado en las mismas con motivo de una apelación.

Art. 6º — El consejo está plenamente facultado para resolver y aprobar todos los sueldos y gastos de la dirección, como para decidir acerca de las propuestas de los gerentes sobre los siguientes puntos: organización y reglamentación del funcionamiento interno de la dirección; creación, supresión, organización y funciones de las oficinas; reglamento del personal, condiciones de ingreso; sanciones; nombramientos; ascensos; descensos de categoría y traslados del personal; licencias extraordinarias y modo en que debe distribuirse anualmente el fondo estímulo. Anualmente el consejo elevará al Poder Ejecutivo el presupuesto de la dirección para su aprobación.

El consejo podrá contratar los trabajos y suministros en las siguientes condiciones: si el monto excede de \$ 5.000 moneda nacional, se procederá, por regla general, al llamado de licitación pública, quedando no obstante el consejo autorizado a prescindir de esta formalidad cuando las circunstancias del caso lo aconsejen y llamar a concurso privado de precios, forma que se aplicará también a las compras, etcétera, menores de \$ 5.000 moneda nacional y mayores de \$ 300 moneda nacional, en los casos previstos en el artículo 33 de la ley 428, autorizando y aprobando los contratos respectivos. El consejo podrá autorizar a funcionarios de la dirección para que la representen en la firma de los contratos.

Art. 7º — Fuera de lo que dispone el artículo 5º, el gerente general podrá apelar ante el Ministerio de Hacienda de toda otra resolución o disposición del consejo, dentro de los tres días de haberle sido comunicada; en cuyo caso la decisión apelada entrará en vigencia cuando aquel departamento la ratifique o modifique.

Asimismo, transcurridos sesenta días sin que el Consejo haya dictado resolución sobre iniciativas o propuestas de los gerentes, les quedará a éstos el derecho de elevar las actuaciones al Ministerio de Hacienda.

Gerente general

Art. 8º — El gerente general será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del consejo, y permanecerá en su cargo mientras dure su buen desempeño. Representa a la dirección general ante los poderes públicos, responsables y terceros, en el ejer-

cicio de sus atribuciones; es miembro del consejo en las condiciones previstas en el artículo 3º y jefe máximo y superior jerárquico de todos los funcionarios y empleados de la dirección.

Art. 9º. — Son atribuciones propias del gerente general, además de las ya previstas en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º:

- a) Dirigir la actividad del organismo administrativo mediante el ejercicio de todas las funciones, poderes y facultades que las leyes y otras disposiciones encomienden al mismo o asignen a la dirección general, con excepción de las expresamente conferidas al consejo;
- b) Proponer a este cuerpo la adopción de las medidas relacionadas con el personal, la organización y el funcionamiento de la dirección general, a que hace referencia el artículo 6º;
- c) Ejercer las funciones de juez administrativo, sin perjuicio de la sustitución prevista en el artículo 11, en la determinación y estimación de oficio de la materia imponible y gravamen correspondiente, en las repeticiones, en la aplicación de multas y resolución de los recursos de reconsideración;
- d) Dirigir la defensa del fisco en toda clase de juicios en que éste intervenga con motivo de impuestos, otros gravámenes y multas concernientes a la dirección general;
- e) Informar al Poder Ejecutivo en los casos particulares que se susciten con motivo de la aplicación de los impuestos y multas.

Gerente

Art. 10. — El gerente será designado en las mismas condiciones que el gerente general. Además de las facultades propias que la ley le concede, y sin perjuicio de su dependencia jerárquica respecto de aquél, lo sustituirá con iguales atribuciones y deberes en caso de ausencia, impedimento de cualquier género, o con arreglo a la distribución de tareas que se estableciere al reglamentar la organización de las funciones de la gerencia.

Substitución

Art. 11. — El Poder Ejecutivo, a propuesta del consejo, determinará qué funcionarios y en qué medida sustituirán a los gerentes en sus funciones de jueces administrativos en especial con respecto a las oficinas del interior y al funcionario a cargo del departamento de sellos.

CAPÍTULO II

Disposiciones generales

Principios de interpretación y aplicación de las leyes

Art. 12. — En la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando no sea posible

fijar, por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, concepto o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado.

Art. 13. — Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometían esas actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrece o autorice para configurar adecuadamente la causal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá, en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes, o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos.

Domicilio fiscal

Art. 14. — El domicilio de los contribuyentes y responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de los impuestos, es el domicilio general (real o, en su caso, legal) legislado en el Código Civil. Será este domicilio el que ellos deben consignar en las declaraciones juradas y escritos que presenten a la dirección general.

Sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se haya efectuado la traslación del anteriormente mencionado.

La dirección podrá admitir la constitución de domicilio especial en aquellos casos en que se considere que de ese modo se facilita la determinación y percepción de los impuestos.

Todo contribuyente o responsable que haya enviado una vez una declaración jurada u otra comunicación a la dirección, está obligado a denunciar todo cambio de domicilio dentro de los cinco días de efectuado, bajo las sanciones de esta ley. Incurrirá igualmente en infracción el contribuyente o responsable que consigne en sus declaraciones o escritos un domicilio distinto del real.

Sin perjuicio de lo expuesto, la dirección podrá reputar subsistente para todos los efectos administrativos y judiciales el último domicilio consignado en la declaración jurada, comunicación o escrito, mientras no se denuncie otro.

Cuando el contribuyente se domicilie en el extranjero y no tenga representante en el país, o no se pueda establecer el domicilio de éste, se considerará como domicilio fiscal el del lugar de la República en que el contribuyente tenga su principal negocio o explotación o la principal fuente de sus rentas, o, subsidiariamente, el lugar de su última residencia en el país.

Términos

Art. 15. — Para todos los términos establecidos en la presente ley, se computan únicamente los días hábiles.

CAPÍTULO III

Sujetos de los deberes impositivos

Responsables por deuda propia

Art. 16. — Están obligados a pagar el impuesto al fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de sus deudas tributarias: los que sean contribuyentes según las leyes respectivas; sus herederos y legatarios, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio, con respecto a estos últimos, de la situación prevista en el artículo 19, inciso 4º.

Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes impositivas, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria:

- 1º Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho común;
- 2º Las personas jurídicas del Código Civil, y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derechos;
- 3º Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y aun los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes impositivas como unidades económicas para la atribución del hecho imponible;
- 4º Las sucesiones indivisas por sus réditos, en las condiciones previstas en la ley respectiva;
- 5º Los esposos por sus réditos propios, entendiéndose, por tales, con prescindencia del carácter ganancial que el Código Civil asigna a las rentas de los cónyuges, los réditos producidos por los bienes propios o por la actividad personal de cada esposo, los obtenidos por la explotación de bienes adquiridos con el producto de la actividad personal de la esposa, y, en general, aquellos que cada cual tiene la facultad de disponer de acuerdo con el derecho civil; con la salvedad de que se atribuirán a cada cónyuge, proporcionalmente al valor económico de los respectivos aportes, los obtenidos en empresas o explotaciones en que concurren capitales y actividades de uno y otro.

Responsables del cumplimiento de la deuda ajena.

Art. 17. — Están obligados a pagar el impuesto al fisco con los recursos que administran o de que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o especialmente se fijen para tales responsables, y bajo pena de las sanciones de esta ley:

- 1º El cónyuge que perciba y disponga de todos los réditos propios del otro;
- 2º Los padres, tutores y curadores de los incapaces;
- 3º Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos civiles, representantes de sociedades en liquidación, los adminis-

tradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, en forma conjunta el cónyuge supérstite y los herederos;

- 4º Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 16 en sus incisos 2º y 3º;
- 5º Los administradores de patrimonios, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar integralmente la materia imponible que gravan las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquéllas, y pagar el gravamen correspondiente; y, en las mismas condiciones, los mandatarios con facultades de percibir dinero;
- 6º Los agentes de retención de los impuestos.

Deberes formales de los responsables

Art. 18. — Las personas mencionadas en los incisos 1º, 2º y 3º del artículo anterior tienen que cumplir, por cuenta de los representados y titulares de los bienes que administran o liquidan, los deberes que esta ley y las leyes impositivas imponen a los contribuyentes en general para los fines de la determinación, verificación y fiscalización de los impuestos.

Las personas mencionadas en los incisos 4º y 5º de dicho artículo tienen que cumplir los mismos deberes que para esos fines incumben también a las personas, entidades, etcétera, con que ellos se vinculan.

Responsables en forma personal y solidaria con los deudores

Art. 19. — Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:

- 1º Todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 17 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes impositivos, no abonaran oportunamente el debido impuesto, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a los que demuestran debidamente a la dirección que sus representados, mandantes, etcétera, los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales;
- 2º Sin perjuicio de lo que el inciso anterior dispone con carácter general, los síndicos y/o liquidadores de las quiebras y concursos que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso del impuesto adeudado por el contribuyente por períodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio; en particular, si antes de tener lugar la reunión de acreedores o la distribución de fondos no han requerido de la dirección la constancia de la deuda impositiva del contribuyente;
- 3º Los agentes de retención por el impuesto que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar a la dirección dentro de los cinco días

siguientes a aquel en que correspondía efectuar la retención, si no acreditaren que los contribuyentes han pagado el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria que para abonarlo existe a cargo de éstos desde el vencimiento del plazo señalado;

- 4º Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las leyes impositivas consideran como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no cumplieran la intimación administrativa de pago del impuesto adeudado. Esta responsabilidad caducará un año después de la comunicación que el sucesor particular haga a la dirección general de haberse efectuado la transferencia;
- 5º Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes impositivos a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del impuesto.

Responsabilidad por los subordinados

Art. 20. — Los obligados y responsables de acuerdo con las disposiciones de esta ley, lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes.

CAPÍTULO IV

Determinación y percepción de los impuestos. Declaración jurada

Art. 21. — La determinación y percepción de los impuestos a los réditos, a las ventas y demás gravámenes que se recauden de acuerdo con la presente ley, se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los impuestos en la forma y plazos que establecerá la dirección general. Cuando ésta lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva esa obligación a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes, y demás responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes impositivas.

Art. 22. — La declaración jurada está sujeta a la verificación administrativa, y, sin perjuicio del impuesto que en definitiva determine la dirección, hace responsable al declarante por el que de ella resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma.

El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que aquélla contenga, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer aquella responsabilidad.

Determinación de oficio

Art. 23. — Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la dirección procederá a determinar de oficio la obligación impositiva, sea en forma directa, por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

La determinación del impuesto quedará cumplida, en el primer caso, con la sola intimación administrativa del pago; en cuanto al segundo, deberá seguirse el procedimiento que establecen los artículos 24, 25 y 26.

La determinación de oficio, cierta o presuntiva, no podrá ser modificada por la dirección en perjuicio del contribuyente por aplicación de nuevas interpretaciones de las normas impositivas o por el empleo de otros procedimientos técnicos en la determinación del impuesto, salvo cuando deban considerarse nuevos elementos de hecho.

En el procedimiento de la determinación cierta o presuntiva no podrá el interesado objetar la interpretación que la dirección haga de las normas impositivas, ni la procedencia de su aplicación al caso concreto, pero estará facultado para alegar sobre cuestiones de hecho. Sólo en el recurso de repetición se podrá discutir sin restricciones la determinación efectuada.

Determinación presuntiva

Art. 24. — Cuando al ejercer las facultades de verificación la dirección se encuentre en la imposibilidad de determinar en forma directa y cierta la materia imponible, sea porque el contribuyente no tenga o no exhiba los libros, registros y comprobantes debidos, sea porque los exhibidos no merezcan fe o sean incompletos, se le emplazará para que dentro del término de quince días presente declaraciones juradas, o, si las hubiera presentado, ratifique o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los comprobantes de los datos denunciados.

Si, no obstante los elementos de juicio aportados por el contribuyente y los recogidos por la dirección, no pudiera determinarse en forma cierta el impuesto, se estimará de oficio la materia imponible mediante resolución fundada, con el consiguiente requerimiento de pago del impuesto que resultara adeudarse.

No será necesario dictar la resolución estimando de oficio o el emplazamiento arriba previsto, si antes de uno u otro acto prestase el contribuyente su conformidad con la liquidación presuntiva que hubiera practicado la dirección, la que surtirá entonces los mismos efectos que una declaración jurada.

Art. 25. — La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa de habitación, el nivel de vida del contribuyente, y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la dirección, o que deberán proporcionarle los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etcétera.

En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca el Consejo de la Dirección General con relación a explotaciones de un mismo género.

A los efectos de este artículo podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que los réditos netos de personas de existencia visible equivalen por lo menos a tres veces el alquiler que paguen, o el que se les compute de acuerdo con el artículo respectivo de la ley de impuesto a los réditos, por su casa habitación.

Se considerarán asimismo como réditos del ejercicio fiscal en que se produzcan, los aumentos de capital cuyo origen, no pruebe el interesado.

Recurso contra la estimación de oficio

Art. 26. — La estimación de oficio quedará firme a los quince días de notificada la resolución respectiva, si dentro de dicho término no se interpone recurso de reconsideración. En este caso, la resolución que recaiga deberá cumplirse dentro de los quince días de su notificación.

Si la estimación resultare inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley, y sin perjuicio de la nueva determinación de oficio que haga la dirección general en las condiciones previstas en el artículo 23, párrafo 3°.

CAPÍTULO V

Del pago

Art. 27. — El pago de los impuestos que resulten de las declaraciones juradas deberá ser hecho por los responsables dentro de los plazos generales que la dirección establezca para la presentación de aquéllas. En cuanto al pago de los impuestos determinados por la dirección, deberá ser efectuado dentro de los quince días de notificada la liquidación respectiva.

Anticipos

Art. 28. — Podrá la dirección exigir, dentro del período fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta del impuesto que se deba abonar al término de aquél, los que se fijarán proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del impuesto correspondiente al período inmediato anterior.

Percepción en la fuente

Art. 29. — La percepción de los impuestos se hará en la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas y cuando la dirección, por considerarlo conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención.

Forma de pago

Art. 30. — El pago de los impuestos, intereses, recargos y multas se hará mediante depósito en las cuentas especiales del Banco Central de la República Argentina, del Banco de la Nación Argentina y de los bancos particulares que la dirección autorice a ese objeto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario, sobre Buenos Aires, y a la orden de la Dirección General del Impuesto a los Réditos. Para ese fin la dirección abrirá cuentas en los bancos oficiales, y aun en los particulares cuando lo juzgue conveniente para facilitar la percepción de los gravámenes.

Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras en el Banco Central de la República Argentina, se entregarán diariamente a la Tesorería General de la Nación, con excepción de las siguientes cantidades: \$ 60.000, para la cuenta «Impuesto a los réditos»; \$ 30.000, para la cuenta «Impuesto a las ventas»; \$ 10.000, para la cuenta «Impuesto de sellos», y \$ 5.000, para cada uno de los otros impuestos, cuya percepción esté a cargo de la dirección general, que quedarán permanentemente a disposición de ésta para atender los pedidos de devolución más urgentes.

Art. 31. — Si la dirección considerara que la aplicación de las disposiciones relativas a la percepción previstas por las leyes no resultan adecuadas o eficaces para la recaudación, o la perjudicasen, podrá desistirse de ellas, total o parcialmente, y disponer otras formas y plazos de ingreso.

Lugar de pago

Art. 32. — El pago del impuesto deberá hacerse en el lugar del domicilio del responsable en el país, o en el de su representante, en caso de ausencia. El pago del impuesto retenido deberá efectuarse en el lugar del domicilio del agente de retención.

Cuando haya varios domicilios, o el domicilio no pudiera determinarse, o no se conociese el del representante en caso de ausencia del responsable, la dirección fijará el lugar del pago.

Imputación

Art. 33. — Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieran y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refieren, la dirección determinará a cuál de las obligaciones no prescritas deberán imputarse los pagos o ingresos.

Art. 34. — El importe de impuesto que deben abonar los responsables en las circunstancias previstas por el artículo 27, primera parte, de esta ley, será el que resulte de deducir del total del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare, las cantidades pagadas a cuenta del mismo, las retenciones sufridas por hechos gravados cuya denuncia incluya la declaración jurada y los saldos favorables ya acreditados por la dirección o que el propio responsable hubiera consignado en declaraciones juradas anteriores, en cuanto éstas no hayan sido impugnadas. Sin la conformidad de la dirección general no podrán los responsables deducir del total del impuesto que les corresponda abonar otras cantidades que las provenientes de los conceptos indicados.

Compensación

Art. 35. — La dirección general podrá compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de impuestos declarados por aquél o determinados por la dirección y concernientes a períodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos gravámenes. Igual facultad tendrá para compensar multas firmes con impuestos y accesorios y viceversa.

Acreditación y devolución

Art. 36. — Como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior, o cuando compruebe la existencia de pagos o ingresos excesivos, podrá la dirección general de oficio o a solicitud del interesado, acreditarle el remanente respectivo, o, si lo estima necesario, en atención al monto y a las circunstancias, proceder a la devolución de lo pagado de más en forma simple y rápida, a cargo de las cuentas recaudadoras.

Intereses y costas

Art. 37. — La dirección general podrá disponer el pago directo de intereses y costas causídicos (honorarios, etcétera), aprobados en juicio, con fondos de las cuentas recaudadoras y cargo de oportuno reintegro a las mismas. Estos pagos se efectuarán mediante consignación judicial, observándose en lo pertinente las disposiciones del decreto 21.633/45 (1).

Este régimen será de aplicación en todos los casos de impuestos, derechos o contribuciones a cargo de la dirección, respecto de los cuales se halle o, fuera, autorizada para hacer directamente devoluciones con fondos de las cuentas recaudadoras.

Pago provisional de impuestos vencidos

Art. 38. — En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales, y la dirección conozca por declaraciones o determinación de oficio la medida en que les ha correspondido tributar impuesto en períodos anteriores, les emplazará para que dentro de un término de quince días (15) presenten las declaraciones juradas e ingresen el impuesto correspondiente.

Si dentro de dicho plazo los responsables no regularizaran su situación, la dirección, sin otro trámite, podrá requerirles judicialmente el pago a cuenta del impuesto que en definitiva les corresponda abonar, de una suma equivalente a tantas veces el total del impuesto ingresado por el último período fiscal declarado o determinado, cuantos sean, los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones.

Luego de iniciado el juicio de apremio, la dirección no estará obligada a considerar la reclamación del contribuyente contra el importe requerido sino por vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses y recargos que corresponda.

Si como consecuencia del emplazamiento a que se refiere este artículo, se comprobare la necesidad de proceder a la estimación de oficio, podrá prescindirse del emplazamiento previo a la misma, que prescribe el artículo 24.

Prórroga

Art. 39. — La dirección podrá conceder en casos especiales prórroga para el pago de los impuestos, recargos, intereses punitivos y penalidades ejecutoriadas ante la dirección, con garantía real o personal o sin ella, devengando entonces el importe respectivo un interés a favor del fisco, a fijarse por la dirección que no puede bajar del cinco por ciento anual.

CAPÍTULO VI

Verificación y fiscalización

Art. 40. — Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá la dirección exigir que éstos, y aun los terceros, cuando fuere realmente necesario, lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible, siempre que no se trate de comerciantes matriculados que lleven libros rubricados en forma correcta, que a juicio de la dirección haga fácil su fiscalización y registren todas las operaciones que interese verificar. Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes, y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas.

Podrá también exigir que los responsables otorguen determinados comprobantes y conserven sus duplicados, así como los demás documentos y comprobantes de sus operaciones por un término de diez años, o excepcionalmente por un plazo mayor, cuando se refieran a operaciones o actos cuyo conocimiento sea indispensable para la determinación cierta de la materia imponible.

Art. 41. — La dirección general tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados y responsables, den a las leyes, reglamentos y resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando el contenido y exactitud de las declaraciones juradas o la situación de cualquier presunto responsable que no las hubiera presentado.

En el desempeño de esa función la dirección general podrá:

- 1º Citar al firmante de la declaración jurada, al presunto contribuyente o responsable, o a cualquier tercero que a juicio de la dirección tenga conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquéllos, para contestar o informar, verbalmente o por escrito, según ésta estime conveniente, y dentro de un plazo que se fijará prudencialmente en atención al lugar del domicilio del citado, todas las preguntas o los requerimientos que se les hagan sobre las rentas, ventas, ingresos, egresos y, en general, sobre las circunstancias y operaciones que a juicio de la dirección estén vinculadas al hecho imponible previsto por las leyes respectivas;
- 2º Exigir de los responsables y terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran al hecho precedentemente señalado;
- 3º Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros, que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzgue vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas. La inspección a que se alude podrá efectuarse aún concomitantemente con la realización o ejecución de los actos u operaciones que interese a la fiscalización.

Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en el inciso 1º, o cuando se examinen libros, papeles, etcétera, se dejará constancia en actas de la existencia o indivi-

dualización de los elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que extenderán los funcionarios y empleados de la dirección, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba en los juicios respectivos;

4º Requerir por medio del gerente general, el gerente y demás funcionarios, especialmente autorizados para estos fines por la dirección, el auxilio inmediato de la fuerza pública, cuando tropezasen con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuere menester para hacer comparecer a los responsables y terceros o cuando fuere necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento. Dicho auxilio deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido, y, en su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal;

5º Recabar orden de allanamiento del juez federal o letrado respectivo, por medio de los funcionarios mencionados en el inciso anterior, orden que deberá ser despachada por el juez dentro de las 24 horas, habilitando los días y horas inhábiles que fueran necesarios.

CAPÍTULO VII

Infracciones y sanciones

Recargos

Art. 42. — La falta de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta, hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar juntamente con aquéllos los recargos que se establecen a continuación:

Hasta un mes de retardo el 10 % del impuesto.

Hasta dos meses de retardo el 15 % del impuesto.

Hasta tres meses de retardo o más, el 20 % del impuesto.

Los términos indicados se computarán, aun cuando se trate de importes determinados por la dirección, desde la fecha del vencimiento del período fiscal a que se refieren y con relación a aquella en que se paguen o se disponga su cobro judicial.

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la dirección al recibir el pago de la deuda principal, y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta.

El consejo podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos.

Multas por infracciones formales

Art. 43. — Los infractores a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes impositivas, de los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, de las instrucciones impartidas por el Consejo de la Dirección General y de las disposiciones administrativas de los gerentes que establezcan o requieran el cumplimiento de las formas tendientes a garantizar la obligación impositiva y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los contribuyentes y

responsables (presentación de declaraciones juradas, suministro de informaciones, cumplimiento de citaciones sometimiento a la verificación etcétera) serán reprimidos con multas de 25 a 4.000 pesos moneda nacional, sin perjuicio de los recargos que pudieran corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

Multas por emisión de impuestos

Art. 44. — Toda omisión de impuesto no prevista en el artículo siguiente, en que incurra por la presentación de declaraciones juradas inexactas o por no denunciar que la estimación de oficio practicada era inferior a la realidad, según así resulte de la posterior determinación del impuesto que en forma cierta o presuntiva realice la dirección, será reprimida con una multa graduable desde un 25 % a un tanto del gravamen dejado de pagar oportunamente, cuando la omisión del impuesto no deba atribuirse a error excusable en la aplicación al caso de las normas impositivas, en que incurra quien debe por esta ley pagar el impuesto por cuenta propia o ajena.

Multas por defraudación

Art. 45. — Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de una hasta diez veces el impuesto en que se defraudó al fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar.

Art. 46. — Se presume la intención de defraudar al fisco, salvo la prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes o análogas circunstancias:

- Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos que surjan de las declaraciones juradas;
- Manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y reglamentarios y la aplicación que de los mismos se haga al determinar el impuesto;
- Declaraciones juradas que contengan datos falsos;
- Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de la materia imponible;
- Producción de informaciones inexactas sobre las actividades y negocios, concernientes a ventas, compras, existencias o valuación de mercaderías, capital invertido o cualquier otro factor de carácter análogo o similar;
- No llevar o no exhibir libros, contabilidad y/o documentos de comprobación suficiente, cuando la naturaleza o el volumen de operaciones desarrolladas no justifique esa omisión;
- Adopción de formas y estructuras jurídicas manifiestamente inapropiadas para configurar la efectiva situación, relación u operación eco-

nómica susceptible de ser gravada por las leyes impositivas cuando esa adopción deba razonablemente atribuirse a la intención de evitar la justa imposición.

Art. 47. — Las multas que se impongan de acuerdo con los artículos 44 y 45 no podrán ser inferiores a \$ 25 moneda nacional.

En los casos de infracciones contempladas en los artículos 43 y 44, será facultad del juez administrativo, cuando las considere leves, eximir de sanción al infractor.

Art. 48. — Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince días de quedar notificada y firme la resolución respectiva.

Intereses punitivos

Art. 49. — Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los impuestos, recargos, intereses y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitivo del 1 % mensual, que se computará desde la fecha de interposición de la demanda, por regla general, o desde la fecha de la intimación de pago cuando la demanda se haya entablado al solo efecto de interrumpir la prescripción de la acción judicial.

CAPÍTULO VIII.

Responsables de las sanciones

Art. 50. — Están obligados a pagar los recargos e intereses punitivos quienes deban abonar los respectivos impuestos, anticipos y otros pagos a cuenta.

Contribuyentes infractores

Art. 51. — No están sujetos a las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45: las sucesiones indivisas, el cónyuge cuyos réditos propios perciba o de que disponga en su totalidad el otro; y los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los concursados civilmente, los quebrados y las sociedades en liquidación, a menos que sean contribuyentes con motivo de actividades cuya gestión o administración escape al contralor de sus representantes, liquidadores de sus bienes, etcétera.

Todos los demás contribuyentes enumerados en el artículo 16, sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les serán imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes administradores o mandatarios, o, con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.

Responsables infractores

Art. 52. — Son personalmente responsables de las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45, como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal (artículos 17 y 18) que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandato o gestión de entidades, patrimonios, empresas, etcétera, todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 17.

Sin perjuicio de las multas que se aplicarán a los contribuyentes infractores por las transgresiones que

cometan las personas mencionadas en el párrafo anterior, estas últimas podrán también ser objeto de la aplicación independiente de penas cuando se juzgase que así lo exige la naturaleza o gravedad del caso.

CAPÍTULO IX

De la prescripción

Art. 53. — Prescriben por el transcurso de cinco años las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y aplicar y hacer efectivas las multas en ella previstas.

La acción de repetición de impuestos prescribe por el transcurso de dos años.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, prescribirá a los cinco años cuando se repitan pagos efectuados en exceso como consecuencia de simples errores de cálculo o de una interpretación de las normas impositivas que sea distinta de la seguida por la dirección en la época de realizarse el pago.

Prescripción de impuestos

Art. 54. — Comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingresos del gravamen.

Prescripción de multas

Art. 55. — Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.

Art. 56. — El hecho de haber prescrito la acción para exigir el pago del impuesto no tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar multa por infracciones susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los impuestos (presentación de declaraciones juradas inexactas que prevén los artículos 44 y 45, resistencia a la inspección, no concurrencia ante las citaciones, etcétera).

Art. 57. — El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.

Prescripción de la acción para repetir

Art. 58. — El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que venció el período fiscal, si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo cuando aun no se había operado su vencimiento; o desde el 1º de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso, en forma independiente para cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un período fiscal ya vencido.

Cuando la repetición comprenda pagos o ingresos hechos por un mismo período fiscal antes y después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y otros, y de

acuerdo con las normas señaladas en el párrafo que precede.

Art. 59. — Si durante el transcurso de una prescripción ya comenzada, el contribuyente o responsable tuviera que cumplir una determinación impositiva superior al impuesto anteriormente abonado, el término de la prescripción iniciada con relación a éste quedará suspendido hasta el 1º de enero siguiente al año que se cancele el saldo adeudado, sin perjuicio de la prescripción independiente relativa a este saldo.

Art. 60. — No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refiere el artículo precedente, la acción de repetición del contribuyente o responsable quedará expedita desde la fecha del pago.

Art. 61. — Con respecto a la prescripción de la acción para repetir no regirá la causa de suspensión prevista en el artículo 3.966 del Código Civil para los incapaces.

Suspensión de la prescripción

Art. 62. — Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

1º Desde la fecha de intimación administrativa de pago de impuestos determinados directa o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago y practicar la determinación de los impuestos;

2º Desde la fecha de la resolución del recurso de reconsideración interpuesto contra una multa superior a \$ 100 m/n. con respecto a la acción penal.

Interrupción de la prescripción

Art. 63. — La prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se interrumpirá:

1º Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva;

2º Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso;

3º Por cualquier acto judicial tendente a obtener el pago, la acción correspondiente.

En los casos de los incisos 1º y 2º, el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.

Art. 64. — La prescripción de la acción para aplicar multa o para hacerla efectiva, se interrumpirá:

1º Por la comisión de nuevas infracciones en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible;

2º Por el modo previsto en el artículo 3º de la ley 11.585, caso en el cual cesará la suspensión prevista en el inciso 2º del artículo 62.

Art. 65. — La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción del recurso administrativo de repetición.

CAPÍTULO X

Procedimiento penal y contencioso-administrativo del sumario

Art. 66. — Los actos u omisiones reprimidos con las sanciones previstas por los artículos 43, 44 y 45 de esta ley, serán objeto de un sumario administrativo, cuya instrucción deberá disponerse mediante acta o por resolución interna de la dirección.

Art. 67. — Tanto el acta como la resolución interna, en las que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al presunto infractor, serán notificadas a éste, a quien se le acordará un plazo de diez (10) días para que alegue su defensa por escrito, y proponga o entregue las pruebas que hagan a su derecho.

Art. 68. — El acta hará fe mientras no se pruebe su falsedad. Si el acto u omisión consignado resultara falso, sea maliciosamente o por negligencia grave, el funcionario que hubiera levantado el acta será destituido e incurrirá en las penas establecidas por el Código Penal. Labrada ésta, sea o no firmada por el interesado, surtirá sus efectos cuando en la misma conste claramente el hecho o la omisión punible y se deje constancia de haberse notificado al interesado que se le ha concedido el plazo legal para alegar su defensa.

Art. 69. — El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para quienes ellas expresamente autoricen.

Art. 70. — Practicadas las diligencias de prueba, el sumario quedará cerrado y deberá el juez administrativo dictar resolución motivada.

Las resoluciones se notificarán a los interesados por medio de carta certificada con aviso especial de retorno, remitiéndoseles al mismo tiempo copia íntegra de los fundamentos de aquéllas.

Recurso de reconsideración

Art. 71. — Contra las resoluciones que impongan las multas de los artículos 43, 44 y 45 de esta ley, y contra las que se dicten en los casos de estimaciones de oficio y recursos de repetición de impuestos, los contribuyentes o responsables podrán interponer recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días de notificados de las resoluciones respectivas. El recurso deberá ser deducido ante los gerentes o ante las oficinas en el interior de la República, personalmente o por entrega al correo en carta certificada con aviso especial de retorno.

Art. 72. — Si no se interpone el recurso en el término señalado, las resoluciones se tendrán por firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada.

Con el recurso deberán acompañarse u ofrecerse todas las pruebas que se tuvieren, no admitiéndose después otros escritos u ofrecimientos de prueba.

Art. 73. — Substantiado el recurso, los gerentes dictarán resolución dentro del término de sesenta (60) días y la notificarán al interesado, con todos sus fundamentos, por carta certificada con aviso especial de retorno.

Recurso de repetición

Art. 74. — Los contribuyentes o responsables podrán repetir los impuestos interponiendo recurso ante la dirección, el que será requisito necesario para ocurrir

a la justicia. Transcurridos cuatro meses después de iniciada la reclamación sin que se haya dictado resolución administrativa, el interesado podrá optar entre esperar la resolución que deja expedita la vía judicial u ocurrir directamente ante la justicia.

La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos no impedirá a la dirección verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, dado el caso, determinar y exigir el impuesto que resultare adeudarse.

CAPÍTULO XI

Procedimiento contenciosojudicial

Demanda contenciosa

Art. 75. — Podrá interponerse demanda contenciosa contra el fisco nacional, ante el juez federal o letrado respectivo, siempre que se cuestione una suma mayor de cien pesos moneda nacional:

- a) En los casos de resoluciones recaídas en recursos de reconsideración excepto cuando éstos se refieran a estimaciones de oficio;
- b) En los casos de resoluciones recaídas en recursos de repetición;
- c) En los casos de no resolverse administrativamente, dentro de los plazos que establece la ley, los recursos de repetición y de reconsideración, salvo cuando este último se refiere a estimaciones de oficio.

En los supuestos de los incisos a) y b), la demanda deberá presentarse en el perentorio término de quince días a contar de la notificación de la resolución administrativa.

Demanda por repetición

Art. 76. — En la demanda contenciosa por repetición de impuestos no podrá el actor fundar sus pretensiones en hechos no alegados en la instancia administrativa. Incumbe al mismo demostrar en qué medida el impuesto abonado es excesivo con relación al gravamen que según la ley le correspondía pagar, y no podrá por tanto limitar su reclamación a la mera impugnación de los fundamentos que sirvieran de base a la estimación de oficio administrativo, cuando ésta hubiera tenido lugar.

Sólo procederá la repetición por los períodos fiscales con relación a los cuales se haya satisfecho el impuesto hasta ese momento determinado por la dirección.

Procedimiento judicial

Art. 77. — Presentada la demanda, el juez requerirá los antecedentes administrativos a la dirección general mediante oficio al que acompañará copia de aquélla, y en el que se hará constar la fecha de su interposición. Los antecedentes deberán enviarse al juzgado dentro de los quince días de la fecha de recepción del oficio.

Una vez agregadas las actuaciones administrativas al expediente judicial, se dará vista al procurador fiscal federal para que se expida acerca de la procedencia de la instancia y competencia del juzgado.

Art. 78. — Admitido el curso de la demanda, se correrá traslado de la misma al procurador fiscal fe-

deral, o por cédula al representante designado por la dirección en su caso, para que la conteste dentro del término de treinta días y oponga todas las defensas y excepciones que tuviera, las que serán resueltas juntamente con las cuestiones de fondo en la sentencia definitiva.

Art. 79. — Si alguna de las partes lo solicitase, se ordenará la recepción de la causa a prueba por un término que no excederá de treinta días, debiendo expresarse en el mismo auto la fecha de su vencimiento.

La apertura a prueba sólo podrá solicitarse en la demanda y en la contestación.

Art. 80. — La prueba será recibida por el secretario del tribunal, siempre que alguna de las partes no pidiese que lo sea por el juez.

Cuando las diligencias hayan de practicarse fuera de la jurisdicción del juzgado, la comisión rogatoria será suscrita por el juez.

Art. 81. — Si el juicio no fuese abierto a prueba, los autos quedarán listos para sentencia, sin ninguna diligencia ulterior, previo nuevo traslado por su orden, y por el término de seis días a cada parte.

Art. 82. — Vencido el término de prueba, el secretario agregará de oficio la producida, y el juez dictará la providencia de autos, señalando un día, dentro de los diez subsiguientes, durante los cuales las partes podrán examinar el proceso en secretaría, para informar sobre el mérito de la causa, in voce o por escrito, quedando con ello, cerrada toda discusión, sin poderse presentar más escritos.

Art. 83. — Terminada la audiencia del artículo anterior, el juez examinará el proceso y pronunciará su sentencia, dentro de los treinta días subsiguientes a más tardar.

La sentencia contendrá una relación de la causa que comprenda el nombre de las partes, el objeto de ella, los hechos alegados (pudiendo, en cuanto a éstos, referirse a los escritos de las partes), el derecho aplicable, la resolución que sea su consecuencia y la condenación en costas, con regulación de los honorarios a cargo del vencido.

Art. 84. — Serán notificados por cédula, el auto de apertura a prueba, el que designe audiencia para la vista de la causa, y la sentencia definitiva.

Todas las demás providencias serán notificada por nota, a cuyo efecto las partes deberán concurrir a secretaría a tomar conocimiento de los autos, los días que el juez designe.

El juez de la causa podrá comisionar a empleados de su dependencia para que dentro de la jurisdicción del juzgado, practiquen las notificaciones por cédula.

Art. 85. — De las sentencias dictadas por los jueces federales o letrados en los juicios contenciosos fiscales, en que el monto cuestionado importe una suma superior a \$ 500 m/n., podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal respectiva dentro de los cinco días subsiguientes al de la notificación de la sentencia, el que será concedido libremente y en ambos efectos.

Art. 86. — Cuando el apelante sea el demandante y no compareciese ante el tribunal de segunda instancia dentro de los cinco días subsiguientes al de la notificación de la primera providencia, se lo tendrá de oficio por desistido del recurso, con costas,

quedando confirmada la sentencia recurrida y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 87. — Con la salvedad del carácter declarativo que — atento lo dispuesto en la ley 3.952 — asumen las sentencias respecto del fisco, corresponderá al juez que haya conocido en la causa la ejecución de las sentencias dictadas en ella y al de turno la de las ejecutorias ante la dirección y se aplicará el procedimiento establecido en el título XXV de la ley 50.

Art. 88. — Las sentencias dictadas en las causas previstas en esta ley, como las dictadas en las causas por ejecución de las mismas, son definitivas, pasan en autoridad de cosa juzgada y no autorizan el ejercicio de la acción de repetición por ningún concepto, sin perjuicio de los recursos que autorizan las leyes 48 y 4.055.

Art. 89. — En la substanciación de las causas regidas por la presente ley, se aplicará supletoriamente, en lo adaptable, las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Capital y territorios nacionales, si se tratara de multas, y las de la ley 50 si se tratara de repetición de impuestos.

Art. 90. — Las acciones podrán deducirse ante el juez de la circunscripción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o ante el domicilio del deudor, o ante el lugar en que se haya cometido la infracción o se hayan aprehendido los efectos que han sido materia de contravención.

CAPÍTULO XII

Juicio de apremio

Art. 91. — El cobro judicial de los impuestos, intereses y recargos, y el de las multas ejecutoriadas, se practicará por la vía de apremio establecida en el título XXV de la ley 50, sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la dirección general, no pudiendo oponerse otras excepciones que las de inhabilidad extrínseca del título, pago, prescripción y espera.

La sentencia será apelable en favor del fisco cuando el monto por el que prosperen las excepciones sea superior a \$ 500 moneda nacional.

Art. 92. — En los casos de sentencias dictadas en los juicios de apremio por cobro de impuestos, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto adeudado, accesorios y costas.

Art. 93. — El cobro de los impuestos por vía de apremio se tramitará independientemente del curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.

Art. 94. — el diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar a cargo de empleados de la dirección cuando ésta lo requiera.

CAPÍTULO XIII

Disposiciones varias

Representación judicial

Art. 95. — En los juicios por cobro de los impuestos, derecho, multas, intereses u otras cargas, cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la dirección general, así como en las demandas o re-

curios judiciales que contra el fisco autoricen las leyes respectivas, la representación de éste ante todas las jurisdicciones e instancias, será ejercida por los procuradores o agentes fiscales o por los funcionarios de la dirección que ella designe, pudiendo estos últimos ser patrocinados por los letrados de la repartición.

Art. 96. — Mientras la representación no sea ejercida por funcionarios designados por la dirección, el fisco será representado por los procuradores o agentes fiscales, quienes recibirán instrucción directa, de esa dependencia, a la que deberán informar de las gestiones que realicen.

La intervención de los funcionarios especiales excluirá la representación de los procuradores o agentes fiscales, en cualquier estado del juicio, y su personería será acreditada con el testimonio de su designación expedido por la dirección.

Art. 97. — Los procuradores o agentes fiscales o los funcionarios de la dirección que representen o patrocinen al fisco tendrán derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal.

Cuando la representación se encuentre a cargo de funcionarios designados por la dirección, ésta podrá fijar la forma de distribución de los honorarios.

Art. 98. — La dirección general anticipará a sus representantes los fondos necesarios para los gastos que demande la tramitación de los juicios (de publicación de edictos, diligenciamiento de notificaciones mandamientos y otros análogos), con cargo de rendir cuenta documentada de su intervención y de reintegrar las cantidades invertidas cuando perciban su importe de la parte vencida a la terminación de las causas. A este efecto se dispondrá la apertura de la cuenta correspondiente.

Notificación por edictos

Art. 99. — Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán hechas por medio de cartas certificadas, con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo, la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad.

Si las citaciones, notificaciones, etcétera, no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuará por medio de edictos publicados durante cinco días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde se presume que pueda residir el contribuyente.

Carácter reservado de las informaciones

Art. 100. — Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que el contribuyente, responsable o terceros presenten a la dirección, y los juicios de demanda contenciosa, en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretas.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la dirección, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos.

Las informaciones expresadas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces

rechazarlas de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos comunes, cuando éstas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen; o que las solicite el interesado, en los juicios en que sean parte contraria el fisco nacional, provincial o municipal, y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros.

Los miembros del consejo no podrán tener acceso a las declaraciones juradas y demás informaciones reservadas de los contribuyentes o a las de terceros que les afecten.

Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones, o el contenido de las instrucciones internas impartidas por el consejo o los gerentes con el carácter expreso de «confidenciales», incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal para aquellos que divulguen actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos.

Gobiernos provinciales y municipales

Art. 101. — Los gobiernos provinciales y municipales no están comprendidos en las responsabilidades del capítulo VII.

Requisito para las transferencias de bienes

Art. 102. — No podrán los escribanos de registro de todo el país autorizar actos que importen transferencia de dominio o constitución de derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, si los enajenantes o constituyentes no les presentaran un certificado de la dirección general que acredite que no adeudan a la fecha importe alguno por los impuestos que se recaudan según el régimen de la presente ley; bajo pena de la multa prevista en el artículo 43 de la misma, y sin perjuicio de la responsabilidad por el pago del impuesto que el contribuyente dejara de abonar.

Bajo sanción de la misma multa y responsabilidad, no podrán los funcionarios a cargo de los registros públicos de comercio del país dar curso a la inscripción de contratos que importen transferencias de negocios, si el enajenante no cumple el requisito establecido en el párrafo anterior.

En las sucesiones que se tramitan ante los tribunales del país no se autorizará la inscripción de la transferencia de dominio de los bienes hereditarios, si no se acreditara, mediante la agregación del certificado de la dirección general, que no se adeuda impuesto alguno recaudado, según esta ley, correspondiente al causante o a la sucesión misma hasta el momento de la declaratoria de herederos o de la aprobación del testamento.

El Poder Ejecutivo reglamentará en qué fecha entrarán en vigencia estas disposiciones, la forma en que deberán cumplirse y las excepciones que corresponda introducir para no obstruir las transacciones o transferencias de bienes o en atención a las particularidades que el caso ofrezca.

Deberes de entidades y de funcionarios públicos

Art. 103. — La dirección general propondrá al Poder Ejecutivo las medidas que deberán aportar las entidades públicas o privadas para facilitar y garantizar la mejor percepción de los gravámenes regidos por esta ley, y, en especial, las que tiendan a evitar que las personas que no tengan domicilio en el país

se ausenten del mismo sin haber abonado los impuestos correspondientes.

Art. 104. — Los funcionarios públicos tienen la obligación de facilitar la colaboración que con el mismo objeto se les solicite, y la de denunciar las infracciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, bajo pena de las sanciones que el Poder Ejecutivo determine.

No podrán ejercerse funciones o empleos públicos, de cualquier naturaleza que fueren, si no se cumple con los deberes establecidos por esta ley.

Cargas públicas

Art. 105. — Las designaciones con carácter de carga pública deberán recaer siempre en personas residentes en el lugar donde deban desempeñar sus funciones, sin que pueda obligárselas a efectuar viajes o cambios de domicilio, por razón del desempeño de las mismas.

Estas cargas públicas podrán renunciarse únicamente por causas justificadas.

Sellado

Art. 106. — Quedan exentos del sellado de ley todas las actuaciones y solicitudes de inscripción, de aclaración, consultas sobre su situación, pedidos de instrucciones para la liquidación y pago, como asimismo los pedidos de acreditación, compensación y devolución de impuestos que formulen los contribuyentes y agentes de retención o sus representantes. Las reclamaciones contra pagos y los recursos administrativos contra la determinación de la materia imponible, contra el impuesto aplicado y contra las multas, quedan igualmente exentas.

Conversión

Art. 107. — Los réditos y operaciones en especie u oro metálico serán convertidos a los efectos de la liquidación de los impuestos, en su equivalente en moneda nacional al valor corriente en plaza, y los en moneda extranjera al tipo oficial de ventas de divisas, en el día del pago.

Art. 108. — La cuenta Dirección General del Impuesto a los Réditos —fondo de estímulo— se acreditará con el uno y medio por mil (1 ½ o/o), del importe de la recaudación de los gravámenes cuya percepción efectúa la citada repartición y se debitará por las sumas que se destinen al seguro colectivo de vida que cubre al personal de la misma, y los premios de estímulo. El monto de éstos no excederá del cincuenta por ciento (50 %) del total de los sueldos percibidos por cada beneficiario durante el año.

La Tesorería General de la Nación depositará mensualmente el importe del uno y medio por mil (1 ½ o/o), de las sumas recaudadas por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, en una cuenta especial, a disposición de la dirección, para servir como fondo de estímulo para los funcionarios y dependientes de la dirección.

Se rendirá cuenta en las fechas fijadas para el cierre del ejercicio, procediéndose, dentro de los quince (15) días, a la devolución del sobrante, si lo hubiere, a la Tesorería General de la Nación.

Régimen para otras leyes

Art. 109. — La aplicación de los impuestos de patentes, sellos, a los pasajes al exterior y derechos de inspección de sociedades anónimas y asociaciones ci-

viles (leyes 11.288 y 11.582, punto 20; 11.290, texto ordenado, y 11.824, 11.283, 11.582, punto 27), a cargo de la dirección general, se regirá por las leyes respectivas.

Con relación a tales impuestos, el consejo ejercerá las mismas funciones que le confiere la presente ley, y los gerentes las demás facultades que las respectivas leyes otorgan a los administradores.

Las facultades de verificación establecidas en esta ley se aplicarán con relación a los mencionados impuestos.

La gerencia y los funcionarios autorizados por la misma tendrán las facultades y atribuciones fijadas para los avaluadores por los artículos 16 y siguientes de la ley 11.288.

Embargo preventivo

Art. 110. — En cualquier momento, podrá la dirección general solicitar embargo preventivo por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables, y los jueces deberán decretarlo en el término de 24 horas, bajo la responsabilidad del fisco.

Este embargo podrá ser substituído por garantía real o personal suficiente, y caducará si, dentro del término de sesenta días, la dirección no iniciara el correspondiente juicio de apremio.

Disposiciones reglamentarias

Art. 111. — Hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente las disposiciones de esta ley, se mantendrán en vigencia las ya dictadas, en lo que no se opongan a aquellos aspectos en los cuales se la modifica.

Art. 2º — Deróganse las disposiciones legales que se opongan a las que anteceden.

Art. 3º — Quedarán exentos de recargos y multas los infractores que antes del 31 de diciembre de 1946 regularicen espontáneamente su situación fiscal.

Art. 4º — Declárase no comprendida en las limitaciones del decreto 7.188 de fecha 11 de marzo de 1946 a la Dirección General del Impuesto a los Réditos.

Art. 5º — Comuníquese, etc.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta. —
Abelardo Pantin. — Juan Pistarini. —
José Humberto Sosa Molina. — José M.
Astigueta. — Juan I. Cooke. — F. Pe-
dro Marotta.

DECRETO 14.342/46

Estableciendo un impuesto a los beneficios no alcanzados por el impuesto a los réditos

Buenos Aires, 20 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Todos los beneficios obtenidos, a partir del 1º de enero de 1946, por personas de existencia física o ideal o sucesiones indivisas, derivados de fuente argentina y no gravados por la ley del impuesto a los réditos quedan sujetos de gravamen nacional de emergencia que establece el presente decreto ley. Este impuesto regirá hasta el 31 de diciembre de 1955.

Art. 2º — Están comprendidos dentro del presente gravamen, en cuanto no fueran alcanzados por la ley del impuesto a los réditos, los beneficios obtenidos en la venta y permuta de bienes muebles e inmuebles, premios de lotería, juegos de azar y, en general toda clase de enriquecimiento que no esté expresamente exceptuado.

Art. 3º — Se consideran beneficios derivados de fuente argentina aquellos que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos, ocurridos dentro de los límites de la misma sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio, o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.

Art. 4º — Están expresamente exentas de este impuesto:

- Las utilidades o beneficios obtenidos por las personas o entidades públicas o privadas, cuyas rentas están expresamente exentas por la ley del impuesto a los réditos;
- Las donaciones, herencias y legados sujetos al impuesto a la transmisión gratuita de bienes;
- Las indemnizaciones que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o por incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes especiales de previsión social, leyes civiles o como consecuencia de un contrato de seguro;
- Los beneficios provenientes de derechos amparados por la ley de propiedad intelectual en la parte que no exceda de \$ 6.000 m/n., por año fiscal y siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores y las respectivas obras estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual;
- Los beneficios provenientes de la venta, cambio o permuta de bienes muebles adquiridos para uso personal del contribuyente y sus familiares, salvo que se trate de obras de arte o inversiones de lujo vendidas durante el año por un valor superior en conjunto a \$ 10.000 moneda nacional.

Art. 5º — El beneficio neto imponible obtenido en la venta de bienes se determinará deduciendo del precio de venta, el precio de compra, el importe de las mejoras efectuadas para conservar o aumentar su valor y el de los gastos necesarios, a condición de que no hubieran sido considerados para el impuesto a los réditos.

Tratándose de inmuebles adquiridos con anterioridad al 1º de enero de 1946 se tomará como valor de costo (incluido mejoras) el de la valuación fiscal a esa misma fecha; sin embargo, si ésta fuera inferior al costo real se admitirá este último.

Para los bienes o inmuebles adquiridos por herencia, legado o donación, se tomará como costo el valor fijado a los efectos de pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se hallan sujetas a gravamen. Cada una establecerá el beneficio obtenido deduciendo del valor del bien o prestación recibida el costo del bien o prestación entregado o comprometida.

Art. 6º — Cuando con los elementos del contribuyente no fuera posible establecer fehacientemente el valor de transferencia, el costo y los gastos cuya deducción admite este decreto ley, la dirección procederá a apreciarlos.

Art. 7º — Cuando las operaciones, actos o actividades comprendidos en este decreto ley arrojan pérdidas, las mismas podrán compensarse con otros beneficios producidos en el año y alcanzados por el presente decreto ley, a los fines de establecer la utilidad neta imponible. Si dichas pérdidas no pudieran cubrirse con otros beneficios, el remanente o quebranto no compensado podrá deducirse de los beneficios netos sujetos al presente gravamen, correspondiente a los cuatro años siguientes. Bajo ningún concepto se admitirá la compensación con utilidades o ingresos alcanzados por la ley del impuesto a los réditos.

Art. 8º — El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. Los contribuyentes imputarán al año fiscal los beneficios que hubieran realizado en el transcurso del mismo.

Art. 9º — No pagarán este impuesto aquellas personas cuyo monto de beneficios netos alcanzados por este impuesto no lleguen a \$ 4.000 anuales.

Art. 10. — La recaudación y fiscalización del presente impuesto estará a cargo de la Dirección General de Impuesto a los Réditos y serán de aplicación las disposiciones establecidas por la ley 11.683 (texto ordenado) y las de las leyes que la modifiquen o substituyan.

Art. 11. — Cuando el contribuyente no justifique fehacientemente el origen del enriquecimiento operado entre dos o mas períodos fiscales y el del dinero o bienes que hubiera dispuesto o consumido, se considerará que la diferencia resultante está sujeta al pago del impuesto a los réditos, salvo que la tasa que por este concepto le correspondiera fuera inferior al 20 %, en cuyo caso, le serán aplicadas las disposiciones del presente gravamen.

Art. 12 — El contribuyente está obligado a probar el origen de las transferencias de fondos de o al exterior cuando la dirección lo considere necesario para la liquidación o fiscalización del impuesto, pudiendo en caso contrario, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, considerarlas vinculadas y provenientes de beneficios de fuente argentina.

Art. 13. — Fijase en el 20 % la tasa que se aplicará al beneficio neto anual, establecido en la forma precedentemente expuesta.

Art. 14. — Están obligados a actuar como agentes de retención en la forma y tiempo que disponga la reglamentación respectiva o las resoluciones de la dirección general, los escribanos, rematadores, corredores, comisionistas, otros intermediarios y el mismo comprador, bajo las responsabilidades y sanción que establece la ley 11.683 (texto ordenado) y las de las leyes que la modifiquen o substituyan.

Art. 15. — El producido de este impuesto se distribuirá anualmente entre la Nación, la municipalidad de la Capital Federal y las provincias, en la misma forma que el impuesto a los réditos. Sin embargo, las provincias sólo gozarán de esta participación cuando no apliquen gravámenes de características similares al que se crea mediante este decreto ley.

Art. 16. — Para la fiscalización y aplicación del gravamen establecido en el presente decreto ley destínase la suma global de \$ 500.000 anuales para refuerzo de la dotación del personal y de los gastos que se originen.

La utilización de los fondos por la Dirección General del Impuesto a los Réditos se supeditarán al presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del Departamento de Hacienda.

Art. 17. — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 18. — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

Felipe Urdapilleta. — Abelardo Pantin. — Amaro Avalos. — Juan Pisturini. — José Humberto Sosa Molina. — José M. Astigueta. — Juan I. Cooke. — F. Pedro Marotta.

DECRETO 15.921/46

Eximiendo del impuesto a los réditos a determinadas porciones de utilidades invertidas en la instalación o ampliación de plantas industriales.

Buenos Aires, 1º de junio de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Las personas de existencia física o jurídica podrán deducir de las utilidades impositivas, establecidas conforme con la ley del impuesto a los réditos, los importes que resulten de aplicar las normas del artículo 4º del presente decreto ley, siempre que el 30 % o más de dichas utilidades sean afectadas durante el ejercicio, al incremento de la capacidad productiva de la empresa, mediante la instalación de nuevas plantas, aplicación de las existentes o construcción de nuevas industrias manufactureras o de transformación.

Art. 2º — Son industrias manufactureras o de transformación aquellas que elaboren o transformen mercaderías o productos cuya forma, aspecto, consistencia, índole o aplicación, sea distinta de aquellas que sirvieron como materia prima o elemento básico.

Art. 3º — A los efectos de este decreto ley, se entiende por incremento de la capacidad productiva, los aumentos que resulten de comparar los valores del activo fijo, excepto inmuebles existentes al principio y fin de cada ejercicio, ajustados de acuerdo con la ley de impuesto a los réditos.

Art. 4º — A los efectos del pago del impuesto a los réditos, los contribuyentes que se hallen comprendidos en los alcances del presente decreto ley, podrán deducir de las utilidades impositivas, los importes que resulten de aplicar los siguientes coeficientes:

- 10 % sobre la parte del aumento del capital en explotación que representa el 30 % de la utilidad impositiva; más
- 20 % sobre la parte del aumento del capital en explotación comprendido entre el 30 y el 40% de la utilidad impositiva; más
- 30 % sobre la parte del aumento del capital en explotación comprendido entre el 40 y el 50 % de la utilidad impositiva; más
- 40 % sobre la parte del aumento del capital en explotación comprendido entre el 50 y el 60 % de la utilidad impositiva; más
- 50 % sobre la parte del aumento del capital en explotación comprendido entre el 60 y el 70 % de la utilidad impositiva; más

- 60 % sobre la parte del aumento del capital en explotación comprendido entre el 70 y el 80 % de la utilidad impositiva; más
- 70 % sobre la parte del aumento del capital en explotación comprendido entre el 80 y el 90 % de la utilidad impositiva; más
- 80 % sobre la parte del aumento del capital en explotación comprendido entre el 90 y el 100 % de la utilidad impositiva.

Art. 5º — Cuando dentro de los cuatro ejercicios siguientes a aquel en que se efectuó la deducción que autoriza el presente decreto ley, se hubieran realizado bienes del activo fijo —excepto inmuebles— originando una disminución de la capacidad productiva de la empresa, corresponderá incluir en el balance impositivo del año en que la venta tuvo lugar, el importe que resulte de aplicar sobre el precio convenido por la transacción, el coeficiente promedio de la rebaja utilizado por el contribuyente en los años anteriores. En ningún caso, este importe podrá exceder el total de las deducciones practicadas, conforme con el régimen de este decreto ley.

Art. 6º — La deducción que autoriza este decreto ley se efectuará de las utilidades impositivas correspondientes a los tres ejercicios anuales cerrados a partir del 1º de enero de 1946.

Art. 7º — Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta. — José Humberto Sosa Molina. — Juan Pistarini. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — F. Pedro Marotta. — Abelardo Pantin. — Héctor Russo. — Rolando Lagomarsino.

DECRETO 16.094/46

Determinando el destino a que serán aplicados los ingresos en concepto de impuesto de emergencia a las apuestas en los hipódromos de carreras.

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Desde la fecha, los ingresos que correspondan al Jockey Club de la Capital Federal, por su participación en las apuestas mutuas y entradas del público al Hipódromo Argentino, según las leyes nacionales respectivas, serán aplicados por la institución concesionaria a los fines siguientes:

- a) A cubrir los importes de los premios que el Jockey Club proponga para sus programas a la Superintendencia de Carreras y las subvenciones que acuerde a los hipódromos que patrocine y a otras instituciones de fomento de la raza caballar;

- b) A las inversiones para las construcciones destinadas al hipódromo o vinculadas a la explotación de éste, su conservación y amortización;
- c) A satisfacer los gastos de administración, remuneración del personal permanente y por reunión y demás inversiones relacionadas con la explotación del Hipódromo Argentino;
- d) A los aportes para acordar los beneficios que se establezcan en el reglamento del fondo de ayuda, pensiones y previsión para el personal de caballerizas y la contribución anual que sea necesaria para constituir su capital y permitir el funcionamiento de ese fondo;
- e) A formar un fondo para gastos eventuales hasta un 5 por ciento.

Art. 2º — El producido del gravamen del 5 % sobre las apuestas mutuas en los hipódromos Argentino y de San Isidro, a que se refiere el decreto ley 18.231/43, y asimismo el remanente de los ingresos que arroje anualmente la explotación del Hipódromo Argentino luego de cubiertas las sumas que se destinen a los fines expresados en el artículo anterior y deducidos los impuestos cuya distribución prevén los artículos 5º y 7º de la ley 12.242, serán aplicados en la forma y proporción que se determine, a proveer de alimentos, vestidos y útiles a los niños pobres de las provincias y territorios nacionales.

Art. 3º — Los gravámenes creados por la ley 11.242 continuarán sometidos al régimen de la misma y su reglamentación, en cuanto a su monto, distribución, destino, sistema y órganos de fiscalización y percepción.

Art. 4º — Queda derogada toda disposición que se oponga al presente decreto ley.

Art. 5º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — F. Pedro Marotta. — Juan I. Cooke. — Abelardo Pantin. — José M. Astigueta. — José Humberto Sosa Molina. — Felipe Urdapilleta.

DECRETO 16.112/46

Condonando multas incurridas por infracción al decreto 9.432/944, sobre impuesto de sellos

Buenos Aires, 31 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Exonérase de multas las infracciones al decreto 9.432/44 que se hubieran cometido hasta el día de la fecha del presente decreto inclusive, sea que el impuesto haya sido pagado fuera de los términos reglamentarios o que se haya omitido su pago siempre que, en este último caso se le ingrese hasta el día 30 de junio inclusive.

Art. 2º — La exoneración dispuesta será aplicable a las infracciones cuyas multas no hubieren sido abonadas, hayan o no sido resueltas administrativamente o se encuentren en curso de apelación o ejecución. En este último supuesto, el contribuyente deberá hacerse cargo de los gastos causídicos para gozar de los beneficios de este decreto.

Art. 3º — El acogimiento a la presente exoneración importará la renuncia a cuestionar la procedencia del impuesto ingresado.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — Juan Pistarini. — Felipe Urdapilleta. — José M. A-ti-gueta. — F. Pedro Marotta. — Abelardo Pantin.

b) Decretos leyes sobre Legislación Aduanera

DECRETO 5.742/43

Prorrogando por el término de cinco años, a contar de 1º de enero de 1943, los efectos del artículo 43 de la ley 12.578.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase por el término de cinco años a contar del 1º de enero de 1943, los efectos del artículo 43 de la ley 12.578, liberándose de derechos arancelarios la importación de maquinarias o implementos que no se produzcan en el país, destinados a la instalación en la República, de establecimientos siderúrgicos.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

RAMÍREZ.

Elbio Carlos Anaya. — Segundo R. Storni. — Alberto Gilbert. — Ismael Galíndez. — Jorge A. Santamarina. — Diego I. Mason. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro.

DECRETO 5.904/43

Declarando libre de derechos la importación de caucho natural y de artículos manufacturados con dicho producto.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos la importación de caucho natural y de artículos manufacturados con dicho producto.

Art. 2º — Exceptúanse las importaciones referidas en el artículo anterior, del pago de los impuestos de almacenaje y guinche, dispuestos por las leyes 11.248 y 11.249, cuando no se haya efectuado una prestación efectiva de esos servicios, aunque en los lugares donde se realicen las operaciones existan elementos fiscales.

Art. 3º — Este acuerdo tendrá validez por un plazo de seis meses, y se renovará automáticamente cada semestre, hasta tanto el Poder Ejecutivo declare normalizado el abastecimiento interno del caucho.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, etc.

RAMÍREZ.

Jorge A. Santamarina. — Diego I. Mason. — Edelmiro J. Farrell. — Benito Sueyro. — Elbio Carlos Anaya. — Segundo R. Storni. — Alberto Gilbert. — Ismael Galíndez.

DECRETO 10.157/43

Extendiendo a los equipos de inyección, equipos eléctricos y aceros destinados a integrar motores industriales, etcétera, la liberación de derechos que acuerdan los decretos 33.160 y 47.443, de 1939.

Buenos Aires, 7 de octubre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Extiéndese a los equipos de inyección, equipos eléctricos y aceros destinados a integrar motores industriales (eléctricos, a explosión, etcétera, de más de 1/4 H. P.), siempre que sean diseñados, fundidos, usinados y armados en el país en no menos del 80 % de su peso, la liberación de derechos que acuerdan los decretos 33.160 y 47.443 de junio 9 y noviembre 21 de 1939, respectivamente.

Art. 2º — A los efectos de la comprobación de destino, la Dirección General de Aduanas queda facultada a requerir la información correspondiente de las oficinas técnicas dependientes del Ministerio de Agricultura.

Art. 3º — El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios de Estado en los departamentos de Hacienda y Agricultura.

Art. 4º — Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.

RAMÍREZ.

Jorge A. Santamarina. — Diego I. Mason.

DECRETO 10.232/43

Declarando libre de derechos la importación de huevos de gusanos de seda

Buenos Aires, 7 de octubre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos la importación de huevos de gusano de seda.

Art. 2º — Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.

RAMÍREZ.

Jorge A. Santamarina. — Alberto Gilbert
— Edelmiro J. Farrell. — Elbio Carlos Anaya.
— Diego I. Mason. — Benito Sueyro. — Ismael Galíndez.

DECRETO 10.233/43

Declarando libre de derechos la importación de corteza de quina, hojas de belladona, etcétera, que se introduzcan con destino a la elaboración de drogas (alcaloides) y productos de aplicación medicinal.

Buenos Aires, 7 de octubre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos la importación de corteza de quina, hojas de belladona y jaborandi y raíces de ipecuana y barbasco, que se introduzcan con destino a la elaboración de drogas (alcaloides) y productos de aplicación medicinal.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

RAMÍREZ.

Jorge A. Santamarina. — Diego I. Mason.
— Elbio Carlos Anaya. — Edelmiro J.
Farrell. — Ismael Galíndez. — Benito
Sueyro. — Alberto Gilbert.

DECRETO 11.601/43

Reduciendo de 10 % a 5 % el recargo establecido en el artículo 38 de la ley de aduana

Buenos Aires, 13 de octubre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Hasta nueva disposición, las aduanas reducirán a 5 % el recargo de 10 % a que se refiere el artículo 38 de la ley de aduana, cuando se trate de mercaderías de las secciones de tejidos y confecciones, y las hechas con materias textiles — o en las que éstas predominen — de la sección mercería.

Esta reducción se aplicará sin perjuicio de las obligaciones que incumben a los importadores por imperio

del citado artículo 38 y de las sanciones penales que él preceptúa, cuando omitan consignar la condición en que las mercaderías son importadas.

Art. 2º — Hasta nueva disposición las aduanas no aplicarán el recargo de que trata el artículo 38 de la ley de aduana a las mercaderías de la sección mercería de la Tarifa de Avalúos cuando su material constitutivo sea el hierro — o acero — o predomine el hierro — o acero — en su composición.

Art. 3º — Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.

RAMÍREZ.

Jorge A. Santamarina. — Diego I. Mason. —
Elbio Carlos Anaya. — Edelmiro J. Farrell. — Ismael Galíndez. — Benito Sueyro. — Alberto Gilbert.

DECRETO 17.067/43

Disponiendo la devolución de los derechos pagados por la importación de cloruro de potasio, destinado a la fabricación de clorato de potasio.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Los derechos de importación pagados por cloruro de potasio destinado a la fabricación de clorato de potasio serán devueltos cuando se efectúe la exportación de este último producto, en la medida que corresponda a la cantidad de cloruro de potasio utilizado en la fabricación del producto exportado.

Art. 2º — La devolución de derechos se hará efectiva a los exportadores, los cuales deberán ajustarse a las prescripciones de los artículos 23 de la ley de aduana y 144 y 145 de su reglamentación, quedando sometidos, además, a las disposiciones siguientes:

- Los industriales deberán inscribirse ante la aduana por donde operen;
- Se comprometerán a permitir el examen de sus libros comerciales y de fabricación por parte de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas que ésta designe cada vez que juzgue oportuno verificar la corrección de las operaciones realizadas o a realizarse;
- Las aduanas en el acto de la inscripción exigirán se establezca qué cantidad de materia prima importada constituye cada unidad de clorato de potasio, pudiendo adoptar las medidas que estimen convenientes para verificar la declaración;
- En los despachos de importación, además de la declaración aduanera, se dejará constancia de que por el material nombrado se pedirá eventualmente devolución de derechos, por estar destinado a fabricar clorato de potasio para la exportación;
- En los boletos de exportación se expresará, además de los datos correspondientes, el nombre del vapor importador, fecha de entrada al puerto, paquete y número de despacho;
- La Dirección General de Aduanas queda facultada para adoptar las medidas que estime pertinentes para asegurar la exactitud de las manifestaciones comprometidas por los impor-

tadores de cloruro de potasio y los exportadores de clorato de potasio; quedando entendido que toda falsa manifestación, acto u omisión que pueda traducirse en un perjuicio fiscal, será pasible de pena.

Art. 3º — Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.

RAMÍREZ.

Luis C. Perlinger. — Alberto Gilbert. — Edelmiro J. Farrell. — Diego I. Mason. — César Ameghino. — Gustavo Martínez Zuviria. — Benito Sueyro. — R. A. Vago.

DECRETO 827/43

Incluyendo a la aduana de Concordia entre las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito para puertos del Uruguay.

Buenos Aires, 17 de enero de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyese entre las excepciones que consagra el artículo 96 de la ley de aduana (texto ordenado), la siguiente:

7º. Las que pasen de tránsito para puertos de la República Oriental del Uruguay, por la aduana de Concordia.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y archívese.

RAMÍREZ.

Luis C. Perlinger. — Gustavo Martínez Zuviria. — Benito Sueyro. — Juan Pistarini. — César Ameghino. — Alberto Gilbert. — Edelmiro J. Farrell. — Diego I. Mason.

DECRETO 6.182/44.

Aclarando que el gravamen establecido en el artículo 2º, inciso c), de la ley de aduana, incide sobre todos los artículos de nácar manufacturados, inclusive los botones.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944.

El vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Aclárase el artículo 2º, inciso c), de la ley de aduana, en el sentido de que dicho gravamen incide sobre todos los artículos de nácar manufacturado, inclusive los botones.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Juan Perón. — Diego I. Mason. — Luis C. Perlinger. — J. Honorio Silgueira. — Juan Pistarini. — Alberto Teisaire.

DECRETO 14.517/44

Incluyendo entre las exenciones de impuesto, a que se refiere el artículo 2º del decreto 5.904/43, el de eslingaje directo.

Buenos Aires, 7 de junio de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Ampliase el artículo 2º del decreto 5.904 (184) de agosto 19 de 1943, incluyéndose entre las exenciones de impuestos que contiene, el de eslingaje directo.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Orlando L. Peluffo. — Juan Perón. — Juan Pistarini. — Diego I. Mason. — Alberto Teisaire. — Alberto Baldrich. — Luis C. Perlinger.

DECRETO 15.179/44

Eximiendo del derecho adicional del 10 % a los rollizos de pino blanco de la partida 1.748 de la tarifa, si se destinan a la fabricación de terciados.

Buenos Aires, 14 de junio de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Exímese del derecho adicional del 10 % (artículo 11 de la ley 11.281, texto ordenado) a los rollizos de pino blanco de la partida 1.748, siempre que se destinen a la fabricación de terciados.

Art. 2º — La Dirección General de Aduanas adoptará las providencias necesarias para la comprobación del empleo pertinente.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Luis C. Perlinger. — Orlando L. Peluffo. — Alberto Baldrich. — Juan Perón. — Alberto Teisaire. — Juan Pistarini. — Diego I. Mason.

DECRETO 17.947/44

Habilitando como aduana mayor o de depósito a las receptorías de rentas aduaneras de Santo Tomé y La Quiaca.

Buenos Aires, 10 de julio de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Habilitase para el comercio interior y exterior y como aduana mayor o de depósito a las actuales receptorías de rentas aduaneras de Santo Tomé y La Quiaca.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Alberto Teisaire. — Alberto Baldrich. — Juan Pistarini. — Orlando L. Peluffo. — Juan Perón. — Diego I. Mason.

DECRETO 20.976/44

Declarando incluida en la franquicia del artículo 1º del decreto 5.742/43, a las maquinarias y materiales que no se produzcan en el país.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Concédese la liberación solicitada por la firma SABA, Sociedad Anónima Comercial e Industrial Berilo Argentina.

Art. 2º — Declárase incluida en el artículo 1º del decreto 5.742, dictado en acuerdo general de ministros con fecha 16 de agosto de 1943, y en consecuencia libre de derechos por el término que en el mismo se establece, la importación de maquinarias y materiales que no se produzcan en el país, destinados a establecimientos metalúrgicos cuyas actividades estén vinculadas con la producción de elementos necesarios a la defensa nacional, previo asesoramiento del Ministerio de Guerra, y bajo la condición de someterse a los requisitos y formalidades establecidos, o que se establezcan en el futuro, que rigen la importación en franquicia condicional, inclusive la comprobación de destino.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Alberto Baldrich. — Alberto Teisaire. — Diego I. Mason. — Orlando L. Peluffo. — Juan Pistarini. — Juan Perón.

DECRETO 22.813/44

Liberando de derecho al mineral de antimonio que se destine a la elaboración en el país de antimonio metálico o régulo.

Buenos Aires, 25 de agosto de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Las aduanas despacharán libre de derechos de importación el mineral de antimonio que se destine a la elaboración en el país de antimonio metálico o régulo.

Art. 2º — Esta franquicia queda condicionada al régimen del artículo 44 y concordantes de la ley de aduana y su reglamentación.

Art. 3º — La franquicia acordada se renovará automáticamente cada semestre, hasta que a juicio de los departamentos de Guerra y de Agricultura hayan desaparecido las causas que la motivan.

Art. 4º — Comuníquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Alberto Baldrich. — Juan Perón. — Diego I. Mason. — Alberto Teisaire. — Juan Pistarini. — Orlando L. Peluffo.

DECRETO 28.504/44

Liberando de derechos la importación de aves con certificado de pedigree, destinadas a la reproducción.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos aduaneros, la importación de aves con certificado de pedigree, destinadas a la reproducción.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Diego I. Mason. — Juan Perón. — Orlando L. Peluffo. — Alberto Teisaire. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Juan Pistarini.

DECRETO 29.147/44

Declarando libre de derechos la importación del producto denominado «D.D.T.»

Buenos Aires, 26 de octubre de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos la importación del producto denominado «D.D.T.», sustancia semelaborada que contiene 40 % de diclorodifenil tricloretano.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Orlando L. Peluffo. — Juan Perón. — Diego I. Mason. — Alberto Teisaire. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Juan Pistarini.

DECRETO 34.825/44

Declarando transitoriamente libre de derechos la importación de capullos de seda

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Transitoriamente, declárase libre de derechos la importación de capullos de seda, debiendo obtenerse previamente, en cada caso, la conformidad del Departamento de Agricultura.

Art. 2º — La franquicia acordada por el artículo anterior será dejada sin efecto cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, así lo aconseje el estado de la producción nacional de capullos de seda.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Orlando L. Peluffo. — Juan Perón. — Juan Pistarini. — Alberto Teisaire. — Rómulo Etcheverry Boneo.

DECRETO 35.760/44

Declarando libre de derechos la introducción de folletos y catálogos comerciales referentes a artículos chilenos.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos de importación y adicionales la introducción de folletos y catálogos comerciales referentes a artículos chilenos que tengan por objeto describir las mercaderías, dar indicaciones sobre el uso o indicar precios, aun cuando dichos folletos y catálogos contengan avisos de reclame.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Orlando L. Petuffo. — Juan Perón. — Alberto Teisaire. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Juan Pistarini.

DECRETO 3.824/45

Declarando libre de derechos la introducción por las aduanas y receptorías situadas al Sur del paralelo 42º de los materiales y mercaderías extranjeros necesarios para el vestuario, etcétera.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de todo derecho la introducción por las aduanas y receptorías marítimas y terrestres situadas al Sur del paralelo 42º de los materiales y mercaderías extranjeros necesarios para el vestuario, la alimentación, la salud, la vivienda y el trabajo de la población, a saber: tejidos y confecciones de toda clase; sustancias alimenticias, frescas o en conserva y bebidas de toda clase, con exclusión de las alcohólicas finas; drogas y específicos necesarios para la lucha contra las enfermedades; materiales de construcción de cualquier clase; herramientas en general y máquinas de cualquier clase con destino a las industrias existentes o a instalarse.

Las mercaderías aludidas precedentemente quedarán exentas, asimismo, de toda obligación en materia de cambios.

La Dirección General de Aduanas, previo asesoramiento de la Secretaría de Industria y Comercio, formulará oportunamente una nómina de las mercaderías que se considerarán libres a los efectos de este decreto, medida que tendrá validez inmediatamente de aprobada, por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Art. 2º — La franquicia reconocida por el artículo precedente no comprenderá los servicios de almacenaje, eslingaje, guinche o tracción, los cuales serán abonados si se hace uso de ellos. El derecho de estadística se pagará en todos los casos.

Art. 3º — Los buques que fondeen en puertos ubicados al Sur del paralelo 42º, aun cuando no hagan operaciones ni lleven carga para ellos, y cuando su permanencia sea menor de ocho días, no pagarán los derechos portuarios establecidos por la ley 11.251 y disposiciones complementarias; y no serán objeto de sanción penal alguna por el hecho de no presentar su documentación visada en forma legal, siempre que ella se encuentre visada por algún cónsul de nación amiga, en defecto del nuestro, en los lugares donde no lo hubiere.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Hacienda, adoptará las precauciones necesarias para asegurar que las mercaderías liberadas de derechos de aduana por el presente decreto, sean consumidas, usadas o aplicadas en los territorios nacionales situados al Sur del paralelo 42.

Art. 5º — Las mercaderías beneficiadas con la franquicia que consagra el artículo 1º no podrán transponer la línea citada en el artículo 4º sin abonar los derechos aduaneros que les fueron dispensados a su internación en el país. Las infracciones que con las mismas se cometan serán juzgadas con arreglo a las penas que estatuyen las ordenanzas de aduana y la ley 11.281 para las mercaderías de procedencia extranjera.

Art. 6º — Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigor a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7º — Dése cuenta oportunamente del presente decreto al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese en la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional.

FARRELL.

Rómulo Etcheverry Boneo. — César Ameghino. — Alberto Teisaire. — Juan Perón. — Juan Pistarini. — Amaro Avalos.

DECRETO 3.997/45

Aclarando el alcance de la franquicia del artículo 1º de la ley 11.588 (6º de la ley de aduana)

Buenos Aires, 25 de febrero de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Aclárase que la franquicia que acuerda el artículo 1º de la ley 11.588 (6º de la ley de aduana) sólo comprende a los materiales que taxativamente menciona, esto es, a las máquinas y caños maestros para instalaciones públicas de alumbrado a gas o electricidad, aguas corrientes y cloacas, quedando, por tanto, exceptuados de la misma, los repuestos y todo otro material que expresamente no esté incluido en su texto.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, etc.

FARRELL.

César Ameghino. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Juan Perón. — Alberto Teisaire. — Juan Pistarini. — Amaro Avalos.

DECRETO 4.762/45

Declarando transitoriamente libre de derechos la importación de papel de tipo especial apto para la confección de envases mayores.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Transitoriamente y hasta nueva disposición, declárase comprendido en la liberación de derechos de que trata el artículo 6º de la ley de

aduana (texto ordenado), al papel de tipo especial (arpillera de papel con base de celulosa) apto para la confección de envases mayores que se utilicen para envasar lanas y productos de la ganadería del país, bajo las condiciones, formalidades y requisitos establecidos por el artículo 84 del reglamento de la ley de aduana, a los cuales deberá agregarse la condición de que las bolsas sólo podrán ser vendidas a personas o entidades que estén en situación de poder darle el destino que motiva la franquicia.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.
César Ameghino.

DECRETO 5.527/45

Declarando libre de derechos la importación de maderas en rollizos, hasta un millón de pesos de valores, que procedentes de Chile se introduzcan por el destacamento de Hua Hum.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos la importación de maderas en rollizos, hasta el valor de un millón de pesos (\$ 1.000.000 m/n.), que procedentes de Chile se introduzcan por el destacamento de Hua Hum, jurisdicción de la receptoría de rentas aduaneras de San Martín de los Andes.

Art. 2º — La fijación del cupo libre de derechos deberá acordarse por el volumen físico de madera en rollizos que resulta hasta cubrir la cantidad precitada en moneda nacional, a los precios actuales del producto.

Art. 3º — Queda facultada la Dirección General de Aduanas para adoptar las medidas que reputé convenientes a fin de asegurar la correcta ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.

Art. 4º — Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.

FARRELL.

César Ameghino. — Juan Perón. — Amaro Avalos. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Alberto Teissaire. — Juan Pistarini.

DECRETO 5.528/45

Elevando de $\frac{1}{2}$ % a 1 % la tasa a que se refieren los artículos 23 y 24 de la ley de aduana

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Substitúyese el último párrafo del artículo 23 de la ley de aduana por el siguiente:

Queda, asimismo, facultado el Poder Ejecutivo para retener la suma correspondiente a la tasa ordinaria de uno por ciento establecido en el artículo siguiente, en concepto de compensación de los gastos que demande la fiscalización. Tal retención podrá ser efectuada aún en el caso de que el pedido de devolución de los derechos de importación abonados por los envases y mercaderías a que se refiere este artículo y el artículo 21, sea resuelto negativamente, siempre que se haya puesto en movimiento el mecanismo de la fiscalización.

Art. 2º — Modifícase el artículo 24 de la ley de aduana, el que quedará redactado en la siguiente forma:

Artículo 24. — Las mercaderías que por la ley de aduana o disposiciones especiales sean a su importación libres de derechos o tributen menores derechos en razón de su destino y por esas razones estén sometidas a la prueba del correcto empleo en el destino que motiva la franquicia o el menor derecho, pagarán en el momento de introducción a plaza, una tasa de uno por ciento ad valorem, en concepto de compensación de los gastos que demande la fiscalización.

Con el producido de esa tasa se sufragarán los sueldos del personal necesario y demás gastos inherentes a la fiscalización, quedando facultado el Poder Ejecutivo para la creación de los empleos necesarios y disponer con cargo de reintegro hasta la suma de \$ 300.000 m/n., de rentas generales, como anticipo del mismo. Si la recaudación en un ejercicio superara la suma de \$ 300.000 m/n., se reducirá la tasa para el siguiente a fin de que el monto recaudado equilibre el importe citado.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Juan Perón. — Amaro Avalos. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Alberto Teissaire. — Juan Pistarini.

DECRETO 5.799/45

Creando la receptoría de rentas aduaneras de Clorinda (Formosa)

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Créase la receptoría de rentas aduaneras de Clorinda (Formosa) en reemplazo del actual resguardo de registro de ese nombre, pasando a de-

pender de la misma los resguardos de registros de Pilcomayo y Colonia Bouvier.

Art. 2º — La jurisdicción de la citada receptoria se extenderá, desde la desembocadura de la laguna Soto en las proximidades del kilómetro 1.560 sobre el río Paraguay hasta la altura del Fortín Chavez sobre el río Pilcomayo.

Art. 3º — La atención de las operaciones y vigilancia, como asimismo el funcionamiento de la dependencia creada, estará a cargo del personal existente en la actualidad.

Art. 4º — Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.

FARRELL.

César Ameghino. — Amaro Avalos. — Alberto Teisaire. — Juan Perón. — Rómulo Etcheverry Boneo. — Juan Pistarini.

DECRETO 8.116/45

Incluyendo a los puertos de Buenos Aires e Ibicuy entre las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito para puertos del Paraguay.

Buenos Aires, 18 de abril de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyese entre las excepciones que consagra el artículo 96 de la ley de aduana, la siguiente:

8º Las que pasen de tránsito para puertos de la República del Paraguay, por los puertos argentinos de Buenos Aires e Ibicuy.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

César Ameghino. — Juan Perón. — Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — Alberto Teisaire.

DECRETO 13.610/45

Incluyendo en la franquicia acordada por decreto 29.147, de 26 de octubre de 1944, al producto denominado diclorodifenil tricloroetano.

Buenos Aires, 27 de junio de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyese en la franquicia acordada por decreto 29.147 de 26 de octubre próximo pasado al producto denominado diclorodifenil tricloroetano, que se importe en estado técnicamente puro.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

Ceferino Alonso Irigoyen. — Juan Perón. — Alberto Teisaire. — Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — César Ameghino. — Antonio J. Benítez.

DECRETO 16.191/45

Incluyendo en las franquicias acordadas por el artículo 35 de la ley 12.345 (artículo 6º de la ley de aduana) a las usinas provinciales de energía eléctrica.

Buenos Aires, 18 de julio de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyese en las franquicias acordadas por el artículo 35 de la ley 12.345 (artículo 6º de la ley de aduana, texto ordenado) a las usinas provinciales de energía eléctrica con sus correspondientes cámaras de transformación y redes de distribución.

El Poder Ejecutivo nacional acordará dicha exención siempre que se acredite que la provincia provee por medio de entidades oficiales de su directa dependencia el establecimiento y prestación del servicio de electricidad, y que ha destinado a tal efecto, las rentas o fondos necesarios.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Ceferino Alonso Irigoyen. — Juan Perón. — César Ameghino. — Juan Pistarini. — Amaro Avalos. — Alberto Teisaire. — Antonio J. Benítez.

DECRETO 16.192/45

Declarando que el pescado fresco, la carne fresca bovina y ovina y la leña, procedentes de Chile, goza, a partir de la fecha del decreto mencionado, de la franquicia que acuerda el decreto 3.824/45.

Buenos Aires, 18 de julio de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — La importación de pescado fresco, carne fresca bovina y ovina y leña, procedentes de Chile gozará, a partir de la fecha del presente, de los beneficios que acuerda el decreto 3.824 de 20 de febrero próximo pasado.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Antonio J. Benítez. — Alberto Teisaire. — Juan Pistarini. — Ceferino Alonso Irigoyen. — César Ameghino. — Juan Perón. — Amaro Avalos.

DECRETO 16.193/45

Declarando comprendido en el menor derecho establecido en el artículo 2º, inciso k) de la ley de aduana, al hilado de seda cruda en madejas (grege).

Buenos Aires, 18 de julio de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase comprendido en el beneficio dispuesto por el artículo 2º, inciso k), de la ley de aduana (texto ordenado), al hilado de seda cruda en madejas (grege) que se importe con destino a la fabricación de hilos para coser, con comprobación de destino.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

Ceferino Alonso Irigoyen. — César Ameghino. — Juan Perón. — Alberto Teissaire. — Antonio J. Benítez. — Amaro Avalos. — Juan Pistarini.

DECRETO 18.514/45

Modificando el inciso 3º del artículo 96 de la ley de aduana, referente a las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito para Chile y Bolivia.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase el inciso 3º del artículo 96 de la ley de aduana, el que quedará redactado en la siguiente forma:

„Las que pasen de tránsito de las aduanas de la Capital y Rosario, a las de Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, La Quiaca y receptoría de rentas aduaneras de Aguaray con destino a Chile y Bolivia.“

Art. 2º — Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos.

FARRELL.

J. Hortensio Quijano. — Ceferino Alonso Irigoyen. — Antonio J. Benítez. — César Ameghino. — Alberto Teissaire. — Juan Perón. — Juan Pistarini. — Amaro Avalos.

DECRETO 30.021/45

Declarando exentos del recargo del 10 % a que se refiere el artículo 38 de la ley de aduana, a los accesorios y repuestos para automóviles y camiones.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Hasta nueva disposición, las aduanas harán extensiva a los accesorios y repuestos, para

automóviles y camiones de las partidas 636 a 640 del arancel, la exención del recargo de 10 % a que se refiere el artículo 38 de la ley de aduana, acordada a las mercaderías de la sección ferretería por el artículo 2º del decreto 11.601 (236) de 13 de octubre de 1943, cuando su material constitutivo sea el hierro o acero o predominen dichos metales en su composición

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — Abelardo Pantin. — José M. Astigueta. — F. Pedro Marotta. — Juan Pistarini.

DECRETO 30.220/45

Incluyendo en el inciso m) del artículo 2º de la ley de aduana al producto denominado «escila roja, en polvo».

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1945.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyese en el inciso m), del artículo 2º, de la ley de aduana, al producto denominado «escila roja, en polvo».

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta. — Juan I. Cooke. — Abelardo Pantin. — José Humberto Sosa Molina. — Juan Pistarini. — F. Pedro Marotta. — José M. Astigueta.

DECRETO 4.098/46

Declarando libre de derechos, por el término de seis meses, la importación de película virgen, procedente de Chile, para impresionar copias de films nacionales a exhibirse en dicho país.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1946.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Por el término de seis meses declárase libre de derechos la importación de película virgen procedente de la República de Chile, para impresionar copias de films nacionales a exhibirse en el referido país.

Art. 2º — La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad de la renta fiscal, corriendo a cargo de los interesados el pago de la tasa de 1 % determinada en el artículo 24 de la ley de aduana.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos.

DECRETO 4.721/46

Declarando libre de derechos al Sur del paralelo 42º, la introducción de ovinos para ser faenados en los establecimientos de la zona, con destino a su reexportación al extranjero.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1946.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos, al Sur del paralelo 42º, la introducción de ovinos para ser faenados en los establecimientos de la zona con destino a su reexportación al extranjero, por un plazo máximo de tres (3) años.

Art. 2º — No ha lugar a la devolución de derechos solicitada por la recurrente.

Art. 3º — La Dirección General de Aduanas dispondrá la adopción de medidas y requisitos destinados a asegurar el cumplimiento de la condición impuesta para gozar de la franquicia de que se trata, inclusive la comprobación de destino.

Art. 4º — Comuníquese y pase a la repartición nombrada a sus efectos.

FARRELL.
Amaro Avalos.

DECRETO 2.459/46

Disponiendo que la representación del fisco en los juicios por cobro de impuestos de aduana, multas, servicios, etcétera, sea ejercida, en todas las jurisdicciones e instancias, por procuradores fiscales o por funcionarios de la Dirección General de Aduana, que ésta designe.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — En los juicios por cobro de impuestos de aduana, multas, servicios, intereses y otros cargos; en los promovidos por repetición de los mismos, así como en los recursos contenciosos autorizados por las ordenanzas y la ley de aduana, la representación del fisco ante todas las jurisdicciones e instancias, será ejercida por los procuradores fiscales o por los funcionarios de la Dirección General de Aduanas que ésta designe.

Mientras la representación no sea ejercida por los funcionarios designados por la Dirección General de Aduanas, el fisco será representado por los procuradores fiscales, quienes recibirán instrucciones, directas de esa dependencia y a la cual le deberán rendir cuenta de su gestión.

Art. 2º — La intervención de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas excluirá la representación de los procuradores fiscales en cualquier estado del juicio y su personería se acreditará con el testimonio de su designación expedido por esa repartición.

El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar a

cargo de empleados de la dirección general cuando ésta lo requiera.

Art. 3º — Los procuradores fiscales y funcionarios que representen al fisco percibirán honorarios únicamente cuando éstos no estén a cargo de la Nación y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal.

Los funcionarios que representen a la dirección general no podrán, en ningún caso, patrocinar o ser mandatarios de litigantes contra la Nación, intervenir en cuestiones judiciales o extrajudiciales en los que la Nación o contribuyentes sean parte, tramitar expedientes administrativos que por tal motivo se originen, salvo que se trate de intereses personales del empleado o de sus parientes consanguíneos, cónyuge o afines en primer grado.

Art. 4º — La procuración del Tesoro concertará con las reparticiones con representación directa en juicio, la forma en que ella tenga que ser ejercida, de acuerdo con un criterio uniforme en las cuestiones de orden general y siguiendo las instrucciones básicas que en ese sentido les imparta.

Art. 5º — Derógase toda disposición legal o reglamentaria que se oponga a lo establecido en el presente decreto.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — José Humberto Sosa Molina. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Juan Pistarini.

DECRETO 10.584/46

Dejando sin efecto la franquicia del artículo 50 de la ley 12.578, que autoriza el empleo de la borra de seda (fiocco), de procedencia extranjera, en las máquinas importadas libres de derechos, bajo el amparo de las leyes 11.588 y 12.345.

Buenos Aires, 16 de abril de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Déjase sin efecto la franquicia acordada por el artículo 50 de la ley 12.578, que autoriza el empleo de la borra de seda (fiocco) de procedencia extranjera, en las máquinas importadas libres de derechos bajo el amparo de las leyes 11.588 y 12.345.

Art. 2º — Acuérdate un plazo de ciento ochenta (180) días para que los industriales puedan dar empleo al total de las partidas que hayan adquirido y que podrán ser mezcladas con fibra nacional, sin limitación de porcentaje.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

Felipe Urdapilleta. — Amaro Avalos. — Abelardo Pantin. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — José Humberto Sosa Molina. — Juan Pistarini. — F. Pedro

DECRETO 14.376/46

Modificando el artículo 104 de la ley de aduana en la parte que establece el estipendio extraordinario para los ayudantes de 5ª o capataces.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase el artículo 104 de la ley de aduana, en la parte que establece el estipendio extraordinario para los ayudantes de 5ª o capataces, el que se eleva a la suma de nueve pesos moneda nacional (\$ 9 m/n.), por cada servicio en que intervingan.

Art. 2º — Modifícase, igualmente, el artículo 14 del decreto 219 de 28 de septiembre de 1943, elevando a pesos catorce con sesenta y cinco centavos (\$ 14,65 m/n.), la suma que deben abonar los agentes marítimos como retribución por el personal empleado en el manejo, control e inspección de cada uno de los guinches que utilicen en horas extraordinarias; y asimismo, elévase la escala de salarios que determina el artículo 15 del mismo decreto, en la siguiente forma: por cada turno de trabajo: peones, \$ 7,20; guincheros, guincheros ayudantes, ascensoristas, hidrantes y ajustadores de 2ª, \$ 8; capataces-ajustadores, guincheros a vapor, empleados, apuntadores y capataces, \$ 9 moneda nacional.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta. — José M. Astigueta. — Juan Pistarini. — Abelardo Pantin.

DECRETO 14.377/46

Incluyendo a la aduana de Peso de los Libres entre las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito de y para el Paraguay, destinadas o procedentes del Brasil y Uruguay.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyese entre las excepciones que consagra el artículo 96 de la ley de aduana (texto ordenado), la siguiente:

9º Las que pasen de tránsito de y para el Paraguay, destinadas o procedentes del Brasil y Uruguay, por la aduana de Paso de los Libres.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — José Humberto Sosa Molina. — Juan Pistarini. — F. Pedro Marotta.

DECRETO 15.362/46

Modificando el artículo 34 del decreto 19.492, del 25 de julio de 1944

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Modifícase el artículo 34 del decreto 19.492 del 25 de julio de 1944, el que quedará redactado en la siguiente forma:

Artículo 34. — Los barcos de bandera nacional en desarme, previa declaración de los armadores de su pase a dicha situación, obanarán una tercera parte de los derechos de puertos que les correspondan.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y póngase oportunamente en conocimiento del Honorable Congreso Nacional.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — F. Pedro Marotta. — Juan Pistarini. — Felipe Urdapilleta. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin.

DECRETO 15.364/46

Declarando excluidas a las gasas y vendas hidrófilas, etcétera, de la franquicia del artículo 6º de la ley de aduana.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase excluidos a las gasas y vendas hidrófilas, vendas cambric, liencillos para

vendas y linón o tarlatana para enyesados, de la franquicia que el artículo 6º de la ley de aduana consagra a favor de los medicamentos, drogas, instrumentos y aparatos para los hospitales nacionales, provinciales o municipales de la República.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso Nacional.

FARRELL.

Amaro Avalos. — José M. Astigüeta. — José Humberto Sosa Molina. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta. — Juan I. Cooke. — Abelardo Pantín. — Juan Pistarini.

DECRETO 12.646/43

Declarando libres de derechos, excepto el adicional de 10 %, a los materiales para un laboratorio y planta experimental de minería.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Declárase libre de derechos (excepto el adicional del 10 %) los materiales que introducirá la Corporación para la Promoción del Intercambio, sociedad anónima, con el objeto de instalar un laboratorio y planta experimental de minería, previa comprobación de destino.

Art. 2º — Las divisas necesarias para abonar al exterior los materiales a que se refiere el artículo precedente serán otorgadas al tipo de cambio preferencial de \$ 373.13 m/n. los 100 dólares a su equivalente en otras monedas.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese y archívese.

RAMÍREZ.

César Ameghino.

Art. 2º — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 1946.

Oscar E. Albrieu. — Antonio J. Benítez. — José M. Argaña. — Hernán S. Fernández. — Alcides Esteban Montiel. — Benito J. Ottonello.

En disidencia parcial:

Arturo Frondizi. — Emilio Ravignani. — Silvano Santander.

DECRETO 10.170/45

Declarando libres de derechos, por el término de seis meses, las copias de películas cinematográficas argentinas confeccionadas en el extranjero.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Por el término de seis meses, declárase libre de derechos la importación de las copias de películas cinematográficas argentinas confeccionadas en el extranjero.

Art. 2º — La Dirección General de Aduanas adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad de la renta fiscal.

Art. 3º — Incorpórase a los negativos de las películas rodadas en el país, al régimen determinado en el artículo 120 de la reglamentación de la ley de aduana.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

César Ameghino.

DECRETO 32.775/45

Prorrogando por seis meses, los efectos del decreto 10.170, de 5 de mayo de 1945

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1945.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase por el término de seis meses la vigencia del decreto 10.170 (102) de 5 de mayo de 1945.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos.

a) DECRETOS LEYES SOBRE LEGISLACION IMPOSITIVA

SUMARIO

Decreto Nº	Fecha	CONCEPTO	Decreto Nº	Fecha	CONCEPTO
6.755	26- 8-943.	— Normas para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes.	4.752	28- 2-945.	— Representación directa de la Dirección General del Impuesto a los Réditos ante la justicia.
18.229	31-12-943.	— Modificación del impuesto a los réditos.	5.105	9- 3-945.	— Modificaciones al impuesto a los réditos.
18.230	31-12-943.	— Impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios.	9.907	4- 5-945.	— Modificación del impuesto interno a los artículos suntuarios, decorativos o de adorno.
18.231	31-12-943.	— Impuesto de emergencia a las apuestas en los hipódromos de carreras.	10.179	5- 5-945.	— Exención de sellado a las actuaciones ante el Consejo Agrario Nacional.
18.232	31-12-943.	— Reducción de premios de la lotería nacional.	15.151	12- 7-945.	— Condonación de multas por infracción al impuesto de sellos.
18.233	31-12-943.	— Aumento del impuesto a las ventas de mercaderías consignadas al exterior.	24.871	10-10-945.	— Modificaciones y aclaraciones a la ley 12.143.
18.234	31-12-943.	— Impuesto interno a la malta cervecera.	25.046	10-10-945.	— Régimen de condonación de multas a escribanos infractores a los artículos 22 y 25 de la ley 11.285 (texto ordenado).
18.235	31-12-943.	— Modificación del impuesto interno a los naipes.	31.447	10-12-945.	— Normas para la publicación de edictos en los juicios por cobro de impuesto territorial contra propietarios desconocidos.
18.410	31-12-943.	— Impuesto adicional a los combustibles.	34.603	31-12-945.	— Ampliación del régimen de condonación de multas para los infractores involuntarios del impuesto de sellos.
308	8- 1-944.	— Fijando la fecha en que entrará a regir el impuesto adicional a los combustibles.	1.820	19- 1-946.	— Prórroga del impuesto a los beneficios extraordinarios.
5.890	10- 3-944.	— Representación directa de la Administración General de Impuestos Internos ante la justicia.	5.640	16- 3-946.	— Suspendiendo la aplicación del decreto 33.405/944, de creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria, excepto tres artículos.
5.891	10- 3-944.	— Facilidades para el pago de las diferencias del aumento del impuesto a los réditos.	8.349	23- 3-946.	— Condonación de multas y reducción de intereses punitivos por falta de pago de impuesto interno sobre aceites lubricantes.
5.892	10- 3-944.	— Prórroga de la forma y proporción en que se distribuye el producido del impuesto a las ventas.	13.673	14- 5-946.	— Fijando el término de vigencia del impuesto adicional a los combustibles.
6.176	10- 3-944.	— Impuesto interno a los artículos suntuarios y de adorno.	14.338	20- 5-946.	— Modificando la ley 11.682 (texto ordenado) y el decreto ley 18.229-43, sobre impuesto a los réditos.
8.110	31- 3-944.	— Reducción del interés punitivo para el pago de impuesto interno y multas.	14.341	20- 5-946.	— Modificando la ley 11.683 (texto ordenado) de procedimiento en materia de impuesto a los réditos.
8.255	5- 4-944.	— Modificaciones al impuesto interno a los tabacos.	14.342	20- 5-946.	— Estableciendo un impuesto a los beneficios no alcanzados por el impuesto a los réditos.
9.432	21- 6-944.	— Nuevas disposiciones sobre impuesto de sellos.	15.921	1- 6-946.	— Eximiendo del impuesto a los réditos a determinadas porciones de utilidades invertidas en la instalación o ampliación de plantas industriales.
17.922	6- 7-944.	— Plazo para el pago de impuesto correspondiente a materia prima de artículos que llevan otro impuesto interno.	16.084	31- 5-946.	— Determinando el destino a que serán aplicados los ingresos en concepto de impuesto de emergencia a las apuestas en los hipódromos de carreras.
21.702	18- 8-944.	— Modificaciones al impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios.	16.112	31- 5-946.	— Condonando multas incurridas por infracción al decreto 9.432/944, sobre impuesto de sellos.
26.280	28- 9-944.	— Arancel de la Escribanía General de Gobierno.			
33.405	11-12-944.	— Creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria.			
30.141	7-11-944.	— Término de prescripción para la acción de repetición de los impuestos a los réditos y a las ventas.			
3.377	16- 2-945.	— Alcance de la exención de impuestos a las cubiertas y llantas de goma macizas.			

b) DECRETOS LEYES SOBRE LEGISLACION ADUANERA

SUMARIO

Decreto **CONCEPTO**

Texto de los decretos sometidos a la consideración del Honorable Congreso Nacional

- 5.742, de 16 de agosto de 1943, prorrogando por el término de cinco años, a contar del 1 de enero de 1943, los efectos del artículo 43 de la ley 12.578.
- 5.904, de 19 de agosto de 1943, declarando libre de derechos la importación de caucho natural y de artículos manufacturados con dicho producto.
- 10.157, de 7 de octubre de 1943, extendiendo a los equipos de inyección, equipos eléctricos y aceros destinados a integrar motores industriales, siempre que sean diseñados, fundidos, usinados y armados en el país, en no menos del 80 % de su peso, la liberación de derechos que acuerdan los decretos 33.160 y 47.443, de 1939.
- 10.232, de 7 de octubre de 1943, declarando libre de derechos la importación de huevos de gusano de seda.
- 10.233, de 7 de octubre de 1943, declarando libre de derechos la importación de corteza de quina, hojas de belladona y jaborandi y raíces de ipecacuana y barbasco, que se introduzcan con destino a la elaboración de drogas (alcaloides) y productos de aplicación medicinal.
- 11.601, de 13 de octubre de 1943, reduciendo de 10 % a 5 % el recargo establecido en el artículo 38 de la ley de aduana, cuando se trate de mercaderías de las secciones tejidos y confecciones de la tarifa y a las hechas con materias textiles —o en las que éstas predominen— de la sección mercería.
- Disponiendo, asimismo, la no aplicación de dicho recargo a las mercaderías de la sección ferretería de la tarifa cuando su material constitutivo sea el hierro o acero, o predomine el hierro o acero en su composición.
- 17.067, de 22 de diciembre de 1943, disponiendo la devolución de los derechos pagados por la importación de cloruro de potasio destinado a la fabricación de clorato de potasio, cuando se efectúe la exportación de este último producto.
- 827, de 17 de enero de 1944, incluyendo a la aduana de Concordia entre las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito para puertos de la República Oriental del Uruguay.
- 6.182, de 10 de marzo de 1944, aclarando que el gravamen establecido en el artículo 2º, inciso c), de la ley de aduana, incide sobre todos los artículos de nácar manufacturados, inclusive los botones.
- 14.517, de 7 de junio de 1944, incluyendo entre las exenciones de impuesto, a que se refiere el artículo 2º del decreto 5.904, de 19 de agosto de 1943, el de eslingaje directo.
- 15.179, de 14 de junio de 1944, eximiendo del derecho adicional del 10 % a los rolizos de pino blanco de la partida 1.748 de la tarifa, siem-

- Decreto** **CONCEPTO**
- 17.947, de 10 de julio de 1944, habilitando como aduana mayor o de depósito a las receptorías de rentas aduaneras de Santo Tomé y La Quiaca.
- 20.976, de 7 de agosto de 1944, declarando incluida en la franquicia dispuesta en el artículo 1º del decreto 5.742, de 16 de agosto de 1943, por el término que en el mismo se establece, a las maquinarias y materiales que no se produzcan en el país, destinados a establecimientos metalúrgicos cuyas actividades estén vinculadas con la producción de elementos necesarios a la defensa nacional.
- 22.813, de 25 de agosto de 1944, liberando de derecho al mineral de antimonio que se destine a la elaboración en el país, de antimonio metálico o régulo.
- 28.504, de 20 de octubre de 1944, liberando de derechos la importación de aves con certificado de pedrigree, destinadas a la reproducción.
- 29.147, de 26 de octubre de 1944, declarando libre de derechos la importación del producto denominado «D. D. T.», sustancia semielaborada que contiene 40 % de diclorodifenil tricloroetano.
- 34.825, de 28 de diciembre de 1944, declarando transitoriamente libre de derechos la importación de capullos de seda.
- 35.760, de 30 de diciembre de 1944, declarando libre de derechos la introducción de folletos y catálogos comerciales referentes a artículos chilenos.
- 3.824, de 20 de febrero de 1945, declarando libre de derechos la introducción por las aduanas y receptorías situadas al Sur del paralelo 42º, de los materiales y mercaderías extranjeros necesarios para el vestuario, la alimentación, la salud, la vivienda y el trabajo de la población.
- 3.997, de 23 de febrero de 1945, aclarando el alcance de la franquicia que acuerda el artículo 1º de la ley 11.588 (6º de la ley de aduana) a las máquinas y caños maestros para instalaciones públicas de alumbrado a gas o electricidad, aguas corrientes y cloacas, en la que no se comprenden los repuestos y todo otro material que no esté expresamente incluido en su texto.
- 4.762, de 28 de febrero de 1945, declarando transitoriamente libre de derechos la importación de papel de tipo especial apto para la confección de envases mayores que se utilicen para envasar lanas y productos de la ganadería del país.
- 5.527, de 10 de marzo de 1945, declarando libre de derechos la importación de maderas en rolizos, hasta un millón de pesos de valor, que procedentes de Chile se introduzcan por el destacamento de Hua Hum.
- 5.528, de 10 de marzo de 1945, elevando de ½ % a 1 % la tasa a que se refieren los artículos 23 y 24 de la ley de aduana, que se exige en com-

Decreto	CONCEPTO
	pensación de los gastos que demanda la comprobación de destino de las mercaderías que gozan de liberación o menores derechos condicionales.
5.799,	de 13 de marzo de 1945, creandó la receptaría de rentas aduaneras de Clorinda (Formosa).
8.116,	de 18 de abril de 1945, incluyendo a los puertos de Buenos Aires e Ibicuy entre las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito para puertos de la República del Paraguay.
13.610,	de 27 de junio de 1945, incluyendo en la franquicia acordada por decreto 29.147, de 26 de octubre de 1944, al producto denominado: diclorodifenil triclooctano, que se importe en estado técnicamente puro.
16.191,	de 18 de julio de 1945, incluyendo en las franquicias acordadas por el artículo 35 de la ley 12.345 (artículo 6º de la ley de aduana) a las usinas provinciales de energía eléctrica con sus correspondientes cámaras de transformación y redes de distribución.
16.192,	de 18 de julio de 1945, declarandó que el pescado fresco, la carne fresca bovina y ovina y la leña, procedentes de Chile, goza, a partir de la fecha del decreto mencionado, de la franquicia que acuerda el decreto 3.824, de 20 de febrero de 1945.
16.193,	de 18 de julio de 1945, declarando comprendido en el menor derecho establecido en el artículo 2º, inciso k) de la ley de aduana, al hilado de seda cruda en madejas (grege), que se importe con destino a la fabricación de hilos para coser.
18.514,	de 9 de agosto de 1945, modificando el inciso 3º del artículo 96 de la ley de aduana, referente a las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito con destino a Chile y Bolivia.
30.021,	de 27 de noviembre de 1945, declarando exentas del recargo de 10 % a que se refiere el artículo 38 de la ley de aduana, a los accesorios y repuestos para automóviles y camiones.
30.220,	de 27 de noviembre de 1945, incluyendo en el inciso m) del artículo 2º de la ley de aduana al producto denominado: escila roja en polvo.
4.098,	de 12 de febrero de 1946, declarando libre de derechos, por el término de seis meses, la importación de película virgen, procedente de Chile, para impresionar copias de films nacionales a exhibirse en dicho país.
4.721,	de 15 de febrero de 1946, declarando libre de derechos al Sur del paralelo 42º y por el plazo máximo de tres años, la introducción de ovinos para ser faenados en los establecimientos de la zona, con destino a su reexportación al extranjero.

Decreto	CONCEPTO
2.459,	de 25 de febrero de 1946, disponiendo que la representación del fisco en los juicios por cobro de impuestos de aduana, multas, servicios, intereses y otros cargos, así como en los recursos contenciosos, sea ejercida, en todas las jurisdicciones e instancias, por los procuradores fiscales o por los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, que ésta designe.
10.584,	de 16 de abril de 1946, dejando sin efecto la franquicia acordada por el artículo 50 de la ley 12.578, que autoriza el empleo de la borra de seda (fiocco), de procedencia extranjera, en las máquinas importadas libres de derechos, bajo el amparo de las leyes 11.588 y 12.345.
14.376,	de 21 de mayo de 1946, modificando el artículo 104 de la ley de aduana en la parte que establece el estipendio extraordinario para los ayudantes de 5º o capataces, el que eleva a la suma de nueve pesos moneda nacional (\$ 9 moneda nacional), por cada servicio en que intervenga.
14.377,	de 21 de mayo de 1946, incluyendo a la aduana de Paso de los Libres entre las vías permitidas para el paso de mercaderías de tránsito de y para el Paraguay, destinadas o procedentes del Brasil y Uruguay.
15.362,	de 29 de mayo de 1946, modificando el artículo 34 del decreto 19.492, del 25 de julio de 1944, el que queda redactado en la siguiente forma: Artículo 34. — Los barcos de bandera nacional en desarme, previa declaración de los armadores de su pase a dicha situación, abonarán una tercera parte de los derechos de puerto que les correspondan.
15.364,	de 29 de mayo de 1946, declarando excluidos a las gasas y vendas hidrófilas, vendas cambric, liencillos para vendas y lino o tarlatana para enyesados, de la franquicia que el artículo 6º de la ley de aduana consagra a favor de los medicamentos, drogas, instrumentos y aparatos para los hospitales nacionales, provinciales o municipales de la República.
12.646,	de 29 de octubre de 1943, declarando libre de derechos, excepto el adicional de 10 %, a los materiales para un laboratorio y planta experimental de minería.
10.170,	de 5 de mayo de 1945, declarando libre de derechos, por el término de seis meses, las copias de películas cinematográficas argentinas confeccionadas en el extranjero.
32.775,	de 19 de diciembre de 1945, prorrogando por seis meses, a los efectos del decreto 10.170, de 5 de mayo de 1945.

INDICE NUMERICO

Decretos leyes sobre legislación impositiva

Decreto N°	Página	Decreto N°	Página	Decreto N°	Página
308/44	172	9 432/44	176	18 231/43	169
1.820/46	211	9 907/45	205	18 232/43	169
3 377 45	204	10 179/45	208	18 233/43	169
4 752/45	204	13 673/46	212	18 234/43	170
5 105/45	205	14 338/46	212	18 235/43	170
5 640/46	211	14 341/46	226	18 410/43	171
5 890/44	172	14 342/46	239	21 702/44	184
5 891 44	173	15 151/45	208	24 671/45	208
5 892/44	173	15 921/46	240	25 046/45	209
6 176 44	173	16 084/46	241	26 280/44	195
6 755 43	162	16 112/46	241	30 141/44	204
8 110/44	175	17 922/44	193	31 447/45	210
8 255/44	175	18 229/43	163	33 405/44	197
8 349/46	211	18 230/43	167	34 603/45	210

Decretos leyes sobre legislación aduanera

Decreto N°	Página	Decreto N°	Página	Decreto N°	Página
827/44	244	10 170/45	252	16 193/45	249
2 459/46	250	10 232/43	243	17 087/43	243
3 824/45	246	10 233/43	243	17 947/44	244
3 997/45	246	10 584/46	250	18 514/45	249
4 098/46	249	11 601/43	243	20 976/44	245
4 721/46	250	12 646/43	252	22 813/44	245
4 762/45	247	13 610/45	248	28 504/44	245
5 527 45	247	14 376/46	251	29 147/44	245
5 528/45	247	14 377/46	251	30 021/45	249
5 742/43	242	14 517/44	244	30 220/45	249
5 799 45	247	15 179/44	244	32 775/45	252
5 904/43	242	15 362/46	251	34 825/44	245
6 182/44	244	15 364/46	251	35 760/44	246
8 116 45	248	16 191/45	248		
10 157/43	242	16 192/45	248		

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la mayoría.

Sr. Fernández (H. S.). — Señor presidente y señores diputados: la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes, dictados en el período comprendido entre el 4 de junio de 1943 y el 3 de junio de 1946, designada por esta Honorable Cámara, también ha producido despacho sobre los ochenta y cinco decretos leyes que contiene el orden del día 194, que se tiene a consideración, relacionados todos ellos con leyes impositivas y de legislación aduanera. La mayoría de esa comisión, en cuyo nombre tengo el honor de informar, os aconseja su aprobación con fuerza de ley, a partir de la fecha en que fueron publicados.

Me permito expresar, en primer lugar que, sobre todas las cosas, al considerar esos decretos leyes, la comisión ha tenido el profundo deseo de facilitar el camino de la normalidad institucional y jurídica de la Nación. Reconocemos y aceptamos que en algunos de ellos hay deficiencias y que han sido modificados o substituidos por otras disposiciones, pero aconsejamos su aprobación porque, en su hora y en su tiempo, estuvieron en vigencia, y con ellos se han cobrado importes y aplicado sanciones, y si no fueran aprobados, se daría lugar a un semillero de pleitos contra el fisco, ya que los particulares tendrían derecho a reclamar la devolución de esos pagos efectuados y nuestros jueces, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, y también de acuerdo a los principios que informan nuestro ordenamiento jurídico, se verían obligados a declarar procedentes esas demandas.

Deseamos el orden y la estabilidad, frente a hechos consumados. Por eso, estos decretos leyes deben ser aprobados. Además, los antecedentes, y fundamentos de todos estos decretos leyes, justo es reconocerlo, demuestran estudios previos, preocupación por legislar con cuidado frente a premiosas necesidades fiscales, y un conocimiento real de las distintas materias tratadas. De los 85 decretos leyes en consideración, 43 se vinculan a las cuestiones aduaneras y portuarias; y los 42 restantes se refieren a diversos impuestos y tasas. Cabe señalar que, a pesar del gran número de actos que se ratificarán por esta sanción, en su mayoría son cuestiones simples, relativas al mejoramiento de los procedimientos en la percepción de la renta, a exenciones impositivas, condonaciones de multas, liberación de derechos aduaneros, modificaciones a leyes existentes y de larga vigencia, y sólo algunos pocos que implican creación de impuestos y tasas. Me ocuparé preferentemente de estos últimos.

Las reformas impositivas realizadas por estos decretos leyes, dictados por el gobierno revolucionario se caracterizan: primero, por buscar la perfección en la percepción y fiscalización de los impuestos existentes; segundo, por acentuar la incidencia de los gravámenes sobre la renta, al efecto de suprimir o modificar el sistema fiscal existente que se asentaba, principalmente, sobre los artículos de consumo; tercero, por utilizar el impuesto como instrumento de política social, desgravando al pequeño contribuyente y aumentando las tasas en las escalas superiores; cuarto, por atenuar el monto de los beneficios extraordinarios producidos por las circunstancias anormales del estado de guerra; quinto, por absorber parte del dinero sobrante que contribuye a crear la inflación; y sexto, por aumentar los ingresos del Estado, a fin de poder atender los gastos siempre crecientes de la administración nacional.

Entre las sanciones que se tienen a consideración existen cinco nuevos gravámenes: el impuesto a los beneficios extraordinarios, el impuesto a los beneficios no alcanzados por el impuesto a los réditos o impuesto a las ganancias eventuales, el impuesto de emergencia a las apuestas en los hipódromos de carreras, el impuesto a la malta cervecera y el impuesto adicional a los combustibles.

Además, por otros decretos se han introducido modificaciones que alteran el monto de los gravámenes existentes, como los que se refieren al impuesto a los réditos, a las ventas, a los naipes, a los artículos suntuarios y de adorno, a los tabacos, al sellado, a la contribución territorial y también al arancel de la escribanía de gobierno.

Como no es posible referirme en particular a cada uno de estos decretos, dada la naturaleza e índole de este informe, me he de ocupar solamente de algunos relacionados con los impuestos nuevos, y luego, de las reformas a las leyes existentes.

En primer lugar, me voy a referir al impuesto a los beneficios extraordinarios. El 31 de diciembre de 1943 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 18.230, estableciendo este impuesto por tres años, destacando que las utilidades extraordinarias originadas en el ejercicio del comercio, de la industria, de la minería, de las explotaciones agropecuarias y de cualquier otra actividad que importe la transformación o disposición habitual de bienes, no se hubieran producido si la acción oficial no hubiera mantenido el nivel mínimo de los precios de los productos básicos de nuestra economía y que no se justificaba que el Estado dejara de participar en estas ganancias. Que necesitaba resarcirse —agregaba en uno de los considerandos de este decreto—, aunque fuera en parte, de los egresos a gastos que le tocaba afrontar en la atención de los intereses gene-

rales de la administración pública y así evitaría en parte, la desigualdad resultante del hecho de que un grupo de actividades o de situaciones particulares, se beneficiasen en una proporción mucho mayor que el resto de la población.

Se consideran beneficios extraordinarios en cada ejercicio los excedentes de ganancia que resulten al comparar la utilidad del año en que se liquida el impuesto con la utilidad del año base que se estima como normal. Apartándose de los antecedentes parlamentarios, este decreto eximió del impuesto a los ingresos extraordinarios provenientes del trabajo personal, y elevó el mínimo no imponible a fin de dejar fuera del régimen del gravamen a las pequeñas explotaciones, en las que el esfuerzo de los propietarios constituye la principal fuente de ganancia.

El régimen creado por el decreto 18.230, del criterio del año básico, debió ser transformado por el 21.702, del 18 de agosto de 1944, al comprobarse que la aplicación de aquel criterio originaba algunas situaciones poco equitativas. En efecto, dos empresas de idénticas características que tuvieran el mismo capital, que se desempeñaran en el mismo ramo de actividades y que obtuvieran idénticas utilidades, pagarían, sin embargo, distinto impuesto por el hecho de que en el año básico de 1938 ó 1939 hubieran tenido diferentes utilidades. También existía el inconveniente de que a las empresas instaladas con posterioridad a esos años se les aplicaba una norma diferente, pues se les atribuía como ganancia normal, la equivalente al 10 ó 12 % del capital y reservas libres del año de imposición, gravamen que resultaba superior al que debían abonar las empresas antiguas, aunque sus ganancias y capitales fueran idénticos.

Se decidió, en consecuencia, eliminar ese criterio doble y establecer, como ganancia normal para todos los contribuyentes, una suma equivalente al 12 % del capital y reservas libres, del año de imposición, es decir, un porcentaje más favorable para el contribuyente que el que fijaba el proyecto y despacho de la Comisión de Presupuesto en el año 1941.

En el mismo decreto se admitieron deducciones por diversos conceptos, con lo que se aumentó el mínimo no imponible y también se aclararon algunos otros que habían originado dificultades de interpretación.

Próximo a vencer este impuesto, el decreto 1.820 del 19 de enero de 1946, lo prorrogó por un año más, considerando que las razones de orden económico-social que fundamentaron su aplicación, persistían, y por estas mismas razones el actual Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley con una nueva prórroga de dos años, que esta Honorable Cámara deberá considerar antes de terminar el presente período de sesiones.

Otro de los nuevos gravámenes creados por el gobierno revolucionario, es el que se aplica al producto de la venta de boletos de apuestas en los hipódromos habilitados en todo el territorio de la República, adicional a los otros ya creados por otras leyes, y su duración es de 10 años. Lleva el número 18.231 y fija el 5 % sobre el producto de las ventas.

Se temió que este impuesto afectara al monto de las apuestas y se pudieran resentir las obras que se sostienen con las utilidades de los hipódromos; pero la práctica ha demostrado lo contrario, ya que con posterioridad se han registrado cotizaciones récords.

Este impuesto, en 1944, dió 16,6 millones y en 1945 se elevó a 19,3 millones.

Deseo igualmente destacar que por el decreto 16.084, del 31 de mayo del mismo año, que también se ratifica, se determina el destino que debe darse al producido de este impuesto, aplicándolo a proveer de alimentos, vestidos y útiles a los niños pobres de las escuelas de las provincias y territorios nacionales.

El decreto 18.410, de fecha 31 de diciembre de 1943, crea un impuesto adicional a los combustibles, el que se establece por 10 años y fija un recargo de un centavo por litro a todo combustible proveniente de la destilación del petróleo. Su fin ha sido aumentar los recursos que establecen las leyes 11.658 y 11.625, que han permitido realizar una hermosa obra vial en todo el país, pero el convenio con el Brasil, ratificado por ley 12.333, sobre la construcción del puente internacional, y los convenios con Bolivia y con Chile, sobre vinculación de carreteras, tornaron insuficientes los recursos de referencia, por lo que se resolvió crear este impuesto adicional que en 1945 ha producido 31,6 millones de pesos. Este decreto establece que los «fondos creados por el artículo 1º se aplicarán exclusivamente al estudio, construcción, mejoramiento y conservación de las carreteras del sistema troncal de caminos nacionales que sirvan especialmente a la vinculación internacional, así como sus ensanches y obras anexas a las mismas; pudiendo destinar hasta un 10 % de esos recursos para caminos de acceso a los aeródromos, aeropuertos y otros establecimientos de la infraestructura aeronáutica nacional e internacional así como para construcción de plataformas de aterrizaje en aquéllos».

Además, por el artículo 7º del mismo decreto se soluciona el problema que se le creaba a los consumidores y a las oficinas recaudadoras, puesto que la ley gravaba sólo los combustibles pesados que se destinaban a automotores que marchan por la vía pública, y ello obligaba a una fiscalización engorrosa, que afectaba a todo el expendio de combustible pesado, aunque en definitiva apenas pagaran impuesto un 5 % del total.

El decreto 308 del 8 de enero de 1944 fija como fecha de iniciación de este impuesto el día 11 de enero del mismo año, a fin de aclarar las disposiciones del decreto 18.140.

Otro de los nuevos impuestos es el interno a la malta cervecera, que se grava con 20 centavos por kilogramo, lo que determina un recargo de 5 ó 10 centavos por litro y que se trasladaría a una industria en muy buen estado de prosperidad, y para que la cerveza nacional no estuviera en desventaja frente a las extranjeras, el mismo decreto 18.234 establece una sobretasa de 7 centavos para las importadas.

El impuesto a las ganancias eventuales o impuesto a los beneficios no alcanzados por el impuesto a los réditos, es el gravamen que más resistencia ha despertado. Es un impuesto de emergencia cuya duración se establece hasta el 31 de diciembre de 1955.

Su fundamento es simple. Es sabido que la ley de impuesto a los réditos, ciñéndose a un concepto económico de la renta, que no corresponde exactamente al concepto fiscal del rédito, deja fuera del régimen impositivo a las ganancias del capital por no emanar habitual y periódicamente de una determinada fuente productora de rentas. Ello crea una situación de hecho desfavorable para las rentas emanadas del trabajo, de los ahorros y de la propiedad inmueble, que son objeto del impuesto, mientras que una ganancia de capital escapa al mismo. Es sabido que en las transacciones inmobiliarias se han obtenido enormes beneficios que están exceptuados de pagar impuesto a los réditos. Así, por ejemplo, mientras 50.000 pesos obtenidos mediante el trabajo en el comercio, o en la industria, o a lo largo de un año de ruda labor, deben pagar impuesto, la ganancia de 50.000 pesos obtenida en la compraventa de una propiedad en un momento de importantes alzas en los precios de los inmuebles, no abonaba impuesto a los réditos.

Si por una razón doctrinaria la ganancia de capital no puede asimilarse al rédito, lo cierto es que por otro lado lo que interesa al Estado para fijar la distribución de las cargas fiscales en los individuos, es la capacidad contributiva de éstos, determinada por la cantidad de bienes que han ingresado a su patrimonio, cualquiera sea su procedencia. Por eso, el artículo 2º del decreto 14.342, del 20 de mayo de 1946, a que me vengo refiriendo, declara comprendidos dentro del régimen del gravamen, en cuanto no fueren alcanzados por la ley de impuesto a los réditos, a los beneficios obtenidos en la venta y permuta de bienes muebles o inmuebles, premios de lotería, juegos de azar, y en general, toda clase de enriquecimiento que no esté expresamente exceptuado.

No pagan este impuesto, en cambio, las utilidades obtenidas por las personas o entidades públicas o privadas que estén exentas del pago

del impuesto a los réditos, las donaciones, herencias y legados sujetos al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, las indemnizaciones de seguro por causa de muerte o de incapacidad, producida por accidente o enfermedad, los beneficios provenientes de la venta, cambio o permuta de bienes muebles adquiridos para uso personal del contribuyente y sus familiares, a menos que se trate de obras de arte o de inversiones de lujo, vendidas durante el año por un valor superior en conjunto a 10.000 pesos moneda nacional. En este decreto hay otras disposiciones que dan un tratamiento más equitativo al contribuyente tales como permitirles deducir el importe de las mejoras y de los gastos necesarios; se admiten, la compensación de las ganancias con los quebrantos del mismo año y hasta de cuatro años posteriores y las que fijan como mínimo no imponible, la suma de \$ 4.000.

La tasa del 20 % que parecería excesiva, no lo es si se tiene en cuenta el origen de las ganancias que han de pagar el tributo, tales como la especulación y el juego. Se calcula que en este año ese impuesto ha producido más de 33.000.000 de pesos, y de ellos deben recibir participación las provincias y la Municipalidad de la Capital Federal, de acuerdo a las normas vigentes.

Se ha dicho que este decreto es inconstitucional por tener carácter retroactivo, pues habiéndose dictado en el mes de mayo de 1946, grava con este impuesto los beneficios provenientes de operaciones realizadas desde el 1º de enero de 1946. Debe aclararse, en primer lugar, que la retroactividad de la ley no es un principio constitucional, sino legal, y ello está legislado, no en la Constitución, sino en el Código Civil.

Por otra parte, nadie podrá negar que una ley fiscal como la que se considera es de orden público. Ello es lógico y tiene por fundamento el hecho de que las obligaciones y exigencias inherentes a las actividades del Estado requieren a su vez que éste cuente con todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Así lo tiene ya resuelto la Corte Suprema. Pueden verse sus fallos en tomos 99, 335, 134, 117, 22, 152, 163, etcétera.

El impuesto a las ganancias eventuales abarca un ejercicio anual y grava un estado patrimonial permanente. De ahí que este impuesto no sea real, ni sea indirecto. En mi concepto, es un impuesto directo y personal; no grava un hecho económico aislado, ni un acto jurídico determinado, sino que grava una situación patrimonial que tiene una duración en el tiempo, es decir, el enriquecimiento en un año fiscal que va desde el 1º de enero al 31 de diciembre. De ahí que el hecho imponible por la ley no sea una operación concluida en un momento

determinado, sino el enriquecimiento del patrimonio, como consecuencia de los actos gravables cumplidos durante doce meses del año, o de un período determinado.

El impuesto se percibe sobre la declaración jurada al finalizar el año y hasta ese momento el fisco no puede reclamar el pago. Ello explica cómo el hecho imponible recién se perfecciona el 31 de diciembre, o sea, al final del año-fiscal, y por la misma razón el contribuyente puede compensar ganancias o pérdidas de enero a diciembre, o viceversa. Es más; no sólo existe un mínimo no imponible personal, sino que los quebrantos pueden compensarse dentro de cuatro ejercicios.

De ello se infiere también, que esta ley no es retroactiva, ni mucho menos por ello, inconstitucional, como se ha pretendido, porque no afecta un derecho patrimonial adquirido, como lo requiere el artículo 17 de la Constitución nacional.

Rápidamente me he de referir a las principales reformas introducidas a los impuestos ya existentes, por otros decretos que nuestro despacho aconseja aprobar. Debo mencionar, en primer lugar, las que ha experimentado el régimen del impuesto a los réditos, como consecuencia de los siguientes decretos: 18.229, del 31 de diciembre de 1943; 5.105, del 9 de marzo de 1945; 14.338, del 20 de marzo de 1946, y 15.921, del 19 de junio de 1946. Más de diez años de experiencia en la aplicación de este impuesto habían puesto de manifiesto numerosas fallas en el régimen del mismo y es así como luego de sucesivas reformas parciales introducidas por varias leyes, el Poder Ejecutivo, en el año 1941, dispuso que la Dirección de Impuesto a los Réditos preparase un anteproyecto de sustitución íntegra de la ley 11.682, que antes de ser sometido al Congreso fué objeto de modificaciones, como consecuencia de las consultas efectuadas a distintas reparticiones públicas.

El proyecto enviado a la Cámara establecía tasas inferiores a las del anteproyecto y, en general, se encontraba regido por los siguientes propósitos: primero, obtener un mayor ingreso fiscal; segundo, aclarar, rectificar y precisar los conceptos básicos de la ley vigente, a fin de mejorar su aplicación; tercero, contemplar las observaciones formuladas al sistema vigente por los contribuyentes en general; cuarto, simplificar las obligaciones y requisitos que deberán cumplirse; quinto, beneficiar al pequeño contribuyente en el monto de sus pagos y en la forma de liquidar el impuesto; y sexto, corregir las deficiencias de la legislación para facilitar la fiscalización y la más equitativa percepción del gravamen.

En medio de una gran campaña contraria a la reforma, llevada a cabo por las asociaciones representativas de los mayores rentistas, la

Comisión de Presupuesto decidió limitar las reformas a aspectos parciales del régimen vigente, con el propósito de aumentar las tasas del impuesto y dar un tratamiento más justo a los contribuyentes y evitar la evasión legal de los títulos al portador. Producto de esa determinación fué el despacho incluido en el orden del día 41 del año 1942. Su discusión, sumamente ilustrativa, puso de manifiesto la oportunidad de proceder a un aumento de tasas y de evitar las evasiones. Finalmente, fué aprobado en general en la sesión del 23 de septiembre, sin que avanzara de ese estado.

Coincidente con el criterio de la Comisión de Presupuesto de la disuelta Cámara de Diputados, la comisión honoraria asesora del gobierno nacional, aconsejó la reforma parcial de la ley 11.682 y fué así como el gobierno revolucionario dictó el decreto 18.229 del 31 de diciembre de 1943, coincidente en muchos puntos con aquel despacho y, en general, con sus propósitos de aumentar las tasas, corregir la evasión y dar mejor tratamiento al contribuyente inferior. Importantes reformas reclamadas por los contribuyentes, como la compensación de réditos con quebrantos de distintos años; el aumento del mínimo no imponible para réditos provenientes del comercio y de la industria y réditos provenientes del trabajo personal; exenciones para las pequeñas rentas derivadas de la explotación de los campos; amortizaciones de los equipos de explotación para compensar el aumento de costo de reposición; deducción de las reservas destinadas a cubrir las obligaciones que determina la ley 11.729, fueron satisfechas en ese decreto que, al mismo tiempo, reajustó diversos conceptos básicos del impuesto, como el de la fuente argentina de los réditos, y dió normas a fin de destruir las maniobras más comunes mediante las cuales evadían el gravamen las rentas de los títulos al portador. También reglamentó la liquidación del impuesto para distintos tipos de sociedades comerciales, elevó la escala del impuesto adicional en las gradas superiores de la renta, disminuyendo, en cambio, el que debían abonar las pequeñas rentas.

El decreto 18.229 fué modificado parcialmente por el 5.105, del 9 de marzo de 1945, en la parte relativa a los beneficios establecidos en favor de los propietarios de campos, hasta que, el 20 de mayo del corriente año, el gobierno revolucionario dictó el decreto 14.338, cuyas disposiciones substituyen, íntegramente, a las del texto ordenado de la ley 11.682. Se vuelve, pues, al criterio sustentado por el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de 1941, de efectuar una sustitución íntegra del régimen vigente en vez de continuar con las reformas parciales, siempre difíciles y peligrosas.

En general, el decreto 14.332 sigue la estructura del proyecto de 1941 y repite la mayoría de sus disposiciones, suficientemente discutidas a lo largo del proceso que aquél siguió, al mismo tiempo que lo mejora en algunos aspectos mediante modificaciones y agregados. Puede decirse, en consecuencia, que sus propósitos son los de aquel proyecto que he mencionado anteriormente.

En las tasas se registra un aumento de la tasa básica de 3 a 5 por ciento, manteniéndose sin modificaciones la escala de las tasas adicionales.

No puede negarse que esta reforma implica un perfeccionamiento del régimen del impuesto a los réditos y que, aparte de los confesados propósitos fiscalistas de la misma, que se refleja principalmente en el aumento de las tasas y en los mejores instrumentos de fiscalización, que se acuerdan a las oficinas encargadas de la recaudación, también se derivan importantes beneficios para los contribuyentes en la forma de trámites más sencillos, disposiciones más claras y tratamiento más equitativo.

Esta tendencia ha sido reafirmada por el decreto 15.921, del 19 de junio del corriente año, que exime del impuesto a determinadas porciones de utilidades que se inviertan en la instalación o ampliación de plantas industriales.

También la ley 11.683, de procedimiento para la percepción y fiscalización de los impuestos recaudados por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, ha sido alcanzada por la reforma.

En 1942 la Comisión de Presupuesto y Hacienda había despachado favorablemente un proyecto de modificaciones incluido en el orden del día 42, que no llegó a ser considerado por la Cámara.

Posteriormente el gobierno revolucionario dictó dos decretos que modificaron parcialmente la ley 11.683: el decreto 30.141, de 7 de noviembre de 1944, por el que se estableció el término de prescripción de dos años para el ejercicio de la acción de repetición, reforma ésta que había sido contemplada en el mencionado despacho de la Comisión de Presupuesto; y el decreto 4.752, del 28 de febrero de 1945, que acordó personalidad a la Dirección General del Impuesto a los Réditos para actuar ante la justicia directamente. Por fin, el decreto 14.341, del 20 de mayo de 1946, acometió la reforma total de la ley 11.683, siendo sus fundamentos los siguientes: primero, precisar conceptos vagos, confusos o expresados tácitamente en la ley 11.683; segundo, dictar normas que aseguren la autonomía del derecho fiscal respectivo; tercero, establecer nuevas normas y aclarar las anteriores respecto a las facultades y deberes de los contribuyentes de la Dirección General

del Impuesto a los Réditos; cuarto, hacer más eficaz al sistema represivo; quinto, organizar el sistema de prescripción; y sexto, facilitar el pago de los impuestos y evitar su evasión.

Otra reforma importante, que culminó en un dilatado proceso de formación, es la que se refiere al impuesto de sellos, cuya ley básica 11.290 ha sido totalmente substituida por el decreto 9.432, del 21 de octubre de 1942. Desde 1935 se venía estudiando la substitución de aquella ley por un cuerpo de disposiciones más orgánico. En una primera etapa del estudio, una comisión mixta de funcionarios y de letrados preparó un anteproyecto que, sometido al Poder Ejecutivo, fué objeto de varias reformas y entregado a la consideración del Congreso a mediados de 1939. En 1941, la Comisión de Presupuesto formuló el despacho incluido en el orden del día 321, de ese año, con unas pocas modificaciones hechas al proyecto del Poder Ejecutivo, sin que el asunto llegara a ser considerado por la Cámara. El decreto ley 9.432 reproduce la mayoría de sus disposiciones y modifica otras. Se trata de un asunto suficientemente estudiado y debatido y, en general, las reformas han merecido juicios favorables, porque moderniza el régimen de los impuestos e introduce un nuevo concepto ya aplicado en el orden provincial, el llamado impuesto de justicia, cuya equidad es resaltante.

La reforma a la ley de impuestos a la transmisión gratuita de bienes inicia el movimiento general de reformas del sistema impositivo llevado a cabo por las medidas que vamos a ratificar.

El decreto ley 6.755 del 26 de agosto de 1943, vino a poner coto a una de las maniobras más usuales de evasión de ese impuesto que había sido puesta de manifiesto en la tramitación de la sucesión Bemberg, mediante la constitución en el extranjero de sociedades por acciones al portador o fácilmente negociables, a pesar de que todos o la mayor parte de los bienes se encontraban radicados en la República. Este decreto estableció el principio de que el impuesto debe aplicarse teniendo en cuenta la situación real de los bienes, concepto que se ajusta a las normas básicas de imposición que establecen las leyes argentinas.

El decreto ley 33.405, dictado el 11 de diciembre de 1944, por el que se crea la Dirección Nacional Inmobiliaria, inaugura una reforma trascendental en el régimen de gravámenes que recae sobre la propiedad territorial, ubicada en la Capital Federal, pues se dispone en la unificación del cobro de la contribución territorial, de la tasa de obras sanitarias y de la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza; y asimismo la unificación de sus distintos regímenes de valuación, catastro e identificación de inmuebles. Desde hace más de diez años se

viene bregando por esta reforma. En el orden administrativo, se designó en 1937 una comisión encargada de estudiar el problema de unificar el cobro. En 1938, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración expresando que vería con agrado que el Poder Ejecutivo preparara esa reforma. Al principio se entendió que la reforma debía limitarse a decretar la unificación del cobro, pero a medida que fué avanzándose en ese estudio, se admitió que era aconsejable extender la unificación a los sistemas de valuación e identificación. La voluntad del Poder Ejecutivo de llevar a cabo estas modificaciones se puso de manifiesto en el artículo 83 de la ley 12.778, de presupuesto para el año 1942, que autorizó al Poder Ejecutivo para centralizar la aplicación y percepción del impuesto territorial y de los tributos municipales y de obras sanitarias que gravan la propiedad inmobiliaria en la Capital Federal, unificando los sistemas catastrales de valuación y de cobro dentro de las actuales disposiciones legales, sin perjuicio de que, con este mismo propósito, a la brevedad posible —decía—, proponga las modificaciones de los regímenes orgánicos que originen esos tributos, a fin de completar y organizar definitivamente el nuevo régimen de percepción.

Estos antecedentes demuestran que, en este caso, como en los otros a que me he referido, la reforma tuvo un largo período de gestación, y no surgió extemporáneamente, sino que fué precedida de prolijos estudios.

En este caso había serios problemas que considerar, pues no es fácil refundir en una buena parte las funciones que competen a tres organismos que existen bajo distintas jurisdicciones, y crear, no solamente una nueva organización renovadora, sino normas originales que permitan coordinar tres sistemas fiscales diferentes.

Por ello todavía no ha empezado a ponerse en acción el mecanismo a fin de contemplar debidamente algunas objeciones formuladas por Obras Sanitarias de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El artículo 82 del decreto posterga la aplicación del mismo, a la espera de zanjar estas dificultades, y así se establece que la Dirección Nacional Inmobiliaria propondrá al Poder Ejecutivo las fechas a partir de las cuales se iniciará la aplicación total o parcial de las disposiciones establecidas por ese decreto. Solamente se encuentran en vigencia las disposiciones de los artículos 41, 54 y 62 del decreto 33.405, en virtud de lo ordenado por el decreto 25.046, del 10 de octubre de 1945, y el decreto 31.447 del 10 de diciembre del mismo año, ambos comprendidos en nuestro despacho. Otro decreto más reciente, el 5.640, de 16 de marzo de este año, mantiene en suspenso la

aplicación de las disposiciones del decreto 33.405, de 1944, hasta tanto se pronuncie el Honorable Congreso de la Nación. La aprobación, por consiguiente, que pronuncie este poder, no significará que el nuevo régimen estará de inmediato en vigencia, sino que se procederá a aplicar las disposiciones del capítulo XI, que resuelve los problemas vinculados a la transformación del sistema, y entre los cuales figura el artículo 82, que supedita a la decisión del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el asesoramiento de la Dirección Nacional Inmobiliaria la fijación de las fechas en que se aplicará total o parcialmente ese decreto, procedimiento conveniente a fin de no trastornar toda la organización actual de los impuestos y tasas.

También el impuesto a las ventas ha sido alcanzado por la reforma. El decreto 18.233, del 31 de diciembre de 1943, aumentó del 3 por mil al 1,25 por ciento el impuesto a la venta de mercaderías consignadas al exterior, a partir del 1º de enero de 1944, también por el término de tres años. El plazo se encuentra, pues, próximo a expirar. Pero el Poder Ejecutivo ha enviado también un proyecto de ley por el cual se prorroga el impuesto por un período de dos años más. Para ello se basa en que el aumento general de los precios en el mercado internacional, y la demanda sostenida de los productos argentinos, permiten asegurar que esta tasa no afectará el normal desenvolvimiento del comercio de exportación.

Otro decreto, el que lleva el número 24.671, dictado el 10 de octubre de 1945, introdujo varias modificaciones y aclaraciones a la ley 12.143. Su objeto fué hacer más claro el régimen del impuesto a las ventas, que en el curso de sus diez años de existencia, había dado lugar a numerosas dudas y discusiones, empezando por la definición del concepto fiscal de la venta que va más allá del concepto jurídico, pues abarca actos que aunque no se ajusten al régimen jurídico de la compraventa civil o comercial, traducen las mismas consecuencias económicas. Así, ha quedado sujeto al gravamen la locación de obra, cuando el locador suministra la materia prima principal. Otros conceptos que se aclaran son los de explotación y precios netos de venta y el de las deducciones.

En materia de impuestos internos, son varios, los decretos que introducen modificaciones al régimen ya establecido. Me he referido a la creación del impuesto al malta cervecero y a la del impuesto adicional a los combustibles. Otros capítulos de la ley de impuestos internos han sido tocados. El decreto 18.235, del 31 de diciembre de 1943, alteró el sistema de imposición a los naipes, substituyendo el criterio del precio de venta, que daba lugar a constantes fraudes, difíciles de evitar, por el del gravamen por unidad. También se aplicó una

tasa mayor para los naipes importados, que pagan el doble de los nacionales. En general, éstas y otras disposiciones del decreto, simplificaron la administración de este impuesto, favoreciendo el desarrollo de la industria argentina.

El impuesto a los artículos suntuarios y de adorno, fué objeto de dos decretos: el 6.176, del 10 de marzo de 1944 y el 9.907, del 4 de mayo de 1945. El primero trató de eliminar los inconvenientes derivados del sistema de fiscalización, especialmente la cuestión referente a la individualización en comercio de los objetos gravados, estableciendo un tratamiento igualitario para todos los artículos de lujo, al mismo tiempo que tuvo por objeto aumentar los ingresos públicos. Pero la aplicación de este decreto, dió lugar a la presentación de varias entidades representativas de los gremios vinculados a esos comercios, las cuales alegaron que el nuevo régimen alcanzaba a comercios de menor importancia, que hasta entonces no habían sido contribuyentes y que carecían de experiencia en el cumplimiento de las obligaciones impositivas, circunstancia que movió a postergar la aplicación del impuesto y a designar una comisión integrada con representantes de aquellas asociaciones para que estudiara las observaciones y aconsejara las medidas necesarias para la mejor aplicación del gravamen. El decreto 9.907 fué producto de la labor de esta comisión y substituyó totalmente al anterior, estableciendo una tasa única del 4 por ciento para todos los artículos suntuarios alcanzados por la imposición.

En materia de tabacos, el decreto 8.255, del 5 de abril de 1944, tuvo por objeto estimular el desarrollo de esta industria y el desenvolvimiento de las pequeñas manufacturas, equiparando a este efecto las condiciones de venta de los productos nacionales con las de los importados. Al mismo tiempo, se procuró evitar el expendio fraudulento y garantizar los derechos del fisco. En este caso, como en el del impuesto a los artículos suntuarios, se contó con la colaboración de los industriales y comerciantes afectados por el gravamen.

El procedimiento para la fiscalización y percepción de los impuestos internos, ha sido objeto de algunas modificaciones. Así, se ha otorgado representación directa ante la justicia a la Administración General de Impuestos Internos, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 5.890 de 10 de marzo de 1944. El decreto 17.922, del 6 de julio de 1944, permitió la substitución del contribuyente responsable del pago del impuesto sobre la materia prima de artículos gravados con otro impuesto interno, disposición que evitó las dificultades que ocasionaba a los fabricantes de licores y de perfumes la congelación de las inversiones por el pago del

impuesto al alcohol, que sirve de materia prima, mientras se produce o se expende la bebida alcohólica o el perfume, o se comprueba la exportación exenta de impuesto de esas mercaderías.

Otro decreto, el 8.110 del 31 de marzo de 1944, redujo el interés punitivo para el pago de impuestos internos y multas; del 24 por ciento anual que se pagaba se redujo al 1 por ciento mensual, eliminando de este modo una carga excesiva que no se justificaba sino en el período de organización de las entidades fiscalizadoras, que ha sido dejado atrás en lo que respecta al régimen de este impuesto.

No he de proseguir analizando, ni siquiera con la brevedad que trató de dar a mi exposición, los demás decretos incluidos en el despacho, para no fatigar demasiado a la Honorable Cámara. Los que no han sido mencionados expresamente son de menor importancia y creo que no pueden dar lugar a discusiones.

Rápidamente me referiré a los decretos leyes en materia aduanera y portuaria, de los cuales, 24 acuerdan liberación de derechos aduaneros a diversas mercaderías, cuatro benefician a otras con el pago de menores derechos, diez modifican disposiciones de la ley de aduanas, dos habilitan nuevas aduanas y receptorías de rentas, refiriéndose los tres restantes a la representación del fisco por los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, a la aclaración de una disposición sobre pago de la tercera parte de los derechos de muelles en favor de los barcos de bandera nacional en desarme y a la derogación de una liberación de derechos aduaneros.

La política de extender las liberaciones de derechos de importación y de aplicar menores derechos a ciertas mercaderías tuvo por objeto distintas finalidades. En algunos casos, facilitar la radicación de industrias nuevas, como en el de la liberación para las maquinarias e implementos destinados a la instalación en la República de establecimientos siderúrgicos, o para introducción de huevos del gusano de seda, o para los materiales destinados a la instalación de un laboratorio y planta experimental de minería o para los materiales destinados a las usinas eléctricas provinciales.

En otros casos se trató de facilitar el afianzamiento de industrias en funcionamiento, como la liberación acordada a los equipos de inyección eléctricos y aceros destinados a motores industriales para automóviles, camiones o vehículos marinos, o para el cloruro de potasio destinado a la fabricación de clorato de potasio o para el antimonio metálico o régulo necesario para el desarrollo de la industria metalúrgica, o para los capullos de seda adquiridos por la industria textil.

La escasez de algunos productos y la carestía

de otros dió lugar a la concesión de algunas franquicias, tales como las referentes al papel manufacturado como arpillería, a la madera en rollos de origen chileno introducida en la zona de San Martín de los Andes, al caucho y a los artículos manufacturados con dicho producto, a las cortezas de quina, hojas de belladona y jaborandí, raíces de ipecacuana y barbasco, con destino a la elaboración de drogas y productos medicinales, a las copias de películas cinematográficas argentinas confeccionadas en el extranjero como consecuencia de la falta de celuloide en el país y a la película virgen procedente de Chile para impresionar copias de films nacionales a exhibirse en ese país.

Otras liberaciones tienen por objeto mejorar nuestra producción como la acordada a la importación de aves de *pedigree*; o defender la producción agrícola y frutícola contra las plagas, como en el caso del D. D. T. y de la escilla roja en polvo; o acordar un tratamiento de reciprocidad internacional, como lo relativo a la introducción de folletos y catálogos comerciales sobre artículos chilenos, franquicia de que gozan en el país hermano los argentinos; o a fomentar el desarrollo de determinadas zonas del país, como en el caso de la liberación de los materiales y mercaderías necesarios para el vestuario, la alimentación, la salud, la vivienda y el trabajo de la población introducidas por las aduanas y receptorías marítimas y terrestres situadas al Sur del paralelo 42 o hacer desaparecer situaciones de desventaja para el desenvolvimiento de la industria nacional, como en lo que se refiere al menor derecho para el hilado de seda cruda en madeja y para los rollos de pino blanco destinados a la fabricación de terciados.

Desde ya quedo a disposición de los señores diputados para suministrar las informaciones complementarias que crean necesarias sobre estos decretos leyes a sancionarse.

Me referiré, sin embargo, en último término, a la cuestión de la participación que se atribuye a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires en el producido de los impuestos directos que, con carácter de emergencia, percibe el Estado nacional, de acuerdo con la cláusula del artículo 67, inciso 2º de la Constitución nacional, es decir, de los impuestos a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales.

Conoce esta Honorable Cámara que está integrada en su mayoría por hombres de provincia, la precaria situación de las finanzas locales como consecuencia de la imposibilidad material en que se encuentran de acudir a las principales fuentes de recursos ordinarios para acrecentar sus ingresos.

Los impuestos directos forman parte del poder impositivo de las provincias y sólo en los

casos en que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan, puede la Nación aplicar esos impuestos como un recurso propio en todo el país, siempre que sea por tiempo determinado y en forma proporcionalmente igual.

Creado como impuesto de emergencia en 1932, el impuesto nacional a los réditos continúa aplicándose con ese carácter; y en las mismas condiciones se encuentran los demás impuestos directos a que me he referido. Cuando se creó el impuesto, no se atribuyó ninguna participación a las provincias. No es dudoso que si el Congreso estima cumplidos los requisitos constitucionales, la Nación puede aplicar impuestos directos en todo el territorio del país, sin estar obligado a dar participación a los Estados locales, pero si desde un punto de vista estrictamente jurídico, tal es el planteamiento del asunto; por otro lado, existiría una obligación, diremos moral, de restituir a las provincias, siquiera en parte, el producido del impuesto, porque la calificación de emergencia hecha en 1932 y mantenida en los años posteriores, obedece a un criterio interpretativo de los términos constitucionales sumamente amplio, cuya conformidad con la intención de los contribuyentes, acaso pueda ponerse en duda, sobre todo si se la refiere a algunas épocas pasadas.

Por eso, la Nación empezó por acordar adelantos a las provincias a cuenta de lo que a éstas pudiera corresponderles en la distribución del producido y al sancionarse la ley 12.143, de impuesto a las ventas, se dictaron las normas para la distribución del producido de éste y del impuesto a los réditos, atribuyéndoles el 82,5 por ciento para la Nación y el 17,5 por ciento para la municipalidad de la Capital y las provincias. Esta distribución había de mantenerse hasta 1938, pero sucesivas leyes han ido renovando la aplicación de ese porcentaje hasta el presente.

En lo que respecta al impuesto a los réditos y a las ventas, puede decirse que se ha llegado a una situación de hecho similar, aunque no idéntica, a la de la unificación de impuestos internos, operada mediante un recurso de técnica legislativa distinto al empleado en ese caso. Lo que existe bajo la forma de un impuesto directo nacional, es más bien una unificación de las reglas y procedimientos para la recaudación del impuesto, consentida de buen grado por las provincias en este aspecto, pero discutida con razón en lo que respecta a la justa distribución del producido. La múltiple imposición por cada una de las provincias, aplicando reglas y tasas distintas, creando oficinas recaudadoras y fiscalizadoras, costosas e imperfectas, debido a la esfera reducida de su jurisdicción y a su falta de experiencia y recursos no comparables con los que posee la Dirección del Impuesto a los Réditos, no significaría

bien ni para las provincias, ni para los contribuyentes y estaría en contra de las tendencias unificadoras que han tenido comienzo de ejecución con los impuestos internos y que se insinúa respecto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

Puede afirmarse, que el problema verdadero radica en establecer porcentajes equitativos para hacer la distribución del producido del impuesto, antes que en la cuestión de fondo que se menciona y que las provincias no hacen cuestión fundamental de la recuperación inmediata de su poder de imposición exclusiva sobre las personas, bienes y hechos comprendidos en esos impuestos que sólo podría ejercerse en desmedro de sus propios intereses y de los contribuyentes.

Tampoco puede esperarse que la distribución del producido sea exacta, porque bien se sabe que es muy difícil determinar la fuente territorial del rédito, que no es denunciada, como algunos suponen, por la ubicación de las oficinas donde se ingresa el impuesto. Hasta oírse que las provincias están de acuerdo en admitir que la Nación ingrese a sus rentas propias más dinero que el proveniente de los réditos producidos en los límites de la jurisdicción federal, por ser evidente que el gobierno federal, en épocas como la presente, tiene a su cargo servicios generales y realiza obras en los territorios de las provincias que debe afrontar con su patrimonio. Se trata, pues, de una cuestión de hecho, de medida, que no es de difícil solución.

Los decretos que se ratifican han agravado, si se quiere, la desigual distribución, por cuanto en lo que se refiere al impuesto a los réditos, se establece que las provincias no percibirán más de lo distribuido en 1943, de manera que el porcentajamiento de la recaudación, por elevación de las tasas y perfeccionamiento de la fiscalización y recaudación que se ha producido en 1944, 1945 y 1946, ha ingresado íntegramente en las arcas del Estado nacional. A raíz de esa disposición, las provincias y la Capital dejaron de percibir en 1944, pesos 22.603.689,98; en 1945, pesos 21.298.040,24; y en 1946, hasta el mes de agosto, pesos 18.083.266,14, según los informes que el Poder Ejecutivo ha dado, respondiendo a requerimiento de esta Cámara.

—Suena la campanilla anunciadora del vencimiento del plazo reglamentario.

Sr. Presidente (Pontieri). — Ha vencido el plazo reglamentario, señor diputado.

Sr. Fernández (H. S.). — Voy a terminar en dos minutos.

Tampoco participan las provincias en el producido del impuesto a los beneficios extraordinarios, por ser transitorio y de emergencia. No

cabe duda, que la calificación de emergencia corresponde a la circunstancia por que ha atravesado la Nación y que de acuerdo con la doctrina constitucional a que he aludido, la Nación no se encuentra obligada a dar participación a las provincias, si bien pueden darse muchas razones en favor de la conveniencia de distribuir el producido de ese impuesto.

Estimo que la aprobación de este despacho consagrará la ratificación de una reforma trascendental y beneficiosa para el sistema fiscal de la Nación. Nadie puede negar que actualmente las cargas públicas se distribuyen entre los habitantes del país por medio del impuesto con más equidad, pues se ha atenuado en un grado considerable la injusticia del sistema impositivo argentino que denunciara Gastón Jéze en 1923, cuando los gastos del Estado nacional se atendían casi íntegramente con el producido de las aduanas y del impuesto al consumo. Los impuestos directos sobre los bienes y las personas, que en 1937 importaban solamente el 26 por ciento de las rentas generales, ahora suman el 50 por ciento, mientras que los impuestos indirectos en 1937 representaban el 50 por ciento, ahora apenas constituyen el 30 por ciento de los ingresos. Estas cifras indican una corrección interesante de la política fiscal a tono con los principios de justicia impositiva y de técnica financiera que rigen esta materia.

Aparte de la cuestión siempre mencionada de los límites de la capacidad contributiva de la población sobre la que no creo necesario explayarme, ante la evidencia de que nuestros impuestos están muy lejos de constituir exacciones confiscatorias de la renta privada que impidan el desarrollo de la producción, el problema de los ingresos públicos debe examinarse en función del problema de los egresos por los que se opera una recuperación de las sumas pagadas al Estado.

La población abona *per capita* pesos 117 moneda nacional anuales al Estado nacional por el mantenimiento de los servicios de defensa, seguridad, orden, educación, cultura, comunicaciones, sanidad, justicia, abastecimiento y fomento. El Estado educa a los hijos, defiende el patrimonio nacional del que todos participamos indirectamente, asegura el orden cuya ausencia importaría el caos, en el que se perderían vidas, haciendas y honras; pone a disposición de los habitantes servicios como los de correos, que ninguna empresa comercial podría prestar, soportando pérdidas como lo hace el Estado; administra justicia dando a cada cual lo suyo; mantiene hospitales y servicios permanentes, que previenen la propagación de pestes; fomenta las industrias y el comercio creadores de riqueza; realiza obras públicas con las que fertiliza tierras improductivas; se ponen en comunicación las distintas zonas del país; se levantan viviendas para obreros; se sancionan zonas

malsanas; se crean, en fin, condiciones de vida dignas de una sociedad civilizada y moderna.

Las nuevas tasas no han perjudicado la producción, ni empobrecido a los habitantes. Las estadísticas de los réditos netos declarados ante la repartición recaudadora han ido en ascenso en los últimos años, no obstante el mayor gravamen. No se puede afirmar que la Nación esté exigiendo a sus habitantes contribuciones desmedidas.

Los gastos del Estado se han acrecentado en los últimos años por razones que no es del caso analizar en este debate; pero a nadie escapa que la defensa del país, en circunstancias peligrosas para la paz, el sostenimiento de las producciones básicas, el fomento de nuevas actividades, las mayores erogaciones originadas por la carestía de la vida, los nuevos servicios para asegurar la paz social, han justificado los mayores desembolsos reclamados a los contribuyentes.

Con estas palabras, que no creo han podido ser más breves debido al número e importancia de los decretos que se aconseja ratificar, dejo fundado el despacho de la comisión. (*Muy bien! Muy bien!*)

Sr. Presidente (Pontieri). — El señor miembro informante de la minoría tiene la palabra.

Sr. Ravignani. — No cabe duda de que este orden del día tiene un contenido especializado, cuyo estudio corresponde a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La Comisión de Decretos Leyes se ha asesorado con los miembros de aquélla, y el diputado que habla se limitará a enunciar puntos de vista generales que permitirán ascantar la discrepancia con algunos aspectos de la política financiera del gobierno defacto. Otro miembro de este sector, el señor diputado del Carril considerará a fondo estos decretos desde el punto de vista técnico.

En primer término, deseo señalar una grave transgresión constitucional que hice notar ya en otras sesiones: el Poder Ejecutivo ha mandado en conjunto y en paquetes los decretos leyes para su ratificación al Honorable Senado. Este, en aquella oportunidad, sin discriminar y también en bloque los ratificó en conjunto, sin advertir que estaba invadiendo atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

Por suerte se ha producido una saludable reacción. Hace pocos días el Honorable Senado ha devuelto al Poder Ejecutivo algunos proyectos del plan quinquenal cuya iniciativa corresponde, sin duda alguna, a esta Cámara. Según han podido ver los señores diputados en el orden del día hay creación de nuevos impuestos, modificación de los existentes y, en general, son todas iniciativas que debieran ser tratadas por la Cámara de Diputados.

En líneas generales, el señor miembro informante de la mayoría, con adecuada minu-

ciosidad, ha hecho el estudio del conjunto de los decretos que tenemos a consideración. Por mi parte, me permito observar y hacer notar a la Honorable Cámara que hay reformas de detalle en algunas de las leyes impositivas, reformas de fondo en otras, pocas creaciones y reincidencia en errores impositivos anteriores, agravándolos aún más, en perjuicio de la economía del país. También me permito hacer notar graves errores técnicos financieros, que ya detallaré en pocas palabras y que revelan un exceso fiscalista centralizador, pero una equivocada ordenación en la forma de obtener los recursos, de hacer incidir los gravámenes y de distribuir las resultas de esos gravámenes.

Señor presidente: el gobierno defacto, que tanto ha innovado en otros órdenes, en realidad ha seguido detrás de un sistema impositivo que necesita una reforma fundamental. Ha tomado, es cierto, a menudo, iniciativas anteriores de esta Cámara, pero también ha dado estado legislativo a excesos fiscalistas de las oficinas encargadas de aplicar las leyes de impuestos de toda índole. Se mantiene el concepto de avance constante sobre las autonomías provinciales en materia de recursos, creándose así un unicato financiero el que, paulatinamente, va anulando la autonomía política de gobierno de las provincias argentinas.

Es un principio fundamental de derecho político en la organización de los Estados, que un gobierno que carece de independencia suficiente en materia financiera y del imperio sobre la fuerza, ese gobierno no es más que una sombra que está a merced de quien ejerce el unicato. Estamos volviendo al viejo error de la Constitución de 1826, que no fué aceptada por el país y que motivó el levantamiento del sentimiento federal en toda la República. Es bien sabido, señor presidente, cómo a menudo el gobierno nación ha afrontado a los gobiernos provinciales. Mas basta recordar lo que ha sucedido en la provincia de Entre Ríos, en materia de vialidad. Esta fué la única provincia que no ha podido construir un kilómetro de camino pavimentado por falta de la ayuda federal, mientras a manos llenas se iban entregando las cuotas correspondientes a las otras provincias para realizar obras camineras, en su mayor parte útiles, pero, en algunos casos, completamente parásitas, inútiles, de acuerdo con las necesidades del país.

¿En estos tres últimos años, hemos visto una reacción del gobierno defacto? No, señor presidente. Se ha mantenido la constante política financiera reagrávida, por cierto, por un exceso de celo para que no sólo se evitara la evasión del impuesto sino para que llegara el impuesto a veces, sobre actividades fundamentales del país.

Me permitiría, señor presidente, citar sólo

dos ejemplos de decretos leyes que tenemos en la banca y que vienen a fundamentar la crítica que estoy haciendo. Por ejemplo, en materia de vialidad se vuelve a insistir sobre aumento de impuestos a los combustibles. Poco tiempo antes de la revolución de junio, ya se introdujo un fuerte gravamen sobre combustibles aumentando el existente. Se dijo que había un plan general, que había que reforzar las partidas para conservación y aumento. Bien, señor presidente; en estos instantes la obra vial de los grandes caminos de enlace de los fuertes y progresistas centros del país, está casi totalmente paralizada, y no se ven más que calafateos, no responde al gran impulso que tuvo al comienzo la realización de la obra caminera. Este nuevo gravamen sobre los combustibles no solamente afecta al lujo —que no me interesa— sino que está afectando al trabajo argentino, al gravar un artículo de tanta necesidad para producir energía y para obtener la transformación de ese mismo trabajo.

Hay otro error gravísimo de tipo técnico y que revela un desconocimiento del sentido de la organización financiera, y también del verdadero sentido que importa la autonomía en la administración de los recursos. En el decreto relativo a la Dirección Nacional Inmobiliaria, que lleva el número 33.405/44, en su artículo 12 establece la contribución inmobiliaria, pero aquí se hace una refundición de la contribución territorial con tasas impositivas por servicios que presta el Estado. Son dos cosas completamente diferentes, porque la contribución territorial es un impuesto expresamente establecido por nuestro régimen constitucional, en donde, salvo que llegue a ser confiscatorio, el Estado puede considerar cuáles son las necesidades de sus gastos, a fin de establecer un aumento mayor, estando la contribución directa en relación especialmente con el valor del suelo. En cambio, se ha involucrado aquí la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, y los derechos de aguas, cloacas y desagües, estableciendo un impuesto único. Es una aberración. Está en contra del ABC de las finanzas, que conoce todo hombre que sepa un poco de la materia. En forma alguna, señor presidente, esas tasas pueden cobrarse con recargo para que den un producido mayor de lo que realmente cuesta el servicio de las mismas en obras y realizaciones. En cambio, en la forma que se propugna ya sabemos dónde van. Desaparece el adecuado concepto, que la tasa debe ser fundamentalmente el cobro de un servicio del Estado para involucrarlo todo en una caja común. En última síntesis, no se sabe realmente cuál es cada uno de los recursos y, además, la distribución es completamente arbitraria.

Quiero hacer notar, también, que en cierto orden estas tasas permiten el sostén —por ejemplo las tasas de alumbrado, de barrido y lim-

pieza— de la obra urbanística de la ciudad. Yo pregunto cómo se va a poder establecer una política de mejoramiento edilicio, cuando se han refundido en un solo impuesto, el inmobiliario, mediante este sistema del decreto que estamos considerando.

Los que tenemos alguna experiencia, por haber ejercido a veces funciones ejecutivas, sabemos dónde van a veces los técnicos de las oficinas impositivas. Ellos están inspirados por un criterio netamente fiscal, y proponen siempre a los hombres de gobierno el aumento de los recursos. Cada vez quieren más recursos, y olvidan que a veces estos recursos se obtienen mediante impuestos que, o son injustos, o no responden a la finalidad de la creación de los mismos.

Además, se han hecho reformas de fondo. De eso no me voy a ocupar porque sería largo y porque, además, no es asunto de mi versación. Afirmando que nunca llegué a entender la técnica de aplicación del impuesto a los réditos. Es una serie sucesiva de categorías, de sumas y de restas y casi siempre se necesita un contador y un inspector especializado para que aclaren la forma de organizar las planillas y constantemente el contribuyente está supeditado a continuas revisiones. De manera que para mí es algo así como un *ortus clausus*.

Hay un impuesto nuevo: el gravamen del veinte por ciento sobre la ganancia en la venta de inmuebles. Se ha querido obtener aquí una utilidad de la especulación en la venta de bienes inmuebles. Yo estoy de acuerdo en que se aplique impuesto a las ganancias excesivas, pero no sé hasta dónde se podrá evitar la evasión de este impuesto, no porque no sea justo, sino porque quizá es excesivo.

Los impuestos excesivos siempre producen una segura evasión. En materia aduanera, por ejemplo, cuando se han querido establecer impuestos excesivos, el contrabando fructificó enormemente y cuando se establecieron impuestos razonables, las personas evitaron el riesgo que implica el contrabando, prefiriendo pagar el impuesto. Hay, además, una serie de reformas aduaneras, minuciosas en los detalles, como consecuencia de aplicaciones prácticas.

Quiero hacer una crítica fundamental; serán mis últimas palabras, aunque volveremos sobre el asunto cuando tengamos que considerar los presupuestos de la Nación.

La materia impositiva tiene una finalidad esencial: buscar el nivel adecuado de recursos para satisfacer los gastos de la administración y buscar esos recursos de manera que los impuestos sean lo más equitativos y lo más difundidos posibles sobre toda la masa de la población. La práctica de estos tres últimos años ha revelado que la materia impositiva no ha conseguido equilibrar los presupuestos. Se diría que se ha desvinculado en absoluto el ré-

gimen impositivo o de producción de los recursos, con el régimen de gastos del Estado, como si cada uno hubiera ido por su lado. Esto parece que no le ha importado nada al Poder Ejecutivo, sean cuales fueran los gastos que debió afrontar. Los gravámenes impositivos han ido por otro camino, de manera que no hay relación entre la situación financiera de los recursos y la de los gastos. ¿Por qué? Porque en materia impositiva se ha procedido discrecionalmente, lo mismo que en materia de gastos.

Se ha roto la verdadera relación entre uno y otro sistema y esto es una arbitrariedad financiera que demuestra un abuso peligroso. Ha llegado el momento de ponerle término. Habrá que ratificar estos decretos, porque hay creadas situaciones de hecho que podrían significar serias perturbaciones a la marcha de la Nación si así no se hiciese; pero conviene desde ya dejar sentado en este debate que de una vez por todas debemos entrar en el quicio del régimen de presupuestos sobre la base de los recursos y de los gastos conforme a esos recursos, y que de una vez por todas no sigamos anquilosados; que la revolución entre también en este terreno, para que se realicen reformas fundamentales, y que no se crea que con minucias reglamentarias introducidas en las leyes, que con simples detalles más o menos burocráticos, se salvan las finanzas de la Nación.

Hay que ir algo más al fondo y hay que considerar también cuál es la capacidad máxima impositiva del país.

Eso no se ha hecho; todo eso está en el aire. Se ha roto el equilibrio dentro del presupuesto entre el plan financiero de los recursos y el sistema de gastos realizados por la Nación.

Nada más. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pontieri). — El señor diputado por Buenos Aires tiene la palabra.

Sr. del Carril. — Señor presidente: mi intención al entrar a este debate es, más que señalar técnicamente los errores cometidos en cada una de las leyes impositivas objeto de decreto, por parte del gobierno defacto, tomar la política económica que ha seguido el mismo, y señalar los graves errores que se han cometido para hacer incidir el impuesto sobre fuentes que no debieron ser tocadas, destacando que no se ha tenido un plan económico determinado desde un principio, como consecuencia del constante cambio de autoridades que ha debido soportar el país desde el 4 de junio de 1943.

Un ministro de Hacienda piensa en forma totalmente distinta que otro ministro de Hacienda y los ministros se han sucedido con frecuencia. Ha habido ministros salidos de todos los sectores políticos del país, desde los más partidarios del intervencionismo estatal hasta los del liberalismo más acentuado. Todo eso naturalmente ha quedado reflejado en la legislación que se ha hecho por decreto.

Para muchos tratadistas modernos el derecho financiero es autónomo. Y como consecuencia toma gran amplitud la facultad impositiva. Para nosotros, el derecho financiero debe tener una autonomía relativa, determinada por las disposiciones legales y constitucionales.

La Constitución establece los límites hasta donde se puede imponer. En ese sentido, el artículo 49 de la Constitución es terminante, y así como ha podido establecerse la igualdad y la proporcionalidad para el impuesto, no es menos cierto que también el poder que tiene en sus manos legislar —que es en este caso el Congreso y que fué durante los tres años precedentes ejerciendo sus facultades, el Poder Ejecutivo—, tiene también el poder de decretar el estado de emergencia, dejando abierta así la puerta para la aplicación de todos los impuestos que necesita el gobierno nacional.

La Nación no puede imponer impuestos directos en ningún caso, porque están reservadas a las provincias y únicamente ellas pueden hacerlo, salvo en aquellos casos en que el país se encuentre en una grave crisis, en que tenga por delante una situación económica difícil, ya que entonces todo el país concurre a salvar las finanzas nacionales. Es en ese único caso en que la Nación puede imponer impuestos directos.

Pero ha ocurrido todo lo contrario. Los impuestos directos, que comenzó a imponer la Nación en 1930 durante el gobierno del general Uriburu y que luego quedaron consolidados en el 32 con el general Justo, sirvieron, a no dudarlo, para salvar al país de la terrible crisis del año 1930, pero fueron en definitiva a empobrecer las finanzas de las provincias.

Al preparar ese asalto a las provincias, —que es lo que significa la sanción de los impuestos directos por la Nación, dándoles mínima participación— todos los representantes de provincias en aquella época reconocían la necesidad de hacer un gran sacrificio, aun cuando la aplicación cayera sobre los regímenes provinciales, para que frente a la terrible crisis de 1930 la Nación obtuviera recursos firmes y de recaudación segura.

Puede explicarse así, en aquel difícil momento, la fijación de impuestos directos, pero en un momento floreciente del país, en que el Poder Ejecutivo declara que no necesita de los impuestos para solventar futuros planes, en que se dice que no se deben tener preocupaciones de carácter financiero, no se explica que continúen en aplicación los impuestos directos y que se sigan sancionando otros nuevos para la Nación. En ese sentido tenemos que hacer la observación fundamental de que toda esta imposición es el resultado del fraude económico a que se sometió al país después del fraude electoral.

En 1930, después de la revolución se creó el impuesto a los réditos, que en 1932 se consolidó. Más adelante, se atribuyó la participación a las

provincias, con protesta de todas ellas. No sólo se tocó esta fuente de recursos, sino que en el mismo periodo se llegó a la unificación de los impuestos internos, también con una participación mínima para las provincias. Luego se creó el fondo de vialidad y al crear el impuesto a la nafta se prohibió a las provincias aumentar tal imposición en lo futuro. Y así sucesivamente, cada creación de impuestos por la Nación va implicando el retiro de una fuente impositiva de las provincias o el retiro liso y llano de impuestos de las provincias ya que se les exige su derogación para que se apliquen los impuestos nacionales.

De ese modo las provincias ven agotarse sus recursos y terminarse sus fuentes impositivas. No sólo disminuye su recaudación, porque deben suprimir algunos impuestos, sino que además, no tienen fuentes de imposición a las que recurrir en caso necesario, porque todas son tomadas por la Nación.

Las provincias se dan su organización, de acuerdo con los artículos 59 y 105 de la Constitución nacional. Según el artículo 104 conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado con pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Sin llegar a citar el caso especial de la provincia de Buenos Aires, que hizo reservas expresas y terminantes en todos los renglones, porque sus hombres veían perfectamente la absorción que podría producirse de parte del gobierno nacional para señalar en general las facultades de las provincias en materia impositiva, me basta citar a Alberdi y un párrafo de su obra *Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, según la Constitución de 1853*, para demostrar cómo la Constitución previó perfectamente los recursos provinciales y estableció sus fuentes. Dice: «De aquí viene que aunque el tesoro federal o nacional sea ilimitado y supremo en ciertos aspectos, no es único y solo en ciertos otros. Admitiéndose por la Constitución la existencia de gobiernos provinciales soberanos en todo su poder no delegado a la Confederación, era necesario que admitiese la posibilidad de tesoros provinciales y de contribuciones y recursos locales destinados al sostenimiento de los gobiernos de provincia. Para despejar mejor los límites del tesoro nacional, veamos en qué consiste el tesoro de las provincias según la nueva Constitución argentina. El tesoro de las provincias se compone de todos los recursos no delegados al tesoro de la Confederación. Este principio es la consecuencia rentística del artículo 104 de la Constitución.»

De manera que está expresamente resuelto el punto. No es caso que se preste a interpretaciones. Si nosotros conformamos estas palabras de Alberdi al artículo 67 de la Constitución,

vemos que en el inciso 2º se establece que el Congreso puede imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan; es decir, que la Constitución ha dispuesto que los impuestos directos pueden ser establecidos por la Nación únicamente por tiempo determinado y para los casos especiales previstos en el inciso 2º del artículo 67. No se concibe que fuera de esta situación el Estado nacional pueda imponer este gravamen.

Me complace en señalar la coincidencia del señor diputado Fernández, en su exposición al reconocer que las provincias, generosamente, han contribuido a formar el tesoro de la Nación en épocas difíciles.

También he hecho referencia a que no se ha mantenido un plan orgánico, una política económico-financiera que responda a un solo pensamiento y que este gobierno que se declara planificador en punto tan importante como es éste, no haya planeado desde el principio la política en que iba a afirmar sus facultades impositivas y así, después de haberse repetido hasta el infinito, no sólo en esta Cámara, sino en la calle, en los documentos oficiales y en la propaganda política, que las finanzas de la Nación son anticíclicas, que las finanzas de la Nación responden a planes generales, nos encontramos con un verdadero caos financiero.

Si para afirmarlo no bastara lo que he manifestado en cuanto a la formación de los gobiernos anteriores hasta el año 1943, gobiernos en los que se ha cambiado una serie de ministros. Si no bastara eso, tenemos la demostración en todos estos decretos, en todos los empréstitos realizados, en todas las conversiones, en los bancos creados, para llegar a la conclusión de que no se hacen finanzas que respondan a algún plan en el país. Se hacen finanzas de cualquier modo, como se le ocurre al ministro que está en ese momento en el poder.

¿Qué finanzas anticíclicas son éstas —y tomo las palabras del señor diputado Ravignani— que permiten que todos los años en plena época de expansión exista un déficit por gastos improductivos del presupuesto? No crean los señores diputados que a mí me alarman los déficits. Sé lo necesario que es un déficit en un momento oportuno en un país para desarrollar una política expansionista necesaria en un momento de depresión. Y si hay algo en que estamos todos de acuerdo, es que no nos hallamos en un momento de depresión, sino al contrario, en un momento cuspide de expansión. Y en este momento se sigue estimulando la economía nacional con déficit de 1.500.000.000 de pesos por año; a esto se llama por el gobierno, finanzas anticíclicas.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor John William Cooke.

Toda la legislación impositiva que se ha realizado por decreto bajo el gobierno defacto, ha tenido dos características: una progresista, debo reconocerlo, que es la de mejorar el sistema de percepción de los recursos. Es decir, las oficinas técnicas del gobierno han aconsejado las reformas necesarias para mejorar los sistemas de recaudación y la supresión de ciertos tipos de tasas que dificultan la percepción de los impuestos.

De otro punto de vista, la característica ha sido la intención pura y exclusivamente fiscalista que ha regido esta legislación, es decir, obtener más dinero del contribuyente por todos los sistemas. No hay otra política económica ni otro sistema que rija esto, que el fiscalista puro de exprimir al contribuyente hasta el final. (*¡Muy bien! Muy bien!*)

En primer término, me voy a ocupar del impuesto a los réditos, porque ha pasado a ser uno de los recursos más importantes de la Nación, llegando a reemplazar en importancia al impuesto aduanero, que se consideraba la base del sistema fiscal, y porque tiene una característica especialísima, que no sólo contribuye al tesoro de la Nación, sino que forma también el factor más ponderable de todas las economías provinciales. Hay provincias, como la de Catamarca, que cubren la mitad de su presupuesto con la participación en los impuestos que recauda la Nación, en primer término, en la del impuesto a los réditos.

Hace pocos días se realizó en Buenos Aires la conferencia de ministros de hacienda, presidida por el señor ministro de Hacienda de la Nación, y en ella se planteó como primer problema la distribución de los impuestos directos a las provincias y especialmente del producido del impuesto a los réditos. Y he aquí una cosa extraordinaria: una cuestión que nadie se atreve a discutir ya, fué afirmada por el señor ministro de Hacienda de la Nación. Para el señor ministro, la facultad de establecer impuestos directos pertenece al gobierno de la Nación, el que graciosamente le concede a las provincias una participación en los mismos en un acto de generosidad. A mí me ha complacido que el señor diputado Fernández no coincida con este concepto y que se haya manifestado a favor de la buena doctrina, es decir, que es un impuesto que corresponde a las provincias y que son éstas las que le dan participación a la Nación.

Sr. Fernández (H. S.). — ¿Me permite, señor diputado?

He dicho más: en defensa de los intereses de las provincias considero que la Nación debe darles participación de lo que obtenga como percepción del impuesto a las ganancias eventuales

y a las mayores ganancias, porque lo está percibiendo en todo el territorio de la Nación. Las provincias tienen una situación difícil para afrontar sus propias necesidades y el Congreso de la Nación tendrá que llegar a establecer una distribución equitativa, de acuerdo a la población y a la riqueza de cada una de las provincias.

Sr. del Carril. — Ese es el sano criterio que debe ser sostenido, que, por otra parte, es un criterio que ya no discute nadie más que el ministro de Hacienda de la Nación.

Me interesa especialmente este problema; sabe la Cámara que fué motivo de mi preocupación en las primeras sesiones de este período. Tuve oportunidad entonces de presentar algunas iniciativas en el sentido enunciado; un pedido de informes al Poder Ejecutivo para saber con qué parte de la distribución que corresponde a las provincias se había quedado el gobierno de la Nación. También traje a la consideración de la Cámara un proyecto de ley en el que establecía el modo de devolver a las provincias las cantidades que se le habían retenido indebidamente. Por último presenté un proyecto de declaración dirigido al Poder Ejecutivo, en el que solicitaba que hasta tanto no se sancionara por el Congreso una ley que fijara a la Capital y provincias su participación definitiva en el impuesto a los réditos, el Poder Ejecutivo procediera a liquidar las cantidades correspondientes de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35 de la ley 11.662, disposición mantenida en las leyes de presupuesto para los años 1940, 1941, 1942 y 1943. De modo que nosotros sancionando esta iniciativa pudimos haber realizado una obra práctica, y las provincias nos habrían agradecido la devolución de las cantidades que habían sido retenidas indebidamente. La Cámara se pudo abocar también al estudio de una nueva base de participación de las provincias que, en mi concepto, puede elevarse hasta el cincuenta por ciento del impuesto, estableciendo la condición que del cincuenta por ciento que corresponde a las provincias, éstas den una participación a sus municipalidades, instituciones fundamentales del país que deben ser estimuladas; igualmente, del cincuenta por ciento que corresponde a la Nación, ésta debería dar una contribución a la municipalidad de la Capital y a las municipalidades de los territorios nacionales. Creo que es justo llegar hasta ese porcentaje.

En realidad, los resultados de la conferencia de ministros que se ha realizado hace poco, no pueden ser más magros en lo que se refiere a la participación de las provincias en el impuesto a los réditos. Apenas se ha obtenido en la misma que el Poder Ejecutivo acceda a levantar el impuesto en un tres y medio por ciento, debiendo ser distribuido el dos por ciento en relación in-

versa a las poblaciones de los estados provinciales. Es decir que, si bien el Poder Ejecutivo, frente al reclamo permanente de las provincias que ven vacías sus arcas, ha tenido que llegar a una solución, ella es insuficiente. Es indispensable que las provincias, que este Congreso, que nosotros, que somos representantes del pueblo, que el Senado, que representa a las provincias, que todos manifestemos la voluntad de las provincias de exigir al gobierno la participación que les corresponde en el impuesto a los réditos y en todos los impuestos directos: para en el supuesto caso de que el gobierno nacional no proponga a este Congreso la reforma necesaria procedamos a devolver a las provincias la libertad de establecer en sus territorios el impuesto a los réditos y éstas den a la inversa la participación que corresponda al gobierno nacional. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Bastaría una ligera historia del impuesto a los réditos para conocer la finalidad con que fué creado; a qué factor político respondió. No está de más recordar que tenía alcance muy distinto el primer proyecto de impuesto a los réditos que se envió a la Cámara, en aquella presidencia de Hipólito Yrigoyen donde todo se preveía, y en época también grave para el país, y sus prescripciones eran diferentes a las que en la actualidad tiene y especialmente con referencia a la época de su sanción. En 1930 el general Uriburu, con su gobierno en crisis financiera, necesitaba una fuente impositiva y por decreto impuso el impuesto a los réditos. A los dos años, se reunió el primer congreso y estableció el impuesto a los réditos con carácter de ley, disponiendo que más adelante se señalaría a las provincias la participación que les correspondía.

Ni una sola vez en ese Congreso se atrevió a decir que a las provincias no les correspondía primitivamente el impuesto; ni una sola voz se

atrevió a decir que a las provincias no les correspondía ninguna parte en la distribución. Por el contrario, los mismos que sancionaron la ley llegaron a señalar que hasta el cuarenta por ciento del impuesto podía ser distribuido entre las provincias. Pero al llegar al año 1934, cambió el criterio. Las finanzas, como el país, han caído en el fraude y en el caos, están dirigidas en una forma que conforma un unicato, en la apariencia de legalidad que le da un congreso abierto. El Poder Ejecutivo que aspira a tener a todos los gobernadores de provincias en sus manos, se excede en las facultades económicas, sirviéndose para ello tanto del impuesto a los réditos como de la unificación de los impuestos internos, ya que administraban magros presupuestos, y tenían que recurrir a cada momento al Poder Ejecutivo nacional a solicitar una limosna para poder pagar a sus empleados. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Esa es la verdad de cómo nace y cómo se distribuye el impuesto. Esto se agrava; pasa el tiempo y, al llegar el año 43 la revolución, que dijo que venía a terminar el fraude en todos los terrenos, agrava el fraude financiero en forma extraordinaria. Se resuelve en ese año por el poder defacto que la distribución del impuesto a los réditos quede congelada en lo que se había entregado a las provincias durante el año 1943; y en el año 1946, antes de retirarse el gobierno defacto, se resuelve prorrogar el sistema de congelación de lo que se entregaba a las provincias.

En el pedido de informes que yo hice al Poder Ejecutivo, y que la Honorable Cámara me acompañó a sancionar sobre tablas, pedía que el Poder Ejecutivo manifestara cuánto se había retenido indebidamente a las provincias en virtud de esos decretos. El Poder Ejecutivo contestó que las diferencias, por los años 1944 y 1945, eran las siguientes:

CORRESPONDE A:	1944.	1945	Hasta agosto 1946	Total
	\$ m/n.		\$ m/n.	
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires	5.768.936,38	5.435.707,15.	4.615.229,27	15.819.884,02
Provincia de Buenos Aires	7.048.441,98	6.641.305,07	5.638.851,55	19.328.598,60
" " Santa Fe	2.867.665,60	2.702.021,54	2.294.172,34	7.863.859,48
" " Córdoba	1.839.870,22	1.733.594,38	1.471.921,75	5.045.386,35
" " Mendoza	981.550,31	924.853,33	785.253,89	2.691.657,53
" " Entre Ríos	987.913,85	930.849,29	790.344,81	2.709.107,95
" " Tucumán	842.023,87	793.386,31	673.630,80	2.309.040,98
" " San Juan	394.808,64	372.003,44	315.852,40	1.082.664,48
" " Corrientes	542.567,27	511.227,13	434.061,36	1.487.855,76
" " Salta	305.348,76	287.711,—	244.283,25	837.343,01
" " Sgo. del Estero	421.660,07	397.303,86	337.333,92	1.156.297,85
" " Jujuy	186.495,40	175.722,93	149.198,91	511.417,24
" " San Luis	189.576,16	178.625,73	151.663,56	519.865,45
" " Catamarca	126.176,48	118.888,19	100.942,94	346.007,61
" " La Rioja	100.654,99	94.840,89	80.525,39	276.021,77
Totales	22.603.689,98	21.298.040,24	18.083.266,14	61.984.996,36

Quiere decir que las provincias se habían visto perjudicadas, por acción de estos decretos del Poder Ejecutivo defacto, en casi 62.000.000 de pesos. Mientras San Juan era arrasada por un terremoto, la Nación le retenía 1.000.000 de pesos de su peculio; mientras las provincias no pueden atender su presupuesto, mientras no pueden dar aguinaldo, el Poder Ejecutivo y el Congreso reparten dinero a diestra y siniestra en la Capital Federal. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

La distribución no sólo es mala en cuanto a la forma y los porcentajes en que se ha hecho, y en cuanto a las retenciones indebidas, sino que también lo es desde el principio, en el cálculo que se ha hecho sobre las fuentes de los réditos. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a la que se le han entregado 14.000.000 de pesos en concepto del producido del impuesto a los réditos, si hacemos un cálculo aproximado tomando como base su riqueza, le corresponde, después de contribuir también al Tesoro nacional, más de 50.000.000 de pesos.

No basta señalar, como lo hace la Dirección del Impuesto a los Réditos, las cantidades que se recaudan en cada una de las oficinas receptoras, en la provincia de Buenos Aires, porque bien saben los señores diputados que los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires realizan la mayoría de sus pagos en la Capital Federal. Así que el día que se vaya a establecer la cantidad que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, habrá que ir a sus fuentes de recursos, al valor de su propiedad inmobiliaria, al producido de los otros impuestos, y sobre la base de ese cálculo, y sobre la base de la contabilidad de la provincia, establecer entonces cuánto le corresponde, y lo que debe dar la provincia de Buenos Aires, no sólo para el Tesoro de la Nación sino como contribución a todas las demás provincias.

La Dirección del Impuesto a los Réditos conoce estos datos aproximadamente; sería muy fácil llegar a una solución. He de proponer a la Cámara que se aboque al estudio, no sólo de estas leyes, sino de todos los impuestos directos, para que hagamos por fin una ley justa que contemple la situación de todas las provincias. Un pequeño error que hubiera, porque la técnica no fuera perfecta en cuanto a las sumas que corresponden a las distintas fuentes, no puede bastar para dejar sin efecto este buen propósito.

La Dirección del Impuesto a los Réditos, que está organizada eficientemente, ha indicado al Poder Ejecutivo modificaciones importantes. Así el aumento del mínimo no imponible ha permitido excluir una cantidad de contribuyentes pequeños. Del punto de vista de las finanzas anticíclicas de que habla el Poder Ejecutivo, esta medida no tiene explicación; en cambio, del

punto de vista social es importante, pudiéndose aún elevar más.

Se amplía asimismo la imposición a otros réditos y se crea el impuesto a las sociedades de capital. Esta es una de las más importantes modificaciones: la imposición del 15 por ciento a estas sociedades, fuerte imposición que cae especialmente sobre las sociedades anónimas.

Realmente no sé si podemos sancionar una disposición de este tipo, sin hacer al menos un estudio profundo de las circunstancias actuales. Habría hecho falta que estuviera presente el señor ministro de Hacienda, para explicar los motivos de esta imposición. Pueden existir motivos fundamentales; puede ser que en este país las sociedades anónimas, contrariando sus verdaderos fines, se hayan transformado en entidades perniciosas para la Nación. En ese caso estaría bien el impuesto. Pero resulta que hasta ahora, lo que se hizo fué fomentar las sociedades anónimas, como un sistema para que los pequeños capitalistas formaran las grandes sociedades, para producir acumulación de capital y crear el capital nacional.

De repente nos encontramos con que las sociedades anónimas ya no son buenas y hay que gravarlas. Puede ser que este sistema corresponda a la reforma alemana de 1934, que atacó a las sociedades anónimas, para llevar todos los beneficios a las empresas individuales, colectivas o comanditarias, imponiendo gravosamente a las sociedades anónimas y desgravando a las empresas individuales. Allí se conceptuó perniciosas a las sociedades anónimas y necesario controlar eficientemente a las empresas individuales. Tendríamos que llegar en este país a esa consecuencia, para aceptar este impuesto como válido.

De cualquier manera, hubiera sido necesaria una exposición seria de motivos sobre la razón de ser de este gravamen.

Sr. Fernández (H. S.). — ¿Me permite?

Sr. del Carril. — Sí, señor diputado.

Sr. Fernández (H. S.). — El impuesto a las acciones de sociedades anónimas y el aumento de tasas han venido como un medio de evitar la evasión constante que se producía particularmente por aquellos propietarios que, explotando algunos establecimientos rurales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y otras, generalmente antes de morir, constituían con su patrimonio, sociedades anónimas, resultando que las propiedades continuaban a nombre del titular durante largas temporadas y se eludía el pago del impuesto a las herencias.

En otros casos —el de Bemberg, por ejemplo, que he citado— se constituían sociedades anónimas en el extranjero, aunque todos los bienes estaban radicados en el país. También se presentaba el caso de que el jefe de familia que tenía una suma equis de dinero en acciones,

hacia aparecer distribuidos esos papeles, entre su esposa y sus hijos para evitar el pago del impuesto, como si no fuera el titular de un monto mayor, alcanzado por una escala superior.

Sr. Dellepiane. — Y en el caso Bemberg, ¿tuvo éxito la política a que alude el señor diputado?

Sr. Fernández (H. S.). — Se tomó como ejemplo, porque casi todas las acciones eran de sociedades constituidas en el extranjero y los bienes estaban radicados en la República.

Sr. Dellepiane. — Yo le hice una pregunta concreta.

Sr. del Carril. — Lo que dice el señor diputado por San Luis es exacto en parte, pero debe tenerse en cuenta que se refieren a un sector de las sociedades anónimas y la disposición a que me refiero es más amplia porque abarca a todas las sociedades y especialmente a las dedicadas a la producción y la comercialización. El señor diputado se refiere a una modalidad de sociedades formadas para evadir el impuesto sucesorio, modalidad que se corrige fácilmente cambiando el impuesto a las herencias por el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

Sr. Fernández (H. S.). — Por ese camino no se podrán gravar las transmisiones de bienes de padres a hijos, porque las acciones son al portador.

Sr. del Carril. — El señor diputado alude a un caso que no es al que yo me refiero, que está contemplado en la ley de impuesto a los réditos.

Sr. Fernández (H. S.). — Es notorio que en la República Argentina los pequeños ahorros no son invertidos en acciones de sociedades anónimas, sino que generalmente se tienen depositados en los bancos o invertidos en bienes inmuebles y haciendas. Por consiguiente, al establecer este impuesto no se ha gravado al pequeño propietario, al que tiene un ahorro pequeño, generalmente de origen argentino, sino a las inversiones de extranjeros hechas en el país.

Sr. del Carril. — De cualquier modo, eso tiene que decirlo el Poder Ejecutivo después de una seria investigación como lo estoy sosteniendo. En el caso de la sucesión Bemberg, por ejemplo, a pesar de todas las disposiciones tomadas, como muy bien lo sabe el señor diputado, las cosas siguen más o menos como al principio.

Permanentemente hemos luchado para que se formen capitales nacionales. En ese sentido se estimularon las sociedades anónimas y se llegó a tener en el país una formación económica de cierto tipo; ahora resulta que se grava con impuesto la acumulación de capitales que van formando precisamente el capital nacional.

¿En la actualidad todas las sociedades anónimas son de extranjeros y están manejadas desde fuera del país? Es posible que el Poder Eje-

cutivo tenga este dato y que haya llegado a tal conclusión.

Por otra parte, observo la evidente contradicción que hay entre esta resolución y lo resuelto por el Consejo de Posguerra, que había aconsejado imponer el 3 por ciento a las ganancias no distribuidas de las sociedades anónimas. Ahora, por el proyecto que tenemos a consideración, el impuesto se aumenta al 15 por ciento sobre las ganancias no distribuidas, de donde resulta que estuvo equivocado el Consejo de Posguerra o que está equivocado este decreto. La verdad es que en nuestras manos no tenemos suficientes elementos de juicio para juzgar sobre este asunto. Al mismo tiempo es contradictoria esta última disposición con el decreto 15.921, un decreto especial que se dictó para facilitar la reinversión industrial, es decir apoyar a los industriales que tienen que aumentar sus fábricas y reponer sus maquinarias en el país.

Con ese fin se establece una tabla que no llega hasta el total de lo que se invierte, sino que tiene una escala que llega hasta el 60 por ciento cuando la reinversión es del 90 al 100 por ciento. Esto está en total contradicción con el gravamen a las reservas, porque precisamente si para algo se necesitan las reservas es para la reinversión industrial, y para adquirir maquinarias. Mientras por un decreto se le fija 15 por ciento a las reservas, por otro lado, por medio de una tabla, se le desgrava la reinversión.

Como corolario de la reforma de impuestos a réditos, se dictó el decreto 18.830 de 1943, gravando los beneficios extraordinarios, que fué modificado por el 21.702 del 44. El impuesto a los beneficios extraordinarios es una forma de imposición utilizada por todos los países del mundo que se han encontrado en guerra o en situaciones graves. Su explicación es clara. No es concebible que mientras un país está en guerra, que mientras un país está defendiendo sus fronteras, dentro del mismo haya gente que se esté enriqueciendo con el producto de esa guerra.

La verdad es que el país tuvo la guerra tarde y aplicó el impuesto mucho más tarde, porque el impuesto a las ganancias extraordinarias llegó cuando quienes las habían obtenido se habían hecho extraordinariamente ricos.

Aparte de su objetivo fiscal, se utiliza para hacer ahorros en el país, es decir, se aplica en época de guerra y su producido se usa en la reconstrucción del período de transición, como se ha hecho en Brasil y Estados Unidos. En este caso sí se hacen finanzas anticíclicas.

Sirve, también, este impuesto para modificar el circulante y para combatir la inflación. Es un impuesto que tiene una cantidad de ventajas si se aplica en el momento preciso.

Pero ¿qué pasa en nuestro país? El impuesto a los beneficios extraordinarios debió aplicarse en 1941, cuando aparecieron los síntomas claros de inflación, el aumento de los precios, la especulación; pero, en cambio, empezó su aplicación en 1943 cuando ya la situación iba cambiando. De cualquier manera, esperamos que cuando la situación se haya normalizado totalmente no se haga la prórroga de este impuesto, porque incide directamente sobre la actividad de nuestros hombres de trabajo, sobre el estímulo al productor, al industrial, es decir, castiga lo más importante de la iniciativa privada. Esperamos, pues, que el Congreso se determindará a no emplear más la prórroga de este impuesto como recurso para los años venideros.

Es interesante establecer, desde el punto de vista de la política económica del gobierno, de que tanto se ha hablado aquí, que este impuesto que puede servir, como digo, de elemento anticíclico, que puede servir para limitar la inflación, que puede ser un freno en la política expansionista, se vió totalmente contrarrestado por las distintas medidas del gobierno que llevaron a la inflación más grande que se haya producido en el país. Basta leer dos o tres cifras, ya que ayer se ha hablado en forma amplia sobre este problema. En los últimos nueve meses, el aumento del circulante es de 817,8 millones, con un promedio diario de 2,8 millones de pesos; es decir, que estamos en pleno expansionismo e inflacionismo, a pesar de que la política del gobierno es anticíclica.

También es evidente la contradicción de este impuesto con el decreto 15.921/46 que trata de estimular la formación de fondos para la reinversión industrial.

Me voy a referir ahora a una situación a la que se refirió ya el señor diputado Ravignani: la situación del fondo de vialidad.

¿Qué necesidad tenía el gobierno nacional de aumentar el impuesto a la nafta? Esto es algo que resulta realmente extraordinario. Al país llegan pocos materiales para obras de vialidad; hay que manejarse con los pocos que existen, al mismo tiempo, se produce una evolución en los precios que obliga a suspender —según el Poder Ejecutivo ésa es la causa— la obra caminera en el país. Caminos por 50.000.000 de pesos quedan paralizados. Y es precisamente en ese momento que el Poder Ejecutivo resuelve aumentar un centavo por litro el impuesto a la nafta y fijar un impuesto nuevo a los lubricantes, con destino todo eso al fondo de vialidad.

Eso es casi un verdadero misterio. ¿Por qué en el momento en que la Administración General de Vialidad Nacional tiene millones de pesos en caja, en el momento en que el fondo de vialidad no puede invertirse, el Poder Ejecutivo aumenta el impuesto? Esto tiene su explicación.

Los fondos de la ley de vialidad son usados por el Poder Ejecutivo para cubrir los empréstitos que emite. Si observamos, por ejemplo, la cuenta bancaria de la Administración General de Vialidad Nacional, encontramos que en el mes de junio de 1946 tiene un saldo de 46.000.000 de pesos, que en agosto baja a 15.980.000 pesos. En cambio, la cuenta en títulos que tiene en junio un saldo de 31.000.000 de pesos, en agosto sube a 116.000.000 de pesos. Ya sabemos para qué se aumentó el impuesto a la nafta. No tenía otro objeto que el de solventar la colocación de los empréstitos nacionales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

No está de más que mientras tanto, recuerde a los señores diputados que aquí se han presentado proyectos para estimular al Poder Ejecutivo nacional en la construcción de caminos. Basta recordar el del señor diputado Peña Guzmán para que se construyan caminos de acceso a Tucumán donde es imposible llegar a la ciudad, el del señor diputado Mac Kay para que se prosiga la construcción de caminos en la provincia de Entre Ríos y los que han presentado algunos diputados del sector mayoritario. Debo señalar por último que la ley de vialidad autoriza a las provincias a fijar un impuesto de dos centavos por litro de nafta, pero les prohíbe subir esa tasa.

El decreto que organiza la contribución sobre los beneficios eventuales y ganancias de capital, decreto número 14.342 del año 1946, se refiere a un impuesto especial que merece también especial atención de nuestro sector.

Está definido en los artículos 1º y 2º como un impuesto para todos los beneficios de fuente argentina no gravados con el impuesto a los réditos y los provenientes de la venta y permuta de bienes muebles e inmuebles, de premios de lotería y de juegos de azar; y está calificado también como todos los impuestos directos, como un gravamen nacional de emergencia, hasta el 31 de diciembre de 1955.

No caeremos en el error de considerar este impuesto en la misma condición que los otros réditos a que se refiere la ley respectiva. Los beneficios de capital merecen un tratamiento distinto. Es evidente que no se pueden comparar los réditos que provienen del trabajo con éstos que se consiguen sin ningún esfuerzo y por la simple acción de la venta de un inmueble, o por obtener un premio en la lotería. No resulta sin embargo justo el impuesto si se compara el beneficio que se recibe de una ganancia en la lotería, con su aplicación más general y que es la que va a proporcionar un mayor beneficio fiscal, pues este impuesto aplicado sobre la lotería y otros juegos de azar, no ha de producir de ninguna manera lo que ha de obtenerse de la compra venta de inmuebles.

Debemos contemplar la situación especial en

que se encuentran los inmuebles en nuestro país, y observar que si bien los beneficios del capital que provienen de la venta de inmuebles no demandan ningún esfuerzo, no se debe olvidar que en nuestro país la inversión en propiedades inmuebles se ha hecho por todos los sectores de la población y en todas las épocas, sin responder a las auténticas necesidades de los propietarios, con la intención de vender la propiedad en cualquier momento. Hay gente que tiene como único ahorro una pequeña casa y vive de su renta, casita que en un momento determinado quiere vender; para este tipo de propietario la ley es injusta. En el sentido de salvar estos inconvenientes, aplicando distintas tasas según las fuentes, somos partidarios de ubicar los beneficios del capital dentro de la ley de réditos, ya que por otra parte, si observamos bien, dentro de la ley ya hay comprendidos beneficios de capital.

Cuando la ley de réditos establece que la liquidación de los fondos de reserva que tienen las sociedades anónimas pagan el impuesto, está gravando un beneficio de capital, cuando la ley establece que las sociedades que venden sus inmuebles pagan impuesto a los réditos, está gravando también un beneficio de capital, es decir, que situaciones análogas de venta de propiedades inmuebles, son contempladas de distinta manera, según pertenezcan a sociedades anónimas o de capital, o sean propiedad individual.

Deseamos ser justos en la forma que está gravada la renta de inmuebles según la ley de réditos y según esta ley resulta extraordinariamente injusta la distinta tasa del impuesto.

Basta que yo señale a los señores diputados que el porcentaje del 20 por ciento que se establece para esta clase de réditos, es la misma tasa que se aplica en la ley de impuesto sobre los réditos comprendidos de los que ganan de 500.000 a 750.000 pesos anuales, para advertir lo extraordinario de la situación, pues esta renta correspondería a la de un millonario argentino.

En este sentido no soy partidario de la tasa rígida. Creo que debe hacerse una escala dentro de la ley de impuesto a los réditos que contemple esta situación. Si bien los llamados beneficios eventuales no responden a trabajo, sino que son simplemente ganancias de capital; y por ello deben sufrir un mayor gravamen que los réditos provenientes del trabajo, creemos que el impuesto establecido en esta ley es injusto porque no contempla las distintas situaciones que pueden plantearse.

Por otra parte debo hacer notar a la Honorable Cámara que la mayor parte del subprecio que alcanzan los inmuebles en la actualidad, se debe más que al aumento real de su valor, a la desvalorización de nuestra moneda como consecuencia de la inflación. Bastaría para demostrar esta premisa, suponer que la persona

que vende una propiedad compre inmediatamente otra. La nueva adquisición será igual o inferior a la que vendió, es decir que no queda ganancia.

Por último debo señalar con respecto a este impuesto, que su aplicación por el gobierno nacional deja sin efecto en las provincias el impuesto al mayor valor de las propiedades inmuebles, establecido en la ley de sellos, y que en éste, como en otros casos, la participación que les señalemos no ha de compulsar las sumas que dejen de percibir por tal concepto.

No podremos nosotros obtener hoy esta reforma, dado que los señores diputados de la mayoría votan los decretos leyes a libro cerrado, y no pudiendo conseguir introducir las modificaciones de detalle que sería necesario en la ley de réditos para introducir los beneficios eventuales el bloque va a dejar constancia del sentido de su voto.

El señor diputado Fernández ha hecho el elogio del decreto sobre impuesto inmobiliario. Es evidente que está mejorada la técnica financiera en este decreto, por el que se modifica substancialmente el sistema de imposición en la materia.

Llama la atención que el Poder Ejecutivo, que ha dictado y aplicado otros decretos durante todo este tiempo, no ha aplicado el impuesto inmobiliario en esta nueva forma. ¿Qué razón ha habido para que una vez redactado el decreto se detuviera su aplicación por otro dictado posteriormente?

Creo que también para aprobar este decreto hubiéramos necesitado una clara exposición del Poder Ejecutivo. Hubiera sido necesario que el señor ministro estuviera presente y nos dijera qué razones hubo para suspender la aplicación de este decreto. Excluyendo los beneficios de orden práctico que va a traer, la creación de la Dirección General Inmobiliaria, de la que dependen el Catastro, el Registro de la Propiedad y el Registro de Arrendamientos; la creación del Catastro, tan necesaria para establecer de una vez por todas un criterio estable de valuación; la simplificación que significa esta modalidad administrativa y la disminución del costo de recaudación, todo lo que trae una gran comodidad al contribuyente, y sobre lo cual no se puede disentir, sino en pequeños detalles, a cuyo respecto hubiéramos señalado las modificaciones necesarias, queda el inconveniente señalado por el señor diputado Ravignani en cuanto a la percepción conjunta del impuesto y las tasas que determina el artículo 12. Le hubiera interesado a la Cámara conocer en este caso la opinión de la municipalidad de la Capital y de la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación, entes autónomos que cobran estas contribuciones. Por lo tanto puedo adelantar que estos organismos han protestado ante el ministro de Hacienda por la imposición que se hace en

ese artículo de la ley. Aunque sólo fuera por ese hecho hubiera sido conveniente un estudio amplio, abierto, con toda la información necesaria, ya que se trata de una ley permanente de la Nación, que versa sobre uno de los impuestos más importantes.

La verdad es que en este como en todos los demás impuestos, las buenas intenciones quedan disminuidas porque aparece como motivo fundamental de la reforma el deseo del Poder Ejecutivo de obtener un mayor ingreso fiscal.

El decreto 9.432, de 1944, crea como impuesto, el sellado nacional a los contratos de seguros y capitalización. Se preguntarán los señores diputados qué se puede observar a esto. Se puede formular una importante observación. Al unificarse los impuestos internos por la ley 12.139 se estableció que las provincias debían dejar de percibir cierta clase de recursos. Entre las materias que no pueden ser gravadas por las provincias están los productos o personas ya gravados por impuestos internos, los productos destinados al consumo, la comercialización, el almacenamiento, la venta y expendio y las patentes.

Periódicamente, las provincias reciben un memorándum del Ministerio de Hacienda de la Nación, en el que les hace saber los impuestos que deben derogarse. Por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires le harán saber periódicamente que tiene que derogar la ley 4.198, de impuesto al comercio y a la industria, la 4.189, de expendio de bebidas alcohólicas, la 4.129 de patentes fijas, y la ley 4.530, de policía y fiscalización de seguros o capitalización.

He aquí un extraordinario criterio dual del Poder Ejecutivo de la Nación que demuestra, al mismo tiempo que su espíritu fiscalista, el desprecio absoluto que tiene por el tesoro de las provincias. Mientras por intermedio de un decreto impone el sellado a las sociedades de seguros y capitalización, combate en las provincias el impuesto que imponen a las mismas sociedades de seguros y capitalización. Mientras se prohíbe a ellas cobrar este tributo porque está incluido en la unificación de impuestos internos, el Estado nacional, lo impone. ¿Cree, acaso, el Poder Ejecutivo que la ley de sellos es una ley de impuestos al papel sellado? Lo que se impone es el acto económico, las operaciones de las compañías de seguros, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. Si la Nación lo impone, las provincias también pueden hacerlo. Como digo, se trata de otro caso de desaprensión del gobierno nacional y de perjuicio a los tesoros provinciales.

Sr. Presidente (Cooke). — Debo recordar al señor diputado que ya ha vencido el plazo que reglamentariamente le corresponde para su exposición.

Sr. del Carril. — El señor diputado Cooke, actualmente en la Presidencia, sabe por experiencia propia que el plazo es elástico.

Sr. Presidente (Cooke). — La Presidencia debe advertirlo al señor diputado.

Sr. Ravignani. — Solicito una prórroga, para que pueda continuar el orador.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cooke). — Como hay asentimiento, puede continuar su exposición el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. del Carril. — Con respecto al impuesto a las ventas, en el decreto 5.892, de 1944, se dice que se volverá a la forma de distribución de los artículos 14, 15 y 16 de la ley 12.143. Luego en el decreto 24.671, de 1945, se hace una aclaración y se aumenta la tasa del impuesto.

Este es otro de los casos en que las provincias van a tener que modificar con la Nación el sistema de contribución y distribución. Ha fallado el criterio con que se han hecho las bases. Todas las operaciones que se realizan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos por las grandes compañías, son instrumentadas en Buenos Aires. Eso lo sabe perfectamente bien el gobierno nacional. Habrá que asegurar una mayor participación a las provincias de manera que puedan derogar sin perjudicarse sus impuestos, al comercio y la industria, evitando la actual superposición de impuestos. En el momento en que se resuelva la revisión del sistema impositivo en el país, habrá que considerar también, la situación especial de este decreto.

Igualmente es importante señalar como invasión también de las atribuciones impositivas de las provincias, el decreto sobre impuesto de emergencia a las apuestas en los hipódromos, que establecen el término de diez años a un impuesto del cinco por ciento sobre el producto de la venta de bolcos de apuestas. Además de los inconvenientes que presenta desde el punto de vista legal, quita a las provincias una importante fuente impositiva.

Debo recordar a los señores diputados que al crearse este impuesto por decreto del Poder Ejecutivo, la provincia de Tucumán tuvo que dejar sin efecto un impuesto del mismo tipo sobre las apuestas en los hipódromos de aquella provincia.

A pesar del poco tiempo que me queda, no puedo dejar de expresar la protesta más formal de los diputados por la provincia de Buenos Aires por el decreto que substraigo a la provincia la administración de sus casinos; un decreto arbitrario, que ha cercenado a la provincia la facultad de explotar los casinos provinciales, que le reportaban anualmente una suma apreciable. Si bien es mejor el sistema de explo-

tación directa por el Estado, de los casinos, debemos lamentar una vez más, que el Poder Ejecutivo nacional haya procedido con el más profundo desprecio por los estados provinciales, que son tanto o más capaces que la Nación para administrar sus propias rentas, sus propios recursos.

No vayan a creer los señores diputados que todas estas manifestaciones tienen un carácter partidista o de grupo interesado en el descrédito del gobierno nacional, por su falta de capacidad en esta materia. Al realizarse la conferencia de ministros de Hacienda, el mes pasado, todos los ministros provinciales estuvieron de acuerdo con las manifestaciones que he hecho. Todo fueron quejas y lamentaciones, y terminaron formulando las mismas observaciones que hoy hacemos nosotros. Poca o ninguna publicidad se ha dado a estas conferencias, pero si los señores diputados tienen la paciencia de revisar las versiones taquigráficas que se tomaron de las mismas, verán cómo todos los hombres que responden a la misma tendencia del señor presidente de la República, han venido a Buenos Aires a clamar porque las arcas provinciales están exhaustas, han venido a reclamar porque no tienen fuentes dónde imponer para allegar recursos porque el gobierno nacional ha tomado todas las fuentes y todos los recursos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Es tan grave esa situación que cuando el señor ministro de Hacienda anunció que podría ser ese uno de los temas de la conferencia, la unificación del impuesto a las herencias, todos los hombres del interior se levantaron contra esa unificación. ¿Por qué, si en realidad esa unificación es útil, y aún más, sería hasta necesaria, en cuanto a asegurar que los procedimientos fueran los mismos en todo el país, y que las tasas fueran también semejantes? Pero todos los ministros provincianos se levantaron contra la unificación porque saben que si el gobierno nacional pone las manos en esos recursos, las provincias no volverán nunca más a encontrarse con ellos.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Ricardo C. Guardo.

En definitiva, y concretando, creemos que es necesario, en lo que respecta al impuesto a los réditos, aumentar la participación de las provincias, y dar participación a las municipalidades, no sólo de las provincias, sino de todos los territorios, y que es indispensable, y espero que los señores diputados me acompañen a modificar esta ley, introduciendo una disposición devolviendo a las provincias lo que se les ha retenido indebidamente.

En cuanto a las ganancias eventuales, es indispensable incluir lo dispuesto en el decreto,

dentro del sistema de las leyes de impuesto a los réditos, para poder aplicar una tasa más justa, sin dejar de reconocer la diferencia que hay entre los beneficios del capital y los beneficios de los réditos.

En lo que respecta al impuesto a las ganancias extraordinarias, que se encuentra limitado por su inmediato vencimiento, esperamos que el Congreso no lo incluya entre los recursos para 1947. Y que la situación de estos réditos sea contemplada con ecuanimidad dentro de las tasas de la ley de réditos.

En cuanto al impuesto a las ventas, pedimos también que se aumente la participación a las provincias, y se aplique la misma tabla de distribución del impuesto a los réditos, aumentada. Y en lo que se refiere a los impuestos internos, hemos de encarar la revisión total de la participación de las provincias, para fijarla sobre nuevas bases.

Por último, en el caso de la ley de vialidad, consideramos necesario que se autorice a las provincias a aumentar el impuesto en la suma que crean necesaria debiendo disminuirse, si fuere el caso, el impuesto nacional en la misma proporción. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Balbin. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Guardo). — Hay 82 señores diputados en la casa.

Se va a votar en general el despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes.

—Resulta afirmativa de 63 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración en particular.

¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por el señor diputado por la provincia de Buenos Aires?

Sr. Fernández (H. S.). — Aunque hemos coincidido en muchos puntos con los señores diputados Ravignani y del Carril, al tratar estos decretos leyes, debemos seguir el mismo procedimiento que se adoptó con los despachos ya aprobados.

Por consiguiente, en nombre de la mayoría de la comisión manifiesto que no vamos a aceptar que se introduzcan modificaciones; pero desde ya comprometo mi participación en las nuevas iniciativas que se traigan a la Cámara cuando sea necesario sancionar algunas modificaciones de las cuales yo me he manifestado partidario.

Debiendo ajustar el procedimiento a las normas que ya han venido rigiendo para los otros decretos leyes, lamento en nombre de la comisión no aceptar las modificaciones, algunas de las cuales creo que son justas.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Pastor. — Entiendo que de acuerdo con el procedimiento que se ha adoptado para la votación de estos órdenes del día, una vez aprobado el artículo 1º se deben considerar aprobados todos los decretos leyes que en él se mencionan.

No quise participar en la discusión en general porque hubiera sido inoficioso hacer observaciones a estos decretos leyes luego de la crítica que los mismos han merecido por parte de los señores diputados de la oposición que hicieron uso de la palabra.

Por otra parte, no me hago la ilusión de que una proposición hecha en particular con respecto a uno de estos decretos leyes pueda ser aceptada por la comisión; pero por lo menos quiero plantear la cuestión para que la comisión la recoja y si lo cree prudente más adelante la tome en cuenta.

El artículo 10 del decreto 14.338; establece: «Se presume, salvo prueba en contrario, que las compañías no constituidas en el país, que se ocupan en el negocio de transportes entre la República y países extranjeros, obtienen réditos netos de fuente argentina iguales al diez por ciento del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos transportes.»

Este decreto ley se aplica a las ganancias que obtienen las compañías navieras con fletes realizados con barcos changadores generalmente. Esos barcos changadores han efectuado transportes desde el primero de enero de este año y el decreto fué publicado en mayo, pero sus disposiciones son aplicables desde el primero de enero. Ocurre que esas compañías han realizado transportes en los primeros meses del año y recibieron oportunamente el pago de los fletes. En algunos casos no volverán a realizar nuevos viajes en el resto del año, en el entrante o en el subsiguiente o no realizarán más fletamentos si se trata de barcos que no volverán al servicio o al país. Entonces, esta responsabilidad que la ley carga en forma rígida sobre las compañías que han gestionado y pagado los fletes, resulta que va a incidir directamente sobre su economía, sin que les sea posible efectuar el cobro a quien se ha beneficiado.

En lo que respecta al artículo 11, que establece: «Se presume de derecho que las agencias de noticias internacionales, que mediante una retribución las proporcionan a personas o entidades residentes en el país, obtienen réditos netos de fuente argentina, iguales al 10 por ciento de la retribución bruta, tengan o no agencia o sucursal en la República.»

Yo no sé por qué el Estado puede establecer un porcentaje de imposición como una presunción de jure, sin permitir ni siquiera el recurso

de la declaración jurada, invirtiendo el procedimiento que se establece en todas las leyes, de ser quienes pagan estos impuestos los que se vean obligados a iniciar juicio para comprobar que las ganancias obtenidas no han alcanzado el 10 por ciento y que el Estado debe devolverles una parte de esa ganancia; y sobre todo no alcanzo a comprender por qué en el artículo 11 se establece un concepto distinto al del artículo 10.

El artículo 10 también establece la presunción porque empieza diciendo: «Se presume», pero se deja abierta la puerta a la prueba en contrario, y así lo dice expresamente: «Se presume, salvo prueba en contrario.» En cambio, en el artículo siguiente, simplemente se establece la presunción de derecho y se dice: «Se presume de derecho que las agencias de noticias internacionales...»

En realidad, se establece una situación de suma comodidad para el Estado y de grave perjuicio para el contribuyente. Este no sólo se ve obligado a iniciar la acción correspondiente para demostrar que sus ganancias no han llegado al 10 por ciento —que es un límite excesivo en relación a esta actividad, bastando establecer el cinco por ciento, que es la ganancia más lógica y generalmente comprobada en estas agencias—, sino que se le obliga a hacer el depósito y después a producir el reclamo. Si la sustanciación del juicio, las comprobaciones, duran uno o dos años, las compañías se ven obligadas a tener un capital inmovilizado, depositado en un banco del Estado, sin poder usufructuarlo y sin poder obtener de él ningún rendimiento. Por eso propongo a la comisión que acepte que en el artículo 11 se establezca la misma previsión que en el anterior con las palabras «salvo prueba en contrario», y que en vez del límite del 10 por ciento se establezca el del 5 por ciento.

Para tranquilidad de la comisión quiero expresar que este rubro es insignificante en el presupuesto de la Nación. Lo que se puede cobrar por este nuevo régimen impositivo no alcanza, según el cálculo que se ha practicado, más que a 300.000 pesos, más o menos, en el año; de manera que no trae ninguna perturbación seria en el cálculo de recursos que el Poder Ejecutivo pudo haber hecho a base de estos decretos leyes.

Espero la palabra de la comisión respecto a esta proposición que acabo de hacer.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Voy a aclarar la situación que plantea el señor diputado Pastor.

Esta cuestión ha sido contemplada por la comisión y tiene dos aspectos. En la primera parte, en lo referente a los barcos changadores, que llegaron a los puertos del país antes de que la ley fuera publicada, y que los agentes no co-

braron a los armadores o a los patronos de esos barcos changadores el impuesto fijado por este decreto ley y que la mayoría de las veces dichos barcos no vuelven al país, no los alcanza sus disposiciones.

La comisión no introdujo ninguna modificación, porque considera que las leyes, en realidad, entran en vigencia desde el día de su publicación, de manera que para este caso no regiría la retroactividad y creo que bastarán las palabras del diputado Pastor, y las que pronuncio en nombre de la comisión, para que este aspecto quede definitivamente aclarado.

Con respecto a la segunda parte, como el decreto establece un principio general, la comisión ha considerado prudente no modificarlo a fin de evitar confusiones que podrían producirse en las propias oficinas donde debe percibirse el impuesto; pero creo necesario y justo que se establezca la aclaración.

Por consiguiente, la comisión acepta y considera que con respecto a los barcos changadores no rige el decreto, sino desde la fecha de su publicación, sin que esto signifique que se modifica el decreto ley en lo demás.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Montes de Oca. — En el decreto 14.338, artículo 20, se establece el mínimo no imponible para la tercera y cuarta categorías, del impuesto a los réditos, fijándolo en 400 pesos mensuales, o sea 4.800 pesos al año. El enorme aumento del costo de la vida justifica la ampliación de ese mínimo no imponible.

Propongo, entonces, a la comisión que acepte fijar el mínimo no imponible para los contribuyentes de tercera y cuarta categorías del impuesto a los réditos, en 500 pesos mensuales, o sea, 6.000 pesos anuales.

Sr. Fernández (H. S.). — Considero que la proposición formulada por el señor diputado por Santiago del Estero, es perfectamente atendible: en primer lugar, por lo elevado del costo de la vida, y en segundo lugar, porque esta Honorable Cámara, indudablemente, ha tenido oportunidad antes de tratar estos decretos, de aumentar el sueldo de muchos empleados de la administración.

Frente a esa situación, y tratando de interpretar el principio general de que los impuestos no deben gravar al pequeño contribuyente, la mayoría de la comisión va a aceptar la proposición.

Sr. Ravignani. — La mayoría acepta.

Sr. Presidente (Guardo). — La Honorable Cámara decidirá por votación sobre si se pronuncia a libro cerrado sobre el artículo 19.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 52 votos, sobre un quórum de 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 19, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa de 54 votos, sobre un quórum de 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Voy a proponer la reconsideración del decreto 14.342/46, relativo a beneficios eventuales y ganancias de capital.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar si se reconsidera el decreto ley 14.342.

— Resulta negativa de 51 votos, con quórum de 80 señores diputados.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Con el propósito de respetar la autonomía financiera de las provincias, propongo la reconsideración de los decretos leyes 18.229/43 y 14.338/46, sobre réditos, a fin de que se devuelva a las provincias lo que les corresponde.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar si se reconsideran los decretos 18.229 y 14.338.

Sr. Peña Guzmán. — Pido votación nominal.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

— Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a practicar la votación nominal.

— Practicada la votación nominal:

Sr. Prosecretario (Sánchez Terrero). — Sobre un quórum de 80 señores diputados, han votado 49 por la negativa y 31 por la afirmativa. Los dos tercios son 54 votos.

— Votan por la negativa los señores diputados: Alvarez (J. D.), Alvarez (N.), Alvarez Pereyra, Alvarez Pérez, Alvarez Vocos, Arévalo Cabeza, Argaña, Ayala López Torres, Bagnasco, Barreiro, Braga, Cámpora, Cooke, Curchod, Decker, de la Torre, Díaz, Díaz de Vivar, Dri, Fernández (H. S.), Fregossi, Garaguso, García, Lareo, Lasciar, Mendiando, Montiel, Mujica, Orozco, Osinalde, Ottonello, Pasquini, Perea, Petrucci, Raña,

Reynés, Rossi, Rouggier, Rumbo, Saravia, Sarmiento, Sarraute, Tesorieri, Toro, Velloso, Colombres, Vergara, Vilafañe, Visca, Vischi.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Allub, Balbin, Busaniche, Calcagno, Camus, Candiotti, Casas Noblega, Córdova, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Diaz Colodrero, Errecart, Ferrer, García Quiroga, Graña Etcheverry, Liceaga, López Serrot, Martínez Guerrero, Montes de Oca, Pastor, Peña Guzmán, Pérez de la Torre, Pueyrredón, Ravignani, Rojas (A.), Rojas (N.), Sobral, Uranga, Vanasco, Zanoni.

—El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (Guardo). — Queda sancionado el proyecto de ley.

4

GASTOS DEL CEREMONIAL DEL ESTADO

(Orden del día número 144)

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un crédito extraordinario por la suma de trescientos doce mil seiscientos pesos moneda nacional (\$ 312.600 m/n), con destino al pago de los sueldos y gastos del ceremonial del Estado, durante los meses de septiembre a diciembre del año en curso; y, por las razones que se dan en el informe, aconseja su aprobación agregando al artículo 2º la im-